

Barra Delich, María Victoria

**Factores de riesgo que facilitan
las conductas transgresoras de
los adolescentes en conflicto con
la Ley Penal desde el discurso de
los padres que asisten al
Programa de Orientación Familiar
del área penal juvenil de Se.N.A.F**

**Tesis para la obtención del título de grado de
Licenciada en Psicología**

Director: Merlo, Darío Exequiel

Documento disponible para su consulta y descarga en Biblioteca Digital - Producción Académica, repositorio institucional de la Universidad Católica de Córdoba, gestionado por el Sistema de Bibliotecas de la UCC.



Esta obra está bajo licencia 2.5 de Creative Commons Argentina.
Atribución-No comercial-Sin obras derivadas 2.5

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA

Facultad de Filosofía y Humanidades

Licenciatura en Psicología



TRABAJO INTEGRADOR FINAL

Sistematización de Prácticas

Contexto Jurídico- Forense

“Factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal desde el discurso de los padres que asisten al Programa de Orientación Familiar del área penal juvenil de Se.N.A.F”

Autor: María Victoria Barra Delich

Director: Lic. Dario Merlo

2020

“Factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal desde el discurso de los padres que asisten al Programa de Orientación Familiar del área penal juvenil de Se.N.A.F”

1. ÍNDICE

1. ÍNDICE	3
2. ÍNDICE DE SIGLAS O ABREVIACIONES	6
3. INTRODUCCIÓN.....	8
4. CONTEXTO DE PRÁCTICA: JURÍDICO- FORENSE.....	11
4.1 INTERACCIÓN ENTRE PSICOLOGÍA Y DERECHO	12
4.2 DIFICULTADES EN LA DEFINICIÓN DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA	13
4.3 ROL DEL PSICÓLOGO EN EL CONTEXTO JURÍDICO.....	15
4.4 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA	16
4.5 ÁREAS DENTRO DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA	17
4.6 CONCEPTOS FUNDAMENTALES	18
4.6 MÉTODOS Y TÉCNICAS	22
5. CONTEXTO INSTITUCIONAL	24
5.1 HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN	25
5.2 FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	26
5.3 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	27
5.4 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOEDUCATIVO	30
5.5 ORGANIGRAMA	33
6. EJE DE SISTEMATIZACIÓN.....	34
7. OBJETIVOS.....	36
7.1 OBJETIVOS GENERALES	37
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	37
8. PERSPECTIVA TEÓRICA.....	38
8.1 MARCO LEGAL	39
8.2 FAMILIA	42
8.3 ADOLESCENCIA	45
8.4 ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	48
8.5 TRANSGRESIÓN	51
8.6 FACTORES DE RIESGO	53
8.6.1 FACTORES INDIVIDUALES Y PSICOSOCIALES.....	55
8.6.2 FACTORES FAMILIARES	58
8.6.3 FACTORES LIGADOS AL GRUPO DE PARES	73
8.6.4 FACTORES SOCIOEDUCATIVOS	78

8.6.5 FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES	81
8.6.6 FACTORES SOCIALES Y SOCIOCOMUNITARIOS	85
10. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA	95
10.1 RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO	96
10.2 INGRESO A LA INSTITUCIÓN	96
10.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOEDUCATIVO	97
10.4 OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE EN EL TALLER DE PADRES	98
10.5 INSTANCIAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA.....	99
10.5.1 CAPACITACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA.....	99
10.5. 2 CAPACITACIONES Se.N.A.F	100
10.6 ESPACIOS DE SUPERVISIÓN.....	101
10.7 ANÁLISIS Y SINTESIS DE LA EXPERIENCIA.....	101
10.7.1 CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	102
10.7.2 FACTORES DE RIESGO DESDE EL DISCURSO DE LOS PADRES ANTES DE LA INTERVENCION DE SENAF	121
10.7.2 FACTORES DE RIESGO DESDE EL DISCURSO DE LOS PADRES DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DE SENAF	145
10.7.3 FACTORES DE RIESGO QUE FACILITAN LA CONDUCTA TRANSGRESORA DESDE EL DISCURSO DE LOS PROFESIONALES DE Se.N.A.F.....	162
11. CONCLUSIONES	185
12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	196
13. ANEXOS	212

2. ÍNDICE DE SIGLAS O ABREVIACIONES

- **CIDN:** Convención Internacional sobre los Derechos del niño
- **NNyA:** Niños, Niñas y Adolescentes
- **POF:** Programa de Orientación Familiar
- **Se.N.A.F:** Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
- **PIT:** Programa de Inclusión y Terminalidad

3. INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo de Integración Final se enmarca dentro de las Prácticas Pre-profesionales Supervisadas del Contexto Jurídico- Forense, de la Facultad de Psicología, Universidad Católica de Córdoba. La práctica se llevó a cabo durante el periodo de Abril a Noviembre de 2019 en el Programa de Orientación Familiar (en adelante POF) y el Programa de Acompañamiento Psicoeducativo perteneciente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (en adelante Se.N.A.F). Esta Institución pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba y es el organismo en carácter de Autoridad administrativa de promoción y protección de derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante NNyA) de la Provincia de Córdoba mediante la implementación y aplicación de Políticas Públicas.

A partir de mi participación como observadora no participante del Programa de Acompañamiento Psicoeducativo y del Programa de Orientación Familiar me surgen una serie de interrogantes vinculados a los factores que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes en conflicto con la ley penal ya que en los discursos tanto de los jóvenes como de los padres se presentan de modo recurrente diferentes factores de riesgo que influyen en que el adolescente lleve a cabo una conducta transgresora, como es: el grupo de pares, la deserción escolar, la etapa psicoevolutiva, el consumo problemático de sustancias y la ausencia de límites en la familia.

Es así que el eje a sistematizar en el presente proyecto es: “Factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal desde el discurso de los padres que asisten al Programa de Orientación Familiar del área penal juvenil de Se.N.A.F”. En consiguiente se estableció como objetivo general analizar los factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, desde el discurso de los padres, mientras que los objetivos específicos apuntan a identificar dichos factores desde el discurso de los mismos, antes y después de la intervención de Se.N.A.F, y a explorar los factores de riesgo que los profesionales de Se.N.A.F reconocen como facilitadores de la conducta transgresora

Este Trabajo de Integración Final se divide en una serie de apartados, de manera que la lectura sea más comprensible y ordenada. En un comienzo se desarrollan las características del Contexto de Práctica: Jurídico-Forense, teniendo en cuenta la reglamentación vigente y las normativas que regulan el ejercicio profesional. Luego se realiza una descripción del Contexto Institucional incluyendo las funciones y los objetivos de la institución, población a la que asiste, recursos humanos, organigrama y programas con los que cuenta dicha institución. Seguidamente, se plantea el eje de sistematización seleccionado junto a los objetivos correspondientes.

Posteriormente, se presenta el marco teórico referencial, en el cual se desarrollan primeramente los aspectos legales y normativos en cuanto a la niñez y adolescencia y luego se exponen conceptualizaciones en torno a la adolescencia, adolescentes en conflicto con la ley, familia, transgresión y factores de riesgo. Así también se desarrolla la modalidad de trabajo seleccionada, desde la cual se abordarán los objetivos propuestos.

Luego se realiza una recuperación del proceso vivido presentándose un recorrido por las actividades realizadas a lo largo de la práctica, teniendo en cuenta los diversos momentos de la práctica institucional, rescatándose los aspectos más significativos. También dentro del apartado de Sistematización de la Práctica se desarrolla el análisis del proceso, en la cual se intenta dar respuesta a los objetivos propuestos haciendo una articulación teórica-práctica.

Por último, se realizan las conclusiones que refieren, por un lado, al tema y objetivos planteados, y, por otro lado, a los aprendizajes adquiridos en el transcurso de la práctica.

4. CONTEXTO DE PRÁCTICA: JURÍDICO- FORENSE

4.1 INTERACCIÓN ENTRE PSICOLOGÍA Y DERECHO

Para conceptualizar y caracterizar el contexto Jurídico-Forense, es fundamental destacar que este, como ámbito de actuación del Psicólogo, implica una cuestión esencial: la interacción con el campo del Derecho. Puente de Camaño (2015) plantea que la denominación Psicología Jurídica alude en primer término a una interrelación, a una suerte de encuentro, de entrecruzamiento de dos ciencias, de dos saberes, de la ciencia psicológica por una parte y la ciencia jurídica, el Derecho, por la otra, cada una de ellas con sus propios cuerpos teóricos y metodológicos, con capacidad para aportar desde la especificidad de su saber una perspectiva de análisis propia.

La autora dice además que por una parte para la Psicología significa trabajar en la comprensión de los complejos fenómenos de la vida psíquica, presentes en las conductas que, por alguna circunstancia, importan a lo jurídico, ya sea que se trate acciones antijurídicas, como es el caso de los delitos y de sus autores, o de quienes sufren las consecuencias de los mismos, las víctimas. Mientras el Derecho por su parte, como conjunto de normas, principios, leyes y reglas a cuya observancia son comprometidos los individuos en toda sociedad jurídicamente organizada, interviene en la regulación de las relaciones humanas.

Este encuentro al que la autora hace mención se manifiesta por un lado en articulaciones a nivel de teorías y en el desarrollo de una práctica concreta, lo que debe entenderse con un sentido de complementariedad, donde cada una de las disciplinas aportara desde la especificidad de su saber a la comprensión de la complejidad de los problemas que tratan en común. Hablamos de complementariedad, de enriquecimiento mutuo, y no de subordinación de una ciencia a otra. Pensar en complementariedad implica una consideración interdisciplinaria, abierta a otros conocimientos, sin supremacía de unos sobre otros.

En relación con esto último, Del Popolo (1996) plantea que básicamente se han desarrollado dos concepciones para dar cuenta de la interacción psicología- derecho: la subordinación y la complementariedad. Desde la perspectiva del modelo de la subordinación se le atribuye al psicólogo un rol meramente de auxiliar y de subordinación. Por lo que, frente a este modelo, es necesario un modelo de complementariedad, el cual tuvo vigencia a partir del año 1985, mediante la Ley Nacional N° 23.277, que autoriza al Psicólogo a ejercer su rol de forma autónoma, estableciendo áreas y actividades del mismo. Entre las áreas se hace mención de forma específica de la Jurídica, y en lo que respecta a las funciones se plantea: promoción y

prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento de salud mental de sujetos, enseñanza e investigación, peritajes, asesoramientos, consultas. (Ley N° 23.277,1985, art.2).

El modelo de la complementariedad no se realiza por placer de una mera adquisición teórica, sino que está dirigido a una optimización de saberes, y abre la perspectiva a un dialogo, una interacción con lo jurídico, desde una posición propia, pero con apertura a otros saberes.

La psicología y el derecho encuentran su coincidencia en el hecho de que ambas disciplinas son ciencias humanas y sociales y en que comparten el objeto de intervención: la conducta de las personas. En las últimas décadas la colaboración entre juristas y psicólogos se ha ido desarrollando e implantando de forma práctica, requiriéndose cada vez en mayor medida, el aporte de los profesionales de la psicología a la realidad del mundo legal. (Marin y Esparcia, 2009)

4.2 DIFICULTADES EN LA DEFINICIÓN DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA

De acuerdo con Gutiérrez de Piñeres (2010) en la Psicología Jurídica, como campo aplicado de la Psicología, existen casi tantas definiciones como publicaciones sobre el área, a lo que se suma, que, a diferencia de otras áreas de la Psicología, la Psicología Jurídica es denominada de diversas formas, es decir, se utilizan términos como sinónimos, que, en realidad, si se revisan etimológicamente, no son correctos. Del Popolo (1996) coincide en que ha sido denominada de diversas maneras tales como: psicología legal, forense, jurídica, psicología y ley.

Gutiérrez de Piñeres (2010) plantea que esta dificultad en la definición del término Psicología Jurídica puede representar una inmadurez del desarrollo científico del campo. La delimitación del término y de la definición de la Psicología Jurídica, ha sido un tema complejo, pero poco debatido. Existe una necesidad de dicha definición que se origina en tres hechos, el primero, que la Psicología Jurídica aún busca ser legitimada tanto por psicólogos como por abogados, el segundo, a que su objeto de estudio es compartido por otras disciplinas, de modo tal que al decirse por ejemplo que la Psicología Jurídica estudia el comportamiento de las personas y de las sociedades en relación con las normas, no se puede asegurar que se esté definiendo a la Psicología Jurídica, adicionalmente, porque ella no se agota en el estudio del comportamiento en relación con las normas, ni esta definición explica en su totalidad el alcance de este campo. Por último, a que no existe un único término para referirse a ella.

Del Popolo (1996) refiere que tradicionalmente en el país ha predominado la designación de psicología forense, pero este es un concepto restringido ya que la tarea del Psicólogo es mucho más amplia que la que se puede desarrollar en relación con los tribunales de justicia. A los efectos de evitar esta connotación restringida, quizá sea más conveniente la denominación Psicología Jurídica.

Retomando lo que plantea Gutiérrez de Piñeres (2010) acerca de que existen múltiples definiciones de la Psicología Jurídica, se expondrá a continuación aquellas que considero más significativas y abarcativas.

Del Popolo (1996) define a la Psicología Jurídica como el “estudio desde la perspectiva psicológica de conductas complejas y significativas (en forma actual o potencial) para lo jurídico, a los efectos de su descripción, análisis, crítica y actuación sobre ellas, en función de lo jurídico” (p.21). Siguiendo esta misma línea, plantea algunas de las tareas propias que le competen a la Psicología Jurídica y que engloban la esfera de acción de dicha disciplina. Dentro de estas se pueden mencionar el trabajo interinstitucional e institucional, la promoción, la prevención, el asesoramiento, la realización de diagnósticos, la asistencia, peritajes, tratamientos y seguimientos.

Por otra parte, otro de los autores que define la Psicología Jurídica es Tapias Saldaña(s/f) quien plantea que la misma comprende “el estudio, asesoramiento e intervención sobre el comportamiento humano que se desarrolla en un ambiente regulado por normas legales” (p.1).

De acuerdo con Marin y Esparcia (2009)

La Psicología Jurídica comprende el estudio, explicación, promoción, evaluación, prevención y en su caso, asesoramiento y/o tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas, mediante la utilización de métodos propios de la psicología científica y cubriendo por lo tanto distintos ámbitos y niveles de estudio e intervención(Psicología aplicada a los tribunales, psicología penitenciaria, psicología de la delincuencia, psicología judicial – testimonio y jurado- , psicología policial y de las Fuerzas Armadas, victimología y mediación). (p.4)

Muñoz et al. (2011) proponen el concepto de Psicología Jurídica para delimitar el campo de intersección entre la Psicología y el Derecho, y definen a la Psicología Jurídica como

El ámbito de la Psicología que desarrolla sus investigaciones y metodología para mejorar el ejercicio del Derecho, en general, y la intervención del Sistema de Justicia en particular, entendiéndose por éste Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Administración de Justicia e Instituciones Penitenciarias. (p.6)

4.3 ROL DEL PSICÓLOGO EN EL CONTEXTO JURÍDICO

El rol del psicólogo se encuentra detallado en la Ley N° 7106 (1984) en donde se considera ejercicio de la Psicología la aplicación e indicación de técnicas específicamente psicológicas en la enseñanza, el asesoramiento, los peritajes y la investigación de la conducta humana y en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento tanto en las enfermedades mentales de origen eminentemente psíquico, como de las alteraciones psicológicas en enfermedades somáticas de las personas, y la recuperación, conservación y prevención de la salud mental de las mismas. (Ley N°7106, art 1)

Puente de Camaño (2015) plantea que el Psicólogo Jurídico es quien desarrolla actividades de promoción, prevención, asesoramiento, diagnósticos, asistencia, peritajes e investigaciones en el marco de distintos programas institucionales-comunitarios que se ocupan de las múltiples manifestaciones de la violencia y las diversas alternativas de prevención. Por lo tanto tomando el artículo 3 de la Ley 7106 (1984) se considerará ejercicio de la profesión de Psicólogos en el área de la Psicología Jurídica a : el estudio de la personalidad del sujeto que delinque; la rehabilitación del penado; la orientación psicológica del liberado y de sus familiares; la actuación sobre las tensiones grupales en Institutos Penales con tareas de Psico-Higiene; la colaboración en peritajes, empleando los instrumentos específicos; la realización de peritajes psicológicos; realización de peritajes y estudios de adopción y de conflictos familiares

Bernachea (2013) plantea que el rol del Psicólogo Jurídico y Forense supone encarar actividades en las coyunturas previstas por el marco jurídico, en las instituciones judiciales, colaborando en el aporte de una mirada que brinde reflexiones sobre las subjetividades de las personas en juego. El Psicólogo Jurídico- Forense “humaniza” la implementación de la ley positiva, así como el contexto en el que ésta interviene. Es en estas diferencias donde radica la

riqueza de los aportes que desde el rol del Psicólogo se pueden realizar en pos de favorecer una administración de Justicia más adecuada.

En la cotidianeidad, el profesional se verá interrogado por la ley, y deberá dar respuestas cuando el Derecho se quede sin argumentos posibles. La praxis del Psicólogo dentro del escenario legal, en sentido amplio, es entendida por los autores Varela, Sarmiento, Puhl y Izcurdia (2005) como “la función de evaluar y brindar tratamiento a los sujetos que por diversas circunstancias se encuentren a disposición de la justicia” (p.169).

El ejercicio de la profesión de Psicólogo, en cualquiera de las áreas de la psicología sólo se autorizará a aquellas personas que, como consecuencia de haber cursado una carrera Universitaria mayor, posean títulos habilitantes de Psicólogos, Licenciado en Psicología o Doctor en Psicología, previa obtención de la Matrícula Profesional correspondiente a la inscripción en el Consejo de Psicólogos de la Provincia de Córdoba (Ley 7106, 1984, Art.4).

4.4 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA

El ejercicio de la Psicología se desarrollará en los niveles, individual, grupal, institucional y comunitario, ya sea en forma pública o privada, en las áreas de la Psicología Clínica, Educacional, Laboral, Jurídica y Social. Se entenderá por área de la Psicología Jurídica: la esfera de acción que se realiza en los Tribunales de Justicia, Institutos Penitenciarios, de internación de menores y en la práctica privada de la profesión. (Ley N° 7106, 1984, Art.2)

Varela et al. (2005) plantean que el trabajo del Psicólogo Jurídico en el abordaje de las problemáticas psicosociales se desarrolla en diferentes ámbitos como: unidades carcelarias, instituciones públicas, tribunales y Consejo Nacional de menor y familia. Con el surgimiento de la Ley del Ejercicio Profesional, queda regulada la realización de peritajes, lo que abre la posibilidad para que el psicólogo actúe en otro ámbito, que son los diferentes fueros de la justicia.

Del Popolo (1996) también hace referencia a los campos de trabajo en Psicología Jurídica tales como: penal, derecho industrial, laboral, menores y jóvenes, familia, comercial y civil, penitenciarias, pabellones judiciales, centros victimológicos, organismos de asesoramiento criminológico, legislaturas, investigaciones, gabinetes interdisciplinarios y clínicas médico-forenses.

La autoridad de aplicación de la Ley Nacional N° 26.061 (2005) y la Ley Provincial N° 9.944 (2011) es la Se.N.A.F la cual posee a su cargo el diseño, instrumentación, ejecución, coordinación, articulación y control de políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes y sus familias, y está a cargo de un Secretario de Estado designado por el Poder Ejecutivo de la Provincia. Por lo tanto, la Se.N.A.F aparece como otro de los ámbitos donde la Psicología Jurídica se aplica como tal.

Puente de Camaño (2015) plantea que los ámbitos tradicionales de desarrollo de las prácticas del psicólogo jurídico: ámbito de administración de Justicia, tribunales, fuero penal, fuero de menores, fuero de familia, instituciones penitenciarias y pos penitenciarias, instituciones encargadas del tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal, centros de atención a víctimas de delitos, entre otros, han funcionado mayormente no interrelacionados entre sí.

Pero actualmente surge la necesidad de un enfoque integral ante la naturaleza esencialmente compleja de los problemas que abordan, que trasciende los espacios institucionales, el saber disciplinar. El modelo de red se ofrece como una configuración posible para trabajar con problemáticas complejas, lo que por cierto connota una suerte de transformación de la cultura institucional. Implica construir y consolidar un espacio de coordinación intersectorial, interinstitucional y comunitaria, con objetivos comunes que posibilite intervenciones en distintas dimensiones, y operativización de los recursos humanos y materiales (Puente de Camaño, 2015).

4.5 ÁREAS DENTRO DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA

Muñoz et al. (2011) proponen la agrupación de los distintos ámbitos que conforman la Psicología Jurídica siguiendo dos criterios: uno académico-investigador y otro aplicado, claramente interrelacionados. Se proponen así nueve áreas dentro de la Psicología Jurídica:

1. Psicología Forense, pericial o psicología aplicada a los Tribunales.
2. Psicología Penitenciaria.
3. Psicología Criminalista o psicología jurídica aplicada a la función policial.
4. Psicología Jurídica aplicada a la resolución de conflictos
5. Psicología del Testimonio.

6. Psicología Judicial.
7. Psicología de la Victimización Criminal.
8. Psicología Criminal o Psicología de la Delincuencia.
9. Psicología del Trabajo y de las Organizaciones aplicada al Sistema de Justicia.

Marin y Esparcia (2009) plantean que la psicología jurídica se aplica a: los tribunales, psicología penitenciaria, psicología de la delincuencia, psicología judicial – testimonio y jurado- , psicología policial y de las Fuerzas Armadas, victimología y mediación. Este aporte coincide con algunas de las áreas planteadas por Muñoz.

Se definirán brevemente algunas de las áreas de la Psicología Jurídica, que no son las únicas, pero sí las más representativas, a partir de los aportes de Varela, Alvarez y Sarmiento (2000). En el área policial la tarea del psicólogo es operar antes que la inestabilidad social se produzca, realizar seguimiento, evaluación, formación y capacitación del personal de seguridad. En el área penitenciaria, la inclusión del psicólogo puede ser en dos áreas distintas: criminología y tratamiento, en esta área se trata con trastornos delincuenciales básicos. Por otra parte, en el área tribunal la práctica de los psicólogos se da en los distintos fueros. Por último, el área minoril, es aquella vinculada con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

Podemos ver de este modo lo que plantean Varela et al. (2000) acerca de que el trabajo del psicólogo en cada área adquiere ciertas particularidades.

4.6 CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Los conceptos fundamentales de la Psicología Jurídica los podemos encontrar en el Código Penal, pero resulta importante tomar aquellos conceptos que desde la Criminología van a ser entendidos desde tres corrientes: clínica, interaccionista y organizacional. Las tres nacen a fines del siglo XIX y se desarrollan a través de todo el S. XX.

Marchiori (1999) define la criminología como una disciplina científica e interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio y análisis del delito, pena, delincuente, víctima, reacción social institucional, costo económico y cultural, a los fines de la explicación, asistencia y prevención de los hechos de violencia. Es un concepto amplio que integra todos los aspectos y áreas vinculadas a los comportamientos que provocan daño intencional. La criminología ha sido

definida por numerosos estudiosos de la investigación criminológica, según los enfoques y encuadres teóricos y las épocas históricas en las que fueron expresados.

A continuación, se desarrollarán aquellos conceptos fundamentales para la Práctica Profesional Supervisada en el Área Penal Juvenil de la Se.N.A.F

- **DELITO**

El delito de acuerdo con Marchiori (1999) es la conducta que se aparta de las normas jurídicas-sociales-culturales de una determinada sociedad. La conducta delictiva siempre provoca daño, que en muchos casos tienen un carácter irreversible. Lo que denominamos la primera etapa de la criminología estaba circunscrita al estudio del delito, etapa que comprende la elaboración jurídica del delito, los distintos tipos, y modalidades delictivas. Para López Rey y Arrojo (1987), el delito puede definirse como la conducta antijurídica y culpable, descrita por la ley y señalada en una sanción penal.

El delito ha sido definido por los juristas de diferentes maneras. Por un lado, nos encontramos con una definición formal, a partir de la cual se entiende el delito como un hecho previsto y penado por la ley. Por otro lado, nos encontramos con una definición doctrinaria, que define al delito como infracción de la ley del estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Así también los juristas utilizaron una definición dogmática, es decir el estudio del derecho penal, como conjunto de normas, recibe el nombre de dogmática y presupone la existencia de una ley. Entre las que se encuentra el Derecho positivo, que define al delito como hecho-acción en sentido amplio-típico, antijurídico, culpable y punible.

El hecho es una conducta humana manifestada como actividad (acción) o inactividad (omisión). El hecho de tipo delictivo es un hecho punible. El tipo delictivo, constituye la particularidad jurídica del hecho punible; es una selección de hechos que son punibles. Lo antijurídico, es la calidad del hecho que determina su oposición al derecho. La culpabilidad es la actitud anímica jurídicamente reprochable sobre la consumación de un hecho penalmente típico y antijurídico. El reproche se funda en la capacidad del autor del delito para comportarse de acuerdo a las exigencias del derecho penal, en la conciencia del autor del significado de lo que hace y su voluntad de hacer (dolo) o en su falta de precaución (culpa) y en su libertad de decisión (inexistencia de coacción).

La imputabilidad es la capacidad para ser penalmente culpable. Presupone madurez, salud mental y conciencia que permitan la comprensión de la criminalidad del acto y dirigir sus

acciones. Para que una conducta sea delictiva debe constituir una acción u omisión típica, es antijurídica, culpable y punible.

- **PENA**

De acuerdo con Marchiori (1999) es lo que consideramos la segunda etapa, se pregunta por el castigo frente al delito cometido. Durante siglos los castigos eran la pérdida de vida, es decir se aplicaba el mismo castigo a cualquier tipo de delito, no se diferenciaba el daño cometido. A medida que los estudios jurídicos se fueron desarrollando se intentó obtener un equilibrio entre el delito y pena (balanza de la justicia). El concepto de pena fue evolucionando a lo largo de los años, en sus orígenes se concebía a la pena como castigo ya que era meramente retributiva y su aplicación era devolver el mal causado por el delito. Con el paso de los años si bien la pena sigue siendo retributiva se determina por el valor que el delito tenía como daño, es decir se trata de una pena justa. Aparece también la pena individualizada (adaptada a la persona), que se concibe como retribución, pero también como prevención, pena adecuada para hacer sufrir al delincuente y para que se abstuviera del delito, que tendiera a curar sus posibles tendencias criminales, y a la vez que resultara socialmente justa. Por último, aparece la pena como reproche social-cultura, es decir como tratamiento y prevención.

En las distintas etapas la pena consiste en la pérdida de un bien de la persona. Tiene ese carácter la pérdida de la vida (pena de muerte), la privación de la libertad, la confiscación, la pena patrimonial, la inhabilitación. La pena es una retribución porque asienta la personalidad penal en la culpabilidad del delincuente. La misma tiene un fin utilitario, y se concreta. Por un lado, un fin individual, ya que la pena se propone apartar al delincuente del delito en el futuro, readaptándolo socialmente. Y por otro lado un fin general debido a que la pena no mira al delincuente sino a los otros miembros de la sociedad, que en respuesta a ellos cumple una función de prevención (Marchiori, 1999).

De acuerdo con Marchiori (1999) la individualización de la pena es la necesidad de adecuar la sanción al sujeto, al hecho delictivo, a sus modalidades y circunstancias. Se fija de acuerdo con un mínimo-máximo legal.

- **DELINCUENTE**

Esta etapa de la criminología de acuerdo con Marchiori (1999) comienza con el cuestionamiento acerca de quién es el individuo que comete el delito y qué respuesta social cabe a su conducta delictiva.

El primer interrogante apunta al conocimiento de la historia del individuo, personalidad y a la relación delito-personalidad. Es la comprensión del hombre en su modo social de existencia, del hombre real, concreto, en relación con un medio ambiente con una determinada estructura histórica, social, cultural, económica. Se trata de relacionar la conducta delictiva en función de la personalidad y del inseparable contexto social en que el individuo está interactuando.

La autora hace referencia a que el delincuente no es sólo un enfermo social, sino que es el emergente de un núcleo familiar en la que el individuo traduce a través de la agresión las ansiedades y conflictos del intra-grupo familiar. La conducta agresiva es la expresión de la psicopatología particular del individuo de su alteración psicológica y social.

El estudio del delito y de la pena estuvo constituido predominantemente por el derecho, aquí en esta etapa comienzan los enfoques médico-psicológicos para estudiar la personalidad criminal; primero de la mano de Lombroso y de la escuela de la antropología criminal. Observa al individuo en todos sus aspectos: físicos, biológicos, funcionales, psicológicos, conductas criminales, costumbres, reincidencia. En esta etapa se abordan por primera vez las diferencias de los comportamientos criminales de la delincuencia masculina de la delincuencia femenina. Se estudia y observa en relación con las edades de los delincuentes; los diferentes tipos de conducta; la influencia del alcohol y las toxicomanías. Se intenta diferenciar y comparar al hombre delincuente del enfermo mental. Comienzan las clasificaciones sobre los distintos tipos de delincuentes.

El estudio del delincuente planteó una tarea de diagnóstico del delincuente y una tarea de tratamiento; se considera a la pena no como castigo sino como tratamiento de rehabilitación. Busca prever un pronóstico de su futura conducta criminal. Los criminólogos en esta etapa formulan la necesidad de que la pena sea indeterminada, es decir, basada en los tiempos que requiera el tratamiento del delincuente. Esta etapa es considerada como el inicio de la criminología científica por la sistematización de estudios sobre los individuos delincuentes.

• VÍCTIMA

La criminología hasta esta etapa, según Marchiori (1999) había estudiado y analizado unilateralmente el delito, desde el punto de vista del delincuente dejando de lado a la víctima. La víctima es la persona que padece un sufrimiento físico, emocional y social a consecuencia de la violencia, de una conducta agresiva antisocial.

De este modo, la víctima está íntimamente vinculada al concepto consecuencias del delito, que resultan de la conducta antisocial, principalmente el daño, su extensión y el peligro causado individual y socialmente. A partir de 1946 se comienza a comprender a la víctima del delito y la necesidad de conocer la relación entre delincuente y víctima. Ellenberger (s/f), citado en Marchiori (1999), establece una tipología basada en el grado de participación de la víctima: víctima no participante, víctima latente, víctima provocativa-imprudente, víctima participante, falsa víctima.

Marchiori (1999) señala que existe una victimización conocida y otra oculta, relacionada con las denuncias que no realizan en el sistema penal. En 1976 se destaca la importancia de la tarea asistencial a la víctima y la necesidad de que el juez posea conocimientos sobre la víctima.

4.6 MÉTODOS Y TÉCNICAS

Varela et al. (2000) plantean un punto fundamental que es: la necesidad de ocupación del campo específico con discurso psicológico-forense y técnicas propias. Esto quiere decir que hasta este momento la Justicia se manejó con el consejo tradicionalmente médico, y este se limitó a una descripción enumerativa y estática del fenómeno, sin el aporte de la terapéutica adecuada. Existe una necesidad de un discurso psicológico que no solamente se limite a la exposición de un diagnóstico tan siquiera dinámico, sino que también propenda a su terapéutica y reversión y para ello debemos elaborar técnicas adecuadas.

Dominguez Lostaló (2007) hace referencia a que nos encontramos frente a un desafío profesional. El final del milenio presenta desafíos severos a la clásica formación de los psicólogos, esto lleva a exigir una readaptación de los instrumentos éticos profesionales para abordar temas sociales que nos afectan. El psicólogo que se pretende formar es un psicólogo

capacitado para enfrentar los problemas psicológicos, psicopatológicos y psicosociales que se presenten en la práctica, dentro del ámbito en el que elija desarrollar su labor

De acuerdo con Muñoz et al. (2011) la complejidad y especificidad del trabajo del psicólogo en el ámbito jurídico, con independencia de su campo de desempeño profesional, requiere una especialización y formación: dotar al alumnado de los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de perfiles profesionales concreto

5. CONTEXTO INSTITUCIONAL

La Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba. Esta institución desarrolla políticas públicas integrales de carácter interinstitucional e intersectorial, implementadas con igualdad territorial en pos de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de niños, niñas, adolescentes y familias en el marco de la Ley Nacional 26.061 (2005) y la Ley Provincial 9.944 (2011). La estructura programática de la Se.N.A.F organiza el trabajo en dos grandes líneas de acción: por un lado, la Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, y por otro, el acompañamiento a jóvenes en conflicto con la ley penal. El área Penal Juvenil a su vez trabaja de manera articulada con el Poder Judicial ejecutando las medidas dispuestas. La Se.N.A.F es la autoridad de aplicación de la Ley Provincial N° 9.944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en todo el territorio de la Provincia de Córdoba. (Se.N.A.F, 2018)

La Se.N.A.F tiene a disposición de la justicia una serie de acciones y programas que acompañan y supervisan al niño, niña o adolescente en su entorno social, para promover su inserción en las redes de su comunidad, el desarrollo personal y la construcción de un proyecto de vida autónomo, es decir medidas alternativas a la privación de la libertad. Dentro del área penal juvenil y dentro de las medidas alternativas, se encuentran el “Programa de Mediación Penal Juvenil”, “Programa de Tratamiento Tutelar”, “Servicios Zonales”, “Programa de Orientación Familiar” y el “Programa de Acompañamiento Psicoeducativo”, estos últimos dos espacios son en donde se llevan a cabo las Prácticas Profesionales Supervisadas, por lo que me centraré en los mismos.

5.1 HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN

En el año 1990, la Argentina ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (En adelante CIDN) y de allí en adelante comenzará un lento pero firme camino hacia la sanción de la Ley N 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el año 2005 se sanciona dicha Ley la cual tiene por objeto:

la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y

en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. (Ley Nacional 26.061, 2005, art. n°1)

La sanción de esta Ley permitió un enfoque integral de las políticas dirigidas a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, estableciendo su condición de sujetos de derecho y el respeto al pleno desarrollo personal en su medio familiar social y cultural. Desterrando el paradigma de la situación irregular, bajo el cual los problemas de naturaleza social no solo eran absorbidos por el sistema judicial, sino que la forma de protección de la infancia se centraba en la variante institucional, adoptando el estado un rol intervencionista.

Por consiguiente, se establece la conformación de un Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Se da una transformación del rol del estado, constituyéndose en garante de los derechos de los cuales NNyA son titulares, es por ello que las políticas públicas se plantean como un deber del Estado y como un derecho de los NNyA. A nivel provincial, en el año 2011 se sanciona la Ley 9.944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las NNyA en la Provincia de Córdoba, la cual tiene como objetivo a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de sus derechos. Se crea a partir de la Ley 9944 (2011) la Se.N.A.F, la cual se constituye en la autoridad de aplicación a nivel provincial de dicha ley (Se.N.A.F, 2018).

5.2 FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

Si nos situamos dentro del contexto de encierro, la primera intervención de Se.N.A.F se produce en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD). El ingreso de los jóvenes a dicho centro es por medio de un oficio judicial, que delega la guarda del presunto infractor a la Se.N.A.F. Allí interviene un Equipo interdisciplinario conformado por profesionales de la psicología y el trabajador social que evalúan aspectos individuales, familiares y sociales, determinando estrategias de intervención que dan lugar a las diferentes medidas a las que el joven puede ser incorporado. Definida la medida por el Juzgado Penal Juvenil, comienza la intervención de los Servicios Zonales. Haciendo referencia a la dinámica de trabajo, el joven es trasladado desde el CAD a un Centro Socioeducativo ubicado dentro del Complejo Esperanza, (en el caso de las mujeres todo transcurre en el Ce.S.A.M.), en donde se le asigna un Equipo Interdisciplinario conformado por: psicólogos, socio educadores (responsables de establecer un

Proyecto Educativo individual, el cual será de aplicación interna) y trabajadores sociales, quienes de manera permanente articulan estrategias de intervención, con mirada hacia el afuera. El Trabajador Social es el nexo entre el afuera y el adentro, quien desde el primer momento inicia el abordaje del joven y su familia para el retorno a la comunidad de referencia y origen, hasta que se resuelva su situación legal (cierre de la causa), se encuentre privado de su libertad, o en proceso de reinserción socio familiar (en su casa). A nivel interno articula, en caso de ser necesario con los diferentes programas de medidas alternativas:

- Taller de Madres y Padres: es un dispositivo que aborda aspectos relacionados a problematizar sobre la Responsabilidad Parental al Rol de madres y padres, destinado a los guardadores de los jóvenes que se encuentran en el sistema penal juvenil.
- Espacio psicológico familiar: Asesoramiento y apoyo psicológico para madres, padres, referentes adultos tendiente a resolver determinados problemas relativos a la dinámica de la familia.
- Acompañamiento Psicoeducativo: dispositivo para la atención individual de jóvenes.
- Mediación Penal Juvenil: Tendiente a la resolución de conflictos intrafamiliares, de vecindad, etc.
- Servicio en Beneficio a la Comunidad: tendiente a la responsabilización y reparación del daño causado por el joven.

5.3 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

De acuerdo con Se.N.A.F (2018) el Programa de Orientación Familiar tiene por objetivo principal orientar a padres y madres de adolescentes, sus tutores u otros miembros de la familia para el importante y complejo trabajo de ser padres. Se busca reflexionar en forma conjunta sobre las posibles situaciones que han generado que sus hijos/as enfrentaran conflictos con la ley penal y, a partir de ello, prevenir la reiteración de situaciones similares. De esta manera, el programa se plantea desde el marco de una actividad reflexiva, orientadora y educativa para abordar la problemática de los adolescentes en riesgo.

Este taller enfatiza acerca de la importancia que tienen padres y madres en el proceso de desarrollo de la personalidad de sus hijos/as y en cómo desarrollar desde la infancia componentes de la personalidad que favorezcan la prevención de situaciones de conflicto con

la ley en los adolescentes. Se busca enriquecer las herramientas que dichos padres y madres poseen para posibilitar el ejercicio de un rol contenedor, evitando exponer a los miembros de la familia a situaciones de riesgo. Bajo la modalidad de taller, se comparte con padres y madres de adolescentes, tutores u otros miembros de la familia una instancia de reflexión y orientación con el objeto de construir una mayor y mejor comunicación con sus hijos/as y fortalecer los vínculos familiares. La intervención grupal con éstos posibilita el trabajo en dos niveles de actuación: un primer nivel informativo/reflexivo y un segundo nivel terapéutico, en tanto tiende a provocar cambios en el grupo familiar (Se.N.A.F, 2018).

• **HISTORIA DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR**

Aparecen varios antecedentes del Programa de Orientación Familiar, uno de los más significativos fue el Programa de Atención Inmediata (PAI) que contaba con un equipo de Psicólogos y Trabajadores Sociales, que intervenía en situaciones de institucionalización de menores en conflicto con la Ley Penal que se encontraban alojados en precintos policiales con adultos en la misma situación. La función del equipo era diagnóstica ya que realizaban entrevistas a la familia de los menores con la finalidad de observar la condición de la problemática (Se.N.A.F, 2018).

A partir del año 2003 surge el POF por iniciativa de la Licenciada en Trabajo Social, quien desde aquel momento hasta entonces es la coordinadora. Por aquel entonces el programa era voluntario y únicamente estaba a cargo de ella. Propone este programa ya que comienza a percibir problemáticas recurrentes en la vida de estas familias, haciendo hincapié en la ausencia de límites. Le preocupaba que las medidas aplicadas fueran insuficientes por sí mismas ya que, en base a su experiencia, si no se producía un cambio en el sistema familiar, los adolescentes regresaban a las mismas condiciones de vulnerabilidad y se exponían a los mismos riesgos que antes de la detención. Sienta así las bases de lo que posteriormente es el Programa de Orientación Familiar con el desarrollo del Taller de Padres.

En el año 2008 se le otorga distinción institucional convirtiéndolo en un programa oficial, gracias al creciente interés de los organismos competentes, los cuales reconocían el éxito del programa y el logro de sus objetivos. En el mismo año, el POF comienza a adquirir especificidades del campo de la psicología, ya que se incorpora un psicólogo al Taller de Padres y a su vez, se crea el Espacio Familiar, el cual se constituye como un espacio terapéutico de carácter privado.

Actualmente, el POF es considerado como Programa del Estado que busca apoyar y orientar a grupos familiares para que logren asumir su responsabilidad ineludible de la crianza, contención y desarrollo de sus hijos cumpliendo con el rol que les corresponde (educar y proteger) coactuando con la responsabilidad que también le compete al Estado y a la sociedad. Además, el taller es de carácter obligatorio y cuenta con dos co-talleristas, Lic. en Psicología. Al finalizar los tres encuentros obligatorios, se hace entrega de certificados que acreditan participación y asistencia, que debe ser presentado ante el Juez del fuero penal juvenil con intervención en la causa del menor en conflicto con la ley penal.

- **OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR**

Objetivo General

Reflexionar en forma conjunta con los padres, sobre las posibles situaciones que han generado que sus hijos enfrentaran conflictos con la ley penal, a partir de ello prevenir la reiteración de situaciones similares

Objetivos específicos

- Ofrecer a los padres la información y conocimientos básicos sobre diferentes temas, con el objetivo de proporcionarles una mayor capacitación para ejercer su función.
- Facilitar mayores recursos educativos y formativos para promover en sus hijos actitudes, valores, habilidades personales y sociales.
- Promover el intercambio de experiencias entre los padres construyendo así un saber compartido (Se.N.A.F, 2018).

- **POBLACIÓN A LA QUE ESTÁ DIRIGIDO**

Si bien principalmente los talleres están dirigidos a padres que sus hijos han enfrentado conflictos con la ley penal (alojados en el Centro de Admisión, Institutos o en guarda) se incorporaron por iniciativa propia padres de adolescentes que estiman estar frente a ese riesgo, siendo los portavoces de estos encuentros los mismos padres que asisten o alguna vez asistieron al mismo.

- **RECURSOS HUMANOS**

El POF está constituido por un equipo técnico, el cual cuenta con una Licenciada en Trabajo Social, y dos Licenciadas en Psicología. La Licenciada en Trabajo Social es la coordinadora del Taller y ambas licenciadas en psicología acompañan en la coordinación del mismo.

- **ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR**

El Taller de Padres es un espacio Multifamiliar que funciona dos veces por semana, se realizan reuniones con grupo de padres, quienes para obtener la certificación deben asistir a 3 encuentros. Se trabaja con grupos de entre 10 y 25 padres por taller, se analiza, se debate, se dialoga y los participantes comentan sus experiencias, produciéndose un análisis a través de una retroalimentación. Se utilizan diversas técnicas como exposiciones, debates, dinámicas vivenciales, finalizando cada taller con técnicas de sensibilización, todo esto con el objetivo de generar en cada padre un compromiso y un fortalecimiento en su capacidad para desarrollar su rol de padre/madre de manera saludable.

5.4 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOEDUCATIVO

De acuerdo con Se.N.A.F (2018) el Programa de Acompañamiento Psicoeducativo representa una de las Medidas Alternativas que la Se.N.A.F. ha contemplado con mayor fortaleza y necesidad entre las diferentes posibilidades de intervención/interacción con niñas, niños y adolescentes que han transgredido la ley penal o que por su situación de vulnerabilidad social se encuentran próximos a transgredirla. .

• **OBJETIVOS**

Objetivo General

Brindar un espacio psicoeducativo, de asesoramiento y atención psicológica para fortalecer las capacidades personales de las/los adolescentes, orientarlas/los en el desarrollo de sus proyectos e identificar aquellos recursos sociales y familiares prosociales que se presentan como factores protectores ante la transgresión de las leyes y normas de la comunidad.

Objetivos específicos

- Reconocimiento de las capacidades, intereses y competencias personales que cada adolescente posee a fin de desarrollar un proyecto de vida
- Brindar tratamiento psicológico a quienes sean incorporados al programa que, por demanda propia o valoración del profesional sea recomendado y aceptado parte del/la adolescente.
- Acompañar al adolescente en su inclusión a los diferentes recursos existentes - públicos, privados y ONG- de los cuales requiera su atención. -Incluir cuando se considere necesario, a diferentes referentes familiares al programa a fin de fortalecer sus vínculos afectivos y sociales con la/el adolescente.
- Informar mensualmente a las instancias judiciales y de Se.N.A.F. sobre el proceso realizado por cada adolescente en el programa -como así también su inicio y finalización.

• **POBLACIÓN A LA QUE ASISTE**

Al programa asisten niños, niñas y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal.

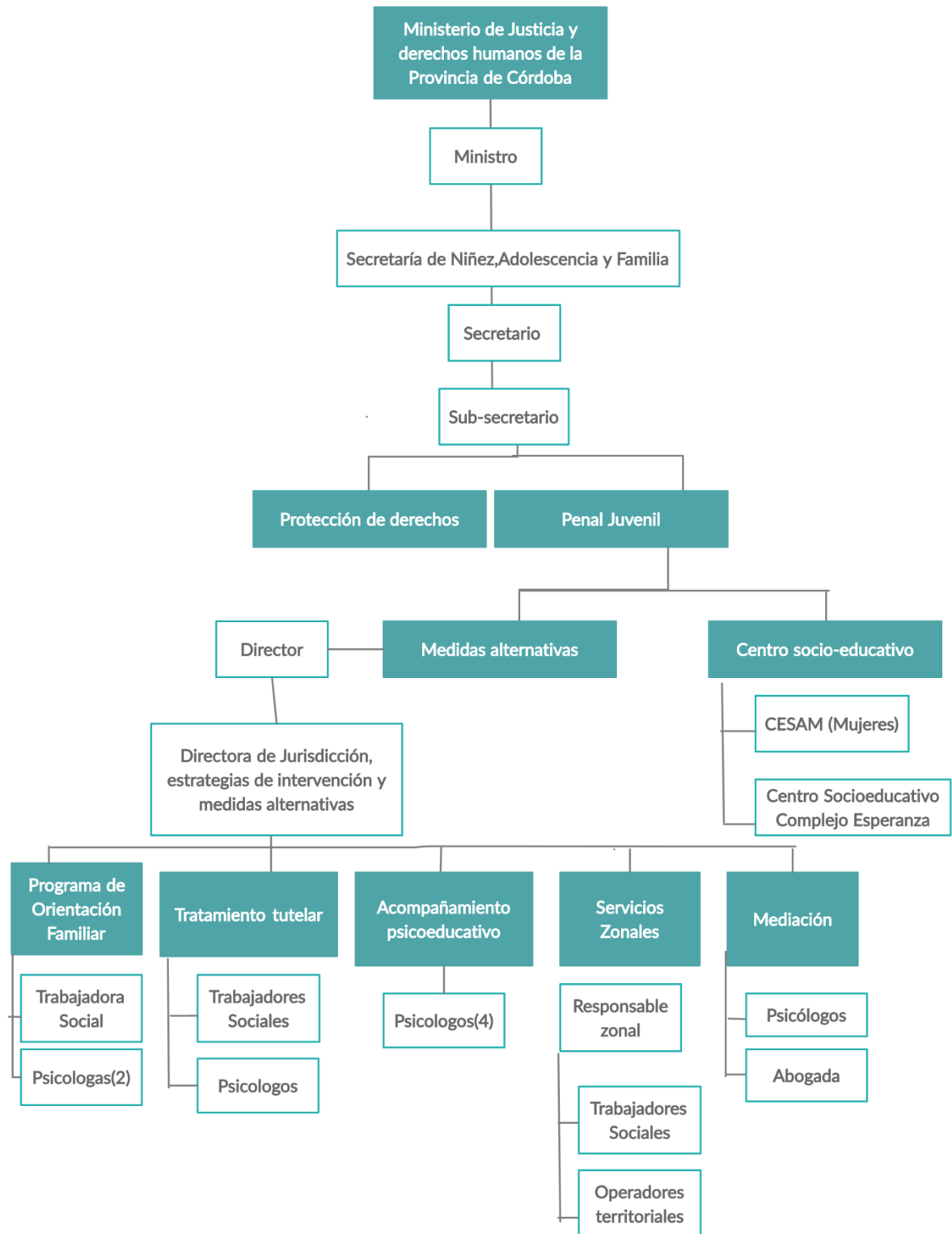
• **RECURSOS HUMANOS**

El equipo está compuesto por 4 Licenciados en Psicología, con vasta experiencia en el abordaje de la problemática de jóvenes en conflicto con la Ley Penal, tanto en ámbitos de encierro como en situación de libertad.

- **ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOEDUCATIVO**

Se trata de una alternativa de intervención que se propone a los juzgados a través de los informes de admisión al sistema penal juvenil por parte de los equipos técnicos del CAD - Centro de Admisión y Diagnóstico-, como así también lo pueden proponer desde otros programas del sistema penal como del sistema prevencional de Se.N.A.F. La principal característica que poseen las/los jóvenes que ingresan al programa es ser presuntos autores de un delito, motivo por el cual han ingresado al sistema penal juvenil. Su ingreso se hace a través de un oficio judicial donde se señala que debe ser incorporado al programa y las/los profesionales citarán a la/el joven y un adulto responsable (padres, abuelos, etc.). El procedimiento se inicia con la primera entrevista en conjunto -joven y adulto referente- a quienes se les explicará en qué consiste el programa, la importancia de su asistencia a las entrevistas pautadas y el cumplimiento de los acuerdos que allí se establezcan. Las/los profesionales realizarán un informe mensual sobre el proceso que se está realizando, los logros alcanzados, orientando su tarea especialmente a la inclusión social, el fortalecimiento de los vínculos familiares con referentes prosociales, la formación educativa y laboral. El programa cuenta con un registro individualizado de cada caso que se incorpora donde se consignan cada una de las entrevistas que se realizan a fin de tener un registro permanente del proceso (Se.N.A.F, 2018).

5.5 ORGANIGRAMA



6. EJE DE SISTEMATIZACIÓN

“Factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal desde el discurso de los padres que asisten al Programa de Orientación Familiar del área penal juvenil de Se.N.A.F

7. OBJETIVOS

7.1 OBJETIVOS GENERALES

- Analizar los factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal desde el discurso de los padres que asisten al Programa de Orientación Familiar del área penal juvenil de Se.N.A.F

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar socio-demográficamente la población objeto
- Identificar factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes desde el discurso de los padres antes de la intervención de Se.N.A. F
- Describir la percepción que tienen los padres sobre los factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes al finalizar la intervención de Se.N.A.F
- Explorar los factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes a partir del discurso de los profesionales de Se.N.A.F

8. PERSPECTIVA TEÓRICA

A continuación, se presenta la perspectiva teórica de referencia en la cual se desarrollarán los principales conceptos que permitirán orientar el análisis y el estudio del presente Trabajo de Integración Final.

8.1 MARCO LEGAL

Considerando que el presente Trabajo de Integración final se enmarca en una institución que trabaja con adolescentes en conflicto con la Ley Penal, tomaré como punto de partida las medidas legislativas que posibilitaron nuevas concepciones de la niñez y la adolescencia. La praxis psicológica con niños y adolescentes contempla aspectos éticos y legales específicos para este grupo etario, que no pueden dejar de ser atendidos por los profesionales a la hora de su ejercicio (De Giorgi, 2015).

- **ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS**

De Giorgi (2015) plantea que, a partir de la última década del siglo pasado, el paradigma de la infancia-adolescencia considerado desde la dimensión jurídica, ha atravesado un cambio estructural con su consecuente repercusión en el sentido legislativo. Dicho cambio ocurre a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1990). En ella se establecen los derechos inalienables de todos los niños y niñas, así como también las obligaciones de los Estados, los poderes públicos, los padres, las madres y la sociedad en su conjunto, incluidos los propios niños y niñas, para garantizar el respeto de esos derechos y su disfrute por todos los niños sin distinción de ningún tipo.

La CIDN (1990), entiende por niño a “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.” (p.10). Los Estados Parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Tanto en la CIDN (1990), como en la Ley Nacional N° 26.061 (2005) y la Ley Provincial N° 9.944 (2011) se plantean una serie de derechos que deben ser respetados, algunos de los cuales se presentan a continuación:

Entre los derechos amparados por las presentes leyes y por la CIDN (1990), se encuentran: el derecho a la vida (art. 8); a la dignidad e integridad personal (art. 9); a la vida privada y la intimidad familiar (art. 10); a la identidad (art. 11) y la documentación que la compruebe (art. 13); a la salud (art. 14); a la educación (art. 15); a la libertad (art. 19), contemplando que la privación de libertad, entendida como ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe realizarse de conformidad con la normativa vigente. Otros de los derechos amparados son el derecho al deporte y al juego recreativo (art. 20), al medio ambiente sano y equilibrado (art. 21), a la libre asociación (art. 23), a opinar y ser oído (art. 24) y el derecho a la seguridad social (art. 26).

En 1990 Argentina adhiere a la CIDN y en 1994 se le dio rango constitucional al incorporarla en la reforma de la Constitución Nacional. Antes de la ratificación, la idea predominante era la del menor como “objeto de tutela”, siendo considerado el mismo como objeto pasivo de derechos. Luego de la misma comienza a aparecer una idea del niño-adolescente como “sujeto pleno de derechos”, siendo la doctrina de “situación irregular” reemplazada por la de “protección integral” de los derechos de la infancia, adolescencia, donde lo que se instituye es el interés superior del niño. Sin embargo, si bien la Convención había sido ratificada, durante años debido a la demora en la adecuación legislativa, coexistieron dos visiones contrapuestas, por un lado, la que proponía la Convención y por otro la que subyacía a la Ley de Patronato. Esto se mantuvo hasta el año 2005, cuando se promulga en nuestro país la Ley Nacional N° 26.061.

- PROTECCIÓN INTEGRAL (Ley 26.061 y 9944)

Un paso fundamental en nuestro país es dado recién en el paradigma de la protección integral, cuando con el objeto de promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y restablecer los derechos de las niñas, niños y/o adolescentes el Congreso de la Nación sancionó en el año 2005, la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061. Mientras que en el año 2011 fue sancionada la Ley N° 9944 en la provincia de Córdoba con el mismo fin.

Los sujetos que quedan comprendidos a los efectos de estas leyes son todas las personas, niñas, niños y adolescentes hasta los dieciocho (18) años de edad (Art.2). El objetivo de ambas legislaciones es la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.

El paradigma al que dichas leyes adscriben es al del interés superior del niño, de esta manera, el Artículo 3° de la Ley 9944 (2011) expresa que se debe respetar: su condición de sujeto activo y portador de derechos, su derecho a ser oído cualquiera sea la forma en que se manifieste, y a que su opinión sea tenida en cuenta, el pleno desarrollo personal, armónico e integral de sus derechos en su medio familiar, social y cultural, su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales, el equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común y su centro de vida (residencia o lugar donde ellos hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia).

La autoridad de aplicación de la Ley Nacional N° 26.061 (2005) y la Ley Provincial N° 9.944 (2011) es la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Se.N.A.F) la cual tiene a su cargo el diseño, instrumentación, ejecución, coordinación, articulación y control de políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes y sus familias, y está a cargo de un Secretario de Estado designado por el Poder Ejecutivo de la Provincia.

- ASPECTOS LEGALES DE LA INTERVENCION CON NIÑOS NÑAS Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

La Ley 9.944 (2011) hace referencia en su título VII a las disposiciones generales de los NNyA en conflicto con la ley penal.

El procedimiento penal juvenil tiene por objeto primordial la protección y asistencia integral de las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, garantizando lo conducente al logro de su integración social a través de una atención que dé prioridad al abordaje educativo multidisciplinario, con especial énfasis en su capacitación para el acceso al mercado laboral. (Ley 9944, 2011, art.2)

La CIDN (1990) establece ciertos estándares en relación con la privación de la libertad, cuya finalidad es prevenir efectos deteriorantes, a la vez que promover la reintegración del

adolescente a la sociedad. Con respecto al tiempo de duración de la medida privativa de libertad, este debe ser el más breve posible y no ser indeterminado, no debe excluirse la posibilidad de que se otorgue la libertad al adolescente con anterioridad al plazo establecido.

Los principios que rigen la aplicación de dicha sanción son, la excepcionalidad y la máxima brevedad posible. El primero refiere al respeto del principio de proporcionalidad entre la sanción y la gravedad del delito imputado y el grado de culpabilidad del adolescente. La máxima brevedad posible se traduce en la consideración relativa de la duración de la pena en función del tiempo vivido por un adolescente; lo cual conduce a determinar un tope preciso a las penas privativas de la libertad en el caso de los adolescentes.

Además, en su artículo 37 establece que los sistemas de disciplina implementados en las instituciones tienen prohibido todo trato cruel, inhumano y degradante, como son los castigos corporales, la reclusión en una celda oscura, la pena de aislamiento o en celda solitaria, la reducción de alimentos, la restricción o denegación del contacto del adolescente con sus familiares o cualquier medida que ponga en peligro la salud física o mental del adolescente. Incluso quedan prohibidas las sanciones colectivas y la múltiple sanción disciplinaria por el mismo hecho.

8.2 FAMILIA

En nuestra sociedad, lo que tradicionalmente se ha considerado como familia, se encuentra relacionado a la sexualidad y procreación, “implica una pareja de sujetos adultos heterosexuales, la presencia de hijos (descendencia de la pareja), lo cual muestra la existencia de lazos de parentesco, y se agrega a esto la convivencia cotidiana” (Leibovich de Figueroa y Schmidt, 2010, p.30). Jelin (1998) sostiene que el modelo clásico de familia, naturalizado e idealizado, consistía en la familia nuclear, donde el “jefe de familia” concentra el poder y tanto los hijos e hijas como la esposa-madre desempeñan papeles anclados en la subordinación al jefe. De esta manera, se entendía a la familia como la institución social que regula, canaliza y confiere significado social y cultural a la sexualidad, la procreación y la convivencia. Sin embargo, estas tres dimensiones que conforman la definición clásica de familia han sufrido enormes transformaciones y han evolucionado en diferentes direcciones. De acuerdo con De Castro (2001) este tipo de familia, que históricamente ha sido el modelo hegemónico y universal, es el que está menos presente en la actualidad, ya que de acuerdo a la Organización

Panamericana de la Salud (2003) se pueden observar nuevas formas de familia, implicando una modificación en su definición, estructura y funciones. Estos cambios se deben a que la familia se encuentra muy relacionada a lo social, es decir, que existe un intercambio dinámico entre ambos sistemas.

Los paradigmas que sostuvieron durante siglos lo que se entiende por familia vienen siendo cuestionados. Giberti (1996) sostiene que el modelo único tradicional de familia, derivado de los cánones del patriarcado, excluye las cada vez más crecientes modalidades de constitución y desarrollo de las familias. La idea de familia como unidad o totalidad inamovible dificulta las alternativas que podrían elegir quienes las construyen, limitándolos en sus posibilidades como sujetos capaces de transformaciones personales y sociales. En este sentido si bien siempre coexistieron diversas configuraciones familiares alternativas al modelo patriarcal, éstas quedaban restringidas a la marginalidad. Los fenómenos actuales como el divorcio, los nuevos matrimonios que conforman familias ensambladas, las familias de un solo progenitor, la fertilización asistida, los cambios en el rol de la mujer, la mayor aceptación de las parejas homosexuales, entre otros, han incrementado la diversidad de familias cuestionando el modelo ideal de familia como cerrado y estable. Por lo tanto, cada familia, sea cual fuere su conformación observable, es una construcción original y la diversidad es uno por uno. (Rojas, 2005). Es por esta razón que diferentes autores como Delucca, Oddera y Martínez (2010) conceptualizan a la familia como heterogénea y cambiante ya que, la organización de las familias cambia tanto a través de los tiempos históricos como de una cultura a otra, así como también, en su propio devenir, siendo este último el aspecto que mayores transformaciones conlleva. Tales modificaciones en la organización familiar cuestionan su consideración como una estructura con lugares y denominaciones de parentesco invariantes, acentuándose de esta manera, en la cualidad plural de “las familias” y dejando de acudir a una conceptualización de “la familia” como única y totalizante.

Existen numerosas conceptualizaciones de familia. Por su parte Soifer (1980) define a la familia como:

Un núcleo de personas que conviven en un determinado lugar durante un lapso prolongado de tiempo y que están unidos-o no por lazos consanguíneos (...) este núcleo se halla relacionado con la sociedad, que le imprime una cultura e ideología particular. (p.10)

Por otra parte, Rojas (2011) concibe a la familia como “una organización abierta y compleja, por ende, multidimensional y fluctuante, entramada en la red sujeto/vínculo/cultura. En dicha organización familiar se despliegan procesos y operatorias inconscientes. La caracterizan el flujo y la diversidad, pero también puntos de anclaje y permanencias” (p. 173). Otros autores como Bleichmar (2008) redefinen a la familia como una asimetría que determina la responsabilidad del adulto con respecto al niño. Así, “en la medida que haya dos generaciones, hay una familia, con la asimetría correspondiente que orienta a la obligatoriedad de la transmisión y de la producción de sujetos en el interior de algún tipo de comunidad humana” (p. 45).

• ROL DE LOS PADRES

Desde el principio de la vida es necesario, pero no suficiente que el niño tenga un lugar en el deseo de sus padres, ya que habilita toda una trama simbólica que posibilita el desarrollo psicofísico. De acuerdo con Biaggio (2011) desde ese momento se está a merced del Otro, que en este caso viene a ser la madre ya que es quien encarna ese lugar de acuerdo a sus funciones, este Otro brindará los cuidados indispensables que junto a manifestaciones de amor permitirán que el cuerpo sea significado, perdiendo así su pura biología. Además, este “Otro será quien signifique el llanto del niño en llamado, en demanda” (p.152). Según la autora el niño y la madre funcionan entonces, como una célula primaria, si este vínculo se desarrolla de forma esperable podrán permanecer separados. Esta separación se debe a que interviene el Otro de la Ley, encarnado en el padre, es éste quien viene a prohibir la relación madre-hijo haciendo valer la Ley de la prohibición del incesto y será el que dará al niño o niña, los emblemas necesarios, esa marca desde donde cada uno se mira. Esto está relacionado con lo que quisiéramos llegar a ser, son marcas identificatorias, que vienen de la mano de la función paterna. Rojas (2007) sostiene que se encuentran ciertas generalidades en las familias, ya que son las que asumen la responsabilidad del amparo de sus integrantes (particularmente de quienes transitan los períodos de mayor indefensión tales como la primera infancia), al mismo tiempo, ofrecen apertura y separación constantes, contemplando así los requerimientos subjetivos de autonomía interdependiente. Es decir, que la función de la familia es la de contención e interdicción o sostén y corte, eficaces para la constitución subjetiva.

Biaggio (2011) destaca que tanto la madre como el padre, para el psicoanálisis son funciones y como tales pueden ser encarnadas en otras personas, incluso no tienen que coincidir

con el género. Así, la función del padre como la función de la madre operan de forma directa y tienen que ver con funciones que resultan esenciales para que la constitución psíquica del niño pueda darse. Por su parte Rojas (2007) desde la perspectiva del psicoanálisis vincular sostiene que, para que una familia pueda llevar a cabo sus funciones, ésta debe tener una clara línea entre generaciones; sin embargo, en las familias actuales se intensifica la simetría de la relación parento-filial, que en algunos casos hasta se invierte. De manera más específica, Roudinesco (2003) sostiene que los acuerdos familiares contemporáneos revelan el empobrecimiento sufrido por la autoridad paterna, lo cual ha conducido al debilitamiento de la figura del padre. Así, las configuraciones familiares actuales manifiestan la falta del lugar parental de autoridad y de responsabilidad en la crianza de los hijos. Es por ello que se puede observar tanto la indisponibilidad de muchos padres para cuidar amorosamente a sus hijos, como hijos sobre-investidos narcisísticamente. Estas posiciones desautorizan las funciones parentales y rompen la asimetría necesaria para el verdadero cuidado del otro, repercutiendo significativamente en la forma en que los miembros se posicionarán ante las exigencias de la vida (Monteiro, Gonçalves, Da Luz Refosco, y Macedo 2012).

Por último, Rojas (2007) considera que toda organización familiar atraviesa procesos de deconstrucción y construcción constante de lugares, funciones y modalidades vinculares, ligados a los distintos momentos vitales, de crisis evolutivas y accidentales; los cuales requieren inflexión y nuevas exigencias. Pero cuando dichos procesos se ven obturados o excedidos aparecen síntomas, trastornos, patologías diversas, que afectan sujetos y vínculos. Sin embargo, la autora concluye que la familia constituye condición necesaria pero no suficiente en la constitución y patologías del sujeto

8.3 ADOLESCENCIA

- **CONCEPTO**

La adolescencia no tuvo el interés de los investigadores hasta el 1900, cuando la sociedad urbana e industrial necesitó prolongar los años de la infancia. Surge entonces en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX como una segunda infancia, cuando gracias a los avances tecnológicos dejó de ser necesaria la mano de obra infantil y juvenil (Vega, 2007).

Etimológicamente la palabra adolescente proviene del latín “adoles-cens = ad+aleccens = el que está en camino y/o siente el dolor de las heridas para pasar a ser adulto: ad+ultus, el que ha terminado y determinado” (Giberti, 2005, p.163).

Existen diferentes conceptualizaciones de la adolescencia, se mencionarán aquellas consideradas relevantes para aproximarnos a una definición de este proceso adolescente. En primer lugar, Freud (1905) refiere a la adolescencia como la etapa genital, en la cual las pulsiones sexuales requieren satisfacción. En esta etapa se reedita la problemática edípica y se resuelve con la elección de objeto sexual, la tarea primordial del adolescente será el logro de la primacía genital, el desasimiento de la autoridad de los padres y la consumación definitiva del proceso de la búsqueda no incestuosa del objeto sexual. La temporalidad lógica supone un tiempo de constitución del aparato psíquico en que no se puede acceder a una nueva estructura psíquica si la anterior no se constituyó y, al mismo tiempo, la nueva organización reordena y reestructura los elementos preexistentes.

Así también, dentro de la teoría psicoanalítica aparecen otras conceptualizaciones de esta etapa. Blos (1980) define a la adolescencia como un periodo de crisis vital, un momento de pasaje y reorganización, que comienza con un hecho biológico, pero se imbrica con un tiempo de reestructuración del aparato psíquico con la misma valía de la infancia. Siguiendo esta línea teórica, Erickson (1968) plantea que el adolescente se enfrenta con una revolución fisiológica dentro de sí misma que amenaza su imagen corporal y a su identidad del yo. Comienza a preocuparse por lo que “parece ante los ojos de los demás” en comparación del sentimiento de sí mismo. Ante lo cual, el adolescente debe reestablecer la identidad del yo a la luz de sus experiencias anteriores y aceptar que los nuevos cambios corporales y sentimientos libidinales son parte de sí mismo. De manera similar Aberastury y Knobel (1972) sostienen que todo adolescente debe atravesar tres duelos que acompañan el proceso normal adolescente y que son fundamentales para la constitución de la identidad adulta: El duelo por el cuerpo infantil, por la identidad infantil y por los padres omnipotentes de la infancia. Así también Vázquez y Fernández Mouján (2016), describen a la adolescencia como una etapa de transición en el desarrollo humano, donde se producen cambios que implican renunciaciones, siendo una de ellas, la renuncia a la identidad infantil para construir la identidad adulta.

Por otra parte, Quiroga (1998) plantea la adolescencia como un momento del ciclo vital que inicia a partir de un hecho biológico (crecimiento del cuerpo y comienzo de funcionamiento de las hormonas sexuales), y que al mismo tiempo está inmerso en un proceso psicosocial, el cual varía según las culturas y los momentos históricos. Por este motivo, considera que esta etapa del desarrollo puede ser definida desde distintos puntos de vista, según desde dónde se

proponga su abordaje. El autor refiere a que cada cultura propone para la adolescencia, a través de formas determinadas llamadas “ritos”, un momento de inicio, que se apoya en el hecho biológico del despertar pulsional, y un momento de fin, que es altamente variable. En este sentido Palazzini (2006) considera que, en el fenómeno adolescente, biología, cultura y psiquismo constituyen registros de definición inseparables en la medida en que se hayan intrincados en su conformación.

Se podría decir entonces que los adolescentes de hoy no serían considerados como tales en otras épocas y lugares, por lo tanto, para poder pensar la adolescencia es importante reflexionar sobre los códigos en que se instituye y que son propios de cada momento histórico, de cada subcultura y generación, que se encuentran íntimamente relacionados en la historia particular de cada adolescente (Rodríguez Galende, 2012).

Con el objetivo de superar una mirada homogénea y visualizar las diferencias presentes en el modo en que cada sujeto atraviesa esta etapa, algunos autores han sugerido partir de una noción plural: las adolescencias. Tal es el caso de Sternbach (2006), quien plantea que las adolescencias se ramifican y diversifican en función de la extracción socioeconómica, el lugar de residencia o la tribu que conforma el grupo de pertenencia o de referencia. Por lo tanto, las adolescencias son múltiples, diversas, siempre surcadas por una singularidad entretejida con las trazas comunes que la cultura actual posibilita. Del mismo modo, Dávila León (2004) remarca la necesidad de pluralizar las nociones de adolescencia y juventud, es decir, definirlas y concebirlas como “adolescencias” y “juventudes”, teniendo en cuenta las heterogeneidades que se pueden presentar entre los miembros de este colectivo social. Esto tiene sentido, a su vez, porque se conciben a estas categorías, la de adolescencia y juventud, como construcciones y significaciones sociales en contextos históricos, culturales y relacionales en las diversas sociedades contemporáneas, que responden a un proceso de permanente cambio.

Así también Fernández (2013) plantea que existen muchas y muy diversas adolescencias, por tanto, tender a la uniformización de la temática no es más que “caer” en reduccionismos, simplificando u obturando una mirada integral del término, que como explica la autora, en los diversos modos de ser adolescente “(...) genera como efecto, discursos que invisibilizan las actuales cotidianidades de los mismos”. (p.28)

Por último, en lo expuesto anteriormente es posible observar lo que plantea Palazzini (2006) acerca del modo en que las concepciones sobre adolescencia han oscilado entre el subrayado de angustias y duelos concomitantes y una adecuada idealización como tiempo pleno de vida, debido quizás a la confusión entre adolecer (padecer) y adolescer (crecer), lo cual no es lo mismo.

8.4 ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

De acuerdo con Arévalo y Maldonado (2004) es importante utilizar la denominación “niños y adolescentes en conflicto con la ley penal” en el lugar de otras denominaciones como “menores delincuentes”, “joven delincuente”, “precoces delincuentes”, “menor infractor”, ya que estos sustantivos remiten a la Ley de Patronato de Menores 10.903 (1919) que los considera como “objetos” y no como sujetos de derechos, como los concibe la CIDN (1990). Estos términos están revestidos de un sentido peyorativo que define a los adolescentes a partir de su comportamiento y refuerzan prejuicios, estigmas y desigualdades sociales.

Es decir, en relación con el adolescente que transgrede la ley penal, la Doctrina de la Protección Integral lo considera, como un niño, sujeto de derechos los cuales están garantizados legalmente. En este sentido, toda medida debe responder a un principio fundamental: el interés superior del niño. (Sarmiento, Puhl, Oteyza, Bermúdez y Siderakis, 2009)

Existen diferentes definiciones de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Sabattini (2001) los define como: “jóvenes que transgreden las normas penales y toman contacto con el sistema judicial y tutelar. Constituyen una categoría específica y comparten similares trasfondos biográficos y patrones conductuales. Proviene en su mayoría sectores pobres o pauperizados (...)” (p.23). La autora afirma que en ocasiones el accionar del adolescente llega a límites que rozan con el delito, es decir con la normativa legal. Entonces comienza a deambular, lo que lleva a las detenciones por merodeo, las detenciones a disposición de padres, las entradas eventuales a precintos. Es aquí entonces que se inaugura de manera oficial la entrada del adolescente al grupo de adolescentes transgresores o en conflicto con la ley penal.

Otra de las definiciones es la de Condori Ingaroca (2002) quien plantea que el adolescente en conflicto con la ley penal es aquel joven que, por determinadas carencias psicológicas, biológicas y sociales, se enfrenta con diferentes dificultades al atravesar su proceso de socialización y adaptación, lo que puede generar la adopción de comportamientos socialmente inadaptados. Lascano (2005) plantea que los niños y adolescentes no deben ser castigados, sino recibir medidas educativas preventivas (no penales). De esta manera, los jóvenes no concurren en delito, sino a la figura de transgresión a la ley penal.

Hablar de adolescencia e infracción nos implica pensar cómo se produce la construcción punitiva de un conflicto social, como dice Uriarte (1999), que es mucho más amplio y no puede

quedar reducido al episodio denominado “delito”, que tendrá como consecuencia desde el punto de vista jurídico una pena para el responsable de este. Lewkowicz (2003), citado en Fernández (2013), plantea que el control punitivo opera con una lógica que impide pensar integral e integradamente al sujeto adolescente que ha vivido una situación de infracción. Pensar su subjetividad en situación permite el encuentro con su biografía, para de esta forma, generar intervenciones articuladas entre los técnicos, que le permitan historizarse, y resignificar los acontecimientos vividos.

Tonkonoff (2001) afirma que, si se parte de la premisa que un joven transgresor de la ley penal es un delincuente, se priva de saber que, en general “los jóvenes son casi siempre más jóvenes que delincuentes” (p. 278). Puesto que afirmar que un joven “es” un delincuente implica la adjudicación de una identidad que, al igual que el delito, se presentan como una realidad uniforme. De este modo, se van conformando ciertos estereotipos que operan, como todo mito, por repetición obstinada de sus relatos; entonces el sujeto trasgresor a la ley penal es objetivado según la combinación de fragmentos heterogéneos de diversos discursos (políticos, jurídicos, estéticos, morales, mediáticos, etc.) que colaboran en la conformación de un universo de significación totalizante.

En este sentido, consignar a un adolescente como infractor, delincuente, peligroso, criminal, es sustraernos de su biografía y de la de-construcción de su trayectoria personal, familiar y social. Pensar en clave de derechos supone darle voz al adolescente en la singular modalidad de construcción de su subjetividad en la cual se enclava su conflicto con la Ley penal, no quedándonos cautivos del “episodio delictivo”, en la definición de su identidad. El conflicto con la Ley penal en la adolescencia constituye, entonces, una expresión que deberá ser analizada en la singular construcción subjetiva de dicho sujeto, tomando en cuenta su integralidad. Ello supone no reproducir la modalidad de la intervención punitiva en cuanto, no solamente a su selectividad, sino también en lo que tiene que ver con la práctica de fragmentación característica de la misma (Fernández, 2013).

Por otra parte, Blos (1980) refiere que la pre - adolescencia es el momento en el que suelen aparecer las conductas transgresoras, ya que irrumpen las manifestaciones de la pulsión agresiva tendientes a la autonomía y al distanciamiento afectivo del self respecto de los objetos de dependencia, siendo el acting out un esfuerzo deliberado por detener la desintegración yoica. Esto se debe a que existe una fuerte equivalencia entre adolescencia y acting out, considerado como una función reparatoria, constituyéndose como un recurso que favorece la elaboración de la historia de su pasado reprimido, es decir que la acción usurpa la función lingüística. Por su

parte, Winnicott (1939) infiere que la destructividad caracteriza al niño antisocial cuya personalidad no deja espacio para jugar y que, por ende, este es reemplazado por la actuación (acting out). De manera similar, Cartolano (2006) plantea que los adolescentes al encontrarse en un momento de pasaje, de iniciación, recurren al “acto” como modo de singularizar las distintas experiencias. El adolescente se presenta como un transgresor, necesita penetrar para recrear o contradecir en un acto, implicándose subjetivamente en el mismo.

Sin embargo, De Simmone y Sarmiento (s.f.) afirman que, si bien la adolescencia es típicamente transgresora, se debe hacer la salvedad respecto a este tipo de adolescentes, ya que no cometen transgresiones propias de la etapa vital por la cual están atravesando, sino justamente conductas que desorganizan el orden establecido.

Urresti (2005) por otra parte refiere que los adolescentes inician su apertura a la vida en un mundo social que para la gran mayoría se presenta excluyente, hostil y con bajas expectativas para el futuro, encontrando de esta manera a la violencia como algo cotidiano, muchas veces naturalizada en ellos como forma de relación y mecanismo habitual para resolver situaciones. Así mismo, Rodríguez Galende (2012) argumenta que el ejercicio de la violencia por parte de los jóvenes les posibilita construir una identidad, les permite lograr una cierta posición social, dejar de ser un sin nombre para sentirse alguien. Sin embargo, paradójicamente la sociedad los descalifica no sólo por ser adolescentes sino por ser violentos y generalmente pobres, lo que genera un comportamiento tal como lo impone el discurso dominante en la sociedad. En esta misma línea, Janin (2018) manifiesta que a estos adolescentes con frecuencia se los criminaliza, sobre todo si se encuentran en situación de vulnerabilidad social, asentando de esta forma las bases de la exclusión.

La transgresión a ley penal de los jóvenes en nuestro país de acuerdo con Bleichmar (1999):

Es el síntoma más preocupante de nuestra sociedad actual, ya que pone de relieve el fracaso no de la familia individual, sino de las instancias “parentales” del país, vale decir de protección: judiciales, legislativas, de gobierno, en su carácter de entorno constituyente y protector de la sociedad civil (p.2)

La conducta transgresora no surge por sí sola en el adolescente, sino que es el resultado de diferentes factores, entre ellos situaciones de marginalidad y vulnerabilidad social, que perturban el desarrollo evolutivo, alterando el proceso de socialización dando como resultado desadaptación social (Sarmiento, Ghiso, Siderakis y De Simone, 2016). Sin embargo, Uceda Maza, Navarro Pérez y Pérez Cosín (2014) plantean que la delincuencia juvenil es “un fenómeno complejo que tiene asociaciones con situaciones de vulnerabilidad y exclusión social

pero este hecho ni sus relaciones a priori, pueden explicar el hecho delictivo en sí, sólo señalar asociaciones, elementos existentes y procesos” (p.81).

De acuerdo con Munizaga Acuña (2009), han sido variadas las teorías que se han desarrollado a la largo de la historia de la criminología, con el fin de indagar, comprender y explicar el origen y las causas de la delincuencia, y son numerosos los estudios inclinados a mostrar los motivos de la transgresión juvenil. Sin embargo, un sin número de investigaciones y teorías permiten concluir que no existe un único factor capaz de explicar lo que es, sino que está originada y mantenida por diversos factores de naturaleza multidimensional. De acuerdo con Graña Gómez y Rodríguez Biezma (2010) algunos de estos factores son de naturaleza individual, como las características de personalidad del adolescente y la configuración de su sistema emocional y de creencias. Además, se han considerado también aspectos de naturaleza social y contextual como la influencia de la familia, del grupo de pares, del marco escolar y de la comunidad que condicionan el proceso de desarrollo individual y de socialización del adolescente.

8.5 TRANSGRESIÓN

Cuando hablamos de transgresión nos estamos refiriendo a aquellos actos que franquean un límite a las normas establecidas. Su resultado es realizar un acto considerado “anormal” que es sancionado por la sociedad y considerado delictivo por la ley que regula esas normas. En este sentido la transgresión está relacionada con el límite. Esto nos lleva a cuestiones que refieren a la ética, pero también a la política en tanto debemos tener en cuenta una cultura hegemónica que sostiene un poder que establece lo que está permitido y prohibido. De hecho, se usa el término “transgresión” con una connotación positiva cuando ciertas acciones permiten romper tabúes y prejuicios de una cultura. Por otro lado, también se lo usa cuando el negar la ley lleva a acciones destructivas y autodestructivas. Mantener esta ambigüedad del concepto es una necesidad de sectores del poder para sostener que todo acto que vaya en contra de las regulaciones que impone es un atentado contra el conjunto de la sociedad. La criminalización de algunos derechos civiles y la criminalización de la protesta social es una de sus consecuencias. De allí la necesidad de delimitar que consideramos una transgresión (Carpintero, 2012).

De acuerdo con Corominas (1973) el término “transgresión” viene del verbo *Gradior* que significa andar, ir, marchar. Tiene una reminiscencia onomatopéyica del sonido “gr” que también aparece en otras lenguas con significados parecidos. Cuando el verbo se sustantiva se transforma en la palabra “*Gradus*” que pasa a significar escalón, salto, nivel, avance. De ellos derivan grado, grada, graduar, degradar, regresar, progresar, ingresar, agredir y transgresión. En todas ellas está contenida, de una u otra manera, la idea de saltar. Cuando pasamos al latín *transgredior*, *trasgressus* y *transgressio* tenemos unos términos que nos señalan el paso de un lugar a otro, generalmente saltando un obstáculo. Al aplicarlos metafóricamente a las leyes y a las normas sociales llegamos al sentido que tiene en castellano: infringir, quebrantar, vulnerar, desobedecer una orden, una ley de cualquier clase.

En el adolescente, sin duda alguna, el proceso de construcción de la identidad estará íntimamente asociado a la necesidad de ir más allá para dejar atrás la identidad de la infancia y adquirir una identidad como adulto. Cierta grado de transgresión es imprescindible en el adolescente normal y, por el contrario, su ausencia puede ser un indicador de inhibición o de bloqueo del desarrollo. La novedad que introduce la adolescencia lleva asociada una cierta necesidad de transgresión de lo establecido y siempre nos interpela para renovar las rigideces de nuestra sociedad, por lo que es importante señalar que no toda conducta negativista o desafiante en la adolescencia es patológica. Y es preciso distinguir cuándo el oposicionismo del adolescente está a favor del desarrollo y cuándo no (Tió, Mauri Mas, Raventós Sáenz, 2014). Como escribe Aberastury y Knobell (1980) hablando de la adolescencia normal, la conducta del adolescente está dominada por la acción, que constituye la forma de expresión más típica en estos momentos de la vida.

Que el acoplamiento transcurra por los cauces de una conflictividad manejable a través de la negociación, el diálogo y el cambio mutuo dependerá tanto del joven como de la capacidad de contención del entorno. Un problema añadido viene cuando las normas que se transgreden son las normas legales; en este caso, hablamos de conductas delictivas. Es importante por eso diferenciarlas clínicamente, porque no todas ellas tienen el mismo valor psicopatológico: en ocasiones el adolescente actúa impelido por una urgencia en la que siente que le va la vida, pudiendo saltarse los límites legales, como sucede en algunas conductas de verificación. Otras veces, el acto delictivo informa acerca de una patología que empieza a manifestarse en la adolescencia a través de la conducta como consecuencia del interjuego entre ansiedades, defensas e identidad, o también en ocasiones nos habla de una patología latente o patente que

venía de la infancia y que, con la crisis adolescente, se empieza a expresar en este momento, o bien se manifiesta entonces con mayor virulencia (Tió et al., 2014).

Los autores plantean que de aquí viene la necesidad imprescindible de llevar a cabo un diagnóstico diferencial ante la conducta transgresora de adolescente, fijándonos en cuándo es normal y cuándo patológica, en sus componentes progresivos y regresivos, en las ansiedades y defensas predominantes, en cómo se está construyendo su identidad, en el entorno en que se da y si este reacciona con capacidad de contención o de forma expulsiva. Detrás de un mismo delito, como puede ser un robo, pueden existir diversas motivaciones desde el punto de vista psicológico: un chico o una chica pueden robar por carencia, por simple necesidad de subsistir cuando no tienen ninguna red social de soporte; para verificarse y poner a prueba sus capacidades de hacer algo nuevo peligroso y prohibido; como señal de alerta dirigida al entorno; por intolerancia a la frustración, a no poder soportar que otros tengan algo que él o ella quieren; por intolerancia a la necesidad, para sentirse aceptados por el grupo, como sucede en las bandas; por compulsión, o, finalmente, por triunfo y burla, lo que nos indicaría patologías más arraigadas y con riesgo de estructurarse como perversiones o psicopatía. Cada una de estas motivaciones implica un foco de trabajo y un pronóstico diferentes, por lo que es un grave error decir que todo adolescente que roba es un psicópata o diagnosticarlo de trastorno antisocial o disocial, según las clasificaciones psiquiátricas al uso (DSM-IV-TR o ICD-10).

8.6 FACTORES DE RIESGO

• CONCEPTO

Los factores de riesgo son variables que pueden afectar negativamente el desarrollo de las personas. En términos más específicos, Hein, Blanco y Mertz (2004) afirman que:

Cuando se habla de factores de riesgo se hace referencia a la presencia de situaciones contextuales o personales que, al estar presentes, incrementan la probabilidad de

desarrollar problemas emocionales, conductuales o de salud. Estos problemas promueven la ocurrencia de desajustes adaptativos que dificultarían el logro del desarrollo esperado para el joven en cuanto a su transición de niño a adulto responsable y capaz de contribuir y participar activamente en la sociedad. (p.2)

En este sentido Jessor y Jessor (1991) citado por Beroña (2008), plantean que los factores de riesgo en adolescentes son todos aquellos aspectos que se encuentran en el entorno y que motivan a que el adolescente realice conductas que puede comprometer su desarrollo adolescente. De manera similar López Fuentetaja y Castro Masó (2007) definen a los factores de riesgo como las características individuales o del entorno inmediato que exponen al adolescente a peligros relacionados con la integridad física o con su desarrollo psicológico y social. Estos se caracterizan por su valor predisponente y previo a la conducta. Dichos factores incrementan la probabilidad de conductas como el uso y abuso de drogas, consumo de alcohol, tabaco, delincuencia, deserción escolar y relación sexual precoz.

Sin embargo, si bien la adolescencia es un periodo proclive para la aparición de conductas que conllevan riesgo, no todos los adolescentes actúan de la misma forma ni se exponen por igual a los peligros que pudieran aparecer en su contexto. Las características de la personalidad previas del adolescente, los factores familiares y del entorno podrán confluir en el mantenimiento de las conductas de riesgo si son reforzadores de esas actuaciones (López Fuentetaja y Castro Masó, 2007). Además, como plantea Vázquez González (2003) no todos los factores poseen la misma influencia, sino que esta va a depender del contexto socioeconómico-político y cultural en el cual el joven esté inserto. Por lo que es muy importante ser precavido en la materia, ya que conocer los factores de riesgo a los que se ve expuesto un niño o joven, no produce certeza total de que se vaya a alterar su desarrollo más bien ayuda a estimar la probabilidad de que esto ocurra.

Hein et al. (2004) refieren a que el desarrollo de los individuos no se da en forma aislada, ya que viven y se relacionan con una compleja red de sistemas interconectados que influyen en forma directa o indirecta en el desarrollo de las personas, y cuyas características pueden convertirse tanto en factores protectores como de riesgo. Es decir que, a la hora de explicar la conducta infractora, ningún factor por sí solo tiene peso ya que la suma de estos elementos da un panorama multidimensional, antes que una causa-efecto. En otros términos, Hirschi (1969) establece que esta conducta es la consecuencia de la ruptura de los vínculos sociales en uno o

más de los contextos sociales: familia, instituciones educativas, grupo de amigos o actividades recreativas.

En este sentido cabe aclarar que la presencia de un solo factor nunca es la única razón de futuros comportamientos violentos ni antisociales, sino que es necesaria la combinación múltiple de las características individuales y situacionales; así como la confluencia de ciertos factores (Pueyo, 2006).

Hein et al. (2004) refieren que los factores de riesgo pueden ser clasificados en 6 ámbitos de procedencia, de acuerdo con un continuo que va desde el nivel individual hasta el nivel sociocultural: individuales, familiares, ligados al grupo de pares, escolares, sociales y socioeconómicos y culturales. De manera similar, Vázquez González (2003) propone diferentes factores de riesgo que podrían influir en el delito o en el delincuente juvenil, determinando su conducta criminal. Algunos de estos son: Factores psicológicos, factores familiares, factores socioeducativos, el grupo de amigos y las drogas.

Los factores de riesgo se distribuyen en la forma de un conglomerado de elementos heterogéneos conformado por determinadas variables individuales, la familia, la escuela, el grupo de amigos, el consumo de sustancias y la comunidad de referencia. Factores que, de presentarse unidos en mayor o menor medida, y al interactuar entre sí, configuran un mecanismo de retroalimentación que empuja al adolescente en un primer término hacia parámetros de comportamiento antisocial y que, de perpetuarse a lo largo de la preadolescencia, degeneran en la forma de delitos (Desbrow, Fernández, Gran, Lozano y Cardaba, 2014). Esto coincide con lo que plantea Hein et al. (2004) acerca de que se ha ido descubriendo que los factores coexisten, interactúan y son mediados por una gran variedad de otras variables que intervienen en la cadena causal del desarrollo de los comportamientos problemáticos. De este modo, las características individuales pueden interactuar con características contextuales.

8.6.1 FACTORES INDIVIDUALES Y PSICOSOCIALES

Existen factores a nivel individual, familiar y comunitario que promueven la aparición de conductas transgresoras en los adolescentes y que inciden en la constitución diferencial de trayectorias, modalidades y perfiles. Por lo que Mead (1934) plantea que es importante resaltar la relevancia de la perspectiva psicosocial ya que estudiar únicamente al adolescente en conflicto con la ley penal sin tener en cuenta los sistemas sociales que influyen en él o estudiar

únicamente cómo la sociedad influye en el adolescente sin tener en cuenta su psicología o el motivo de su conducta, sería observar la problemática de manera incompleta.

En esta misma línea Varela et al. (2000), refieren que es fundamental poder tomar distancia del discurso jurídico en cuanto a la temática de los adolescentes en conflicto con la ley penal. La perspectiva legal, detecta el conflicto a partir de la alarma social que se produce en el entorno. Desde otra mirada, la psicología se enfoca o visibiliza dicha problemática desde los aspectos psicológicos propiamente dichos. A partir de aquí, el problema debe ser asumido y analizado también desde las ciencias psicológicas y sociales, poniendo el acento no solamente en la manifestación conductual, que solo es leída como la señal de alarma, sino también, en las características psicosociales y socio dinámicas del sujeto, ya que mediante la transformación de estas características se pueden lograr modificaciones en el actuar de los adolescentes asistidos.

Los autores mencionan que, si se trataran las manifestaciones antisociales, en realidad lo que se estaría haciendo es tratar el síntoma y no las causas, por lo tanto, lo que se conseguiría es que el síntoma mutara en otro y dicha señal de alarma, a la que se alude, no sería detectada por el discurso jurídico, sino por otros discursos (Varela et al., 2006).

• **CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES E INDIVIDUALES DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL**

Según Varela et al. (2006) dentro de las características psicosociales que hay que tener en consideración en los adolescentes en conflicto con la ley penal se encuentra: la compulsión a la acción, que refiere al pasaje del impulso a la acción directa, sin la intervención del pensamiento como instancia mediatizadora. El sujeto tiende a actuar la necesidad como un impulso incontrolable, sin medir las consecuencias, como a su vez tampoco tener registro de los otros, comprometiéndose en situaciones de riesgo individual y social. Otra de las características es el escaso nivel de tolerancia a la frustración, todo debe ser realizado aquí y ahora, tratando de satisfacer la necesidad inmediata. Aparecen también en los adolescentes características tales como la vivencia del tiempo presente como absoluto, la cosificación del mundo, la utilización de los otros y del propio cuerpo como objeto y el pensamiento concreto. Sin embargo, los aspectos individuales tales como la tolerancia a la frustración, la impulsividad, etc., deben ser considerados siempre dentro de un ámbito cambiante y de diversos contrastes como lo son el social y el familiar (Salazar, Torres Reynaldos, Figueroa y Valencia Abundiz, 2009).

En esta misma línea Sabattini (2001) plantea que dentro de las características de naturaleza individual de los adolescentes en conflicto con la ley penal podrían incluirse: manipulación; escaso posicionamiento crítico con respecto a transgresiones; autoestima alicaída; inestabilidad emocional; vulnerabilidad; falta de límites; mecanismos de defensas estereotipados; disvalores; conductas auto agresivas; visión del mundo personal y no interpersonal; ausencia de sentimiento de culpa; actitudes violentas.

Así también Hein et al. (2004) plantean una serie de factores individuales como: bajo coeficiente intelectual muchas veces asociado a la baja escolaridad, pobre capacidad de resolución de conflictos, actitudes y valores favorables hacia conductas de riesgo hiperactividad, temperamento difícil en la infancia. De manera similar Desbrow et al. (2014) plantean variables individuales como: Baja autoestima, bajo rendimiento intelectual, impulsividad, egocentrismo, baja empatía, inestabilidad emocional, escasa autocrítica, inmadurez, bajo desarrollo moral, distorsiones cognitivas, búsqueda de sensaciones, necesidad de pertenencia, déficits comunicativos, bajas habilidades sociales y déficits cognitivos. Varela et al. (2006) refieren a que en general, hay coincidencia entre los diversos autores en cuanto a que su nivel intelectual y su madurez perceptiva están levemente por debajo de la media de la población.

A nivel intrasubjetivo hay un déficit en la construcción de la trama representacional por la intensidad y la cualidad de situaciones vitales traumáticas acaecidas en la infancia (Quiroga y Cryan, 2004); siendo el resultado, el uso de defensas primarias tales como la disociación, proyección y negación. Observándose diferentes maneras de exteriorizar el conflicto con una dirección hacia el medio social en forma de impulsividad, hiperactividad y baja tolerancia a la frustración; y hacia sí mismos como sumisión, introversión, apatía, desgano, consumo de sustancias, y conductas autodestructivas (Sarmiento, Puhl, Izcurdia, Siderakis y Oteyza, 2011).

Por otra parte, otra variable a tener en cuenta según Briouli (2007) es la vivencia de situaciones traumáticas, entendiéndose por éstas aquellos hechos que generan la insuficiencia de herramientas para resimbolizar la realidad, puesto que produce un impacto que desorganiza y genera cierta sensación de desconcierto. Cuando los jóvenes han vivido alguna situación traumática, ésta suele generar como consecuencia una autoestima muy débil, por lo que los sujetos pueden presentar una desconexión consigo mismos, con sus emociones y cuerpo, ya que las experiencias de este tipo los han obligado a disociar cuerpo de emoción, para tolerarlas. Estos jóvenes que han sufrido rechazo, abandono, desamor, que han crecido en ámbitos callejeros o prodelictivos desde niños, pueden realizar determinadas acciones que repitan la

experiencia de abandono. Así, la indiferencia al otro, el hurto, las conductas agresivas, son frecuentes en los sujetos que han sobrellevado experiencias traumáticas (Retuerto, 2009).

Entre los factores subjetivos aparece la dificultad para expresar las emociones o necesidades que perciben (Sarmiento et al., 2009). Laursen y Marqués (s.f) mencionan que los adolescentes con características transgresoras tienen como particularidad que les suele resultar complejo expresar con palabras las emociones y en algunas ocasiones también pueden presentar dificultades para relatar su historia de vida, aunque este relato sea solo una descripción. Es en este punto donde suele observarse escasez de palabras para vehicular las emociones inherentes a su proceso de constitución subjetiva, no logrando entonces una adecuada tramitación psíquica de sus afectos. En lugar de la palabra como elemento privilegiado para la mencionada tramitación cobra preeminencia el accionar impulsivo.

Sin embargo, algunos autores coinciden a partir de su investigación en que no es posible hallar un perfil psicológico unívoco en el universo objeto del estudio.

8.6.2 FACTORES FAMILIARES

- **LA FAMILIA COMO FACTOR DE RIESGO**

Amezcu, Pichardo y Fernández (2002), citado en Desbrow et al. (2014), plantean que la familia del adolescente se ha convertido en lugar común a la hora de estudiar los factores de riesgo y protección. De hecho, parece firmemente establecido en la literatura el hecho de que una buena actitud y apoyo familiar ante los problemas del adolescente contribuyen de manera clara al desarrollo de conductas adaptativas y prosociales, de la misma manera que una familia disfuncional influiría de manera muy notable en el desarrollo de actividades delictivas precoces. Es decir que entre los factores interpersonales que podrían asociarse a la transgresión penal en adolescentes la familia cumple un papel importante.

En este sentido, de acuerdo con Garrido, Stangeland y Redondo (2006) la familia es el más importante de cuantos sistemas ejercen influencia en los niños y en su conducta. La criminología ha estudiado durante años la relación entre la manera de funcionamiento de la familia y la delincuencia de los hijos. Se han desarrollado una serie de investigaciones primero en Inglaterra y, más adelante, en Estados Unidos que destacan los factores mediadores que

responden a la pregunta: ¿la estructura y la dinámica familiar explica el comportamiento antisocial del hijo? Si es así ¿cómo afecta? (Tenenbeum, 2015).

En América Latina son varios los estudios empíricos que rompen con las prenociones románticas sobre la familia, al sostener que estas pueden llegar a constituir un entorno desfavorable para la administración de los cuidados. Por ejemplo, Azaola y Bergman (2009) advierten que hay un claro deterioro en las familias donde crecieron los delincuentes. Cada vez son mayores los índices de violencia, de consumo de alcohol y drogas, de abandono, de deserción escolar, de ingreso temprano a la economía informal y de pertenencia a núcleos familiares que cuentan con varios integrantes en prisión. En este sentido Labra (2011) plantea que en los adolescentes hay “un cúmulo de vivencias expulsivas dentro del núcleo familiar a partir de la cual se advierte cierta falla en el primer dispositivo de integración social” (p.36).

Existen diferentes teorías que explican la influencia de la familia en la conducta de los adolescentes. Rebellón (2002) destaca dos perspectivas. Por un lado, la teoría de la tensión, la cual está centrada en los conflictos familiares asociados al trauma y las situaciones estresantes y por otro lado la teoría del aprendizaje que resalta la capacidad que tienen las personas de ser influenciadas. Así también desde el funcionalismo parsoniano y algunos exponentes del control social se sostiene que la familia permite un control inmediato e íntimo sobre los niños y los adolescentes en el encuadre del hogar. Ninguna otra institución social es capaz de implementar el disciplinamiento a proximidad como la familia, razón por la cual es un agente privilegiado para evitar la desviación social. Desde este punto de vista, la justicia espera que la familia colabore en el cumplimiento de la medida y que, en el mejor de los casos, contribuya activamente a la reinserción social de los adolescentes. Sin embargo, y, por el contrario, una vasta literatura señala que en no pocas ocasiones las familias son un actor social perjudicial para el desarrollo de los niños y adolescentes (Tenenbeum, 2015).

Podríamos decir por lo tanto que la familia ha sido considerada como uno de los contextos de mayor influencia en el desarrollo del individuo, ya que la misma se entiende como el puente entre el sujeto y la sociedad, además en ella se establecen los primeros vínculos afectivos. De la funcionalidad, la solidez de la familia y de la relación que el niño y/o adolescente tenga con sus padres dependerá, en gran medida, la forma como el sujeto se relacionara con y en el contexto social más amplio. Es por esto que la comunidad científica ha sido clara y enfática en reconocer que en el contexto familiar se concentran muchos de los principales factores de riesgo de la conducta antisocial en adolescentes (Arce, 2004). En esta misma línea González (1998)

plantea que frecuentemente subyace un problema familiar en cada conducta problemática de un niño y/o adolescente, ya sea manifiesto o encubierto.

- **ESTRUCTURA FAMILIAR: TAMAÑO Y COMPOSICIÓN**

Según una investigación de Sarmiento et al. (2011), donde se analizan las representaciones que poseen adolescentes en conflicto con la ley penal sobre sí y las variables que pueden incitar o evitar el desarrollo de conductas adaptadas o desadaptadas, sostienen que las familias de estos adolescentes suelen presentarse del siguiente modo: el padre generalmente está ausente y la madre se encuentra con seis, siete u ocho niños a los cuales no puede brindarles los cuidados necesarios. La misma carece de una red familiar que la contenga y sostenga en su rol materno, al mismo tiempo que se encuentra subsumida en una situación de precariedad material y económica. No suelen encontrarse otros integrantes de la familia que mantengan un compromiso formal con los jóvenes y la dinámica familiar se relaciona en la mayoría de los casos con la disfuncionalidad en donde los cuidadores primarios no logran ejercer una contención normativa y/o emocional eficaz.

El tamaño de la familia, como el número de hermanos o la presencia de ambos padres en el hogar, se ha relacionado con un aumento de la probabilidad de ejercer conductas antisociales. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que el poder predictivo de estas variables depende o está en función de otras relativas al funcionamiento del hogar, como las prácticas de crianza o la calidad de las relaciones. Es decir, un mayor número de hijos conllevará un menor grado de supervisión, lo cual incidirá sobre la conducta problema, al igual que un hogar roto donde falta uno de los padres conlleva mayores conflictos (Pevalin et al., 2003). Por lo tanto, lo importante no es la cantidad de personas presentes en el núcleo familiar sino la calidad de las relaciones (Luengo et al., 2002).

- **RELACIONES FAMILIARES: ESTILOS PARENTALES DE CRIANZA**

Son numerosos los diferentes aspectos propios de la familia que guardan relación con la conducta delictiva, entre ellos se encuentra el estilo parental de crianza. Maccoby y Martin

(1983), citado en Simons (2009), a partir de dos dimensiones: exigencia y responsabilidad, desarrollan una clasificación de estos en: autoritario, indulgente, permisivo y autoritativo.

De acuerdo con los autores el estilo autoritario estaría fundamentado en el castigo y la amenaza, donde las normas se imponen por la fuerza, de forma que se prima la obediencia y no la comprensión del sentido de las reglas, es decir, se caracterizaría por un elevado control y un bajo apoyo. Se trata de padres con baja responsabilidad, pero con alta exigencia. En esta misma línea Vázquez González (2003) hace referencia a una “disciplina alternativa” por parte de los padres. Refiere con esta denominación a la disciplina que es aplicada de manera inconsecuente, lo cual lleva a la constante alternativa entre la gratificación y la frustración, es decir, son padres que alternan entre severidad y libertad sin una justificación válida. Esto produce en los jóvenes sentimientos de inseguridad y de frustración ya que no saben si por sus actos van a ser castigados o premiados. Este comportamiento puede observarse por ejemplo por la falta de pautas o reglas reconocibles acerca de lo que el niño puede o no hacer. Así mismo Hein et al. (2004) refieren que a un estilo parental hostil, crítico y punitivo tiene una influencia importante en la generación y mantención del comportamiento delictivo.

En cambio, por otra parte, se encuentran las familias permisivas en la cuales las normas y los límites a la conducta están difusos. El control parental es escaso, los padres son incapaces de disciplinar a sus hijos, les permiten hacer todo lo que quieran, con frecuencia se observa que mandan más que los padres. Es decir, estos últimos tienen un alto nivel de afecto hacia sus hijos, pero poco control, lo que permite dentro de las primeras etapas del desarrollo de los niños, la regulación de las emociones, garantizando así en un futuro la importancia de la felicidad. Los padres tienden a no ser exigentes, pero sí responsables, además son receptivos a las necesidades de sus hijos, lo que conlleva a obtener niños consentidos y malcriados. En la adolescencia tienden a ser más impulsivos y a esperar siempre salirse con la suya, ya que adquieren cierto grado de dependencia, pueden participar en el uso y consumo de drogas y alcohol (Ruiz de Melgen, 2009).

Siguiendo con lo propuesto por Maccoby y Martin (1983), citado en Simons (2009), el estilo de crianza indulgente refiere a padres con bajos niveles de responsabilidad y exigencia. En esta misma línea Arce (2004) plantea que los adolescentes que se desarrollan en familias con este estilo educativo o en ambientes agresivos y conflictivos donde la violencia hace parte de la dinámica relacional podrían incurrir con mayor facilidad en la vida delictiva. Por último, de acuerdo con la clasificación de los autores se encuentra el estilo de crianza autoritativo, el cual

se caracteriza por padres con altos niveles de exigencia y responsabilidad, se produce una combinación de control y apoyo. El control es firme, pero no rígido y las normas son comunicadas de un modo claro y razonado; se estimula la participación de los hijos en la toma de decisiones y se fomenta progresivamente la adquisición de la autonomía.

En diversos trabajos se ha puesto de relieve que la conducta problema se relaciona tanto con un estilo excesivamente permisivo como con patrones basados en la amenaza y la hostilidad (Shedler y Brook, 1990, citado en Luengo et al., 2002). El estilo “autoritativo” es el que se ha mostrado “protector” contra diversos tipos de conductas desadaptadas. El enfoque autoritario fomenta o bien la sumisión ansiosa o bien la hostilidad por parte del adolescente, dificultando en todo caso la asunción del autocontrol y el enfoque permisivo tampoco favorece el autocontrol, para que este se genere deben existir previamente un control externo y unos límites claros.

• **ESTRATEGIAS FAMILIARES DE CRIANZA Y EDUCACIÓN**

Verde (2006) hace referencia a la relación que existe entre el entorno socio familiar y el delito; señala que los estudios relacionados a la disciplina que se lleva a cabo en el seno familiar de delincuentes están descritas como duras, débiles, sin objetivos y con un pobre desarrollo de las habilidades sociales, también analiza los resultados de los estudios que se han llevado a cabo en torno a la familia de delincuentes, la relación de padres e hijos tanto en la etapa de la niñez, como en la adolescencia y etapas posteriores, analiza las dimensiones de la interacción familiar como lo es el afecto relacionado con la aceptación y calidez en las relaciones, paralelo al rechazo, la hostilidad, el control ya sea como demanda o restricción, la permisividad o la ausencia de demandas. En esta misma línea Henggeler (1989), citado en Garrido et al. (2006), se ha centrado en dos aspectos fundamentales de las transacciones familiares: el funcionamiento de las estrategias de control paterno y el funcionamiento del afecto en las familias.

• PRÁCTICAS EDUCATIVAS INADECUADAS

La dificultad de los padres para desarrollar expectativas claras en el comportamiento de sus hijos, la pobre supervisión parental hacia los niños y la disciplina excesivamente severa, permisiva o inconsistente, representan una constelación de pautas educativas familiares que predicen la posterior conducta antisocial (Gómez-Fraguela y Romero, 2003). Vázquez González (2003) plantea que podríamos pensar por lo tanto que uno de los factores de riesgo es la falta de supervisión o control de los padres respecto de sus hijos. El supervisar es entendido como el tener conocimiento de lo que hace el menor tanto dentro como fuera de la casa, para así poder ir modificando sus conductas en relación con las experiencias vividas, a las capacidades del joven, al grado de madurez, para que a la par del crecimiento logren adquirir diferentes responsabilidades, sin correr ningún tipo de riesgo o daño. Cuando la supervisión de los padres es escasa, la relación con la delincuencia es alta. Los padres desconocen el paradero de sus hijos durante el día, no hay comunicación respecto de dónde va, a qué hora vuelve, con quién está, quiénes son sus amigos, etc.

Scandroglio, Martínez, Martín y López (2002) también plantean que los factores familiares que predisponen a las transgresiones por parte de los jóvenes se relacionan con el apoyo y la supervisión parental. Siguiendo con esto, Canales (1993) refiere a que la gran mayoría de los actos ilícitos comienzan sólo a partir de la preadolescencia o incluso en la adolescencia, cuando los procesos afectivos y educativos de base ya se han completado, por lo que la familia en esta etapa desempeña un rol indirecto. La desestructuración e inestabilidad en los hogares, la presencia o ausencia discontinua de las figuras parentales, hace que falte apoyo y supervisión en los jóvenes. Cuando el estilo de educación parental no presenta un equilibrio entre soporte afectivo y control, se generan carencias o exceso de autoridad que pueden producir conductas transgresoras.

Por su parte Garrido et al. (2006) han analizado la relación existente entre estrategias familiares de control y conducta delictiva y han llegado a la conclusión que las familias de los adolescentes en conflicto con la ley penal suelen emplear estrategias de disciplina inefectivas, que no logran controlar las conductas de los jóvenes, ni antes de la realización de las conductas delictivas ni después de producirse las mismas. Los padres suelen intentar controlar las conductas antisociales mediante el uso frecuente del castigo, cuando su hijo se comporta violentamente estos suelen actuar mediante violencia también, pese a que comprueban reiteradamente que suele resultar poco efectivo, ya que muchos jóvenes aceleran su propia violencia a partir de la imitación de los padres. De acuerdo con Rutter, Giller y Hall (2000)

estos padres no logran hacer un seguimiento de sus hijos, de manera que no saben dónde están ni lo que hacen, sus órdenes son ambiguas y poco claras, las medidas disciplinarias son frecuentemente consecuencia de su propio estado de ánimo y no tanto por lo que ha hecho el niño y su estilo restrictivo muestra poca receptividad a las necesidades y sentimientos de los hijos. Esto puede observarse en un estudio de Garrido y Hein (2004) en el que encontraron que entre adolescentes chilenos que auto reportaban haber cometido robos y hurtos, se observa un bajo nivel de reacción familiar, la tendencia a justificar el hecho, la percepción de baja normatividad del contexto y haber sido víctima de negligencia parental, entre otros. Todos estos aspectos muestran un estilo de control y supervisión laxo que favorece los comportamientos de riesgo.

Por último, en conjunto las teorías criminológicas sugieren que una crianza ineficiente aumenta el riesgo de conductas problemáticas de los hijos, y más concretamente de implicación en conductas delictivas tanto en la adolescencia como en la edad adulta (Simons, 2009)

- **AUSENCIA DE LÍMITES Y LEY PATERNA**

Es muy frecuente encontrarnos en la actualidad con padres “asustados”, padres frágiles narcisísticamente, que no son capaces de incluir a sus hijos en una normativa que organice límites (externos e internos) con los que el niño pueda sentirse protegido y seguro (Monserrat Femenía y Muñoz Guillén, 2003). La paternidad y maternidad son hoy términos sumamente problemáticos. Nos encontramos con la ausencia, el abandono, la variación, la inversión de los roles en lo que respecta al padre y a la madre en lo concreto, lo que conlleva a una alteración en el cumplimiento de sus funciones. Entendemos a la función paterna como instancia normativizante para el sujeto y vehiculizadora de la ley, cuyo efecto en el aparato psíquico es construir la matriz de relaciones sociales y vinculares a partir de los modelos intrafamiliares. De aquí que tanto el comportamiento como el discurso mismo de la madre es el que hace canalizar a dicha función normativa del padre, estableciendo en la estructura familiar una diferenciación de lugares y roles, un ordenamiento simbólico que condiciona las posteriores relaciones del sujeto en su vida social. Para que el orden humano sea tal, no basta con la madre, el padre y el niño, hace falta un término decisivo que es la ley. Este término ordena las distintas funciones y es el que permite que de la cría nazca un hijo, encadenado en una genealogía (Miceli, Salguero, Sarmiento y Varela, 2005).

Los autores refieren a que se observa una marcada devaluación de la jerarquía de la figura del padre como agente de la ley, proliferando en su lugar por un lado padres violentos, autoritarios, ubicados en el lugar de ley, y por otro padres débiles, inconsistentes, padres incapaces de separar al hijo de la madre. Si el desempeño de la función paterna está en relación con la representación de la ley, consideramos que este detrimento de la función paterna no es sin consecuencias en la subjetividad del niño y en la interiorización de la ley y la norma. Luna (2001) plantea que en los jóvenes en conflicto con la Ley Penal habría algo de la Ley que falla, es decir, se evidencia un déficit de la inscripción del Nombre del Padre, dejando al sujeto en posición de objeto. En varias ocasiones y ante las múltiples carencias vivenciadas, estos jóvenes se encuentran marcados por el dolor y la desesperación más que por el deseo de los padres, llevando el estigma de la tragedia como forma de alcanzar su lugar en el mundo.

Duschatzky y Corea (2009) sostienen que la violencia como modo de relación aparece en condiciones de impotencia instituyente de la escuela y la familia, cuyos discursos de autoridad y el saber de padres y maestros parecen haber perdido potencia enunciativa. Es decir que cuando la ley simbólica -en tanto límite y posibilidad- no opera, el semejante no se configura, es así que la violencia con el otro, la violencia a modo de descarga o pulsión descontrolada es el índice de la incapacidad del dispositivo para instituir una subjetividad regulada por la ley simbólica. Por lo tanto, si la ley no opera como principio de interpelación, tampoco opera la percepción de su transgresión. Desde esta perspectiva, la violencia no es percibida como tal, en tanto no hay registro de un límite violado y en cuanto el otro no es percibido como un límite. De manera similar Le Bretón (2002), por su parte plantea que al igual que otras conductas, la violencia es un juego con los límites, una manera de chocar con el mundo ante la falta de un muro de contención que oficie de sostén y en busca de encontrar la distancia óptima para el vínculo social. Explica el autor que vivir “en el límite” prevalece desde el momento en que la sociedad ya no le brinda al individuo el tejido de sentido entre el mundo y él, dónde podía encontrar un lugar. El autor hace referencia a las conductas de riesgo como un intento de simbolizar un lugar dentro del colectivo, insertarse en el mundo, ir en busca de una legitimidad. Agrega que desde el psicoanálisis se considera que ante la falta de significados y de límites que la sociedad ya no le proporciona al adolescente, éste busca como forma de escape al sufrimiento, enfrenar al mundo físicamente a través del pasaje a la acción para encontrar referencias, para encontrar su lugar en el mundo. Las conductas de riesgo denuncian más que un deseo de morir, expresan a través del cuerpo la imposibilidad provisoria de existir, como muestra Le Breton (2002), tomando palabras de Nietzsche (1884) “Quería vivir, por eso debía morir”. (p. 24)

- **RELACIONES AFECTIVAS E INTERACCIÓN PADRE-HIJOS**

La calidad de las relaciones entre los padres y los hijos es fundamental. La interacción padres-hijos y el fuerte apego familiar han sido considerados habitualmente como factores que protegerían potencialmente a los hijos contra el desarrollo del comportamiento delictivo, Sin embargo, las pautas educativas erróneas y la presencia de vínculos afectivos débiles han sido típicamente relacionadas con un aumento del riesgo de los mismo (Catalano y Hawkins, 1997). De manera similar Garrido et al. (2006) refieren a que los niños que reciben buen afecto familiar tienen menor posibilidad de transgredir la ley y además se muestran mejor organizados en casa, se sienten emocionalmente vinculados al entorno, actúan adecuadamente en la escuela, valoran los logros académicos y a la vez, se protegen de las influencias negativas de sus posibles compañeros con conductas antisociales; En esta misma línea Hirshi (1960) refiere que los lazos y apego que los adolescentes sientan por sus progenitores o figuras que los sustituyan ejercen un efecto protector respecto a la relación con iguales delincuentes, al promover entre los adolescentes la evitación de estos para no desagradar a sus progenitores y perder su aprobación y afecto. Mientras que por otro lado quienes tienen malas relaciones afectivas con los padres son más propensas a una conducta delictiva.

Los déficits afectivos y los errores educativos son tanto más graves cuanto más grande es la falta de cariño y cuanto más pronto se manifiesten. La afectividad serena o la privación afectiva, la hostilidad o la indiferencia, la ausencia de unidad familiar, la ausencia de disciplina materna y paterna se asocian regularmente con un pronóstico sombrío (González, 1998). Además, la carencia afectiva, el no lograr resaltar conductas o cualidades positivas en los hijos provoca un deterioro en el desarrollo de personalidad, como también es negativo el exceso de protección y cuidado porque no permite autonomía ni madurez para asumir responsabilidades. Complacer al niño o niña ante el mínimo capricho o necesidad que exprese impedirá el desarrollo de una personalidad equilibrada (Vázquez González, 2003). Por último, Garrido et al. (2006) encontraron que el sentimiento de los adolescentes de pertenencia a la familia se relaciona negativamente con la conducta delictiva, existe una correlación inversa entre estos dos factores, cuanto mayor sea la integración de los jóvenes dentro de la propia familia, hay una menor probabilidad de delincuencia juvenil.

- **CARENCIA MATERNO - AFECTIVA**

El vínculo entre el niño y su madre determina un sentimiento de seguridad fundamental, a partir del cual el niño puede construir adecuadamente el sentimiento de su propia valía y la confianza en sí mismo. Sin ellos, el niño no podrá establecer relaciones afectivas de buena calidad con su entorno. Las carencias afectivas constituyen, de este modo, el primer factor predictivo de la futura asocialidad (Canales, 1993).

Numerosos autores refieren a las carencias y rupturas de la primera infancia. Para Winnicott (1998), por ejemplo, la tendencia antisocial es una conducta de reivindicación frente al sufrimiento y a la carencia. Esta tendencia se encuentra relacionada con la privación, es decir: la privación de algo bueno y positivo que el niño ha tenido y de lo que fue desposeído. Sólo por un tiempo el niño es capaz de mantener vivo el recuerdo de esa experiencia positiva. El autor plantea de esta manera, que el comportamiento antisocial interpela fundamentalmente al ambiente en que vive el niño, y expresa una esperanza de que éste, finalmente, sea capaz de tolerar sus conductas. De esta forma, el niño que roba no está buscando el objeto robado, sino que busca a esa madre que lo ha defraudado en la tarea de satisfacer las necesidades de su yo antes de que él fuera capaz de introyectarla y de mantener esa introyección. La busca con un sentimiento de frustración y con una marcada necesidad de encontrar autoridad paterna que ponga un límite en su conducta impulsiva, es decir es un pedido de auxilio en busca de control ejercido por personas fuertes, cariñosas y seguras.

Por su parte Bowlby (1973), citado en Marchiori (1999), relaciona la delincuencia con la privación materna-afectiva en edades tempranas. Así, la salud mental de todo sujeto va a depender de la calidad y cantidad del cuidado que los padres proporcionen al niño en los primeros años de vida. Es por ello que cuando el niño sufre de una privación materna-afectiva por carecer de una relación cálida y constante, lo predispone a responder de manera antisocial ante situaciones conflictivas posteriores. La privación tiene efectos adversos sobre el desarrollo entre los que se encuentran graves trastornos en la personalidad, aplanamiento afectivo, incapacidad de dar o recibir afecto y agresividad. Por lo tanto, el niño privado afectivamente se encuentra perturbado física, intelectual, emocional y socialmente

Podríamos decir por lo tanto que las funciones de la familia, como menciona Berenstein (1998) son dos, de sostén y de corte; la primera hace referencia al amparo, cuidado, y contención; la segunda a los límites, valores y normas establecidos desde la posición asimétrica de los miembros de la familia que ejercerán diferentes roles. Y en este sentido, Sarmiento et al.

(2011) establecen que la adaptación a las normas sociales forma parte del proceso evolutivo que se inicia en la primera infancia, siendo la calidad del vínculo paterno-materno filial uno de los requisitos fundamentales para un desarrollo psicoemocional adecuado.

- **CONFLICTOS FAMILIARES PRESENTES**

Los autores Barrón, Crabay, Bas Peña y Schiavoni (2010), elaboraron una caracterización sobre las familias de los adolescentes en conflicto con la ley penal de la ciudad de Córdoba, planteando que es frecuente hallar en las familias de estos adolescentes violentos o violentados, antecedentes de conducta violenta en otros integrantes del grupo, con procesos o cuadros psiquiátricos, antecedentes de alcoholismo, familias en etapa de desintegración o ya desintegradas. Otra situación habitual es la de madres adolescentes, con bajo nivel de escolaridad, con insuficiente soporte de pareja, familiar y social, sin olvidar los padres adolescentizados que no asumen su maternidad/paternidad. En estos procesos los adolescentes pueden jugar roles diferentes como receptores, generadores, espectadores o cómplices. De acuerdo con Azola y Bergman (2009) hay un claro deterioro en las familias donde crecieron estos jóvenes. Cada vez son mayores los índices de consumo de alcohol y drogas, de abandono, de deserción escolar, de ingreso temprano a la economía informal y de pertenencia a núcleos familiares que cuentan con varios integrantes en prisión.

Siguiendo con este planteo Sarmiento et al. (2011) señalan que la historia vital y familiar de los adolescentes está caracterizada por el maltrato, el abuso y necesidades psicoemocionales insatisfechas. Mencionan que las figuras parentales se relacionan con conductas de abandono, negligencia, falta de contención y relaciones interpersonales inestables, impredecibles y muchas veces patológicas. Los profesionales consignan que en la mayoría de los casos los cuidadores primarios no logran ejercer una contención normativa y/o emocional eficaz. En una investigación sobre la predicción de las conductas de los niños, realizada por Egeland, Yates, Appleyard y Van Dulmen (2002), concluyeron que el maltrato físico en la infancia, la negligencia emocional y la enajenación, predecía problemas de comportamiento en los primeros años de escuela y conllevaría a una conducta antisocial en la adolescencia. De acuerdo con el planteamiento de Serbin y Karp (2004) existiría una transferencia intergeneracional en la cual los niños agredidos presentarían secuelas que incluirían fracaso escolar, mayores conductas de

riesgo, embarazos adolescentes y pobreza familiar; estilos que estarían más relacionados con conductas agresivas y crueles hacia los demás, incluidos sus propios hijos.

El maltrato infantil aparece como uno de los principales factores de riesgo para el posterior desarrollo de conductas antisociales, los casos graves y crónicos de delincuencia juvenil a menudo corresponden a jóvenes que han presenciado actos violentos en el hogar. Esto puede observarse en el estudio de Widom (1989), quien consideró los índices de arrestos criminales por delitos violentos (asesinato, homicidio, violación, asalto y robo) de adultos que habían sufrido abusos o negligencias a partir de registros oficiales. Cuando los comparó con sujetos que no tenían historia de abuso previo, llegó a la conclusión de que aquellos adultos que habían sufrido abusos sexuales tenían una tendencia ligeramente mayor de comisión de delitos violentos. En relación con el maltrato psicológico, Glaser, Prior y Lynch (2001), informaron de una serie de problemas encontrados en niños maltratados emocionalmente, dentro de los cuales el comportamiento antisocial y/o delictivo estaba presente, a la vez que otros considerados como factores de riesgo de dichas conductas, como baja autoestima, ansiedad, bajo rendimiento académico, agresividad e inasistencia al colegio, entre otros. En esta misma línea Vázquez González (2003) plantea que, si se producen actitudes crueles, pasivas y negligentes de los padres con los hijos, estos podrían aprender que la violencia representa una medida eficaz para resolver conflictos y posteriormente utilizarla con dicho fin.

Por otra parte, el abandono de uno de los referentes familiares es una característica común en los adolescentes en conflicto con la ley penal y en la literatura criminológica internacional. Con frecuencia el padre abandona física y emocionalmente en la infancia a los hijos, además existe un abandono presencial de los progenitores por ausencia de comunicación, de confianza o de compartir tiempo entre los integrantes de la familia. Este es un asunto fundamental, ya que la comunicación y, sobre todo, el amor están asociados a la posibilidad de aplicar sobre los adolescentes un control informal. El abandono parental despierta los sentimientos de soledad y rencor de los adolescentes. Los padres dejan de supervisar a los hijos, así como de compartir tiempo de calidad con ellos porque su atención se dirige casi exclusivamente a las preocupaciones de pareja y materiales, además no se puede obviar el hecho de que el abandono de uno de los integrantes de la familia trae como correlato la disminución de los ingresos del hogar. La soledad en el hogar será entonces para los adolescentes el inicio de la búsqueda de otras redes sociales donde complementar su insatisfacción.

- **COMUNICACIÓN Y CLIMA FAMILIAR EN EL HOGAR**

Uno de los problemas familiares de frecuente mención, razón por la cual se puede aseverar que es un fenómeno estructural, es la falta de comunicación o la comunicación negativa entre los integrantes de la familia, los mensajes que se intentan transmitir se caracterizan por ser confusos y contradictorios. La comunicación está íntimamente asociada con la manifestación de amor, aspecto fundamental para desplegar un control informal sobre los hijos, así como una supervisión directa en un contexto no autoritario (Tenenbaum, 2016). La falta de comunicación con los padres y familiares “finca las bases para resentir posteriores rechazos en la adolescencia, originando un menoscabo que favorece la búsqueda de afecto, apoyo y orientación en grupos ajenos a la familia, disminuyéndose la cercanía con los padres” (Fernández, 2013, p. 71).

De acuerdo con Tenenbaum (2016) la comunicación está estrechamente ligada a la confianza en tanto basamento para revelar los problemas, las emociones, los secretos o cualquier otra intimidad. El autor se pregunta ¿Cómo se pierde esta confianza? La pregunta tiene varias aristas. De los padres a los adolescentes la confianza se pierde por dos vías, por un lado, cuando los adolescentes desobedecen la autoridad, incumplen con el deber ser y transgreden la moral: horarios, tener ciertas amistades, actividades deontológicas, hábitos axiológicamente distintos a los de la familia y por otra parte al enterarse de la infracción y detención, vivir el proceso judicial y, quizás, conocer otras prácticas ilegales y amorales (drogarse, alcoholizarse, etcétera). Sin embargo, la comunicación no solamente se socaba por el desajuste del comportamiento adolescente a las expectativas de sus padres, también viene dado de los adolescentes a los padres por los abandonos y por el clima familiar conflictivo del hogar.

Siguiendo con el planteo del autor Tenenbaum (2016) por clima familiar conflictivo se entiende la tensión y la violencia latente o explícita que experimentan directa o indirectamente quienes habitan en el hogar. De este modo, más allá de si los problemas involucran o no a los adolescentes, los conflictos del hogar hacen que la pertenencia y el “pasar tiempo” en ese espacio no sea la opción más agradable. Todo lo contrario, son hogares expulsivos dado que los adolescentes no encuentran allí un espacio de tranquilidad, comodidad y bienestar. En este esquema se invierten las funciones. Por un lado, el hogar, como espacio que idealmente debería fungir como refugio del ámbito de lo público, es el lugar de donde se intenta escapar parcialmente en cierto tramo temporal del día o totalmente; y al revés, la calle, la esquina, el parque, el deportivo y otros espacios de lo público pasan a ser el resguardo en donde esconderse

del hogar. La violencia física y simbólica, la desatención y la falta de entendimiento van configurando la salida del hogar como una reacción esperable ante un medioambiente hostil y se inicia la búsqueda por integrarse a otros ámbitos sociales donde recuperar u obtener lo que en el hogar no se ha encontrado. Por lo tanto, el pasaje del hogar familiar a la calle está mediado por la relación entre el abandono familiar, la falta de comunicación y confianza entre los integrantes del hogar, los conflictos familiares y el fortalecimiento de los lazos de amistad con las relaciones de pares de la calle. Todo ello conforma una combinación que orilla al adolescente al campo de la infracción.

- **ANTECEDENTES DE CONDUCTAS FAMILIARES DELICTIVAS**

La comisión de delitos por parte de los padres es un factor de riesgo para el ejercicio de conductas antisociales en sus hijos. El arresto de un familiar incrementa la probabilidad de que algún miembro de la familia de la siguiente generación transgreda la ley, así también tener hermanos que delinquen aumenta el riesgo de comportamiento violento (Loeber y Farrington, 2000). La relación entre experiencias delictivas familiares y la infracción adolescente puede leerse desde la perspectiva socioambiental y el labelling approach. En el primer caso, el hecho de que uno de los miembros de la familia cometa delitos tiene como consecuencia que haya mayor probabilidad de que otro de los integrantes de la familia haga lo mismo, a medida que se incrementan las posibilidades de socialización. Una segunda lectura puede realizarse desde el punto de vista de la teoría del etiquetamiento, en el sentido de que la estigmatización que genera la reacción del sistema en la persona que delinque se proyecta a las personas cercanas al desacreditado. Esta proyección se manifiesta de padres a hijos y no, o no tanto, de hijos a padres. En las dos lecturas, el hogar familiar es, como primer nivel de socialización y de proyección del estigma, un espacio fundamental para entender la reproducción generacional del delito (Tenenbaum, 2016).

Por su parte Bandura y Walters (1988) intentan explicar la conducta antisocial desde los principios de la “Teoría del Aprendizaje social”, la cual plantea que la influencia de la familia en la conducta de riesgo del adolescente se explica a partir de la importancia del aprendizaje observacional, modelado a imitación en los procesos de desarrollo psicosocial del ser humano, incluidos aquellos actos delictivos. Desde esta teoría se considera que los adolescentes aprenden diferentes conductas identificándose con otros significativos, tales como padres, iguales y profesores. Si la conducta es recompensada o si el comportamiento es muy valorado por el

grupo, se generan en el observador unas expectativas de obtener recompensas semejantes al llevar a cabo la conducta, pero cuando es castigado, el observador tenderá a devaluar tanto al modelo como al comportamiento. De manera similar Fernández Moujan (1986) plantea que la sociedad actual ha cambiado, como así también la nueva modalidad de transmisión de cultura, lo que hizo que la crisis de identidad recaiga en el adolescente, su familia, las instituciones y la sociedad, mientras que antes recaía solo en el adolescente. De acuerdo con el autor el Yo aprende que las crisis se pueden revertir y que las pérdidas son temporarias, lo que aumenta su confianza en el tiempo y la interacción, ayudándolo a esperar, pre-ver y discriminar. Así también el autor refiere a que, si el niño encuentra en su familia imágenes positivas y adecuadas donde identificarse, disminuyen las características conflictivas de los periodos críticos. Por lo que en el proceso se forman pseudo identidades como fachada por el vacío del yo, “identidades ideales”, que son normales en este periodo hasta que se logra la propia identidad. Mientras que es diferente si el niño introyecta o incorpora de su familia imágenes conflictivas, negativas, destructivas y perversas, ya que en el momento de autodefinición necesita negar sectores del yo por lo persecutorio de las identificaciones, perdiendo así la función elaborativa y primando la evacuativa. En estos casos se suele observar delincuencia o desadaptación juvenil, en los cuales es más fácil para los sujetos, obtener una identidad negativa que luchar por una aceptada socialmente, ya que sería a través de los medios internos del paciente.

Otra de las teorías que intenta explicar la trasgresión de los adolescentes es la teoría de la asociación diferencial o de los contactos diferenciales de Sutherland (1947), la cual se basa en la hipótesis de que el comportamiento desviado o criminal, al igual que el comportamiento normal o social, es aprendido y no innato. Las personas (y en mayor medida los jóvenes cuyo carácter se encuentra todavía en un proceso de formación) al vivir en sociedad se relacionan continuamente con otras personas, pudiendo convivir y relacionarse más a menudo con personas que respetan las leyes o, por el contrario, con personas cuyo comportamiento no respeta las leyes y fomenta las conductas delictivas. La conclusión a la que llega el autor es que una persona se vuelve delincuente o tendrá mayores posibilidades de delinquir cuando las actitudes positivas frente al comportamiento desviado superan cuantitativamente a los juicios negativos, esto es, porque ha aprendido a definir con más frecuencia una situación en términos de violación de la ley que en términos de respeto a la misma. De acuerdo con el autor el comportamiento se halla completamente modelado, en un proceso que atraviesa todas las biografías, por las experiencias adquiridas mediante procesos de culturización permanentes. Por lo tanto, la conducta criminal forma parte de ese proceso de aprendizaje continuo, donde el

infractor aprende modos de vida, estrategias, códigos, y técnicas para desarrollar sus cometidos. Este aprendizaje, en una sociedad plural y diversa, se produce de manera simultánea al aprendizaje que otros individuos hacen y que los define en favor del debido cumplimiento de las normas o de su indiferencia con relación a las mismas. Todas las conductas se aprenden de sus semejantes, ya sean conductas positivas, como las negativas en relación a la convivencia en sociedad.

La ausencia de preocupación o intervención por parte de los padres cuando el niño se encuentra en situaciones de riesgo o peligro podría ser otro de los factores que favorece la aparición de una conducta delictiva.

8.6.3 FACTORES LIGADOS AL GRUPO DE PARES

De acuerdo con Vázquez González (2003) el grupo de amigos es otro de los factores a tener en cuenta, es fundamental ya que el poseer amistades que realizan con bastante frecuencia conductas desviadas, como por ejemplo el beber alcohol, consumir drogas, abandonar o ausentarse al colegio, como así también conductas delictivas, se termina por convertir en un factor de riesgo para ese joven, debido a que intentará adoptar estos comportamientos para no sentirse rechazado por el grupo. Carrasco y Henríquez(s/f), citado en Cárdenas Paredes (2012), proponen que el formar parte de grupos o bandas ofrece compañía y permite conformar alianzas, desarrollando un sentido de pertenencia y pudiendo, a partir de ser miembro, defenderse de situaciones de riesgo.

Cohen (1994) expresa que los adolescentes, en parte, consolidan sus relaciones de pares por oposición a sus relaciones familiares. Lo que no encuentran con unas personas lo buscan en otras, por ejemplo: afecto, admiración, autoridad, etcétera. Siguiendo esta línea Flores (2018) plantea que los jóvenes pueden ser inducidos más fácilmente a adoptar comportamientos antisociales y desviados, en muchas ocasiones por falta de modelos positivos en la familia y tienen la necesidad de pertenencia de ser parte de un grupo o una banda, porque no se sienten parte de una familia por la disfuncionalidad de la misma. En relación con esto Duschatzky y Corea (2009) sostienen la hipótesis de que frente a la ineficacia simbólica de la familia como modelo tradicional se configura como posibilidad emergente la fraternidad o la relación con los pares. Es decir que no advendría una nueva institución frente a otra, sino que el grupo de pares

tendría en estos casos una capacidad simbólica de protección más fuerte que los familiares. Es así que la familia como "marco" parece perder relevancia para estos jóvenes, cediéndole lugar al grupo, el cual estructura la experiencia del sujeto a través de códigos y valoraciones. Dentro del grupo, la lógica de la autoridad instalada no se puede pensar desde los parámetros paternos filiales, dado que la ley no es la ley del padre, la que socializa en una matriz cultural civilizatoria, la que en consecuencia habilita la entrada al mundo y a la interacción con los otros. Los autores plantean que los referentes identificatorios son sus pares y, por lo tanto, las reglas que rigen sus comportamientos están elaboradas a partir de las demandas de cada situación, las valoraciones o moralidades se configuran en relación con los próximos, legitimándose en la frontera del grupo. De este modo, es el grupo el que confiere el nombre a sus miembros.

Los rasgos de identidad en los varones que formaron parte del estudio llevado a cabo por Duschatzky y Corea (2009) resultaron ser el aguante, el zafe y las lealtades, mientras que sus prácticas tienen lugar en el límite y el riesgo. La amenaza de cárcel y de muerte por robo o por drogas es un rasgo decisivo de esta subjetividad que no tiene en las figuras adultas de la familia o la escuela ningún referente; por el contrario, se alude a tales figuras mediante la agresión, la injuria y a veces, mediante una expresión que oscila entre la queja y el reclamo de que no son escuchados. En este sentido los grupos de pares de adolescentes tienen contornos difusos y aleatorios más que rígidamente organizados, y no presentan diferencias según las características de sus familias comparados con aquellos que no pertenecen a estos grupos. Ellos expresan, más bien, una sociabilidad adolescente ligada al espacio de la calle, que se expresa en estos grupos informales, sin jerarquías ritualizadas ni formas de dominación particular. Los actos que los incriminan obedecen la mayor parte de las veces al ejercicio de ritos iniciáticos, a demostraciones de coraje o simplemente lúdicas, y a la adquisición de bienes de consumo que sus padres no pueden ofrecerle (Canales, 2005).

Por otra parte, para explicar la delincuencia juvenil llevada a cabo en bandas Cohen (1994), citado en Cid Moline (2001), propone la teoría de la Subcultura delictivas, la cual expone que dentro un grupo social existen subgrupos, los cuales se identifican con algunos valores fundamentales, pero que, a su vez, se distinguen del mismo por poseer valores y aspectos particulares. Según Cloward-Olhin(s/f), citado en Cid Moliné (2001):

Quando este subgrupo se premia con reconocimiento o por lo menos, se justifica o se excusa lo que el resto del grupo desapueba, condena, o rechaza considerando que debe ser castigado, entonces a este subgrupo se lo denomina subcultura delictiva. (p.151)

Esta teoría se fundamenta en dos posturas criminológicas: la asociación diferencial y la anomia. Respecto de la primera, se toma la idea de que el fenómeno de la delincuencia es una consecuencia de un proceso de influencia continua de los valores culturales sobre la persona; y de la teoría de la anomia, se extrae el hecho de considerar que las subculturas se originan entre jóvenes de clase baja como respuesta a diferentes problemas de frustración (Cid Moliné, 2001).

Siguiendo esta misma línea Garrido, Stangeland y Redondo (2006), plantean que en lo que respecta a las teorías subculturales, los individuos que pertenecen a clases sociales bajas se enfrentan a divergencias existentes entre las aspiraciones sociales y aquellos recursos con los que disponen para lograrlas. El desajuste entre los fines y los medios termina por generar estados emocionales de tensión y disconformidad respecto de las normas sociales. El detonante más importante en lo que se entiende por conducta delictiva es entonces, la unión de los jóvenes en grupos subculturales o en pandillas, que rechazan los medios sociales establecidos y establecen nuevos medios u objetivos.

Por último, la apelación a las malas juntas se convierte en lo que en Psicología Social se denomina una explicación folk o popular, tanto por parte de los jóvenes como de sus padres, para dar cuenta del porqué de la trasgresión. Si se deja de lado que tal explicación busca excluir al propio adolescente de dicha configuración, en el sentido de que él no formaría parte de la mala junta, la explicación podría ser correcta: es muy razonable postular que con un grupo de amigos que reprueben el delito, el joven no delinquiría. De hecho, en la investigación realizada por los autores muchos de los jóvenes expresaban espontáneamente el deseo de cambiar de barrio para tener otros amigos (Cosacov y Crocchia, 2007).

- **CONSUMO DE SUSTANCIAS**

En los últimos años se ha incrementado el interés por el estudio de los factores que llevan a los jóvenes a incurrir en conductas delictivas. Entre ellos, se ha identificado que el consumo de drogas es uno de los factores principales. En este sentido, si bien es cierto que no existe una relación causal entre ambas variables al respecto, se sabe que las personas que consumen drogas ilegales son más propensas que otras a cometer actos que quebrantan la ley (San Juan, Ocariz y Germán, 2009).

Durante la adolescencia se suele experimentar con una gran variedad de drogas legales, ilegales o controladas. El consumo de drogas se asocia a una amplia gama de variables

individuales y contextuales de riesgo. La investigación llevada a cabo por el autor ha asociado esto con antecedentes como: problemas de adaptación a la escuela, una pobre relación con los padres, el consumo de drogas de los padres o de los pares, entre otros. (Hein, 2004). De manera similar Klee, Carlson, Radley, Thinner y Westbrook (2011) hallaron como principales argumentos de consumo en grupo, aquellos motivados por la ausencia de normas y límites en el hogar sobre la tenencia y el uso de drogas y la nula prevención sobre estas. Además, se han observado otros factores de riesgo, como la disponibilidad y accesibilidad a las sustancias, o la falta de información (Espada, Méndez, Griffin y Botvin, 2003).

Las drogas se han convertido en un símbolo representativo de las bandas o grupos de jóvenes, cumpliendo una función importante en lo que se entiende por proceso de socialización y formación de grupos. Además, “los aspectos de búsqueda de placer, el juego, el escape de la realidad, la activación fisiológica y la confianza, se plantean como efectos deseados de consumo por parte de los niños” (Cárdenas Paredes, 2012, p. 51).

En esta misma línea Cárdenas Paredes (2012) realizó un estudio descriptivo en el que los resultados arrojados permitieron ver que el consumo de drogas comenzaba a edades tempranas, y que el mismo se relacionaba con comportamientos ligados a la imitación, curiosidad y a la presión ejercida por los grupos de pares, y que tenían acceso a ella mediante amigos, familiares o en establecimientos comerciales.

De acuerdo con Barrón (2010), algunos de los factores que promueven las conductas adictivas son el quiebre de normas y límites, la sobreoferta de sustancias, y la promesa de un mundo deslumbrante. Un desafío para los jóvenes de hoy es poder decir “no” en la situación adecuada, el momento oportuno y con el grupo de pares. Se considera al consumo de sustancias como una respuesta a las necesidades no satisfechas de cada persona o grupo para encubrir una falta, buscando de esta manera y de forma ilusoria, un reemplazo de aquella. El aislamiento y la fragmentación social, en un contexto con grandes problemas en la salud, educación y la inserción laboral de los adolescentes, incitan de manera directa o indirecta a las adicciones en sujetos que aguardan, ilusoriamente, una desconexión con el mundo, evitando sentir su realidad externa e interna.

En relación con lo planteado Duschatzky y Corea (2009) afirman que el consumo es algo más que una adicción, ya que es una práctica que se enlaza en una cadena de experiencias. Es el "lugar" donde las emociones se desbordan (agresión, dolor, angustia, rabia, impotencia) y al

mismo tiempo se despiertan (coraje, control del miedo). Además, conforma una forma de socialidad, un modo de estar con los otros.

Por último, Vázquez González (2003) distingue, la delincuencia funcional y la inducida. La primera da cuenta de comportamientos delictivos llevados a cabo por el joven adicto que los comete para poder obtener medios económicos que le permitan conseguir más droga; diferenciándose de la inducida, en donde el joven ha consumido drogas y en consecuencia a los efectos de las mismas, aumentan las probabilidades de que se cometan comportamientos desviados o delictivos.

• TIEMPO LIBRE Y LUGARES DE ESPARCIMIENTO

Previtali (2011) en su estudio hace referencia al tiempo libre y los lugares de esparcimiento. La autora considera que en los jóvenes se presenta una desafiliación respecto de la escuela y el trabajo, lo cual no significa necesariamente el abandono de estos espacios, sino que cobran mayor significación otros espacios de sociabilidad con pares como son: los bailes de cuarteto, los partidos de fútbol, las reuniones en la esquina, entre otros. En estos espacios, se ponen en juego distintos mecanismos de regulación y control forjando identidades que se enlazan a dichas prácticas y proponen al mismo tiempo sus propias regulaciones de los cuerpos y los espacios.

Sin lugar a duda el lugar por excelencia al que los adolescentes se dirigen podría definirse como “la calle”, considerándola como un espacio exterior a la escuela y al hogar, que aparece como espacio de liberación y de goce; sin medidas ni reglas que obliguen a aprender, a producir o a obedecer, apareciendo como un sitio liberado en el que eventualmente se da la aventura (Urresti, 2002). Siguiendo con esta idea Cohen (1994) plantea que es el espacio inmediato a la salida del hogar, si es que no hay otras redes de apoyo familiar. En la calle están los amigos y conocidos, muchos de ellos con historias parecidas por lo que los adolescentes sustituyen un espacio de conflicto por otro que, en principio, es de bienestar.

Instituciones como la familia, la escuela, el barrio o la comunidad local, se han debilitado como instancias de mediación y de protección de los niños, con lo cual, pasan a ocupar este lugar el grupo de pares y la calle (Ponce, 2014). Esta última se convierte en un espacio vital donde el adolescente recibe entre el 70 y el 80% de la cultura que modela y determina su conducta, es donde aprenden a resolver los conflictos, donde adquieren una identidad, un status dentro de un grupo (Gervilla, Galanta y Martín, 2000).

En la calle (la esquina, la plaza, el parque, el muro, el cordón, el campito abandonado y otros espacios) los adolescentes encuentran relaciones sociales con experiencias, intereses y valores “subterráneos” (excitación, aventura, novedad, amenaza, etcétera) que comparten. Pero si bien es en este espacio donde los jóvenes satisfacen intereses y afectos que no obtienen en sus hogares familiares, habitar la calle acarrea otros factores de riesgo que aumentan la exposición de los adolescentes a fenómenos problemáticos (consumo desmedido de etílicos, consumo problemático de sustancias psicoactivas, riñas, conflictos vecinales, manipulación por parte de adultos, ociosidad, detenciones policiales arbitrarias, entre otras cosas) (Matza y Sykes, 1961).

Por otra parte, Previtali (2011) refiere que las posibilidades o restricciones que los jóvenes encuentran a la hora de elegir puntos de encuentro, lugares para ocupar y forjar vínculos se configuran en base a relaciones interpersonales que entablan con agentes policiales, que controlan circulando la zona. El hecho de que el policía te conozca puede ser un factor que, según la contextualización y la situación, puede jugar a favor o en contra del derecho de un joven a circular por determinados espacios.

8.6.4 FACTORES SOCIOEDUCATIVOS

En cuanto a los factores socioeducativos Vázquez González (2003) plantea que es la escuela la que cumple, al igual que la familia, un rol de agente socializador, en donde se les enseña a los niños a adoptar comportamientos socialmente aceptados. La escuela socializa al individuo de acuerdo con los valores establecidos en la sociedad, estimulando muchas veces, sentidos de individualismo y competitividad, cuando el niño se ve superado por los mismos, comienza a adoptar actitudes como la indiferencia, la violencia y la falta de respeto por el otro y por los objetos.

En los últimos años se ha dado una caída de las instituciones especialmente en las zonas carenciadas donde el sistema educativo no está pensado para los niños que allí concurren, ya que pasan de repitentes a expulsados, se los cataloga en los legajos escolares como “problemáticos” y son los mismos que luego serán “adolescente” judicializables. Es decir que la escuela no puede reconocer sus méritos, además de las limitaciones (Martin, 2006). En esta misma línea Vázquez González (2003) plantea que la segregación escolar produce un etiquetamiento por parte de los maestros y los demás compañeros que lleva a su vez a que la escuela comience a seleccionar un pequeño grupo de niños a los que considera desadaptados, creando desde tan temprana edad un etiquetamiento social, del que les será difícil salir.

Por otra parte, la labor educativa se ve dificultada actualmente por la falta de normas precisas desde el entorno social, la carencia de figuras representativas para el adolescente, junto a una crisis de la autoridad en las estructuras familiares, escolares y sociales (Barrón, 2010). Martin (2006) expresa que la norma no tiene para quien la infringe el mismo sentido que para aquellos a quienes estas sirven de contención y transformación;

Según Barrón (2010), la escuela es el espacio donde los jóvenes desarrollan sus primeras relaciones sociales con sus pares, comenzando de este modo a ser parte de un grupo, en el cual, el consumo de sustancias es generalmente una forma de pertenencia. Así, la institución puede intervenir de forma negativa, es decir, como un factor de riesgo en donde la negación, la falta de programas específicos y de promoción de habilidades para la vida, también contribuyen a fomentar la expansión de esta problemática. Aunque, por otro lado, puede influir de forma positiva por medio de la contención y de la educación. Por lo que antes de la práctica infractora, está la capacidad o incapacidad del sistema social de retener y conducir las biografías juveniles a través de las redes institucionales para ello dispuestas, entre las que destacan de modo básico, la educación (Canales, 2005).

Barrón (2010) trabajo con una muestra de adolescentes escolarizados y no escolarizados en la ciudad de Córdoba, y en su artículo explica cómo el incremento de la violencia y su magnitud tienen efectos destructivos sobre quienes se encuentran en mayor desventaja y vulnerabilidad. El autor parte de la premisa de que la ausencia de apoyo social (familia, escuela, Estado) aumenta las posibilidades de violencia entre los adolescentes.

• DESERCIÓN Y FRACASO ESCOLAR

Los problemas en el rendimiento escolar o los problemas educativos han demostrado sistemáticamente ser una de las características prevalentes en los delinquentes adolescentes violentos, así también la inasistencia escolar contribuye a facilitar el paso a la delincuencia debido a que proporciona tiempo y oportunidades adicionales para conductas inadecuadas, como por ejemplo la conducta antisocial (Farrington, 1995). En este sentido, Maguin y Loeber (1996), citado en Vázquez González (2003), manifiestan que un pobre rendimiento académico se relaciona no solo con el comienzo y la prevalencia de la delincuencia, sino también con la escalada en la frecuencia y en la gravedad de las ofensas.

Dolto (2008) expresa que el fracaso escolar se ha extendido desde hace unos años y afirma que “un porcentaje notable de adolescentes no prosigue sus estudios más allá de la escolaridad

obligatoria, o abandona el sistema uno o dos años más tarde sin la menor cualificación” (p.149), siendo los más afectados aquellos jóvenes de clases sociales menos favorecidas. En esta misma línea Nieto Morales (2011) plantea que el fracaso escolar y las acciones de riesgo son dos situaciones que se alimentan mutuamente en un contexto social vulnerable. El autor explica que los adolescentes pueden encontrarse en un círculo vicioso que se inicia con el retraso escolar, seguido del aburrimiento, expulsiones, fracaso y finalmente el abandono definitivo por parte del alumno ya sea voluntaria o forzosamente. Dicha situación se agrava aún más si se le suma la relación con otros adolescentes en similares circunstancias de ociosidad y el comienzo de consumo de sustancias.

Por otra parte, en la entrevista realizada a Bleichmar por Pavón (1999), la autora hace referencia a la deserción escolar en los jóvenes transgresores, plantea que es resultante de la caída de la expectativa de que podrían tener una vida mejor en el futuro. Se piensa que los niños “se hacen delincuentes” porque no van a la escuela y andan en la calle. Se pierde de vista que esos niños han perdido toda esperanza de que la escolaridad cambie su situación de existencia y lo más grave de ello es que sus padres la perdieron primero, antes de que estos niños nacieran, y forman parte de la oleada de marginación que la economía actual arroja. No es la pobreza la que genera la deserción escolar sino:

La miseria irredenta y sin esperanza, aunque también hay que tener en cuenta el hecho de que los seres humanos no sólo actúan motivados por las circunstancias presentes sino por una compleja combinación de experiencias pasadas y de expectativas futuras que modelizan el presente. (p. 2)

En este sentido Urresti (2000), considera que hoy en día la escuela no se asocia automáticamente con el ascenso social, sino que se la ve como una condición básica, necesaria, aunque no suficiente, para la reproducción del lugar social ocupado por la familia de origen. En base a esto, señala que no es casual que la escuela esté sufriendo el parcial abandono de los sectores populares y de los sectores medios, ya que fue para ellos para quienes representó una vía de mejora social, hoy obstruida.

Por último Barrón (2010) propone que para evitar que el joven caiga en conductas destructivas hacia el medio o hacia sí mismo los responsables de su educación, tanto la familia como la escuela y el Estado, deben trabajar con la finalidad de formarlos de tal manera que les permita incrementar el sentido de pertenencia e identidad, fortalecer vínculos saludables y sus posibilidades de realización a través de un proyecto de vida factible, “en un ambiente de

seguridad, respeto, comprensión, y estímulo que facilite tanto el desarrollo de lo vivencial, como lo reflexivo, crítico y el sentido de responsabilidad, en un marco de libertad y compromiso” (p. 35).

8.6.5 FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES

Hein et al. (2004) plantean que actualmente no hay duda de que el comportamiento delictivo juvenil se ve influenciado por una larga lista de variables socioeconómicas. Entre éstas se encuentran: Desventajas socioeconómicas, desempleo juvenil y vivir en condiciones de pobreza. Los autores plantean que la pobreza juega un rol en el desarrollo del comportamiento delictivo en la juventud, aunque no queda claro de qué forma la pobreza actúa como elemento que favorece el desarrollo de comportamientos de riesgo. Su influencia pareciera ser preferentemente indirecta, ya que actúa sobre la familia, la que, al sufrir de situaciones de marginalidad o pobreza, se ve expuesta a desarrollar problemas como depresión familiar, conflicto, hostilidad parental y desorganización de funciones familiares. Esto se traduciría en un deterioro de su capacidad de brindar apoyo y supervisión de las actividades del niño. De esta manera, el desarrollo de los adolescentes se ve impactado por la naturaleza de los eventos estresantes a los que se encuentra sometida la familia, sus recursos, y estrategias de enfrentamiento.

Siguiendo con este planteo, Tenenbeum (2015) manifiesta que la precariedad laboral de los responsables del cuidado incide negativamente en la predisposición psíquica (las preocupaciones económicas y laborales consumen prácticamente toda la atención de los padres) y la disposición temporal (largas jornadas de trabajo para obtener ingresos mínimos -suficientes o no- para mantener el hogar) para el cuidado familiar inmaterial. Es decir, los bajos ingresos económicos se correlacionan con un cúmulo de carencias de otro orden, entre las cuales estarían: menos supervisión de tareas escolares, más horas de calle, menos acceso a libros y ordenadores, más familias rotas o desestructuradas, más violencia en el hogar, menos responsabilidad paterna y más autoritarismo, menos seguridad policial en los barrios, peores escuelas, menos recursos de ocio controlado, entornos más ruidosos y contaminados y peor salud. Podríamos decir por lo tanto de acuerdo con Evans (2004), citado en Iglesias (2016), que la presión económica afecta a la conducta antisocial, pero indirectamente, ya que estaría

mediada por la depresión de algún progenitor, conflicto matrimonial u hostilidad de los progenitores.

Por otra parte, las familias de los adolescentes en conflicto con la ley penal al tener un bajo poder adquisitivo se ven obligados, tanto los padres como los hijos, a buscar maneras para poder incrementar su ingreso. Es el robo quien, en muchos casos, es considerado como la única opción para sobrellevar los problemas económicos. Además, estas necesidades económicas llevan en algunas ocasiones a situaciones de absentismo escolar, ya que el menor tiene la necesidad de cuidar a sus hermanos o ayudar a los progenitores en el trabajo. Las actividades más comunes que realizan son la búsqueda y clasificación de basura, salidas en carrito, carga en barracas, en mercados o en el puerto, changas en trabajos de construcción o de forma informal, venta de artículos en ómnibus, limpieza de parabrisas en la calle, cría de animales y changas en la feria (Cohen, 2008).

Retomando la influencia de la pobreza en el comportamiento delictivo, Ponce (2014) plantea que está en sí misma no es un factor determinante de la delincuencia juvenil. Sí puede serlo el mal ambiente social que conlleva: dificultad en las relaciones sociales, en el acceso a la educación y a los servicios asistenciales, en la transmisión de valores; carencia de viviendas con condiciones de habitabilidad aceptables. A esto habría que añadir, en los países industrializados, la sociedad consumista que provoca el que los menores, carentes de medios económicos, deseen conseguir los bienes ansiados, aunque sea por medios ilícitos.

La mayoría de las teorías sociológicas sobre los factores determinantes de la delincuencia tienen como punto de partida el que la mayoría de los delincuentes proceden de un medio socialmente desfavorecido (Rutter y Giller, 1983). Mayor y Urra (1991) señalan que existe una relación significativa entre la emisión de conductas antisociales y las clases sociales más bajas. Sin embargo, la interpretación de estos datos es bastante compleja, posiblemente debido a la asociación que existe entre estas clases sociales y otras variables como el tamaño de la familia, el hacinamiento y/o la poca atención prestada a los niños, que constituyen otros factores de riesgo. Cuando el efecto de estos factores ha sido controlado, se ha visto como la clase social muestra poca o ninguna relación con la conducta antisocial

Por lo que en el tema de la pobreza y la relación con la delincuencia, debe tenerse en cuenta el nivel socioeconómico, este hace referencia a la formación, el empleo y la posición en la sociedad, no solo al nivel económico del sujeto, sino también social y participativo, lo que tiene que ver con la exclusión social y el riesgo relacionado con conductas delictivas, encontrándose componentes como los amigos, el consumo de drogas, la impulsividad y un bajo autocontrol,

lo que no permite establecer una relación directa entre pobreza y delincuencia (Acosta y Perez, 2019).

- **DESEMPLEO**

La relación entre el trabajo y el delito es bastante compleja, pero existe, esto es debido a que el trabajo aporta a los adolescentes los recursos económicos que la sociedad les va a exigir para que puedan acceder a los bienes y servicios que precisan para subsistir, motivo por el que los jóvenes que tienen grandes dificultades para acceder al mercado laboral y, como consecuencia de ello, una gran escasez de oportunidades económicas pueden verse inmersos en una vorágine muy peligrosa que puede contribuir a acelerar su inicio en el mundo de la delincuencia. La comisión de delitos dependerá de las oportunidades de trabajo y de las condiciones sociales e individuales de los sujetos (Bushway y Reuter, 1997, citado en Fernández Campoy, 2008).

En este sentido la “desaparición del trabajo” o más precisamente la desaparición de los puestos de trabajo no cualificados, especialmente asociada a otros factores de riesgo, como logros educativos bajos y una escasez (o no existencia) de servicios sociales, es una condición extremadamente peligrosa para los jóvenes marginados, quienes optan fácilmente por actividades ilícitas para generar ingreso (Wilson, 1997). En esta misma línea Flores (2018) plantea que se reconoce una relación positiva entre el desempleo y la delincuencia. Este mecanismo se daría a través de la ausencia de oportunidades de empleo legal que impulsaría a muchas personas (sobre todo, hombres jóvenes) a dedicarse a actividades ilegales que les reportarían mayores ganancias. El desempleo refleja el costo de oportunidad de las actividades ilegales, por lo que incentivaría a los individuos a cometer delitos.

- **DESIGUALDAD**

Desde un punto de vista económico, podemos observar que las diferencias sociales y el desinterés de la sociedad y del estado de cierta manera institucionalizan y normalizan la inclinación de niños y adolescentes hacia el mundo de la infracción, por falta de oportunidades, o la razón que se observe. La carencia de condiciones igualitarias, el incumplimiento de la

constitución, la cual es netamente retórica y no es contrastable con la realidad práctica, hacen que los barrios urbano-marginales, se genere un fermento de rebeldía, por las diferencias socioeconómicas. Es decir, la brecha económica, y la falta de acceso a los indicadores de calidad de vida conllevan a conductas infractoras en niños y adolescentes (Flores, 2018).

La autora plantea que el panorama económico se muestra denso en lo que respecta a la desigualdad de oportunidades entre las regiones del país porque existen lugares inaccesibles en donde carecen de los sistemas básicos de atención. La falta de empleo y de accesibilidad a los recursos básicos genera mayor desigualdad en la que los jóvenes pueden comparar su nivel de vida con otros de mejores niveles socioeconómicos, logrando una frustración por no tener un nivel económico deseable.

En este sentido el factor económico de los jóvenes infiere de manera negativa en ellos, motivando que se conviertan en futuros infractores, ya que, los mismos presentan bajos niveles económicos, que no les permite adquirir los productos de primera necesidad, aunado a esto se presenta la escasez de empleos de calidad para los jóvenes teniendo como resultado que los mismos no puedan generar ingresos suficientes, generando una marcada diferencia en los estratos sociales.

Esto podría explicarse a partir de la teoría de la anomia de Merton (1980) quien para entender el fenómeno de la desviación social refiere a una posible contradicción entre estructura social y cultura. A través de la cultura, se propone al sujeto determinadas metas que constituyen motivaciones fundamentales de su comportamiento; y en paralelo, proporciona los modelos de comportamientos institucionalizados para conseguir tales metas. Sin embargo, la estructura económico-social ofrece grados diferenciados, especialmente por pertenencia a estratos sociales, para acceder a los medios legítimos que permiten alcanzar las metas. Esto lleva a que gran parte de la población experimente sentimientos de tensión, ansiedad, depresión y estrés que los lleva a la necesidad de acudir a medios ilícitos para alcanzar las metas.

Por último, Gelles y Cavanaugh (2004) señalan que la situación económica y las desigualdades son dos de los factores sociales más importantes vinculados con la violencia por varias razones. En primer lugar, por ser un poderoso estresor vital. En segundo lugar, por correlacionar con otra serie de estresores vitales como pueden ser el desempleo, la enfermedad, la carencia de una vivienda digna, la falta de asistencia sanitaria, factores que se agravan si además viven en vecindarios con un alto grado de delincuencia. Y, en tercer lugar, porque puede influir a nivel psicológico, una persona que se encuentra en una situación de privación como

es la pobreza, puede generar sentimientos de vergüenza e inferioridad que potencien aún más la aparición de la conducta antisocial.

8.6.6 FACTORES SOCIALES Y SOCIOCOMUNITARIOS

En relación con los factores de riesgo social –comunitario Hein et al. (2004) plantean que en el estudio de la conformación de áreas de alta criminalidad se ha observado que hay ciertas características del área de residencia que son influyentes en el desarrollo del comportamiento delictivo juvenil. La importancia de esto se debe a que se ha descrito que jóvenes que abandonan áreas de alta concentración de delitos, reducen la frecuencia de comportamientos infractores de ley, pese a que se mantienen constantes otros factores de riesgo. Las áreas de alto crimen impactan en el desarrollo de niños y adolescentes y son producto de un interjuego entre políticas de vivienda, de empleo y procesos sociales comunitarios.

En este sentido Sampson y Lauritsen (1994) plantean que algunas características del entorno o del barrio en el cual los jóvenes viven y pasan su tiempo pueden influir en el riesgo de violencia. Los autores han investigado de forma extensa la relación entre las características del entorno y el aumento de los índices de delitos violentos, concluyendo que la marginalidad social y los cambios en el entorno son dos de los factores principales. Así también otros autores se han dedicado a estudiar la relación entre ambas variables y han encontrado una sólida asociación entre ellas, lo cual demuestra que los adolescentes que provienen de contextos comunitarios y barriales con mayor presencia de vandalismo y actividad delictiva cometen más crímenes o tienen más problemas de conducta, es decir vivir en un vecindario con niveles altos de criminalidad ha predicho el aumento de riesgo de violencia (Gracia, Fuentes y García, 2010). No obstante, otros estudios no han encontrado efectos directos del contexto, sino indirectos, mediados por otras variables, como los procesos familiares o el grupo de pares (Pastore y Santinello, 2010).

En esta línea, Peña Fernández (2010) manifiesta que el ser delincuente no radica en la existencia de diferencias individuales, sino en las características diferenciales de los barrios donde viven, ya que demuestra que las tasas de delincuencia descienden en función directa al distanciamiento del centro de la ciudad y su zona industrializada, incrementándose cuanto más nos aproximamos a aquellos. Fagan y Schwartz(s/f), citado en Peña Fernández (2010), se centraron en el estudio de los efectos contextuales del barrio en la delincuencia y encontraron

que el nivel económico de la comunidad, y la desorganización comunitaria, se relacionaban significativamente con la delincuencia. Por lo que como Sandoval y Martínez Barón (2008) plantean, que el contexto donde se desarrollan los sujetos incide en la posibilidad de que transgredan la ley, cualquiera sea la edad.

Por otro lado, se pueden mencionar otros factores contextuales que aparecen ligados a la transgresión a la ley penal, uno de ellos es la facilidad en el acceso a armas de fuego. La desventaja económica es un factor que puede llevar a que los barrios sean más vulnerables a las expresiones de violencia, siendo el uso de armas de fuego una manifestación de esta que se propaga en el resto de los barrios, como modo de resolver conflictos. La disponibilidad y proliferación de armas de fuego se han convertido en serias causas de la delincuencia juvenil. Hoy en día, las armas son una parte central del cambiante panorama de la violencia juvenil, los adolescentes poseen y llevan armas, a menudo por un deseo de ser respetados y temidos (Benvenuti, 2003).

Otro de los factores contextuales es “la esquina”, está ha gozado tempranamente de un lugar ambiguo en los estudios sobre jóvenes, y su apropiación testimonia un lugar marginal en la sociedad local, pero al mismo tiempo es el escenario de construcción de una sociabilidad particular con reglas definidas. La esquina es el espacio de una sociabilidad evanescente. Por lo general no consiguen establecerse en una esquina fija, ya que los vecinos logran finalmente echarlos mediante distintas estrategias (colocar en los lugares donde se sientan alambres de púas, vallas metálicas, vidrios, llamar a la policía, etc.), corriéndolos poco a poco hacia los límites del barrio, espacios vacíos como casas abandonadas o terrenos baldíos. Esta marginalidad espacial en el propio barrio es la expresión topográfica de una marginalidad comunitaria que ellos mismos han naturalizado (Duschatzky y Corea, 2009).

Por último, Arce (2004) plantea que un infractor no nace en dicha condición, sino se hace, el contexto social influye determinantemente en el futuro proceder de la persona, tanto para efectos positivos como para efectos negativo. La sociedad implica un papel importante dentro de la formación del adolescente, más cuando este se encuentra en una etapa en la cual pretende hallar un lugar propio en la comunidad y se pueda identificar de algún modo con ella. Por esto, dentro del aprendizaje que el adolescente recibe, la sociedad, desde la teoría del aprendizaje social de Bandura (1977), es la que mayor influencia tiene dentro del individuo, ya que lo que vea e intérprete de esta, será la forma en cómo actuará en algunas circunstancias.

- **EXCLUSIÓN Y VULNERABILIDAD SOCIAL**

Una de las teorías que toma mayor relevancia dentro del problema de la delincuencia hace referencia a la exclusión social, debido a que ésta se puede presentar de múltiples formas y en distintas situaciones, lo que se relacionaría no solamente con los ingresos económicos, sino también desde el ámbito social, educativo y cultural, donde el individuo es excluido por presentar características diferentes a su comunidad afectando a las personas y más concretamente a los niños y jóvenes (ONU, 2014).

La conceptualización de la exclusión social al ser multidimensional y multifactorial se ve dificultada, es por ello que los autores la definen de diferentes maneras. Busso (2005) plantea que el concepto de exclusión social aparece para hacer referencia a un conjunto de situaciones que afectan a personas, pero fundamentalmente a colectivos o a grupos de personas, que van más allá de la pobreza dado que los factores que confluyen en estas situaciones no sólo tienen que ver con la privación de ingresos económicos. El término surge como necesidad de dar respuesta a nuevas situaciones de desigualdad que no se limitan a la escasez de recursos económicos, pero que al igual que estos o incluso en mayor medida, generan discriminación y marginación social en determinadas personas y/o colectivos.

Otros autores refieren a la exclusión social como un proceso, Giorgi (2004) plantea que:

La exclusión constituye un proceso interactivo de carácter acumulativo en el cual –a través de mecanismos de adjudicación y asunción- se ubica a personas o grupos en lugares cargados de significados que el conjunto social rechaza y no asume como propios. Esto lleva a una gradual disminución de los vínculos e intercambios con el resto de la sociedad restringiendo o negando el acceso a espacios socialmente valorados. (p.5)

Este proceso de exclusión es gradual, acumulativo y puede atravesar a varias generaciones. Existen sujetos que nacen en ese tránsito hacia la exclusión con muy escasas posibilidades de revertir o aún de detener ese proceso, surge así la noción de vulnerabilidad. Además, el autor plantea que la ruptura o desafiliación de los individuos de un cierto espacio social de referencia, resulta un paso determinante para los procesos de exclusión. Este proceso alcanza un punto de

ruptura en donde las interacciones de los sujetos quedan limitadas únicamente a aquellas que comparten su condición.

En esta misma línea Briuoli (2007) manifiesta que la exclusión refiere a un proceso histórico a través del cual una cultura mediante su discurso rechaza a un sujeto, se lo priva de voz, de lenguaje. Estos sujetos son, los chicos de la calle, los cartoneros, los vendedores ambulantes; cuya inscripción colectiva, la da el barrio o el grupo de la calle; mientras la sociedad los mira con temor, desprecio, compasión. Entonces, su individuación se construye a partir de la precariedad e inestabilidad de lo cotidiano. Estos sujetos no proyectan su vida, no participan de la política ni la reproducción económica; por el contrario, se vinculan a través de la inmediatez, se manejan con el surgimiento de cada oportunidad que aparece. Su esfuerzo se centra en conocer a la perfección el territorio y desplegar habilidades de supervivencia en la incertidumbre. Las estructuras que le sirven como único apoyo, como modo de inscripción colectiva e individual, le permiten resistir las amenazas de desafiliación completa.

Así también Duschatzky y Corea (2009) en su libro “Chicos en banda” hacen referencia a la expulsión social, afirmando que la misma produce un desexistente, un "desaparecido" de los escenarios públicos y de intercambio. Es así que el expulsado pierde visibilidad en la vida pública, nombre, palabra, constituyéndose en una “nuda vida”, porque ha entrado en el universo de la indiferencia, porque transita por una sociedad que parece no esperar nada de él. Las autoras mencionan que los indicadores o rastros de la expulsión social pueden advertirse en la falta de trabajo, estrategias de supervivencia que rozan con la ilegalidad, violencia, falta de escolarización o escolaridad precarizada, ausencia de resortes de protección social, disolución de los vínculos familiares, drogadicción, entre otros.

Por otra parte, el Equipo del Observatorio de Derechos Humanos de Río IV plantea que los jóvenes que ingresan a la Justicia de Menores se encuentran en amplia desventaja por los prejuicios con los que la sociedad los ha estigmatizado. Hoy ser joven, pobre y morocho es sinónimo de “peligro”, de “delincuencia”. Es posible decir entonces que la vulneración de derechos y la marginalidad son características recurrentes dentro de la población de jóvenes privados de su libertad (Informe Mirar Tras los Muros, 2013). En esta misma línea Zaffaroni y Rep (2011) plantean que existen estereotipos de “delincuente” que denotan una impronta negativa para quienes lo portan. Cargar con un estereotipo es ser particularmente vulnerable al sistema penal, pero no sólo por la apariencia externa, sino porque ésta condiciona las demandas

de rol que formulan los otros. De este modo, el estereotipo se introyecta, se internaliza y produce identidades.

Franco Castro (2014), hace referencia a que algunos sujetos han vivenciado procesos marginadores previos al delito. Además, considera que la infracción de ley en la juventud tiene que ver con múltiples factores asociados a la carencia, pero no únicamente a la carencia económica, sino que, a una carencia mucho más amplias, como aquella afectiva, educativa, e incluso la carencia de reconocimiento de derechos. Es decir, más allá de la desigualdad en la distribución de ingresos existe una exclusión social que se expresa a través de: diferencias en los niveles de poder y reconocimiento social, de participación política, de libertad individual, de educación, de salubridad y expectativa de vida, de seguridad personal, de organización colectiva y de acceso de servicios básicos, entre otras desigualdades que afectan fuertemente la población joven (Jiménez Ornelas, 2005).

En consonancia con esto, Polola (2013) acusa el grado de estigmatización que reciben los jóvenes en la actualidad, apoyada por los medios de comunicación, que construyen el estereotipo de joven peligroso, especialmente de las zonas marginales. Esto puede explicarse a través de la teoría del etiquetamiento, la cual plantea que no existen diferencias entre lo que comúnmente se entiende por delincuente-no delincuente, sino que cualquier miembro de la sociedad que se encuentre ante determinadas circunstancias o condiciones puede llegar a delinquir. El delincuente es todo aquel que padece las dificultades de los procesos sociales y que se enfrenta a la estigmatización del propio sistema en el que se encuentra inmerso, el cual no le brinda ni los medios ni las metas necesarias para un desarrollo saludable y equitativo. El delincuente es el que se encuentra etiquetado como tal. Es la reacción social frente al delito lo que termina generando más y nuevas estigmatizaciones y etiquetamientos (Marchiori, 1999).

Por otra parte, se suele confundir la exclusión social con la pobreza. Ortiz y Díaz (2018) realizan una distinción entre estos términos, plantean que la pobreza refiere a la “carencia de ciertos bienes y recursos y la exclusión social a la ruptura de los vínculos que posibilitan la integración de los sujetos a la sociedad” (p. 613). Estos aspectos se relacionan íntimamente con las limitaciones o fragilidades en las que se encuentran las familias a diario, atravesando situaciones adversas, lo que conlleva un sufrimiento. La vulnerabilidad social en estas familias estaría entonces, presente en situaciones de pobreza y exclusión social, pero también, en situaciones previas, donde lo transgeneracional se pone en juego. En este sentido, la exclusión social constituye un factor en la construcción de la vulnerabilidad social. Además, esta última

remite a problemas de orden cultural, vulnerabilidades vinculadas al género, etnia, edad, “(...) a diferentes factores que colocan a los involucrados en situación de desventaja social” (García, 2003, p.58).

Por último, el informe elaborado por la Se.N.A.F (2018) establece que en la ciudad de Córdoba y Gran Córdoba se ha observado que la vulnerabilidad social crece desde el área central hacia la periferia, distribuida espacialmente en forma de anillos irregulares. Dicha situación se entiende, como una condición social de riesgo, de dificultad, que inhabilita, de manera inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en la satisfacción de su bienestar -en tanto subsistencia y calidad de vida- en contextos socios históricos y culturalmente determinados. En relación a lo anterior, Soria Arena (2016) sostiene que el mayor grado de vulnerabilidad de un individuo está determinado por la pérdida del reconocimiento y ejercicio de sus derechos, ya que de esta manera pierde la posibilidad de tener un proyecto de vida, quedando atrapado en la lógica identificatoria asignada por el entorno como delincuente, adicto, sin otras posibilidades de identificación social, más allá del estigma.

9. MODALIDAD DE TRABAJO

Este proyecto de sistematización de prácticas es una sistematización de la experiencia vivida. La sistematización es definida por Jara (2015) como una:

interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. (p.4)

- **CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS**

Los sujetos con los que se trabajó en el presente proyecto de trabajo de integración final son las familias de los niños, niñas y adolescentes que han transgredido la Ley que asisten al POF

- **FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

Para realizar la sistematización de la práctica se recolectarán en terreno los datos de diversas fuentes de información con la finalidad de responder a los objetivos planteados en el eje de sistematización. Las técnicas de recolección de datos que se utilizan son las siguientes:

- Observación no participante en el espacio del Taller de Padres y de entrevistas en el Programa de Acompañamiento Psicoeducativo, con el objetivo de identificar los factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes desde el discurso de los padres antes de la intervención de Se.N.A.F y al finalizar la intervención.
- Registros en cuaderno de campo a partir de observación no participante y en función de la participación en diversas instancias, a los fines de identificar factores de riesgo desde el discurso de los padres antes y después de la intervención de Se.N. A. F
- Entrevistas semi-dirigidas a:

-A los profesionales que trabajan en el Programa de Orientación Familiar y el Programa de Acompañamiento Psicoeducativo, con el fin de explorar los factores de riesgos que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes a partir del discurso de profesionales de Se.N.A.F.

- A los padres de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, con el objetivo de conocer el papel que tiene la familia en la instalación de los factores de riesgo desde su percepción. Así también para identificar la percepción que tienen los familiares sobre los factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes antes de la intervención de Se.N.A.F y al finalizar de dicha intervención
- Lectura de documentos institucionales (informes técnicos, expedientes, derivaciones) con el propósito de caracterizar socio demográficamente la población objeto.

• CUESTIONES ÉTICAS IMPLICADAS

La adquisición de conocimientos y habilidades debe estar acompañada de una posición ética que habilite al ejercicio de un adecuado rol académico y profesional como futura graduada. Así es que, en el presente proyecto de sistematización se tiene en cuenta los principios éticos y las normas deontológicas que se encuentran implicados en la Práctica Profesional realizada en el Programa de Orientación Familiar y el Programa de Acompañamiento Psicoeducativo.

Estos aspectos éticos se encuentran explicitados en el Código de Ética del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba (2016), el cual propicia la vigencia plena de los Derechos Humanos, la defensa del sistema democrático, la búsqueda permanente de la libertad, la justicia social y la dignidad, como valores fundamentales.

Entre los principios y las normas que sustentan el desarrollo de la práctica y del proyecto de sistematización se encuentra el consentimiento informado, el cual es acordado previamente a la realización de alguna actividad con los participantes, siendo sumamente necesario que se les informe de forma clara y precisa sobre los alcances de la intervención, con el fin de respetar su autonomía y elección voluntaria de consentir o no (Código de Ética del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, 2016). Se obtuvo consentimiento oral de los adolescentes para presenciar las entrevistas del Programa de Acompañamiento Psicoeducativo.

El secreto profesional que implica el deber de guardar secreto asegurando así la confidencialidad de todo conocimiento e información obtenidos en la práctica, protegiendo la seguridad y dignidad de los consultantes, sus familias y comunidades, constituye otro aspecto ético que se tiene en cuenta a la hora de preservar datos e identidades. La información que se obtenga por medio de las observaciones será de uso estrictamente académico donde no se revelará la identidad de los participantes.

En pos de resguardar la intimidad de las familias y de los adolescentes, todos los nombres son modificados, por lo que la denominación no corresponde con los nombres propios verdaderos de los sujetos.

10. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

10.1 RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO

10.2 INGRESO A LA INSTITUCIÓN

La práctica profesional supervisada del Contexto Jurídico Forense inicio a fines de mes de Abril del corriente año, a partir de una reunión el día Lunes 22 de Abril a las 10 horas en la sede del área Penal Juvenil de la Se. N.A.F que se encuentra en la Calle Transito Cáceres esq. Corrientes, con el Supervisor del Contexto, la Referente Institucional y las alumnas que íbamos a realizar la practica en dicha institución. En dicha reunión se introdujo brevemente la práctica que se lleva a cabo allí, los diferentes programas marcados en las leyes correspondientes, la población a la que asisten y el tipo de problemáticas con las cuales se interviene. Además, se mencionaron algunas de las actividades que lleva a cabo la institución: visitas domiciliarias, talleres para padres, entrevistas de a los jóvenes en conflicto con la ley penal, mediación, tratamiento tutelar, entre otras actividades.

Luego se pregunto acerca de las expectativas que como estudiante se tenían y sobre los conocimientos previos en relación a las actividades que lleva a cabo la institución. Previo a finalizar la reunión, se acordó con la referente disciplinar los días y horarios a asistir para la realización de la práctica, destacándose que podría haber modificaciones en función de actividades de la institución y contingencias que fueran surgiendo. Recorrimos la institución, mientras la referente institucional nos presentaba al equipo de trabajo de las diferentes áreas. El edificio estaba muy bien cuidado, moderno y en remodelación, lo cual me llamo la atención porque me imaginaba un edificio más bien viejo, descuidado. Además, los diferentes equipos de trabajo nos recibieron muy bien, se mostraron muy atentos y amables con las estudiantes. Se pudo apreciar en este primer encuentro un clima institucional ameno, agradable y de mucho compromiso por parte de los profesionales hacia su labor.

Para dar inicio formal a la práctica, se asistió al “Acto de Apertura de Prácticas 2019”, en mes de Abril, donde se convocó a estudiantes, que en el corriente año se iniciaban en las prácticas en las diversas dependencias de la institución Se.N.A.F, como así también a docentes. Allí se hizo una presentación orgánica de la institución y se explicó que Se. N.A.F estaba dividida en dos áreas: Protección de derechos y Penal Juvenil. Dentro de esta última área existen dos grandes equipos: contextos de encierro y estrategias de intervención y medidas alternativas.

10.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOEDUCATIVO

Los días establecidos por la referente institucional para la realización de las prácticas son los lunes, miércoles y viernes. Los dos primeros días realizamos actividades en el programa de acompañamiento psicoeducativo en el horario de 9 a 12 horas y los viernes en el taller de padres el cual es dirigido por otra profesional.

El día que comenzamos la práctica propiamente dicha la Referente Institucional explicó cómo se realizaban las entrevistas en el Programa de Acompañamiento Psicoeducativo. En un primer momento se trata de entrevistas cerradas, donde se recaban datos personales y luego es una entrevista semidirigida. La primera entrevista es con los padres y explicó que pueden llegar las derivaciones desde: el juzgado, operadores territoriales o demandas espontáneas. La segunda entrevista que se realiza a los jóvenes es una entrevista de historia vital. No se hace diagnóstico y el encuadre de trabajo es de tres meses. Todo lo que se realiza en el programa debe ser informado en el juzgado a través de informes, los cuales también la referente institucional explicó cómo se realizan.

Las primeras semanas fueron de capacitación respecto a las distintas actividades que se realizan en la institución, y la Referente solicitó que hagamos un diagnóstico institucional, previo a comenzar a realizar las actividades propiamente dichas. Se asistió durante las primeras semanas a supervisiones de los diferentes servicios zonales, donde se dialogaba acerca de las distintas problemáticas a las cuales se enfrentaban. En las distintas supervisiones aparecía como recurrente la ausencia de límites por parte de los padres y la frustración por parte del equipo de trabajo.

El rol dentro de este programa es de observador no participante de las entrevistas, pero se fueron presentando dificultades, ya que los adolescentes no asistían a las entrevistas. Tuve la posibilidad de ingresar a una primera entrevista con un adolescente como observadora no participante. La Referente le explicó quién era, y cual era mi rol allí. Se trata de la primera entrevista de la profesional con el joven. Al finalizar la entrevista tuve la posibilidad de dialogar con la profesional y poder expresar las opiniones u observaciones que consideré pertinentes.

Así también tuve la posibilidad de realizar una entrevista al mismo joven bajo la supervisión de la referente. La entrevista estaba enfocada en técnicas de mindfulness y reconocimiento de los cinco sentidos, para ello he realizado diferentes actividades que me permitieron alcanzar tal fin.

Se nos realizó una invitación por parte de nuestra Referente Institucional a participar de la Capacitaciones brindadas por la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba. En la primera instancia que correspondía al módulo cuatro se trabajó acerca de la intervención en la prevención del consumo de sustancias. Fue dictada por dos profesionales especializados en dicha área y que realizaron investigaciones en el CONICET. Se orientó a trabajar para pasar de un conocimiento básico a la prevención. En la segunda capacitación que se realizó el día 9 de agosto se trabajó sobre las adicciones desde un enfoque de género, para ello se invitó a una profesional de España, especializada en dicha área.

En el mes de agosto se iniciaron las capacitaciones internas para las practicantes pertenecientes al programa de acompañamiento psicoeducativo, donde se invitaron a profesionales de la Se.N.A.F y de otras instituciones para que nos comenten y describan el programa en el que se desempeñan, las actividades que realizan y su rol profesional en el mismo.

Además, comenzamos con los talleres de fortalecimiento emocional para los adolescentes en conflicto con la ley penal que asisten al Programa de Acompañamiento Psicoeducativo. Se trata de una instancia previa a las entrevistas que van a llevarse a cabo con los profesionales. Consiste en tres talleres donde se utilizan diferentes técnicas para trabajar con las emociones, con la resolución de problemas, la toma de decisiones. Nuestra participación es tanto en el rol de talleristas, como de observadoras no participantes.

10.4 OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE EN EL TALLER DE PADRES

Por otra parte, asisto al Programa de Orientación Familiar desarrollado con modalidad de Taller de Padres, se lleva a cabo los días miércoles y viernes a las 15:30 horas en la sede de la Se.N.A.F. A este dispositivo concurre en calidad de observadora no participante, este rol consiste en presenciar los espacios en donde las familias asisten -Talleres de Padres-, registrando en un cuaderno de campo sin intervenir.

Al comenzar los talleres, la coordinadora general expresa el encuadre y las características de los encuentros, generalmente nos presenta a las practicantes ante los familiares. La profesional les explica a los padres la importancia de que puedan ejercer el rol materno y paterno de la mejor manera posible.

Son tres talleres obligatorios, el primero es un momento de encuentro, en el que las familias se expresan y son escuchadas pudiendo identificarse con problemáticas similares en el discurso de otras familias. Pude observar desde mi rol como se trabaja en este primer momento para que la detención del adolescente pueda significar una detención en el tiempo del sistema familiar apuntando a que reflexionen.

En el segundo taller se revisa y se amplía la mirada en cuanto a las problemáticas presentes, se trabaja en cuestiones prácticas y brindando herramientas para la crianza como por ejemplo la puesta de límites, las reglas, el elogio de conductas y las tareas.

El tercer taller apunta a reflexionar acerca de lo generado o no, a lo largo de los tres encuentros, y si las herramientas brindadas resultaron significativas para el sistema familiar. En este espacio se da lugar a que las familias expresen cómo se sienten con el intento de cambio y con su paso por el taller.

Al final de cada encuentro, los integrantes del equipo generan un espacio de diálogo y reflexión acerca de lo sucedido en el taller, muchos padres manifiestan que el espacio les gusta y les sirve mucho, a pesar de que no querían venir al principio.

He observado ciertas problemáticas recurrentes que surgen en los talleres, las cuales suelen ser: el consumo problemático de sustancias, la ausencia de límites y reglas, las relaciones poco saludables con el grupo de pares, la escasa comunicación y demostraciones de afecto, la falta de control y supervisión parental, la falta de organización familiar, abusos sexuales intrafamiliares, entre otros.

Los talleres atraviesan distintas problemáticas, que me movilizaron mucho, en especial porque se trata de personas que viven en contextos de marginalidad, de exclusión, de pobreza y de vulnerabilidad.

Por último, a partir de fines de agosto he comenzado a realizar entrevistas a los padres de los adolescentes en conflicto con la ley penal en el primer y tercer taller.

10.5 INSTANCIAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA

10.5.1 CAPACITACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA

A lo largo de la Formación Académica he ido atravesando diversas instancias de capacitación brindadas tanto desde la Facultad de Filosofía y Humanidades, como desde la Se.N.A.F. En primer lugar, hare referencia a aquellas realizadas desde la Universidad Católica

de Córdoba. He participado de la capacitación de “*Ética y Deontología Profesional*” brindada por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba en la Universidad Católica, donde se trabajaron sobre los aspectos éticos y deontológicos que rigen el accionar profesional. Se explicitaron principios y valores que destaca dicho Código, en pos de habilitar a la comprensión del valor ético que tiene la normativa vigente como herramienta no solo teórica, sino técnica y política en salud mental. Se destacó el marco que rige el accionar profesional, como así también la importancia de una praxis profesional basada en el principio bioético de la “autonomía”.

Se participó también de la capacitación de “*Estilo APA: citas y referencias bibliográficas*”, la cual se llevó a cabo a lo largo de dos encuentros, en los cuales se generaron instancias para dialogar y trabajar sobre aspectos metodológicos en torno a la importancia de la escritura académica, sus especificidades, las normas que rigen para la escritura del Trabajo Integrador Final, referencias bibliográficas y citación bibliográfica.

En el mes de agosto se llevó a cabo una capacitación de “*Metodología*”, en la cual se explicó los aspectos metodológicos del Trabajo Integrador Final, como así también del Proyecto de Sistematización de prácticas. Este espacio nos sirvió mucho para aclarar dudas y para continuar con el desarrollo del Proyecto de sistematización.

10.5. 2 CAPACITACIONES Se.N.A.F

Por otra parte, la Se. N. A. F ha brindado diferentes instancias de capacitación, tanto virtuales como presenciales. Se realizó el curso virtual “*Niños, niñas y adolescentes: sujetos de derechos*” con una duración de 20 horas reloj, organizado y dictado por el Área de capacitación de de Se.N.A.F y coordinado por la Dirección de jurisdicción de capacitación. Se participó de modo presencial del Primer encuentro de Formación “*Sistema de Protección Integral de NNyA: Aplicaciones e Implicancias*” el cual se llevó a cabo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue dictada por tres profesionales encargadas de la Dirección de Estrategias de Prevención, el equipo de Relaciones Institucionales y el área de Protección de Derechos. Se hizo hincapié en varios aspectos: se destacó la transformación de la mirada sobre la niñez que implicó el pasaje del paradigma de la Situación Irregular al Paradigma de la Protección Integral. Se destacó cómo, bajo esta nueva Doctrina de Protección Integral se vuelve fundamental contemplar el Principio de Corresponsabilidad, bajo el cual Sociedad, Estado y Familia son responsables de garantizar la protección de los derechos de los niños.

Se participó del Segundo Encuentro de Formación Académica “*Intervenciones Instituyentes. Perspectivas desde los Derechos y las Redes Sociales*”, el cual se llevó a cabo en SUM de la Universidad Provincial de Córdoba. Se trabajó en pequeños grupos entorno a los conceptos de rol, posición, organización e institución y luego se realizó un plenario y debate. Además, se trabajó entorno a los conceptos de instituido e instituyente y se dialogó acerca de las redes sociales y de vida.

10.6 ESPACIOS DE SUPERVISIÓN

Los espacios de supervisión iniciaron en el mes de abril con una frecuencia semanal y con una duración de aproximadamente 2 horas. En los encuentros semanales se realiza un acompañamiento por parte del supervisor de contexto de la experiencia que realizamos, con el objetivo de orientarnos a los estudiantes en caso de que el encuentro con la práctica nos movilice aspectos personales, además se brindan espacios en los cuales podemos transmitir nuestra experiencia, manifestando situaciones particulares, aprendizajes y dificultades propias del ejercicio del rol del psicólogo. Por otra parte, en dichas instancias trabajamos en conjunto sobre aspectos relacionados al desarrollo del Trabajo de Integración Final, recibiendo de nuestro supervisor recomendaciones, sugerencias y orientación para una producción más enriquecedora de nuestro trabajo.

10.7 ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LA EXPERIENCIA

A continuación, se presenta el análisis de los datos recolectados durante los meses de abril a diciembre de 2019, correspondiente al tema del presente Trabajo de Integración Final: “Factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal desde el discurso de los padres que asisten al Programa de Orientación Familiar del área penal juvenil de Se.N.A.F”

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se utilizaron como técnicas de recolección de datos:

- Observación no participante en el espacio del Taller de Padres y de entrevistas en el Programa de Acompañamiento Psicoeducativo
- Registros en cuaderno de campo a partir de observación no participante y en función de la participación en diversas instancias
- Entrevistas semi-dirigidas a:
 - Los profesionales que trabajan en el Programa de Orientación Familiar y el Programa de Acompañamiento Psicoeducativo
 - Ocho padres de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal
- Lectura de documentos institucionales (informes técnicos, expedientes, derivaciones) con el propósito de caracterizar socio demográficamente la población objeto.

Para llevar a cabo el análisis de datos, una parte de los mismos fueron tratados de manera cuantitativa con el fin de realizar la caracterización sociodemográfica de los adolescentes en conflicto con la ley penal y sus familias. Mientras que para los objetivos restantes se construyeron categorías de tipo cualitativa y se efectuó la interpretación y análisis de dichos datos a partir de la articulación con el marco teórico desarrollado.

A continuación, se presentan los datos obtenidos siguiendo los objetivos específicos planteados.

10.7.1 CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

A continuación, se presenta la caracterización sociodemográfica realizada a partir de las entrevistas y de la lectura de documentos institucionales de los adolescentes en conflicto con la ley penal cuyos padres asistieron al Taller de Padres del Programa de Orientación Familiar, a fines de abordar el primer objetivo específico. Esto nos permitirá conocer las condiciones socioculturales que atraviesan a la población objeto, entendiendo a todo sujeto como inmerso en un contexto con el cual interactúa.

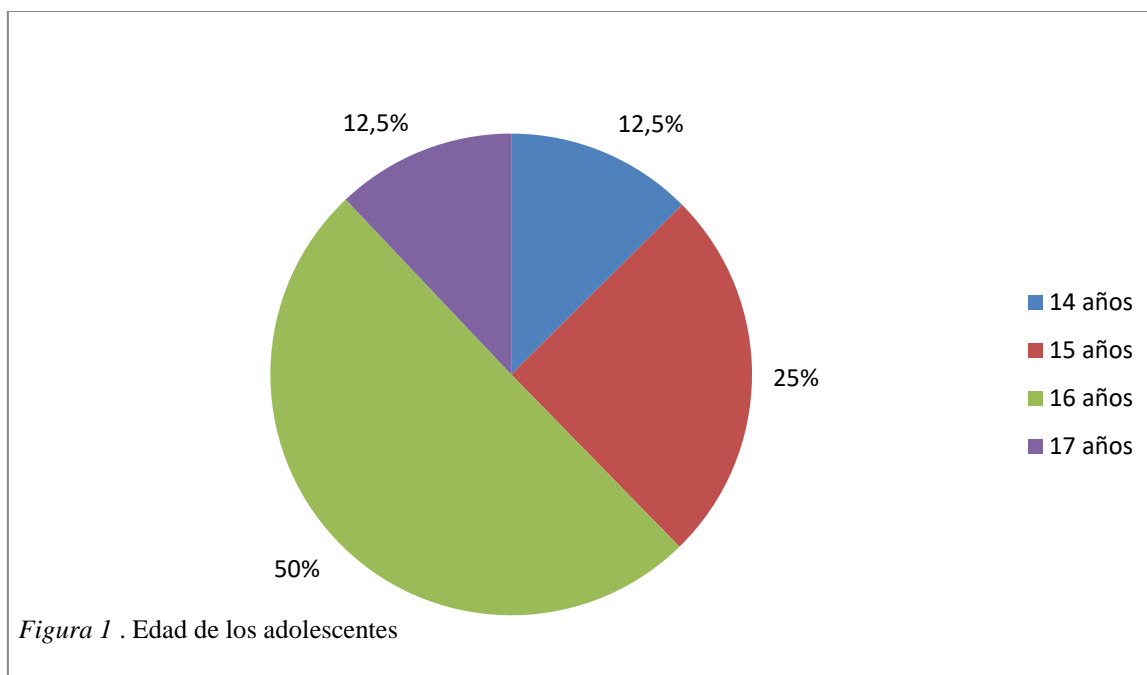
Dicha caracterización se llevó a cabo a partir de ocho casos que fueron entrevistados en el primer y tercer taller. Las dimensiones escogidas para realizar el análisis fueron aquellas que derivaron de los datos disponibles en los documentos institucionales y en las entrevistas: género, edad, delito, presencia de antecedentes en el Sistema Penal Juvenil, cantidad de ingresos al Complejo Esperanza, escolarización y nivel alcanzado, actividad laboral, consumo de drogas, composición del grupo familiar conviviente, actividad laboral de los padres y cantidad de hermanos. A continuación, se presentan dichas categorías:

GÉNERO

Del total de los adolescentes en conflicto con la ley penal cuyos padres fueron entrevistados en el POF, el 100%, es decir 8 casos, correspondían al género masculino. Esto coincide con lo expuesto en el Relevamiento Nacional Argentino sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Unicef, 2015), en el cual se plantea que, de los tres tipos de dispositivos penales juveniles, es decir programas de supervisión en territorio, establecimientos de restricción de libertad y establecimientos de privación de libertad, la mayor parte de la población relevada son varones.

Más específicamente en una investigación sobre el perfil de los adolescentes en conflicto con la ley penal desarrollada en la Provincia de Córdoba por Cosacov y Croccia (2007) se observa que el mayor porcentaje de los adolescentes corresponde al género masculino y que es muy bajo el porcentaje vinculado al género femenino. En relación a lo mencionado Piquero y Brame (2008), citado en Redondo Illescas, Martínez Catena y Pueyo (2012), sostienen que ser varón constituye uno de los factores de riesgo personales de la delincuencia.

EDAD



Los resultados que se obtuvieron oscilaron entre los 14 a los 17 años. En la *figura 1* se puede observar que el 50% (4 casos) de los adolescentes poseen 16 años, el 25% (2 casos) tienen 15 años, el 12,5% (1 caso) posee 14 y el último caso (12,5%) 17 años.

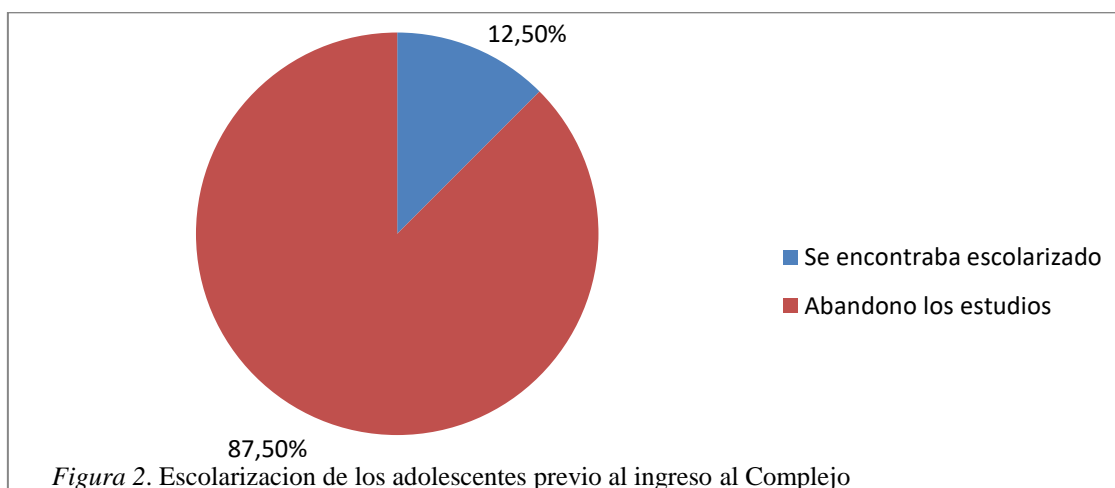
Estos datos concuerdan con el relevamiento llevado a cabo por el Unicef (2015), en el que se puede observar que la mayoría tiene entre 16 y 17 años, esto implica que, en la medida que los delitos imputados sean de acción pública y con una pena de más de dos años de prisión, serían considerados punibles según la legislación vigente. Como contraparte, la minoría de los adolescentes tiene menos de 16 años, y por lo tanto no son punibles en función de su edad.

ESCOLARIZACIÓN

A continuación, se presenta la variable escolaridad, la cual se divide en tres subvariables. La primera subvariable refiere a la situación escolar, es decir a si los adolescentes se encontraban escolarizados o si habían abandonado sus estudios al momento del ingreso al Centro Socioeducativo Complejo Esperanza. En segundo lugar, analizamos el nivel de escolaridad alcanzado y, por último, una vez que ingresaron a la institución, si están realizando el Programa de Inclusión y Terminalidad (de ahora en adelante PIT).

- SITUACIÓN ESCOLAR

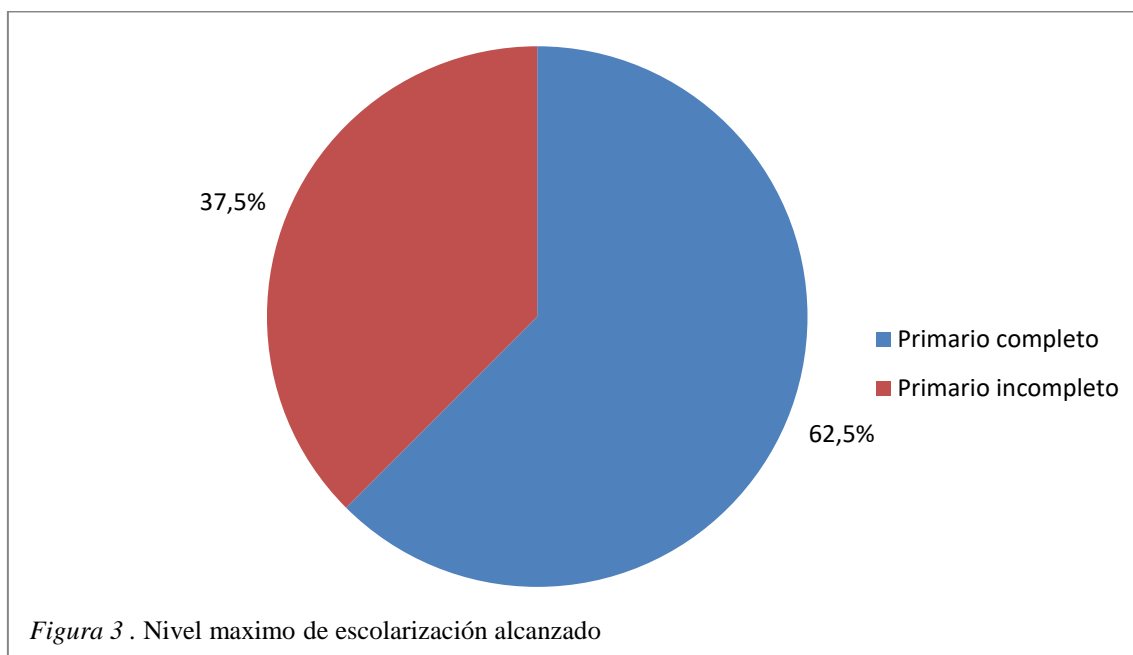
En la figura 2 se puede observar que el 87,5% (7 casos) abandonaron los estudios previamente a ingresar al Centro Socioeducativo, mientras que el 12,5% (1 caso) se encontraba escolarizado. De acuerdo con Cosacov y Croccia (2007) los principales motivos de abandono del colegio son: desinterés, fuga de la institución, inadaptación por conflictos con compañeros y/o maestros. Esto se refleja en una de las entrevistas realizadas *“En sexto grado empezó a portarse mal en la escuela y lo sacamos para que no lo echen porque si no no va a poder hacer más la escuela... Después la empezó y ya no quiso ir más”* (Entrevista caso n°3, 25 de octubre de 2019). En los talleres además resultaba frecuente escuchar en el relato de los padres que el motivo por el cual sus hijos no iban al colegio se debía a que ellos mismos habían tomado esta decisión.



Esto coincide también con lo que plantea Farrington (1995) acerca los problemas en el rendimiento escolar o los problemas educativos han demostrado ser una de las características prevalentes en los adolescentes en conflicto con la ley penal, así también la inasistencia escolar contribuye a facilitar el paso a la delincuencia debido a que proporciona tiempo y oportunidades adicionales para conductas inadecuadas.

- NIVEL MÁXIMO DE ESCOLARIDAD ALCANZADO

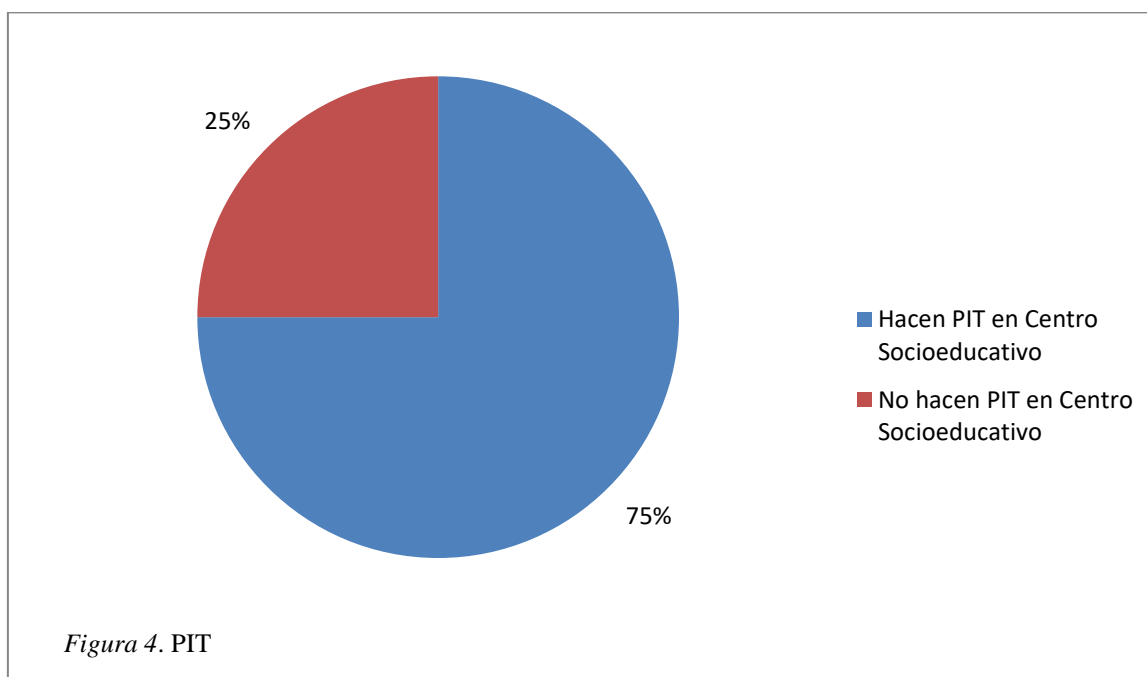
De acuerdo con Palummo y López (2013) además de la baja filiación con el sistema educativo que tienen los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, la gran mayoría no llega a obtener niveles de enseñanza media, por lo tanto, tienen mayores dificultades para conseguir empleos de calidad.



Esto que plantean los autores puede observarse en la Figura 3, en la que el 37,5%, es decir 3 adolescentes, no han finalizado el primario y el 62,5% (5 casos) han alcanzado como nivel máximo de escolarización este último. Así también los datos obtenidos concuerdan con el informe sobre el “Estado de la situación de la niñez y adolescencia en Argentina” del UNICEF (2017) donde en el nivel primario se destaca una “tasa de sobreedad” relacionada con el ingreso tardío al sistema o con la repitencia, la cual aumenta en los últimos dos grados del primario. La pobreza y la exclusión social juegan en este caso un rol predominante como factores estructurales que inciden en el abandono escolar.

- REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y TERMINALIDAD (PIT)

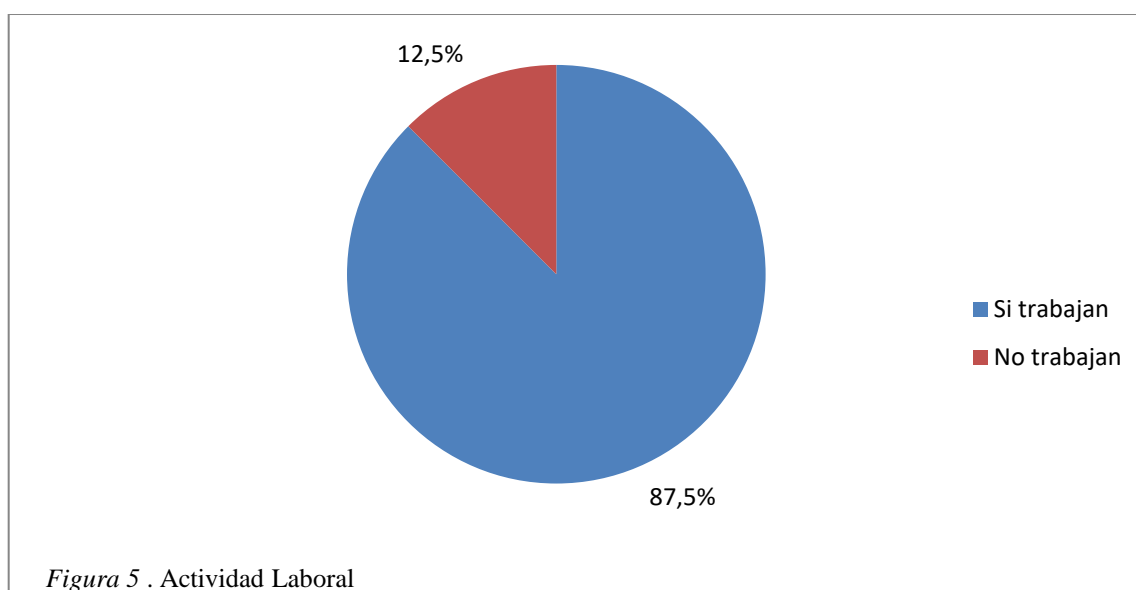
De acuerdo con Vanella y Maldonado (2013) en la Provincia de Córdoba el sistema educativo pierde un gran porcentaje en el segmento comprendido entre los 11 y 17 años, la repitencia y el abandono escolar no son privativos de la provincia, ni del país. Es una realidad que marca la exclusión de los jóvenes en las escuelas de las grandes ciudades de América Latina. En su mayoría estos jóvenes son pobres, de hogares con bajos niveles de escolaridad y con padres con trabajos poco calificados. Por lo que garantizar este derecho es un desafío que debía ser atendido y es por esta razón por la que, en 2010, el Gobierno de la Provincia de Córdoba pone en marcha el Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT) para Jóvenes de entre 14 y 17 años.



En la Figura 4 es posible observar que 6 adolescentes (75%) se encuentran realizando el PIT en el Complejo, mientras que 2 de ellos (25%) no concurren al mismo.

ACTIVIDAD LABORAL DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

A partir de la lectura de los documentos institucionales y de las entrevistas realizadas a los padres, se construyó el gráfico de la Figura 5 en el cual se ve reflejado que el 87,5%, es decir 7 adolescentes, trabajan. Mientras que, por lo contrario, el 12,5% (1 caso) restante no se involucró nunca en alguna actividad laboral.

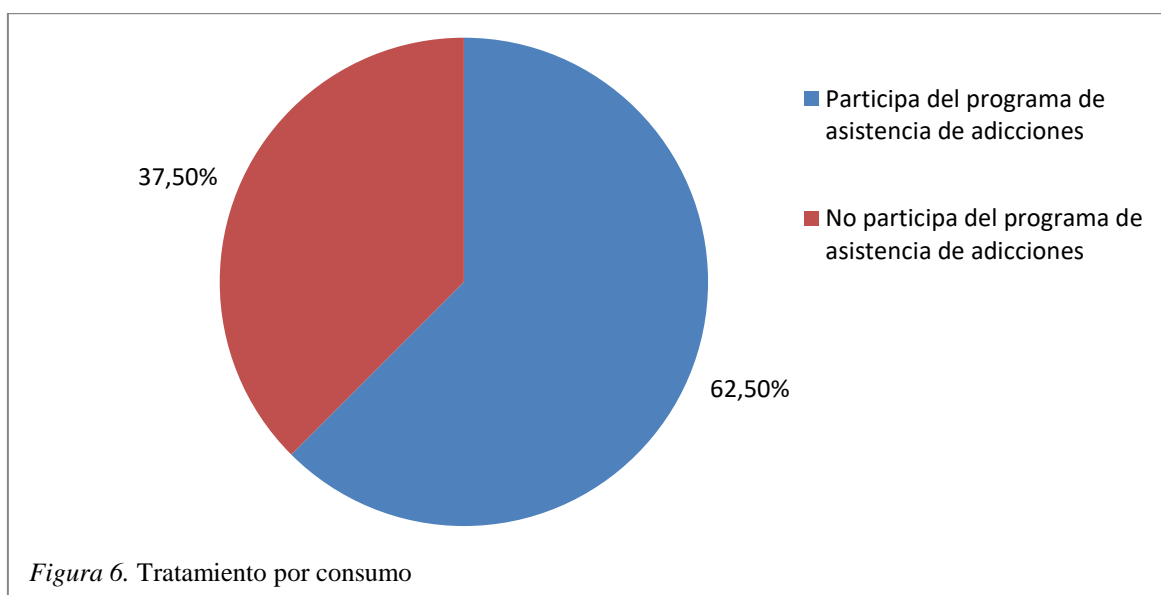


Sin embargo, cabe aclarar que era frecuente escuchar en los talleres que dichas actividades consistían en trabajos informales, ya sean búsqueda y clasificación de basura, salidas en carrito a requechar, changas en trabajos de construcción o de forma informal, venta de artículos en ómnibus, limpieza de parabrisas en la calle, ayuda a los padres en las obras. En este sentido Vázquez (2012) afirma que la mayoría de los trabajos a los que acceden los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal se caracterizan por los altos niveles de precariedad, inestabilidad e inseguridad contractual, trabajos asistemáticos, con bajas remuneraciones y calificación, sin garantías contra el despido y sin acceso a una cobertura social básica. En este panorama emergen elementos que condicionan su presente, sus expectativas futuras y sus vínculos con las instituciones encargadas de su entrenamiento para el trabajo, como la escuela o los ámbitos de capacitación formal o informal

En el caso de estos adolescentes las capacidades y habilidades laborales con la que cuentan y las redes que poseen para ocupar determinados puestos de trabajo no son las mejores. Esto los lleva a acceder a trabajos informales, que se obtienen por medio de amigos o parientes que ofrecen el empleo o lo facilitan (Cohen, 2008). Fue frecuente encontrar en las entrevistas que la mayoría de estas actividades laborales eran realizadas en compañía de algún familiar

CONSUMO DE SUSTANCIAS

Del total de los adolescentes en conflicto con la ley penal cuyos padres asistieron al POF, el 100% (8 casos) consume sustancias, por lo que esta variable se divide entre quienes participan de algún programa de asistencia de adicciones y quienes no. El 62,5% (5 casos) si asiste al programa, mientras que el 37,5% (3 casos) no.

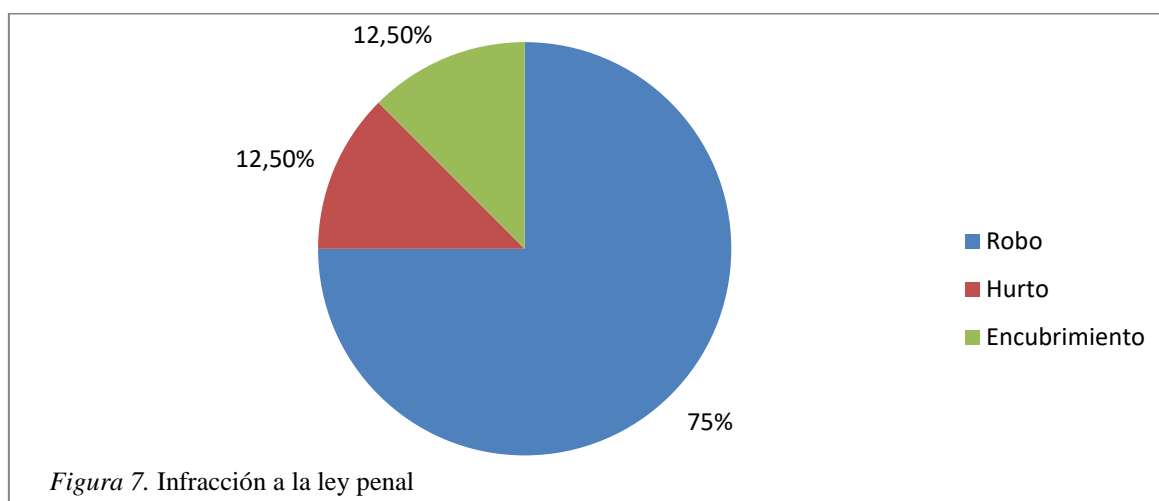


En los talleres, como en los informes y entrevistas, se observa de manera frecuente el consumo de los adolescentes de principalmente marihuana y en menor medida de pastillas. En relación a lo mencionado Cosacov y Croccia (2007) plantean que los tipos de droga más consumidos por los menores son: alcohol, marihuana y pastillas. Aunque en realidad más allá de su consumo en forma individual se evidenció que la mayoría mezcla algún tipo de droga con alcohol. En esta misma línea el SEDRONAR (2017) plantea que el consumo de alcohol y tabaco presenta las prevalencias más altas en adolescentes, seguida por el consumo de marihuana. En cuanto a las drogas ilícitas, los varones presentan tasas de consumo superiores a las de las mujeres.

De manera similar Fernández y Pedro (2011) plantean que cerca de ocho de cada diez jóvenes afirman haber consumido drogas antes de estar detenidos, siendo la principal droga consumida la marihuana. Es por esta razón que Vázquez González (2003), plantea que el consumo de sustancias durante la adolescencia puede constituir un factor de riesgo que puede influir en el desarrollo de conductas transgresoras

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL

La variable infracción a la ley penal refiere a la conducta de transgresión por la cual los adolescentes se encuentran alojados en el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza y/o por lo cual los padres asisten al Taller de padres. La categoría que representa notoriamente el mayor porcentaje en la Figura 7 es la de robo, con el 75% (6 casos), la cual agrupa sus distintas variantes (robo en grado de tentativa, robo simple, robo calificado, robo calificado por uso de arma). Mientras que el 12,5% (1 caso) refiere a lo que se conoce como hurto y por último un adolescente, es decir el 12,5% restante, corresponde a Encubrimiento.

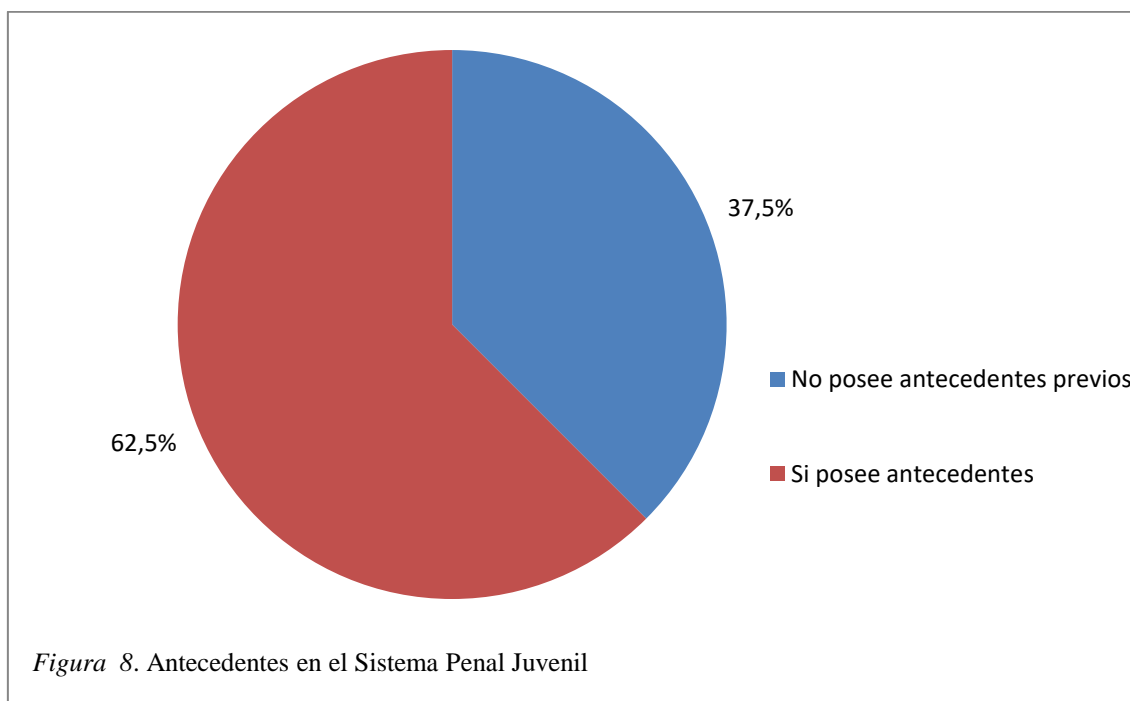


Estos datos coinciden con el discurso de los padres que asisten al POF y con los informes, ya que aparece recurrentemente que el motivo por el cual sus hijos se encuentran en el Centro Socioeducativo es por robo calificado y robo simple. Mientras que muy por debajo de este grupo, se ubica el resto de los delitos.

Duschatzky y Corea (2009) afirman que la práctica del robo en las condiciones de existencia en los barrios periféricos constituye una opción naturalizada, al punto de considerarlo en ocasiones una forma de trabajo, siendo uno de los códigos de socialización en los escenarios que frecuentan los jóvenes. Por lo tanto, la práctica del robo participa de las estrategias de reproducción de la vida cotidiana: se roba para comer, vender o satisfacer el inmediateismo del consumo. En este sentido, Catena y Redondo Illescas (2013) mencionan que el robo, permite la obtención de gratificaciones materiales, es decir que para algunos jóvenes es un medio de procurarse bienes necesitados o deseados de manera fácil, eficaz e inmediata, especialmente cuando existen carencias socioeconómicas significativas. Fue frecuente encontrar en las

entrevistas que los hijos les manifestaban a los padres que robaban para consumir, o para tener plata.

ANTECEDENTES EN EL SISTEMA PENAL JUVENIL

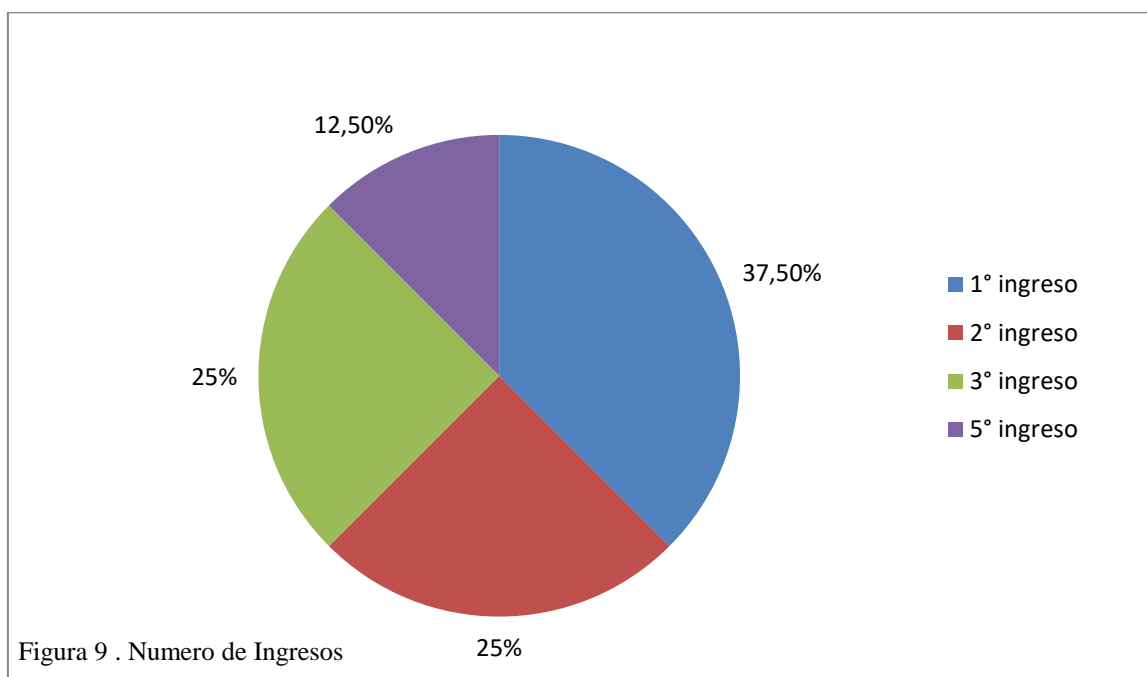


La variable que se presenta da cuenta de si el adolescente posee antecedentes en el Sistema Penal Juvenil o si es la primera vez que tiene un conflicto con la ley penal. De acuerdo los datos obtenidos, 5 de los adolescentes, es decir 62,5 % poseen antecedentes en relación a la transgresión de la ley penal y 3 adolescentes, es decir 37,5%, no tuvieron conflicto con la ley previamente, es decir es la primera vez que ingresa al Sistema Penal Juvenil

En esta misma línea el Unicef (2007) en el relevamiento Nacional de los dispositivos penales juveniles, plantea que, en relación a los antecedentes en la comisión de delitos, más de la mitad de los adolescentes había cometido delitos con anterioridad.

INGRESOS AL CENTRO SOCIOEDUCATIVO “COMPLEJO ESPERANZA”

Esta variable refiere a la cantidad de veces que los adolescentes alojados en el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza han ingresado a dicha institución. En la Figura 9 es posible observar, que el 37,5% (3 casos) no ha tenido ingresos previos, es decir es su primer ingreso. El 25% (2 casos) han tenido 3, el otro 25% (2 casos) 2 ingresos y el 12,5% (1 caso) restante ha ingresado a la institución en 5 ocasiones.



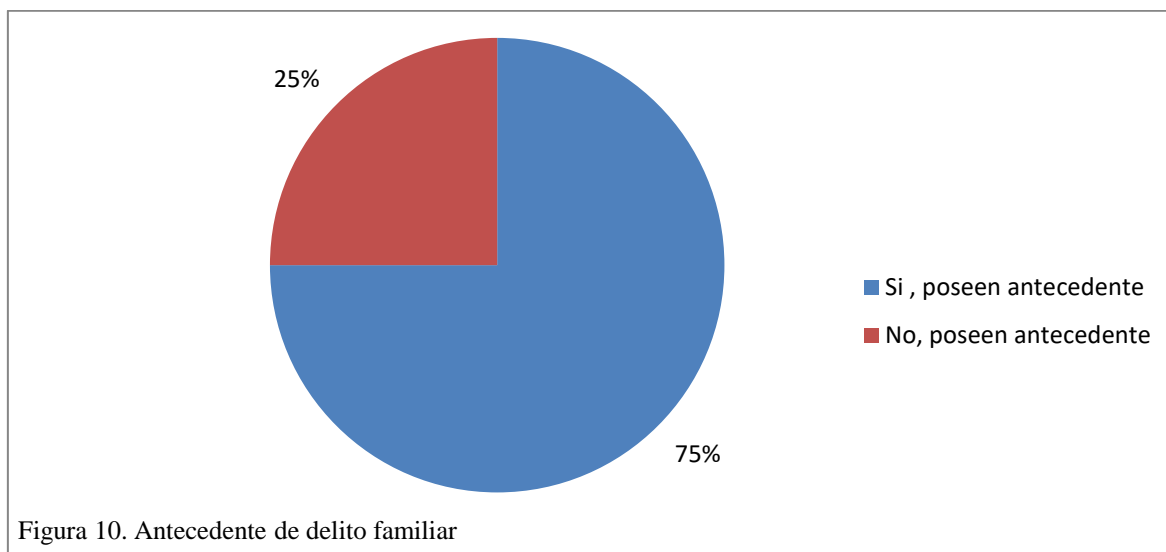
Los datos obtenidos muestran un alto índice de reincidencia por parte de los adolescentes, López, Gómez y Noreña (2013) mencionan que dicho fenómeno se debe a una multifactorialidad de aspectos entre los cuales se encuentran de índole personal, familiar y socioeconómica. En lo personal convergen los conflictos emocionales, las características de la personalidad y las relaciones interpersonales; los aspectos de índole familiar refieren a la desintegración familiar y dificultades en la dinámica interna; mientras que el aspecto socioeconómico está determinado por falta de oportunidades desde lo social, educativo y dificultades económicas.

A cada adolescente que ingresa al dispositivo penal juvenil se le imputa la presunta comisión de un delito por lo que se da inicio a una causa penal, la cual puede estar compuesta por uno o más delitos, por lo cual la cantidad de delitos por año es mayor a los ingresos-causas. Por último, en esta misma línea, si bien los datos obtenidos hacen referencia a la cantidad de ingresos al

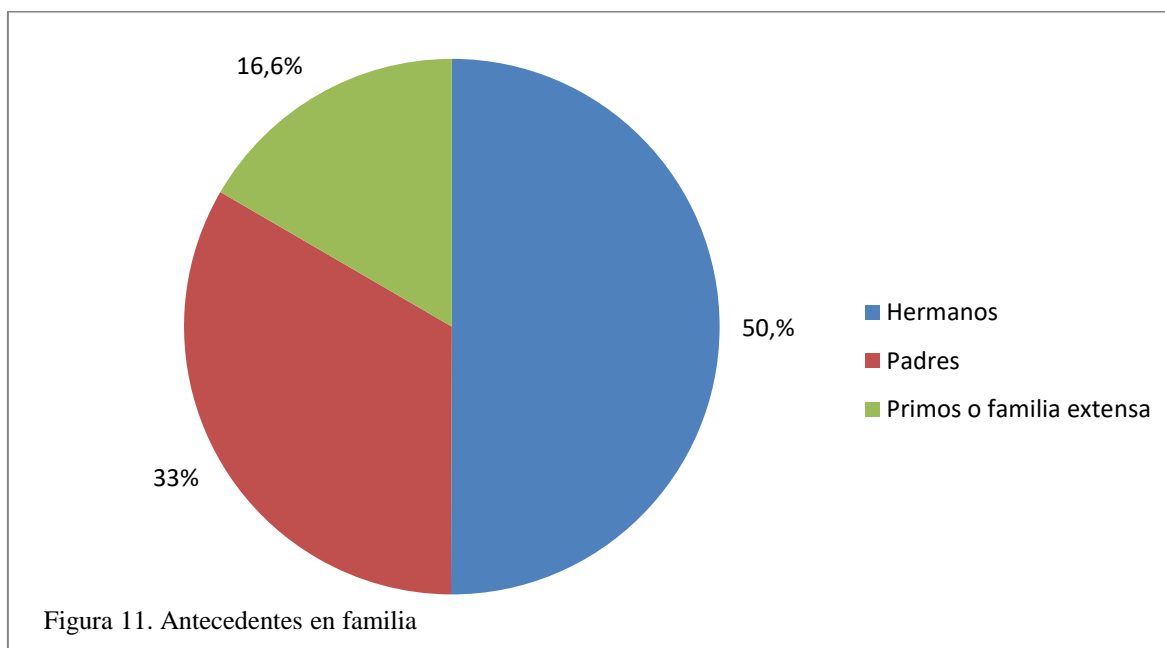
Centro Socioeducativo Complejo Esperanza, en el taller de padres, en las entrevistas y en los documentos institucionales, además surgió con frecuencia que la mayoría de dichos adolescentes contaban con detenciones previas en comisaría

ANTECEDENTES DE DELITO FAMILIAR

De acuerdo con Loeber y Farrington (2000) la comisión de delitos por parte de los padres es un factor de riesgo para el ejercicio de conductas antisociales en sus hijos. El arresto de un familiar incrementa la probabilidad de que algún miembro de la familia de la siguiente generación transgreda la ley, así también tener hermanos que delinquen aumenta el riesgo de comportamiento violento.



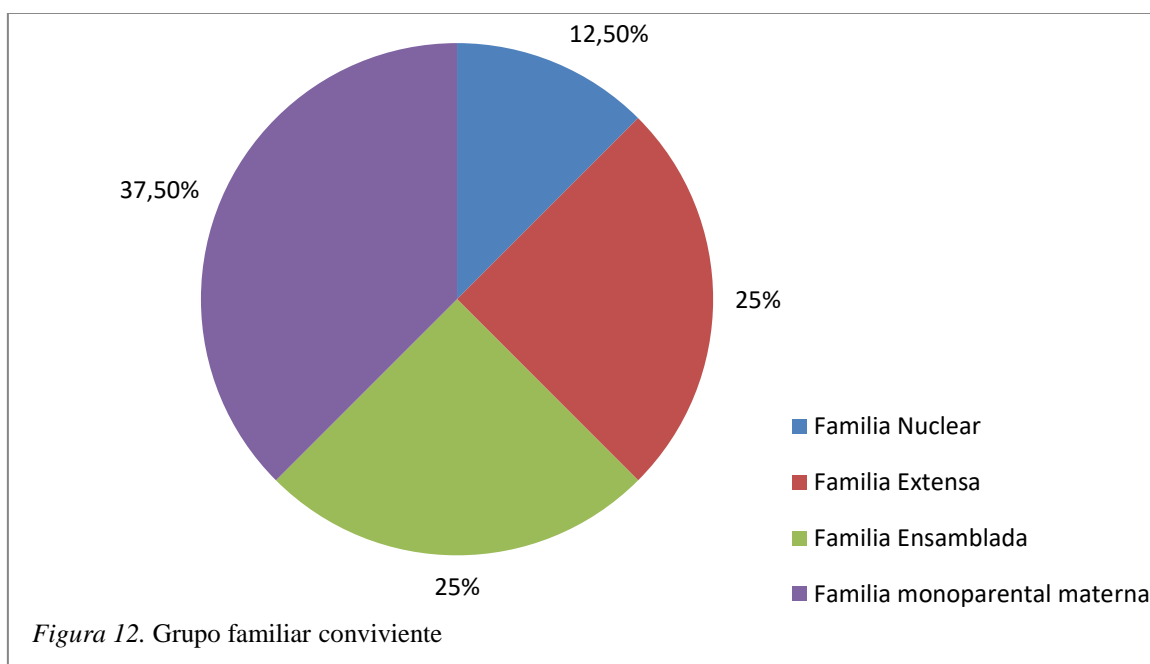
En la Figura 10 es posible observar que 6 de los adolescentes (75%) tiene al menos un familiar con antecedentes penales. En cambio, los dos adolescentes restantes (25%) no poseen familiares con antecedentes. En las entrevistas como en los documentos institucionales aparece con frecuencia que los mismos se dan por parte de los padres, hermanos, primos o familia extensa. Esto último se ve reflejado en la figura 11, donde el 50% (3 casos) de quienes poseen antecedentes familiares, lo tienen por parte de los hermanos, el 33,3% (2 casos) por el padre y el 16,6% (1 caso) desde los primos o familia extensa.



Además, estos datos coinciden con lo planteado por Croccia y Cosacov (2007) quienes refieren a que un alto porcentaje de los adolescentes poseen antecedentes familiares y que entre quienes poseen antecedentes en sus familias, en la mayoría de los casos el familiar con antecedentes es el hermano, donde además el delito preponderantemente cometido por los familiares de las víctimas es robo. Esto último puede observarse en el discurso de las madres que asisten al POF: “*Si, él empezó a robar y drogarse porque lo ve al hermano.*” (Entrevista caso n° 1, 4 de octubre de 2019)

GRUPO CONVIVIENTE O FAMILIAR

La variable grupo conviviente o familiar hace referencia a las personas que convivían con el adolescente previo a su ingreso al Complejo Esperanza. Las categorías seleccionadas para su clasificación fueron: familia nuclear (vive con el padre, la madre y hermanos/as en caso de que los hubiese), familia extensa (implica a la familia nuclear y a otro familiar), familia ensamblada (un/a padrastro/madrastra e hijos/as de éstos, en caso de que los hubiera), y familias monoparentales paterna o materna (vive con uno de los padres). La observada diversidad de configuraciones familiares a la que estos adolescentes pertenecen da cuenta de la cada vez más creciente coexistencia de nuevas modalidades de constitución y desarrollo de las familias, alternativas al modelo patriarcal (Rojas, 2007).



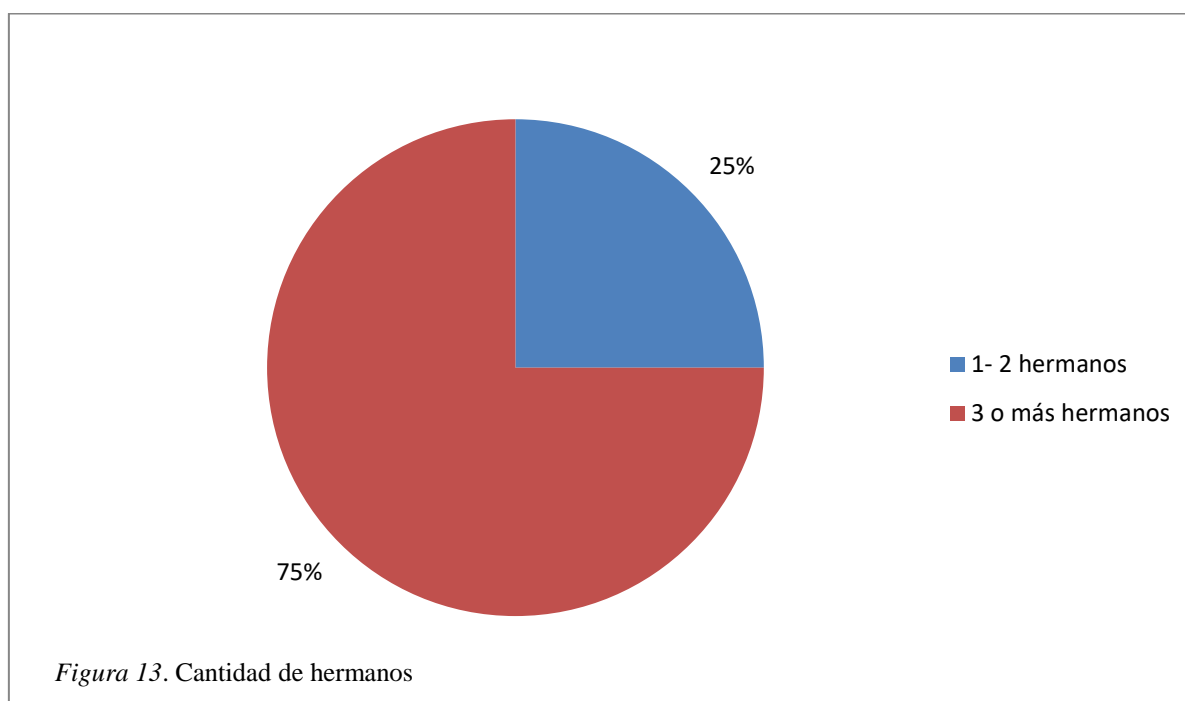
A partir de los datos obtenidos se construyó la Figura 12, en la cual es posible ver reflejado que el tipo de convivencia es muy variada. Solo 12,5% de los adolescentes (1 caso) convive con la familia nuclear, el 25% (2 casos) con la familia extensa, el otro 25% (2 casos) convive con familia ensamblada y el porcentaje más alto con un 37,5% (3 casos) es el de los adolescentes que viven con familia monoparental materna. Así, primaron las familias monoparentales, siendo la mayoría, aquellas donde el padre no convive con ellos. Esto coincide a su vez con lo que plantean Sarmiento et al. (2011) que en la composición familiar de los adolescentes en conflicto con la ley penal el padre generalmente está ausente y la madre se encuentra con varios niños a su cargo, lo cual podría dificultar una contención normativa y/o emocional eficaz.

Se indagó la variable grupo de convivencia de los adolescentes en conflicto con la ley penal ya que como plantea Abaunza Forero, Mendoza Molina, Paredes Álvarez y Bustos Benítez (2016) la privación de la libertad de uno de los miembros de la familia, sin lugar a dudas constituye una crisis paranormativa extrema y requiere por tanto de un arduo proceso de adaptación, frente a los cambios que se derivan de esta situación. Esto se puede ver en la entrevista cuando una de las madres manifiesta *“A mí me afectó mucho, porque nosotros compartimos mucho, dormíamos todos en la misma pieza y ahora no verlo en la pieza cada vez que me levanto me pone muy triste”* (Entrevista caso N° 2, 11 de octubre de 2019). Además,

siguiendo con el planteo de los autores al momento de la posterior reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal, el núcleo familiar constituye un factor fundamental ya que su influencia puede ser una red de apoyo o bien un riesgo de reincidencia.

CANTIDAD DE HERMANOS

Esta variable hace referencia a la cantidad de hermanos que tienen los adolescentes en conflicto con la ley penal. Se observó que la misma varía de 1 a 10, habiendo un promedio de 4 a 6 hijos/as por familia, lo cual podría dar cuenta de que estos adolescentes pertenecen a familias numerosas. Estos datos se ven reflejados en la Figura 13, en la cual 6 de los adolescentes (75%) poseen más de 3 hermanos, mientras que solo dos (25%) tienen entre 1-2 hermanos.

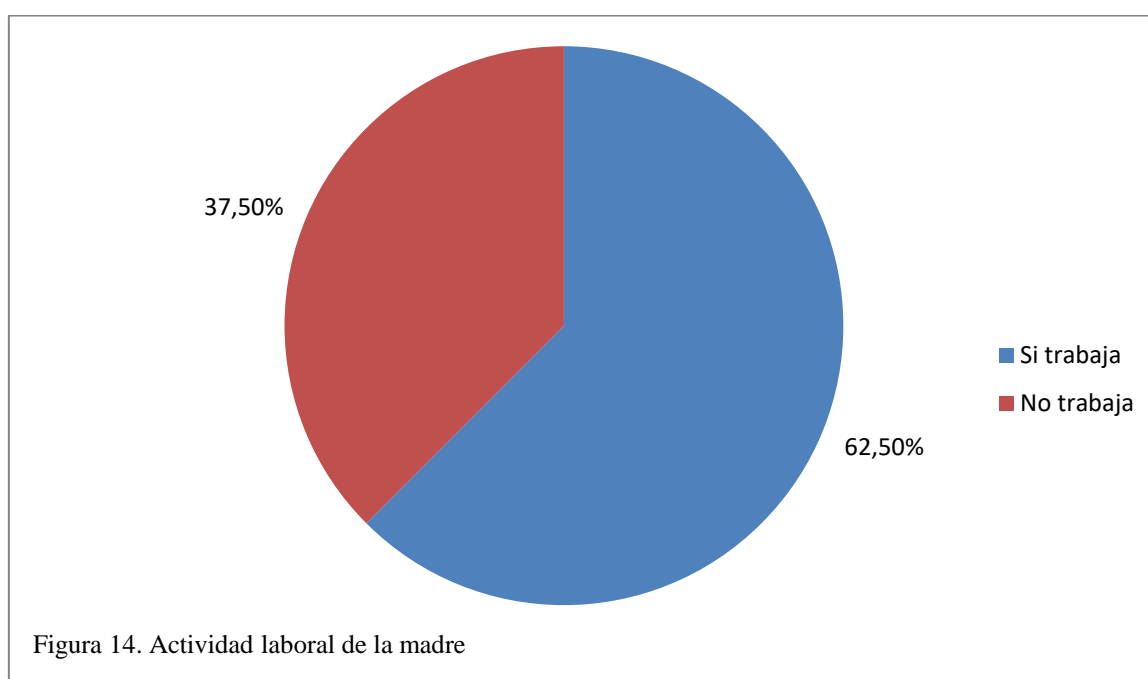


En base a estos datos retomamos a Pevalin et al. (2003) quienes expresan que el tamaño de la familia, como el número de hermanos o la presencia de ambos padres en el hogar, se ha relacionado con un aumento de la probabilidad de ejercer conductas antisociales. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que el poder predictivo de estas variables depende o está en función de otras relativas al funcionamiento del hogar, como las prácticas de crianza o la calidad de las relaciones. Es decir, un mayor número de hijos conlleva un menor grado de supervisión, lo cual

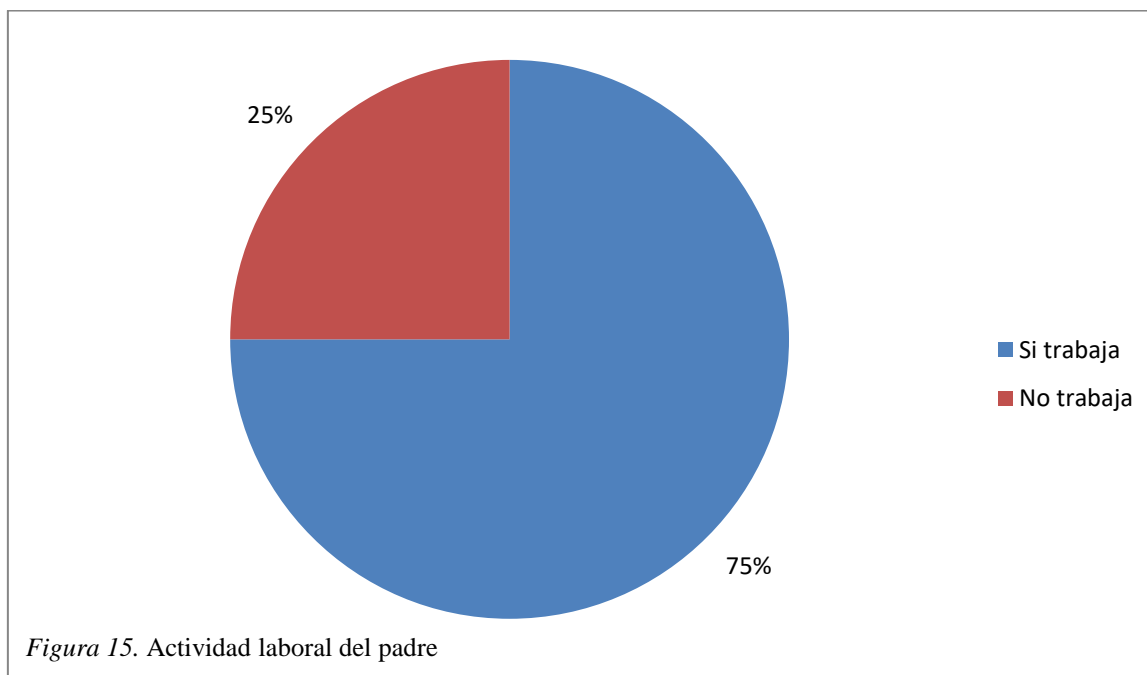
incidirá sobre la conducta problema, al igual que un hogar roto donde falta uno de los padres conlleva mayores conflictos .

ACTIVIDAD LABORAL DE LOS PADRES

Esta variable se divide en dos subvariables. Por un lado, la actividad laboral de las madres y por otro lado la de los padres. Como se puede observar en la Figura 14, el 62,5% (5 casos) de las madres que fueron entrevistadas en el POF llevan a cabo alguna actividad laboral y 37,5% (3 casos) restante no realizan actividad laboral fuera de la casa manifestando en los informes y entrevistas ser amas de casa. La actividad laboral más recurrente de las madres es empleada doméstica y, en menor medida, empleada de comercio o vendedora ambulante.

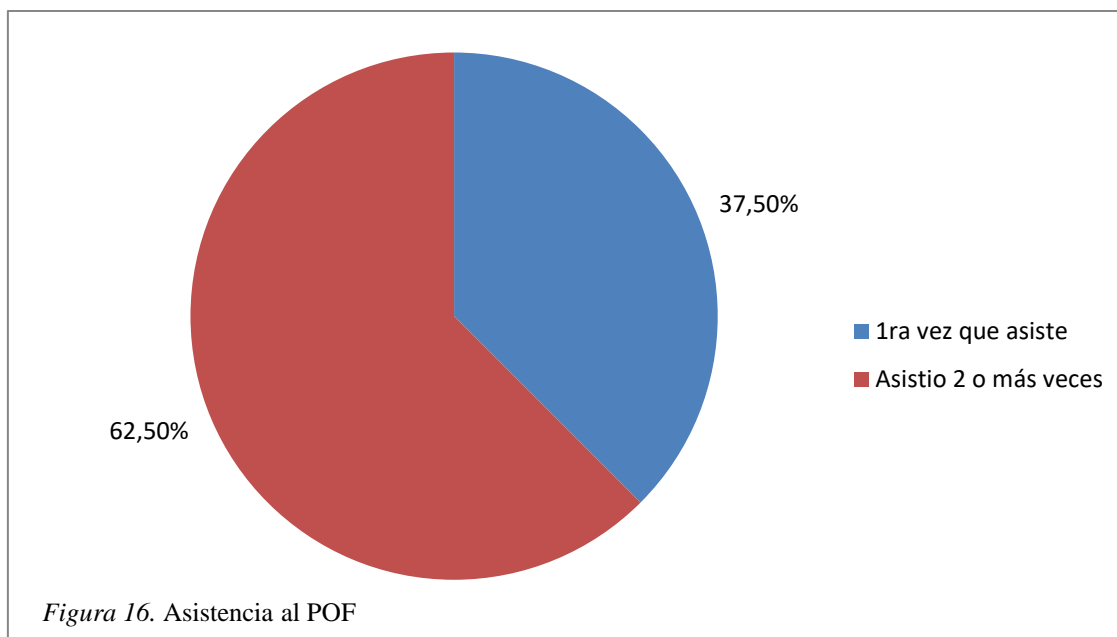


En relación a la actividad laboral de los padres, se puede ver reflejada en la Figura 15. Donde se observa que el 75% (6 casos) se encuentra desempeñando alguna actividad laboral, mientras que el 25% (2 casos) no realiza ninguna actividad. Entre las actividades que desarrollan la mayoría se encuentran el área de la construcción, en obras o en trabajos como pintor, gasista, electricista, cuidador de autos, carrero y changas.



Lo expuesto coincide con lo que plantean Bertranou y Casanova (2013) acerca de que en la región aún hay 130 millones de personas ocupadas que solo consiguen trabajo en la informalidad, una zona turbia de las economías donde se perpetúa la pobreza y se potencia la desigualdad. Además, en todos los países latinoamericanos está presente la informalidad laboral. Hay una gran cantidad de personas atrapadas en empleos de mala calidad, con ingresos bajos, inestables, sin perspectivas, sin derechos ni protección social.

ASISTENCIA AL POF



A partir de los datos obtenidos en las entrevistas y en los documentos institucionales se construyó la Figura 16, la cual refiere a la asistencia de los padres de los adolescentes en conflicto con la ley penal al Taller de Padres. El 62,5 % (5 casos) asistió 2 o más veces, y el 37,5% es la primera vez que asiste al mismo. Además, en base a lo observado y registrado, el 77,7 % son las madres las que asisten con mayor frecuencia al Taller, solo el 22,2% corresponde a los padres. Esto coincide con lo que plantean Sarmiento et al. (2011), respecto a que el padre generalmente está ausente y la madre se encuentra sola cuidando a sus hijos, además de que carece de una red familiar que la contenga y sostenga en su rol materno. No suelen encontrarse otros integrantes de la familia que mantengan un compromiso formal con los jóvenes.

A modo de resumen, las características sociodemográficas de los adolescentes en conflicto con la ley penal cuyos padres asistieron al Taller de Padres del POF durante los meses de abril a noviembre del año 2019 serían las siguientes:

Se caracterizan por ser en su totalidad del género masculino, tener entre 14 y 17 años, con un mayor porcentaje a los 16 años. Se encontró que existe coincidencia con investigaciones llevadas a cabo en la provincia de Córdoba, en cuanto a que las conductas transgresoras principalmente se manifiestan en el rango etario que comprende las edades entre 16 y 17 años. Todo ello permite inferir que las conductas transgresoras se dan con prevalencia en estas edades.

En cuanto a la escolarización, se observó que el número de adolescentes que abandonaron los estudios antes de ingresar al Complejo Esperanza (87,5%) supera ampliamente a quienes continuaban sus estudios (12,5%). Además, es muy bajo el porcentaje de adolescentes que han completado el primario. Por lo tanto, podríamos considerar que, en general, no se observó una inclusión al sistema educativo ni logró éste consolidarse como un espacio de contención para ellos. En relación a esto retomamos a Barron (2010), quien plantea que la labor educativa se ve dificultada actualmente por la falta de normas precisas desde el entorno social, la carencia de figuras representativas para el adolescente, junto a una crisis de la autoridad en las estructuras familiares, escolares y sociales. Sin embargo, una vez que ingresaron al Centro Socioeducativo, un alto porcentaje (75%) de los adolescentes comenzó el PIT.

Por otra parte, es posible observar que más de la mitad han realizado alguna actividad laboral, siendo estas en su mayoría vinculadas a changas, construcción, venta ambulante. De acuerdo con Vázquez González (2012) la mayoría de los trabajos a los que acceden los adolescentes se caracterizan por los altos niveles de precariedad, inestabilidad con bajas remuneraciones y calificación.

El total de los adolescentes en conflicto con la ley penal consumen algún tipo de droga, y más de la mitad (62,5%) asiste al programa de asistencia en adicciones. En este sentido, si bien es cierto que no existe una relación causal entre el consumo y el delito, se sabe que las personas que consumen drogas ilegales son más propensas que otras a cometer actos que quebrantan la ley (San Juan, Ocariz y Germán, 2009).

Con respecto a la conducta de transgresión por la cual los adolescentes se encuentran en el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza, la categoría que notoriamente se destaca con un porcentaje alto es la de robo, en sus diferentes variantes. Además, más de la mitad de los adolescentes que se encuentran allí poseen antecedentes de transgresión a la ley penal. En este sentido cabe destacar en relación al número de ingresos, que más de la mitad (62,5%) de los jóvenes reincidieron, siendo mayoritarios (dentro de éstos) los segundos y terceros ingresos, encontrándose hasta cinco. Así también otro factor de riesgo que podría incidir en la conducta de los adolescentes está vinculado a los antecedentes de delito familiar, en relación a esto se pudo observar que el 75% poseen antecedentes en su familia y la mitad de ellos se da por parte de los hermanos.

En relación al grupo conviviente, según los datos obtenidos, se observó que la familia monoparental materna posee prevalencia en relación a las constituciones familiares restantes. A través de las entrevistas realizadas se pudo detectar que en estas familias se destaca la

presencia de la figura materna, sin contar con soporte de pareja. Además, hay un porcentaje alto de familias numerosas, el 75% posee desde 3 a 10 hermanos.

Es posible observar que tanto las madres como los padres desarrollan algún tipo de actividad laboral, cabe destacar que estas son informales y poco remuneradas. Esto daría cuenta de lo planteado por Giorgi (1996), respecto a que estos sectores de la población son funcionales a la economía, ocupando un lugar desventajoso al formar parte del mercado informal del trabajo. Por otra parte, en cuanto a la asistencia de los mismo al taller más de la mitad asistieron 2 o más veces.

Por último, es fundamental destacar el aporte de Pichon- Rivière y Pampliega de Quiroga (1985) acerca de que cada una de las situaciones que vive el adolescente conformarían sus condiciones concretas de existencia y son estas experiencias las que van a influir en la subjetividad. Es por esta razón que la caracterización sociodemográfica nos permite entender a todo sujeto como inmerso en un contexto con el cual interactúa.

10.7.2 FACTORES DE RIESGO DESDE EL DISCURSO DE LOS PADRES ANTES DE LA INTERVENCION DE SENAF

En el presente objetivo, se intentará identificar los factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes en conflicto con la ley penal desde el discurso de los padres en las entrevistas llevadas a cabo antes de la intervención de S.e.N.A.F. Para lograr responder al mismo, se realizaron 9 entrevistas a padres, se leyeron documentos institucionales y se registró en cuaderno de campo a partir de la observación no participante del Taller de Padres. Dos de los padres entrevistados eran de un mismo adolescente, pero estaban separados, razón por la cual se toma como 8 casos. Los padres y las madres de los adolescentes que ingresan al Sistema Penal Juvenil pueden llegar al POF a partir de una disposición judicial o voluntariamente y, quienes comienzan el Taller de Padres, deben asistir al menos a tres encuentros para obtener el certificado de haber concluido el proceso. El objetivo principal del taller es brindar un espacio donde padres y madres puedan analizar y reflexionar acerca de su rol, no sólo para evitar que su hijo/a vuelva a ingresar al Sistema Penal Juvenil, sino para replicar estos cambios en todos sus hijos/as.

Parece fundamental definir en esta instancia qué se entiende por factores de riesgo. Son variables que pueden afectar negativamente el desarrollo de las personas. En términos más específicos, Hein, Blanco y Mertz (2004) afirman que:

Cuando se habla de factores de riesgo se hace referencia a la presencia de situaciones contextuales o personales que, al estar presentes, incrementan la probabilidad de desarrollar problemas emocionales, conductuales o de salud. Estos problemas promueven la ocurrencia de desajustes adaptativos que dificultarían el logro del desarrollo esperado para el joven en cuanto a su transición de niño a adulto responsable y capaz de contribuir y participar activamente en la sociedad. (p.2)

Jessor y Jessor (1991), citado por Beroña (2008), plantean que los factores de riesgo en adolescentes son todos aquellos aspectos que se encuentran en el entorno y que motivan a que el adolescente realice conductas que puedan comprometer su desarrollo adolescente. Además, Hein et al. (2004) refieren que los factores de riesgo pueden ser clasificados en 6 ámbitos de procedencia, de acuerdo a un continuo que va desde el nivel individual hasta el nivel sociocultural: individuales, familiares, ligados al grupo de pares, escolares, sociales y socioeconómicos y culturales.

Por otra parte, se entenderá por familia a “una organización abierta y compleja, por ende, multidimensional y fluctuante, entramada en la red sujeto/vínculo/cultura. En dicha organización familiar se despliegan procesos y operatorias inconscientes. La caracterizan el flujo y la diversidad, pero también puntos de anclaje y permanencias” (Rojas, 2011, p. 173). Autores como Bleichmar (2008) redefinen a la familia como una asimetría que determina la responsabilidad del adulto con respecto al niño. Así, proponen que “en la medida que haya dos generaciones, hay una familia, con la asimetría correspondiente que orienta a la obligatoriedad de la transmisión y de la producción de sujetos en el interior de algún tipo de comunidad humana” (p. 45).

Los paradigmas que sostuvieron durante siglos lo que se entiende por familia vienen siendo cuestionados. Giberti (1996) sostiene que el modelo único tradicional de familia, derivado de los cánones del patriarcado, excluyen las cada vez más crecientes modalidades de constitución y desarrollo de las familias. La idea de familia como unidad o totalidad inamovible dificulta las alternativas que podrían elegir quienes las construyen, limitándolos en sus posibilidades como

sujetos capaces de transformaciones personales y sociales. Los fenómenos actuales como el divorcio, los nuevos matrimonios que conforman familias ensambladas, las familias de un solo progenitor, la fertilización asistida, los cambios en el rol de la mujer, la mayor aceptación de las parejas homosexuales, entre otros, han incrementado la diversidad de familias cuestionando el modelo ideal como cerrado y estable. Por lo tanto, cada familia es una construcción original y existe gran diversidad en la conformación de las mismas (Rojas, 2005). Es por esta razón que diferentes autores como Delucca, Oddera y Martínez (2010) conceptualizan a la familia como heterogénea y cambiante ya que, la organización de las mismas cambia tanto a través de los tiempos históricos como de una cultura a otra, así como también, en su propio devenir, siendo este último el aspecto que mayores transformaciones conlleva. Tales modificaciones en la organización familiar cuestionan su consideración como una estructura con lugares y denominaciones de parentesco invariantes, acentuándose de esta manera, en la cualidad plural de “las familias” y dejando de acudir a una conceptualización de “la familia” como única y totalizante.

FACTORES DE RIESGO DESDE EL DISCURSO DE LOS PADRES ANTES DE LA INTERVENCION DE SENAF

Como se mencionó anteriormente, en el presente apartado se analizarán los distintos factores que los padres consideran que podrían haber facilitado la trasgresión penal de sus hijos, antes de la intervención de la Se.N.A.F

De los factores de riesgo propuestos por Hein et al (2004) se pudieron identificar en los discursos de las 9 entrevistas realizadas a los padres de los 8 casos, las siguientes categorías: factores individuales, familiares, ligados al grupo de pares y socio-comunitarios. Es importante resaltar que los factores que se expondrán a continuación son solo aquellos que los padres reconocieron desde su subjetividad.

- FACTORES INDIVIDUALES

De acuerdo con Hein et al (2004) existe una serie de características personales que han sido asociadas al desarrollo de comportamiento delictivo. En esta misma línea, Vásquez González (2003) refiere a que se incluye dentro de los factores individuales no solo las cualidades

personales sino también los “factores biológicos y físicos” refiriéndose a factores orgánicos que han constituido para el adolescente una posible fuente de desarreglo emotivo, obstáculos en el proceso de crecimiento y el logro de una madurez en consonancia con su edad.

Los factores individuales reconocidos por los padres fueron: conducta violenta y agresiva, necesidad de pertenencia e inmediatez y vivencia de situaciones traumáticas. De los 8 casos a los que se entrevistó, 5 de ellos reconocieron a estos factores como de riesgo

- CONDUCTA VIOLENTA O AGRESIVA

Dentro de los factores individuales, una primera categoría está vinculada a la conducta violenta o agresiva de los adolescentes. Las madres de los casos N° 2 y 4 en su discurso identificaron este comportamiento en sus hijos. La madre del caso N° 2 sostuvo: *“Él está ahí porque se tenía bronca con otro chico y se quedó caliente y se fue con otro amigo y se le metió a la casa, le pego tres tiros (...), no sabe controlar su enojo, siempre se agarran a las trompadas con otra banda del barrio”* (Entrevista Caso N° 2, 11 de octubre de 2019).

Lo manifestado por la madre se relaciona con lo que plantea Abdel Masih (1995), respecto a que la violencia implica una regresión desde la posibilidad de utilizar las palabras como medio de comunicación, a situaciones donde ésta no tiene lugar y es reemplazada por acciones enajenadas de sentido o por palabras utilizadas a modo de actos. Los adolescentes con características transgresoras tienen como particularidad que les suele resultar complejo expresar con palabras las emociones. En lugar de la palabra como elemento privilegiado para la mencionada tramitación cobra preeminencia el accionar impulsivo (Laursen y Marqués, s.f). Un dato importante que fue posible indagar en los informes institucionales revisados, es que en el caso N° 2 el adolescente se caracterizaba por desafiar frecuentemente a la autoridad, lo cual podría estar vinculado con este tipo de conducta. Se presentó con frecuencia, en el discurso de padres y madres, problemáticas como peleas e insultos con otros pares que no pertenecían al grupo de amigos de su hijo. Las madres refieren a que sus hijos resuelven los conflictos a las trompadas e incluso en ocasiones utilizan armas.

Esta dificultad para resolver conflictos a su vez podría estar relacionada con lo que plantean Gómez et al. (2007), respecto a que frecuentemente se recurre a la violencia y a la agresión para dominar a otros semejantes o para tratar de gestionar conflictos. Barrón (2010) sostiene que en los adolescentes los síntomas de desborde agresivo son el reflejo de una dificultad en el control

de impulsos y una falta de límites bien definidos, lo cual no les permite incorporar “la palabra” como intermediario en el “acting”. La autora expresa que esos desbordes agresivos se manifiestan a través de actos violentos, que pueden ser conducidos hacia el mundo externo con conductas destructivas, robo, violación, entre otras; o pueden ser conducidos hacia sí mismos, manifestándose con conductas adictivas, autodestrucción, etc. Con respecto a aquellos actos conducidos hacia el exterior es importante destacar, que tanto en el caso N° 2 como el N° 4, se trata de adolescentes que han cometido robo. Por lo cual es posible que esta conducta sea un reflejo de la dificultad de los mismos para controlar sus impulsos.

Se puede observar que, ante problemas entre vecinos o gente de otros barrios, aparecen las respuestas violentas como modalidades cotidianas de resolverlas, entre ellas, el uso de armas de fuego y golpes. De esta manera, se podría hipotetizar que la continua exposición a estas expresiones de violencia desembocaría en una legitimización de la misma como alternativa de resolución de conflictos. Esto además lleva a interrogarse acerca de: ¿qué lugar ocupa la palabra en las familias de estos adolescentes? ¿De qué manera las familias resuelven los conflictos?

Por otra parte, la madre del caso N° 4 manifestó en su discurso: *“Mi hijo se enoja todo el tiempo, cada vez que se pelea con alguien de la casa insulta y se va a la calle. Y cuando se va hace cagadas con los amigos. Él está en el Complejo por desobediente, por enojarse y no pensar las cosas. Porque no le importa nada para conseguir plata, él quiere plata”*. (Entrevista caso N°4, 8 de noviembre de 2019). Esto podría relacionarse con lo que proponen Varela et al. (2006), respecto a que los adolescentes en conflicto con la ley penal suelen caracterizarse por lo que se denomina como: la compulsión a la acción, es decir el pasaje del impulso a la acción directa, sin la intervención del pensamiento como instancia mediatizadora. El sujeto tiende a actuar la necesidad como un impulso incontrolable, sin medir las consecuencias, como a su vez tampoco tener registro de los otros, comprometiéndose en situaciones de riesgo individual y social. Otro aspecto importante a destacar que se pudo observar en el taller es que, tanto el padre como la madre del caso N° 4 se comunican de manera agresiva. Lo que podría posibilitar de esta manera que los hijos aprendan que la violencia es una medida eficiente para resolver conflictos.

- INMEDIATEZ Y NECESIDAD DE PERTENENCIA

Una segunda categoría dentro de los factores individuales es la inmediatez y la necesidad de pertenencia. Pertenecer y ser aceptado por un grupo es, según Maslow (1943) una necesidad humana fundamental. La mayoría de los seres humanos muestran un claro deseo de pertenecer y ser parte de algo más grande que ellos mismos. Esta necesidad de pertenencia desborda el ámbito familiar donde se satisface inicialmente y se extiende después al trabajo, al grupo de amigos, al barrio o comunidad local donde vivimos, y a las diferentes asociaciones y redes culturales o sociales con las que nos relacionamos a lo largo de nuestra vida. Pertenecer y ser aceptado en un grupo nos permite desarrollar relaciones sólidas y estables con otras personas y participar del flujo afectivo que las recorre. En este sentido, la necesidad de pertenencia es, en última instancia, la necesidad de dar y recibir afecto de otras personas, de ser parte de un entramado sólido de relaciones afectivas que nos nutren y que sostienen nuestra existencia. Mientras que, por otra parte, se entiende por inmediatez al fenómeno que se ha instaurado en nuestra cultura actual, a la necesidad imperiosa de tener todo ahora, sin esperas.

En este sentido, las madres del caso N° 4 y 7 refieren como un factor de riesgo en sus hijos a la vivencia del tiempo presente como absoluto. La madre del caso N° 7 sostiene: “(...) *Y él quería un celular y entonces él salió a la calle y lo robo, recién terminábamos de comer, lo levantaron en la esquina. Viste como son los hijos, quieren todo ya*” (Entrevista caso N° 7, 29 de noviembre de 2019).

Esto que manifiesta la madre en su discurso está vinculado con los planteos del autor Rubio (2005), quien refiere a que en la era actual los adolescentes están seducidos por la inmediatez. Las actuales adolescencias forman parte de un momento histórico de amplia oferta: niveles de ocios virtual y físico, seducción estética, consumo, posicionamiento en redes sociales, es decir, estímulos y apoyos que dinamizan el escenario de referencia de adolescentes. Factores todos ellos dinámicos, que forman parte del amplio abanico de posibilidades y estímulos que les rodean. Con respecto a este caso resulta fundamental destacar que la madre en el taller refiere a que su hijo siempre que salía a robar lo hacía porque quería plata para comprarse ropa, zapatillas o celular, por lo que podría pensarse que en el adolescente hay una vivencia del tiempo como inmediato, como absoluto y no hay tolerancia a la frustración.

La madre del caso N° 4 en la entrevista dijo: “*El roba cuando quiere un par de monedas, quiere comprarse algo y sale a robar. Yo le digo que me pida a mí y el hermano le dice lo mismo. Yo me he cansado de decirle, pero el roba porque después con eso compra marihuana*”. (Entrevista Caso N° 4, 8 de noviembre de 2019). Esto coincide con lo que plantea Bourdieu

(2005) respecto a que los jóvenes viven la inmediatez del presente, desde antes de encontrarse en encierro:

La reproducción del orden social se realiza solo a través de estrategias y prácticas mediante las cuales los agentes se temporalizan así mismos y hacen el tiempo del mundo (situación que no les impide experimentarlo frecuentemente como una realidad trascendente sobre la cual no tienen ningún control.) (p.123)

De este modo, los jóvenes de los casos N° 4 y 7 actuarían impulsados por la inmediatez de satisfacer sus deseos, sin medir las consecuencias, aparece un goce repetido, inmediato y sin esperas, más allá del cortejo previo y de los planteamientos de futuro. Por otra parte, de manera similar, se puede observar que el pasado en varios de los relatos de las madres es reconocido como productor del presente de sus hijos y en otros, solo se hace referencia a su existencia como lo que simplemente fue. El futuro aparece como incierto. Es posible pensar a partir de este discurso que los adolescentes vivirían la inmediatez también en sus relaciones y en el espacio, en el cual a su vez el tiempo es vivido como eterno. No existiría un plan, ni proyección, van viviendo el día a día de la calle, pero si existen sueños, deseos que los viven como inalcanzables, pero son los que harían posible persistir y prosperar. Por lo tanto, como sostienen Ferreyra, Lucero y Valdez (2011) la adolescencia es una etapa de cambios, de experimentación, de búsqueda de la propia identidad y el contexto social invita a los jóvenes a vivir en la inmediatez, en la procura de placer a cualquier precio. Estos factores los convierten en un grupo social en permanente riesgo.

Por otra parte, el padre del caso N° 3 refiere a la necesidad de pertenencia como un factor de riesgo que lleva a sus hijos a realizar conductas transgresoras. “(...) *Si por que la mala junta y la edad, está en plena formación y es fácilmente manipulable. Yo no sé, pero me imagino que los amigos le deben haber dicho bueno vamos. Lo pueden haber inducido, la tentación esta siempre ahí en la calle*” (Entrevista caso N° 3, 25 de octubre de 2019)

Lo manifestado por el padre se encuentra en concordancia con lo planteado por Martínez Criado (2003), quien desarrolla sobre la importancia del grupo en esta etapa de la vida. Dicho autor sostiene que interactuar con otros “iguales” resulta necesario para el desarrollo psicológico y la socialización ya que pertenecer al grupo tiene por función proveer soporte y comprensión, sentido de pertenencia y estatus, así como también, oportunidad de representar un papel y de percibir la propia competencia. Bajo la protección del grupo, el adolescente se enfrenta y modifica prácticas familiares que durante la infancia fueron inmutables, pudiendo esto ocasionar enfrentamientos con los padres. Mediante sus relaciones en grupo, el adolescente

se consolida emocionalmente y aprende habilidades sociales logrando una identidad personal. Sin embargo, el grupo puede facilitar o restringir el desarrollo de la individualidad, pudiendo convertirse en un factor de riesgo.

Un dato importante de este caso es que la madre sufrió violencia de género por parte del padre y los hijos fueron testigos, es decir que el adolescente es víctima de violencia familiar, lo que podría haber posibilitado que busque sentido de pertenencia en cada uno de los espacios extrafamiliares por los que transita, es posible que los amigos asuman el rol de referente brindándole una identidad y sentimiento de pertenencia a un grupo. En concordancia con esto Cohen (1994) expresa que los adolescentes, en parte, consolidan sus relaciones de pares por oposición a sus relaciones familiares. Lo que no encuentran con unas personas lo buscan en otras, por ejemplo: afecto, admiración, autoridad, etcétera. Así también Flores (2018) plantea que pueden ser inducidos más fácilmente a adoptar comportamientos antisociales y desviados, en muchas ocasiones por falta de modelos positivos en la familia y tienen la necesidad de pertenencia de ser parte de un grupo o una banda, porque no se sienten parte de una familia por la disfuncionalidad de esta.

Así también el padre del caso N° 4 refiere a que su hijo es influenciado por el grupo de pares: *“Salió a robar, supuestamente dice que estaba drogado, pero yo nunca lo vi. Pasa que él se junta con los amigos y le dicen hace esto y lo hace. Es un chico que se deja llevar mucho por lo que le digan los amigos”* (Entrevista caso N° 4, 15 de noviembre de 2019). En relación a esto Carrasco y Henríquez (s/f), citado en Cárdenas Paredes (2012), proponen que el formar parte de grupos o bandas ofrece compañía y permite conformar alianzas, desarrollando un sentido de pertenencia. Sin embargo, cuando esto no logra ser equilibrado con el sentido de pertenencia al sistema familiar, el adolescente busca encontrar su lugar a cualquier precio, sin medir los riesgos que corre en esa búsqueda. Una de las consecuencias, es encontrarse inmerso en el mundo de las drogas; lo que puede agravarse ante la posibilidad de transgredir la ley estando bajo efecto de éstas, o para tener acceso a las mismas.

Esto último puede observarse en el discurso del padre del caso N° 4, quien refiere que su hijo se encontraba bajo el efecto de drogas cuando salió a robar. Además, otro aspecto a destacar es que en el informe institucional del adolescente los profesionales referían a un consumo frecuente por parte del mismo. Por lo tanto, de acuerdo a lo observado y a los datos recabados se podría hipotetizar que, al encontrarse sin la compañía y el cuidado de los padres, el adolescente quedó más expuesto a las influencias de su grupo de pares de riesgo y, en consecuencia, más proclive a la transgresión y el consumo de sustancias. Las consecuencias del consumo podrían estar vinculadas a la incapacidad de empatizar con los demás,

desconociendo el perjuicio para la víctima y la falta de inhibición que dichas sustancias producen. En este sentido, si bien es cierto que no existe una relación causal entre las drogas y la transgresión, se sabe que las personas que consumen drogas ilegales son más propensas que otras a cometer actos que quebrantan la ley (San Juan, Ocariz y Germán, 2009).

- VIVENCIA DE SITUACIONES TRAUMÁTICAS

Una tercera categoría dentro de los factores de riesgo individuales es la vivencia de situaciones traumáticas. La madre del caso N° 6 en su discurso manifestó: *“Una es que ellos se criaron sin padre, se fue con una mujer y me dejo criándolos sola. Después hace un año se me murió una hija y eso le afectó mucho a él porque es una persona muy cerrada.”* (Entrevista caso N° 6, 29 de noviembre de 2019).

Lo relatado por la madre está vinculado a los aportes de Briouli (2007) respecto a que la vivencia de situaciones traumáticas genera una insuficiencia de herramientas para simbolizar la realidad, puesto que produce un impacto que desorganiza y genera cierta sensación de desconcierto. Cuando los jóvenes han vivido alguna situación traumática, ésta suele generar como consecuencia una autoestima muy débil, por lo que los sujetos pueden presentar una desconexión consigo mismos, con sus emociones y su cuerpo, ya que las experiencias de este tipo los han obligado a disociar cuerpo de emoción, para tolerarlas. Estos jóvenes que han sufrido rechazo, abandono, desamor, que han crecido en ámbitos callejeros o pro delictivos desde niños, pueden realizar determinadas acciones que repitan la experiencia de abandono. Así, la indiferencia al otro, el hurto, las conductas agresivas, son frecuentes en los sujetos que han sobrellevado experiencias traumáticas (Retuerto, 2009).

En el informe del caso N° 6 es posible observar que los profesionales refieren a que el adolescente no expresa sus emociones en las entrevistas, no hace referencia a la muerte de su hermana por lo que se podría pensar que el adolescente disocia su cuerpo de sus emociones como una manera de tolerar a las mismas. Esto puede explicarse también a partir de lo que plantean Quiroga y Cryan (2004) y Sarmiento et al (2011), al sostener que en el adolescente a nivel intrasubjetivo hay un déficit en la construcción de la trama representacional por la intensidad y la cualidad de situaciones vitales traumáticas acaecidas siendo el resultado, el uso de defensas primarias tales como la disociación, proyección y negación. Observándose diferentes maneras de exteriorizar el conflicto con una dirección hacia el medio social en forma de impulsividad, hiperactividad y baja tolerancia a la frustración; y hacia sí mismos como

sumisión, introversión, apatía, desgano, consumo de sustancias, y conductas autodestructivas. Otro aspecto a destacar de este caso es que el adolescente se encuentra en tratamiento por adicciones, por lo que se podría hipotetizar a partir de lo anteriormente dicho que uno de sus modos de exteriorizar el conflicto es a partir del consumo y del delito o la transgresión a la ley.

- FACTORES FAMILIARES

Otro de los factores de riesgo que los padres identificaron que facilitan las conductas transgresoras en sus hijos fue lo relacionado a lo familiar. De los 8 casos de los adolescentes cuyos padres fueron entrevistados, 6 reconocieron la existencia de factores familiares. Algunas de las variables que nombraron fueron: separación de padres, ausencia paterna, falta de atención y antecedentes de delito en la familia.

• AUSENCIA DE FIGURA PATERNA Y SEPARACIÓN DE PROGENITORES

Una primera categoría dentro de los factores de riesgo familiares que los padres identificaron en las entrevistas fue: la ausencia de la figura paterna y la separación o divorcio. Las madres del caso N° 1 y 6 hicieron referencia a la primera variable, es decir la ausencia del padre. *“Mi hijo le dijo al juez que se quería cambiar de nombre porque su papá nunca estuvo”* (Entrevista caso N° 1, 20 de septiembre de 2019)

Lo que la madre relata en la entrevista está relacionado con lo que plantea Vázquez González (2003), respecto a que el abandono de uno de los referentes familiares es una característica común en los adolescentes en conflicto con la ley penal y en la literatura criminológica internacional. Con frecuencia el padre abandona física y emocionalmente en la infancia a los hijos. Además, existe un abandono presencial de los progenitores por ausencia de comunicación, de confianza o de compartir tiempo entre los integrantes de la familia. El abandono parental despierta los sentimientos de soledad y rencor de los adolescentes, como se puede observar en este caso. La soledad en el hogar será entonces para los adolescentes el inicio de la búsqueda de otras redes sociales donde complementar su insatisfacción.

Un aspecto importante del caso N° 1, es que la madre en el primer taller al que asistió manifestó: *“Mi exesposo murió y desde ahí los chicos empezaron a hacer conductas de robo y ahora no me quieren dar a mi hijo más grande y después al más chico me lo llevaron a un*

hogar. Se cortó con un vidrio y le pregunté por qué lo hizo y me dijo por qué extraña a su papá. Mi hija además tiene HIV y me dice que no quiere vivir” (Registro taller de padres, 20 de septiembre de 2019). Podríamos decir por lo tanto que el abandono del padre en la infancia y su muerte de un paro cardíaco por consumo de sustancias, son circunstancias que podrían haber facilitado que sus dos hijos lleven a cabo conductas que transgredan la ley. Es decir, las conductas agresivas en los adolescentes podrían estar vinculadas a las situaciones de vulnerabilidad por las que atravesaron y a las experiencias traumáticas difíciles de elaborar. Además, en este sentido Aguilar Cárceles (2012) plantea que el hecho de observar conductas antisociales por parte de los padres posibilitaría el desarrollo de comportamientos agresivos y el sostenimiento de éstos en el tiempo.

Por otra parte, se retomará el relato de la madre del caso N° 6, quien también refiere a la ausencia del padre: *“Se criaron sin padre, el padre se fue con una mujer y me dejó criándolos solos”* (Entrevista caso N° 6, 29 de noviembre de 2019). Esto está vinculado con los aportes de Sarmiento et al. (2011), quienes sostienen que las familias de estos adolescentes suelen presentarse del siguiente modo: el padre generalmente está ausente y la madre se encuentra con seis, siete u ocho niños a los cuales no puede brindarles los cuidados necesarios. La misma carece de una red familiar que la contenga y sostenga en su rol materno, al mismo tiempo que se encuentra subsumida en una situación de precariedad material y económica. Podríamos decir por lo tanto que dicha ausencia paterna conlleva a que estas madres no solo se responsabilicen por todas las tareas referentes a los hijos/as sino también a las tareas del hogar, dando como resultado una sobrecarga de tareas sobre la misma persona. En relación a lo planteado, se pudo observar tanto en los talleres como en las entrevistas, que es la madre quien toma mayor protagonismo en la vida de estos adolescentes y que los padres participan, pero en menor medida. Esto podría pensarse como influenciado por la cultura, en tanto las madres son generalmente quienes se encargan del cuidado y la crianza de los hijos y los padres son quienes se encargan únicamente del sustento económico del hogar.

La madre del caso N° 6 se separó del padre cuando los hijos eran muy pequeños, el padre los abandonó y apareció en los últimos años, pero sus hijos le tienen mucha bronca y rechazo. Otro aspecto a destacar es que son 8 hermanos, por lo que se podría hipotetizar que el comportamiento de su hijo estaría relacionado con que, al ser madre sola y adulta a cargo de la totalidad de las funciones de ambos padres, se le dificulta la crianza de sus hijos. Es decir, como plantean Sarmiento et al. (2011) al no encontrarse otros integrantes de la familia que mantengan un compromiso formal con los jóvenes y al poseer una dinámica familiar disfuncional, quienes se encargan del cuidado no logran ejercer una contención normativa y emocional eficaz.

En relación a lo anteriormente planteado, respecto a la ausencia de la figura paterna, fue posible observar en los distintos encuentros como así también en la caracterización sociodemográfica, que existe una prevalencia de familias monoparentales maternas, siendo la madre la persona a cargo de sus hijos. Sin embargo, a pesar de esta prevalencia, algunas de las mujeres casadas o en unión convivencial expresaban que más allá de que sus parejas estaban presentes, no intervenían al momento de ayudar en la crianza, evidenciándose en ambos casos la “ausencia” del rol paterno. Lo manifestado por las madres se vio reflejado en el taller ya que en muy pocos casos los padres asistieron al mismo, lo cual podría dar cuenta nuevamente de la escasa presencia e involucramiento de los padres con respecto a sus hijos. Estos datos coinciden a su vez con una investigación a la que refiere la autora De la cruz (2004), en la que se plantea que la ausencia del padre es un factor de riesgo en lo que hace al proceso de transición que comienza en la adolescencia y termina en una inserción exitosa en la comunidad, lo que podríamos denominar como proceso de emancipación.

Por otra parte, con respecto a la segunda variable, que sería la separación de los progenitores, el padre del caso N° 3 relató en la entrevista lo siguiente: *“Le afectó a él la separación y por eso se fue a la calle. Mejor es el complejo para que se endurezca un poco (...) No sé, la separación fue algo que lo rompió todo, si hubiésemos estado unidos esto no le pasaba. A la mamá se le fue de las manos y yo no estaba”* (Entrevista caso N° 3, 25 de octubre de 2019).

Lo manifestado por el padre está relacionado con lo que plantea Vázquez González (2003), ya que el autor menciona que la ruptura de la familia tradicional, sobre todo por el aumento de separaciones y divorcios produce que, con frecuencia, los hijos queden a cargo de uno de los padres (generalmente la madre), quien debe trabajar obligatoriamente para sacar adelante a sus hijos, produciéndose en muchos casos, una desatención de los mismos. Sin embargo, la disgregación familiar no influye directamente en la génesis de la delincuencia, aunque si se combina con una falta de supervisión o de control, falta de comunicación, de afecto, desatenciones, podría influir en la aparición de un comportamiento transgresor.

De acuerdo a lo relatado por el padre y a lo que fue posible observar en el informe podríamos pensar que el adolescente llevaría a cabo esta conducta ya que la madre al encontrarse sola no logra controlar a su hijo, incluso en el informe aparece la figura de la abuela como sostén y contención en el rol materno. Además, una característica importante de este caso es que fue posible observar a partir de los documentos institucionales que la madre del adolescente sufría violencia de género por parte del padre, por lo tanto, el hijo fue víctima de violencia familiar. Este comportamiento agresivo del padre podría ser entonces un desencadenante de la conducta transgresora del adolescente. En este sentido, Sarmiento et al. (2011) señalan que la historia

vital y familiar de los adolescentes está caracterizada por el maltrato, el abuso y necesidades psicoemocionales insatisfechas. Las figuras parentales se relacionan con conductas de abandono, negligencia, falta de contención y relaciones interpersonales inestables, impredecibles y muchas veces patológicas, como se puede observar en este caso.

En relación a lo planteado, en los talleres, se observaba frecuentemente que las madres referían a que sus hijos no conocían al padre, que tenían poca o ninguna relación con él y algunos a causa de la separación de los mismos en su infancia, o no les interesaba tener ningún vínculo, o bien éste, se reducía a un proveedor económico del hogar, sin posicionarse desde lo afectivo. De este modo, el padre resulta una figura conflictiva no sólo porque hay un lugar ausente sino también por las consecuencias que ocasiona, como la excesiva responsabilidad que debe sobrellevar la madre.

- FALTA DE ATENCIÓN

La falta de atención es uno de los factores familiares de riesgo que los padres hicieron referencia en las entrevistas llevadas a cabo antes de la intervención de Se.N.A.F. La madre del caso N° 4 cuando se le pregunto que creía que lo llevó a su hijo a cometer un delito respondió: *“Para mí yo le preste atención a los más chicos. Yo a él le decía vení acá y se iba. Yo creo que lo deje un poco de lado”* (Entrevista N° 4, 8 de noviembre de 2019).

Lo que la madre relató podría relacionarse con los aportes de Pevalin et al. (2003) con respecto a que un mayor número de hijos conlleva un menor grado de supervisión, lo cual incidirá sobre la conducta problema, al igual que un hogar roto donde falta uno de los padres conlleva mayores conflictos. Un dato importante que podría estar vinculado con lo planteado es que el adolescente tiene 5 hermanos, 4 de ellos menores, por lo que ser una familia numerosa y tener hermanos más pequeños que requieren de un mayor cuidado, podría haber posibilitado que lleve a cabo conductas transgresoras como una forma de “llamar la atención”, exponiéndose a situaciones de riesgo. Es decir, la atención focalizada en algunos de los hijos habría perturbado la atención y la protección de los otros.

Por otra parte, la madre del caso N° 5 también hizo referencia a la falta de atención: *“Y yo pienso que a lo mejor yo entre tantas preocupaciones no me ocupe de él y confié mucho. Y él se me fue a la calle con la mala junta. Ahora voy a estar atenta con ojos y oídos”* (Entrevista caso N°5, 22 de noviembre de 2019). Esto podría estar vinculado con los planteos de Hirshi

(1960), quien refiere que los lazos y apego que los adolescentes sientan por sus progenitores o figuras que los sustituyan ejercen un efecto protector respecto a la relación con iguales delincuentes, al promover entre los adolescentes la evitación de estos para no desagradar a sus progenitores y perder su aprobación y afecto. Mientras que, por otro lado, quienes tienen malas relaciones afectivas con los padres son más propensas a una conducta delictiva. Un aspecto a resaltar del caso N° 5, como ya se mencionó anteriormente, es que la madre sufre de violencia de género por parte del padre, el cual era alcohólico y la golpeaba siempre frente a los hijos, por lo que este modo de vincularse en la familia podría haber posibilitado la conducta del adolescente. Además, por otra parte, la madre trabaja independientemente y participa de una organización social lo que la lleva a no estar presente durante varias horas en su hogar, y como manifiesta en su discurso, el adolescente se encuentra solo en su cotidianeidad, sin ninguna supervisión adulta, y pasando mucho tiempo fuera del hogar. Por lo tanto, estas variables podrían conllevar a que el joven se exponga a situaciones de riesgo.

- ANTECEDENTES DE CONDUCTA FAMILIAR DELICTIVA

Una tercera categoría dentro de los factores familiares que los padres identificaron, fueron los antecedentes de conducta familiar delictiva. La madre del caso N° 2 manifestó lo siguiente: *“A lo mejor porque vio a los primos robar y aprendió de ellos, se junta mucho y siempre hacen macanas”* (Entrevista caso N° 2, 11 de octubre).

Esto que expresa la madre podría estar relacionado con lo que plantean Loeber y Farrington (2000) respecto a que el arresto de un familiar incrementa la probabilidad de que algún miembro de la familia de la siguiente generación transgreda la ley, así también tener hermanos o primos que delinquen aumenta el riesgo de comportamiento violento. La relación entre experiencias delictivas familiares y la infracción adolescente puede leerse desde la perspectiva socioambiental y el labelling approach. En el primer caso, el hecho de que uno de los miembros de la familia cometa delitos tiene como consecuencia que haya mayor probabilidad de que otro de los integrantes de la familia haga lo mismo, a medida que se incrementan las posibilidades de socialización. Una segunda lectura puede realizarse desde el punto de vista de la teoría del etiquetamiento, en el sentido de que la estigmatización que genera la reacción del sistema en la persona que delinque se proyecta a las personas cercanas al desacreditado. Esta proyección se manifiesta de padres a hijos y no, o no tanto, de hijos a padres. En las dos lecturas, el hogar

familiar es, como primer nivel de socialización y de proyección del estigma, un espacio fundamental para entender la reproducción generacional del delito.

En esta misma línea, las madres que asistieron al taller refirieron en su discurso a la etiqueta que la sociedad les atribuye a sus hijos. Son frecuentemente denominados por el barrio, por los vecinos y por el entorno como delincuentes, “pibes chorros”, lo que acarrea consigo situaciones y enfrentamientos que van más allá del delito mismo y que paradójicamente en algunas ocasiones hasta pueden incrementarlo. A partir de esto es posible pensar que estos adolescentes al ser etiquetados como delincuentes adoptarían este significante como parte de su identidad y de esta manera estarían más propensos a verse implicados en actividades riesgosas. Por el concepto negativo de su identidad, elegirían involucrarse con el crimen y asociarse con otros pares con los que comparte la etiqueta. Esto, a su vez, podría haber posibilitado la profecía auto cumplida, en la que los adolescentes terminan modelando su identidad de acuerdo a la imagen que los demás tienen de ellos. Además, por otra parte, la etiqueta de “pibe chorro”, supondría el discurso que nada se puede hacer respecto del delito por ser menores de edad, porque “como son menores no pasa nada”, que encubre a su vez, un doble discurso: la posibilidad de que no se realice ninguna acción, “porque toda acción es en vano”, “ya están perdidos” o que la acción sea la “represión o el encierro” (Vázquez, 2012).

Por otra parte la madre del caso N° 6 también refirió a que su hijo posee antecedentes por parte de sus primos: “*Y la mala junta, son primos de él, pero no son buenos para él, roban y andan en adicciones*” (Entrevista caso N° 6, 29 de noviembre) Esto podría estar relacionado también con lo que plantean Bandura y Walters (1988), quienes intentan explicar la conducta antisocial desde los principios de la “Teoría del Aprendizaje social”, la cual plantea que la influencia de la familia en la conducta de riesgo del adolescente se explica a partir de la importancia del aprendizaje observacional, modelado a imitación en los procesos de desarrollo psicosocial del ser humano, incluidos aquellos actos delictivos. Desde esta teoría se considera que los adolescentes aprenden diferentes conductas identificándose con otros significativos, tales como padres, iguales y profesores. Si la conducta es recompensada o si el comportamiento es muy valorado por el grupo, se generan en el observador unas expectativas de obtener recompensas semejantes al llevar a cabo la conducta, pero cuando es castigado, el observador tenderá a devaluar tanto al modelo como al comportamiento.

A partir de los datos recolectados se podría hipotetizar que en ambos casos las creencias y concepciones que poseen los adolescentes en relación a la transgresión influirían en los actos que realizan. A su vez esto podría estar vinculado a un dato sociodemográfico, la variable de

antecedentes de conducta familiar delictiva, ya que el 75% de los adolescentes cuyos padres fueron entrevistados poseen algún familiar con antecedentes penales. En esta misma línea, es posible preguntarse en qué forma se internalizó la ley en estos adolescentes, ya que esto puede estar relacionado con la posición que toma el sujeto frente a la transgresión, como así también con las fuertes identificaciones de los adolescentes con figuras delictivas. Podríamos decir entonces que los antecedentes familiares penales podrían predisponer a que el adolescente considere que esa es una conducta esperable dentro de la familia.

- FACTORES LIGADOS AL GRUPO DE PARES

Por otra parte, otro de los factores de riesgo que los padres identificaron que facilitan las conductas transgresoras en sus hijos fue lo ligado al grupo de pares. De los 8 casos de los adolescentes cuyos padres fueron entrevistados, en 7 de los casos reconocieron la existencia de factores vinculados a los pares.

• GRUPO DE PARES Y CONSUMO DE SUSTANCIAS

Se observó que, en la mayoría de las entrevistas a los padres, los amigos del adolescente aparecían como la causa, muchas veces principal, de los comportamientos transgresores de su hijo y que a partir de reunirse con ellos es que comenzaron a manifestar cambios de conducta negativos. Todos los padres hicieron referencia a esta variable, a excepción de la madre del caso N° 8. Esto podría estar vinculado con que esta madre asistió reiteradas veces al taller donde la Trabajadora Social resalta la importancia de identificar la responsabilidad como familia y no depositarlo en factores externos.

Se comenzará en primer lugar con la madre del caso N° 1, la cual en la entrevista dijo: *“Yo pienso que él ve a los demás y quiere ser como ellos. Yo le decía que esas cosas no se hacen. (...) Él aprende esas cosas de la calle de los otros chicos más grandes con los que se junta”* (Entrevista caso N°1, 20 de septiembre de 2019). Lo que la madre hace referencia podría estar vinculado con los aportes de Vázquez González (2003) el cual plantea que el tener amistades

que realizan conductas desviadas puede favorecer el comportarse como ellos para no ser discriminado o excluido del grupo. Es decir, el autor refiere a que el grupo de amigos es otro de los factores a tener en cuenta. El poseer amistades que realizan con bastante frecuencia conductas desviadas, como por ejemplo el beber alcohol, consumir drogas, abandonar o ausentarse al colegio, como así también conductas delictivas, se termina por convertir en un factor de riesgo para ese joven, debido a que intentará adoptar estos comportamientos para no sentirse rechazado por el grupo.

El adolescente del caso N° 1 de acuerdo a los informes solía juntarse con jóvenes mayores a su edad y pasar la mayor parte del tiempo con ellos sobre todo en horarios nocturnos. Esto podría haber posibilitado que el adolescente esté más expuesto a conductas que conllevan mayor riesgo. Fue posible observar en el documento institucional de este caso, que el joven se sentía muy solo en su hogar y que ha pasado por innumerables situaciones de vulnerabilidad a lo largo de su historia. A partir de esto se podría hipotetizar que el grupo de pares para el adolescente aparecería como un sostén, aquel que posiblemente no encuentre en su familia. Esto último coincide con los aportes de Flores (2018), quien refiere a que los adolescentes en ocasiones tienen la necesidad de pertenencia a un grupo o una banda, porque no se sienten parte de una familia por la disfuncionalidad de la misma. En esta misma línea González (1998) plantea que en aquellos jóvenes que no se sienten identificados con su medio, el grupo de pares pasa a ser una opción viable al brindarles la acogida y seguridad que ni la escuela ni la familia les ha proporcionado.

Sin embargo, es posible plantear que, tanto de lo establecido por la madre del caso N° 1 como de lo trabajado en el taller, existe una característica recurrente de ese grupo de pares que es que son más grandes que el adolescente, lo cual podría constituir otro factor de riesgo ya que deben asimilar posiciones adultas siendo adolescentes y se exponen a actividades que posiblemente escapen a su capacidad de simbolización.

Por otra parte, las madres de los casos restantes también refirieron al grupo de pares, nombrando frecuentemente a estos amigos como la “mala junta”. Se pudo observar que generalmente cuando se les preguntaba que creían que había llevado a su hijo a tener este comportamiento, respondían con pequeñas frases, apelando a la “mala junta”. A continuación, se expondrán algunos de estos fragmentos de las entrevistas: *“Él no era así, empezó a juntarse con los amigos y se transformó”* (Caso N° 3); *“Eligio la mala junta”* (Caso N° 4); *“Y también la junta, hay amigos buenos y amigos malos, se juntó con los equivocados”*; *“ Y llego por la mala junta”*; (Caso N° 1) *“ A lo mejor la junta le llena la cabeza”*; (Caso N° 2) *“Yo le vivía*

diciendo fijate con quien te juntas , a mí no me gustaba la junta ... Y bueno resulta que los amigos le dijeron vamos (...) él lo hizo por la junta.”(Caso N° 6)

Lo manifestado por los padres podría estar relacionado con los aportes de Cosacov y Crocchia (2007), quienes plantean que la apelación a las malas juntas se ha convertido en lo que en Psicología Social se denomina una explicación folk o popular, tanto por parte de los jóvenes como de sus padres, para dar cuenta del porqué de la trasgresión. Si se deja de lado que tal explicación busca excluir al propio adolescente de dicha configuración, en el sentido de que él no formaría parte de la mala junta, la explicación podría ser correcta: es muy razonable postular que con un grupo de amigos que reprueben el delito, el joven no delinquiría. Además, a partir de lo observado en las entrevistas es posible pensar que los padres en los primeros talleres tienen una mayor dificultad para reconocer cuales son los factores que llevan a sus hijos a transgredir, esto podría haber posibilitado que respondan de manera breve y depositando la responsabilidad de lo ocurrido en terceras personas.

La expresión “mala junta” también apareció en reiteradas ocasiones en el discurso de los padres y madres, a menudo, relacionada con el consumo de sustancias, atribuyendo a éstos el motivo del consumo. El padre del caso N° 3 en la entrevista manifestó: *“De chico le gustaba el futbol, pero ahora solo le interesa la junta, la calle y la marihuana. Empezó a fumar marihuana para llenar ese vacío. Él eligió a la junta y la marihuana”* (Entrevista caso N° 3, 25 de octubre de 2019). Esto podría estar vinculado con los aportes de Barron (2010), la cual refiere a que el consumo de sustancias aparece como una respuesta a las necesidades no satisfechas de cada persona o grupo para encubrir una falta, buscando de esta manera y de forma ilusoria, un reemplazo de aquella. Así, las drogas aparecen como el sustituto que el sujeto necesita para dar sentido a su vida.

A partir de la información anteriormente expuesta sobre el caso N° 3, el adolescente buscaría tapar con el consumo los problemas de violencia familiar vivenciados en su hogar. Además, esto puede dar cuenta de cómo el consumo en tanto conducta de riesgo refleja situaciones personales o socio familiares en las que los adolescentes están inmersos. En relación a lo planteado Duschatzky y Corea (2009) afirman que el consumo es algo más que una adicción, ya que es una práctica que se enlaza en una cadena de experiencias. Es el "lugar" donde las emociones se desbordan (agresión, dolor, angustia, rabia, impotencia) y al mismo tiempo se despiertan (coraje, control del miedo). Conforman una forma de socialidad, un modo de estar con los otros. Esto a su vez podría observarse en el Caso N° 3, ya que, de acuerdo al relato del padre, a partir de que se junta con los amigos del barrio consume drogas, lo que lleva a pensar que la ingesta de sustancias le permite pertenecer y formar parte de ese grupo.

Por otra parte, los padres del caso N° 3, 4 y 5 manifestaron que el consumo llevó a sus hijos a transgredir la ley. La madre del caso N° 4 en la entrevista dijo: *“Salió a robar, supuestamente dice que estaba drogado, yo nunca lo vi”* (Entrevista caso N° 4, 8 de noviembre de 2019). Lo manifestado podría estar relacionado con los aportes de Vázquez González (2003), respecto a que el consumo de sustancias durante la adolescencia puede constituir un factor de riesgo que puede influir en el desarrollo de conductas transgresoras.

De manera similar la madre del caso N° 5 dijo en la entrevista: *“El tema de que haya consumido algo, el consumo de alguna sustancia le hizo tomar ese valor y también la clase de chico con la que se rodea”* (Entrevista caso N° 5, 22 de noviembre). Esto está relacionado con los aportes de Vázquez González (2003) el cual distingue entre la delincuencia funcional y la inducida. La primera da cuenta de comportamientos delictivos llevados a cabo por el joven adicto que los comete para poder obtener medios económicos que le permitan conseguir más droga; diferenciándose de la inducida, en donde el joven ha consumido drogas y en consecuencia a los efectos de las mismas, aumentan las probabilidades de que se cometan comportamientos desviados o delictivos.

A partir de lo planteado se podría hipotetizar que en el adolescente del caso N° 5 se trataría, desde el discurso materno, de delincuencia inducida, donde el consumo le hizo perder el control e infringir la ley. Un dato importante del mismo es que posee antecedentes familiares de consumo de drogas, por lo que la perspectiva que los padres tienen respecto al consumo de sustancias en su hijo podría haber influido en la actitud que el adolescente tomó frente al mismo, exponiéndose a situaciones de riesgo. Por otra parte, en esta misma línea fue posible observar un ejemplo de delincuencia funcional en las entrevistas al padre del caso N° 3: *“(…) pero bueno le gusta la plata entonces llegó a robarle a la madre por el consumo”*. (Entrevista caso N° 3, 25 de octubre de 2019). En este caso el adolescente, desde el discurso del padre, transgrediría la ley con el objetivo de conseguir dinero para consumir. De acuerdo al informe se trata de un adolescente víctima de violencia familiar, por lo que las drogas podrían haber posibilitado una salida fácil a esta situación complicada.

Un aspecto que es fundamental destacar es que, de acuerdo con la caracterización sociodemográfica, el 100% de los adolescentes cuyos padres fueron entrevistados consumen drogas. Esto podría estar relacionado con que durante la adolescencia se suele experimentar con una gran variedad de drogas legales, ilegales o controladas. Además, como se puede observar en los documentos institucionales y en las entrevistas el consumo de estos adolescentes se

asocia a una amplia gama de variables individuales y contextuales de riesgo como: una pobre relación con los padres, violencia familiar el consumo de drogas de los padres o de los pares.

- FACTORES DE RIESGO SOCIALES COMUNITARIOS

Por otra parte, los padres identificaron factores de riesgo sociales- comunitarios que facilitan las conductas transgresoras en sus hijos. De los 8 casos de los adolescentes cuyos padres fueron entrevistados, 5 manifestaron la existencia de estos factores.

- **LUGARES DE ESPARCIMIENTO**

Una primera categoría, que los padres a los que se les realizó la entrevista antes de la intervención de Se.N.A.F, identificaron como facilitadora de la conducta transgresora de sus hijos, está vinculada a los lugares de esparcimiento. Los padres del caso N° 3 y 4 refirieron a la calle y a la esquina como un factor de riesgo.

“Es un chico que le gusta muy mucho la calle, no hay como sacarlo de la calle (...) Él se va a la calle y se olvida que tiene una casa. Vos le decís vení adentro y él quiere ir a la calle. La calle es su casa” (Entrevista caso N° 4, 15 de noviembre de 2019). Esto coincide con los aportes de Urresti (2002) quien plantea que sin lugar a dudas el lugar por excelencia al que los adolescentes se dirigen podría definirse como “la calle”, considerándola como un espacio exterior a la escuela y al hogar, que aparece como espacio de liberación y de goce; sin medidas ni reglas que obliguen a aprender, a producir o a obedecer, apareciendo como un sitio liberado en el que eventualmente se da la aventura

En esta misma línea, el padre del caso N° 3 refirió: *“Le afectó la separación y por eso se fue a la calle. Pudiendo elegir, teniendo comida y estudio... Y él eligió la calle y la mala junta”* (Entrevista caso N° 3, 25 de octubre de 2019). Esto podría estar relacionado con lo que plantea Cohen (1994) en relación a la calle que es el espacio inmediato a la salida del hogar, si es que no hay otras redes de apoyo familiar. En la calle están los amigos y conocidos, muchos de ellos

con historias parecidas por lo que los adolescentes sustituyen un espacio de conflicto por otro que, en principio, es de bienestar

A partir de los documentos institucionales y de las entrevistas se pudo observar que ambos adolescentes atravesaron por situaciones de vulnerabilidad a lo largo de su historia y especialmente en lo que respecta al ámbito familiar. Este es un dato importante ya que esto podría haber posibilitado que “la calle”, “la esquina” adquirieran la cualidad de “hogar” que muchas veces no encontraron en su familia u otros lugares. Esto también podría explicar la cantidad de horas que pasan fuera de sus casas y dedicadas al ocio. Además, un aspecto que llama la atención, principalmente del caso N° 4, es que el padre refiere a que para su hijo la calle es su casa. Esto podría estar vinculado no solo con una expulsión del hogar, sino con una falta de afecto, de escucha, de contención y de límites en su familia. El adolescente abandonaría el hogar no porque quiere o como un acto de rebeldía, sino porque sufre. En esta misma línea, es recurrente escuchar en los talleres que los adolescentes solamente duermen y se alimentan en la casa porque no encuentran allí un espacio para estar y por lo tanto buscan nuevos espacios de afecto y pertenencia

Por otra parte, dentro de la variable lugares de esparcimiento, los padres refirieron que al estar mucho tiempo en la calle la policía tiene marcados a sus hijos “*La policía los ve en la calle y se los lleva, encima a mi hijo lo tienen marcado. Los detienen para llenar planillas*” (Entrevista caso N° 3, 25 de octubre de 2019). Esto puede relacionarse con los aportes de Previtali (2011) quien refiere que las posibilidades o restricciones que los jóvenes encuentran a la hora de elegir puntos de encuentro, lugares para ocupar y forjar vínculos se configuran en base a relaciones interpersonales que entablan con agentes policiales, que controlan circulando la zona. Se podría decir entonces que el hecho de que el policía te conozca puede ser un factor que, según la contextualización y la situación, puede jugar a favor o en contra del derecho de un joven a circular por determinados espacios.

Así también aparecen en los talleres como en las entrevistas quejas repetidas acerca del nivel de violencia impuesta por la policía cuando los detienen. “*La policía me lo saco como si hubiera matado a alguien, yo tengo muchos hijos y quedaron muy traumatizados los más chicos después de eso.*” (Entrevista caso N° 6, 29 de noviembre de 2019) Lo establecido por la mamá se relaciona con lo propuesto por Anzola, Iglesias, Petrucci y Prado Álvarez (2005), los cuales refieren que en la Argentina existen ciertos barrios o zonas considerados peligrosos, hacia los cuales se presenta un fuerte y permanente control policial, que persigue un modelo de prevención basado en la teoría de las ventanas rotas. Dicha teoría se sustenta en la idea de que

en los espacios descuidados o ruinosos se presenta como consecuencia un comportamiento también desordenado, sugiriendo así un ciclo delictivo que se retroalimenta. Esta falta de orden y control, de urbanización y viviendas en mal estado, incitarían la emergencia de actos transgresores en jóvenes. Cabe aclarar que estas “medidas preventivas” son llevadas a cabo por los policías de manera autónoma, sin demasiados controles del gobierno o persiguiendo políticas de seguridad. Podríamos decir entonces que lo anteriormente planteado habría posibilitado, según el discurso de las madres, que el sistema penal actúe en los adolescentes con prácticas selectivas, diferenciadoras y estigmatizantes mediante estereotipos y violencias simbólicas, separándolos de la ley, de la sociedad.

- EL BARRIO COMO FACTOR DE RIESGO SOCIAL Y COMUNITARIO

En las entrevistas realizadas a los padres de los adolescentes en conflicto con la ley penal de los casos N° 5 y 7 los mismos perciben que existe un factor de riesgo en el lugar en el que viven. Es decir, en su barrio, que suele asociarse directamente con la transgresión del adolescente, poniéndose incluso como factor causante del hecho cometido. *“Desde que estamos en ese barrio aparecieron los problemas, porque él ve que me agreden y me quiere defender”* (Entrevista caso N° 5, 22 de noviembre de 2019).

Lo establecido por la madre podría estar relacionado con lo propuesto por Hein et al. (2004), quienes plantean que hay ciertas características del área de residencia que son influyentes en el desarrollo del comportamiento delictivo juvenil. La importancia de esto se debe a que se ha descrito que jóvenes que abandonan áreas de alta concentración de delitos, reducen la frecuencia de comportamientos infractores de ley, pese a que se mantienen constantes otros factores de riesgo. Las áreas de alto crimen impactan en el desarrollo de niños y adolescentes y son producto de un interjuego entre políticas de vivienda, de empleo y procesos sociales comunitarios.

Sin embargo, un aspecto a destacar es que en el caso N° 5, si bien se han mudado de un barrio a otro, el adolescente transgredió la ley nuevamente, esta vez, en un lugar de residencia diferente. Lo que podría haber posibilitado este comportamiento es que donde se han mudado también existen varios vecinos que han delinquido, una fuerte presencia del consumo de drogas y fácil acceso a armas. Además, otro factor que podría haber facilitado la conducta del adolescente está vinculado a la percepción que la madre tiene acerca de que su hijo la defiende, ya que si ella se siente atacada el joven la va a defender más allá del barrio al que se muden. No obstante, desde el taller se aborda esta problemática planteando que más allá de las

condiciones reales que puedan perjudicar el desarrollo saludable del adolescente, e influir en sus decisiones y conductas, resulta pertinente no colocar la responsabilidad absoluta de la transgresión, en el entorno extrafamiliar: *“Esto no pasa por mudarme, puede contribuir, pero hay que cambiar, porque el problema no está en él chico sino en los padres”* (Registro POF, 7 de agosto de 2019).

Por otra parte, la madre del caso N° 7 sostuvo: *“Yo vivía en otro barrio y nos fuimos porque tuvo una pelea con otros, él no tuvo otra que pelear y los otros le respondieron con dos tiros.”* (Entrevista caso N°7, 29 de noviembre de 2019). Lo manifestado por la madre podría estar relacionado con los aportes de Herrera y Morales (2005), los cuales refieren a que el barrio en que viven los adolescentes desde su temprana infancia y el estrato socioeconómico de procedencia, pueden constituir factores de riesgo para la conducta transgresora.

Además de acuerdo con Benvenuti (2003) existen factores psicosociales que podrían estar relacionados con la transgresión a la ley penal. En particular, los jóvenes que viven en familias con ingresos bajos y en barrios marginales, experimentan traumas y estrés relacionados con las malas condiciones de vida y el hacinamiento, la violencia familiar, la violencia policial, la discriminación, entre otros hechos traumatizantes. Esto último puede observarse en ambos casos, ya que de acuerdo al documento institucional se trata de familias con escasos recursos económicos, teniendo dificultades para la satisfacción de necesidades básicas y el contexto barrial es de características vulnerables. Estas características podrían haber posibilitado la conducta transgresora en los adolescentes, ya que el contexto en el que los sistemas familiares se encuentran inmersos es un factor importante que incide claramente en el desarrollo de la vida cotidiana y de la calidad de vida de las familias.

Teniendo en cuenta lo planteado respecto a ambos casos, la conducta transgresora de estos adolescentes además podría explicarse a partir de la teoría de la asociación diferencial de Sutherland (1947), la cual se basa en la hipótesis de que el comportamiento desviado o criminal, al igual que el comportamiento normal o social, es aprendido y no innato. De acuerdo con el autor el comportamiento se halla completamente modelado, en un proceso que atraviesa todas las biografías, por las experiencias adquiridas mediante procesos de culturización permanentes. Por lo tanto, la conducta criminal forma parte de ese proceso de aprendizaje continuo, donde el infractor aprende modos de vida, estrategias, códigos, y técnicas para desarrollar sus cometidos. Se podría hipotetizar que estos jóvenes han aprendido a definir con más frecuencia una situación en términos de violación de la ley que en términos de respeto a la misma. . Todas las conductas se aprenden de sus semejantes, ya sean conductas positivas, como las negativas en relación a la convivencia en sociedad.

A modo de resumen, a partir de la información analizada en el presente objetivo se puede observar que los padres identificaron como factores de riesgo aspectos: individuales, familiares, ligados al grupo de pares y socio-comunitarios. En lo que respecta a los individuales, se presentó con frecuencia en el discurso de padres y madres, conductas violentas y agresivas, peleas e insultos con otros pares que no pertenecían al grupo de amigos de su hijo. Aparece una dificultad en la resolución de conflictos, llegando a utilizar incluso en ocasiones armas. Así también hicieron referencia a que la inmediatez y la necesidad de pertenencia los lleva a sus hijos a infringir. En el adolescente hay una vivencia del tiempo como inmediato, como absoluto y no hay tolerancia a la frustración.

En cuanto a los factores familiares se puede observar que los padres identificaron como aquellos que facilitan la conducta transgresora: la falta de atención, antecedentes de conductas familiares delictivas y la separación o ausencia del padre. Este último aspecto fue posible observarlo en los talleres como en las entrevistas, ya que es la madre quien toma mayor protagonismo en la vida de estos adolescentes y los padres participan, pero en menor medida.

Sostuvieron que el grupo de pares y el consumo de sustancias” son otras de las causas de las conductas transgresoras de sus hijos. En relación a los factores socio-comunitarios, los padres asistentes a los talleres expresaron su percepción de que las condiciones socioculturales y habitacionales de los barrios, representan un foco de riesgo para los adolescentes, favoreciendo sus conductas transgresoras, incluso pudiendo ser causales de ellas; por la “mala junta” y el fácil acceso a las drogas.

Por último, luego de identificar los factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes desde el discurso de los padres antes de la intervención de Se.N.A.F, resulta fundamental remarcar que en su mayoría se tratan de factores externos. Es posible observar en las entrevistas que los padres depositan la responsabilidad de lo ocurrido en terceras personas, de este modo se muestran ajenos a la problemática en la que se encuentran inmersos. Esto es importante porque podría estar relacionado con que la familia en un primer momento, antes de la intervención de Se.N.A.F, no percibe su papel en la instalación de factores de riesgo, es decir no logran evaluar las causas por las cuales han provocado la exposición a riesgo de su hijo, colocando en el afuera tal responsabilidad.

Si bien en algunos casos refirieron a factores familiares, estos están vinculados con aspectos externos como la separación o ausencia del padre. Debido a la situación de detención de sus hijos, la familia se siente evaluada, controlada y expectante a cualquier recurso que le permita la recuperación de la libertad de su hijo, esto podría posibilitar que, en un primer momento, no

se responsabilicen de la conducta de su hijo. Además, la atribución de la conducta transgresora de sus hijos a factores externos podría estar vinculada a una dificultad en la capacidad reflexiva, como a una carencia formativa en el rol de padres, por lo que los mismos no serían culpables sino más bien víctimas de circunstancias socioculturales.

10.7.2 FACTORES DE RIESGO DESDE EL DISCURSO DE LOS PADRES DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DE SENAF

En el presente objetivo se intenta describir la percepción que tienen los padres, al finalizar la intervención de Se.N.A.F, sobre los factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Para dar respuesta al mismo se han realizado entrevistas a 9 padres antes y después de dicha intervención, es decir en el primer y tercer taller, se han revisado los documentos institucionales y se ha registrado en cuaderno de campo los diferentes encuentros del POF.

En el Taller de Padres se trabaja sobre la importancia que como padres tienen en el proceso de desarrollo de la personalidad de sus hijos, abordando temáticas vinculadas al cuidado de los miembros de la familia y tendientes a favorecer el cambio de actitud de los pilares de la unidad doméstica. Se trata de 3 encuentros obligatorios, en lo que se busca reflexionar de manera conjunta, el objetivo es que los padres piensen, identifiquen y propongan la posibilidad de cambio. Es un proceso, en el cual el rol de la familia es esencial ya que la modificación de la misma es la que permite modificar el comportamiento del joven. Por lo general, en el transcurso de los tres talleres se puede percibir el cambio y la autocrítica que los padres hacen. Además, las profesionales hacen hincapié en la reparación de los vínculos familiares, utilizan la palabra como herramienta de trabajo y principalmente la empatía, que les permite ponerse en el lugar de las familias, ya que detrás de cada una de ellas hay historias de mucho dolor.

En el mismo se trabaja con distintas problemáticas que podrían ser factores influyentes de la situación de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, por lo que es fundamental en esta instancia definir a estos últimos. De acuerdo con Arévalo y Maldonado (2004) es importante utilizar la denominación “niños y adolescentes en conflicto con la ley penal” en el lugar de otras denominaciones como “menores delincuentes”, “joven delincuente”, “precoces delincuentes”,

"menor infractor", ya que estos sustantivos remiten a la Ley de Patronato de Menores 10.903 (1919) que los considera como "objetos" y no como sujetos de derechos, como los concibe la CIDN (1990). Estos términos están revestidos de un sentido peyorativo que define a los adolescentes a partir de su comportamiento y refuerzan prejuicios, estigmas y desigualdades sociales.

Sabattini (2001) por su parte los define como: "jóvenes que transgreden las normas penales y toman contacto con el sistema judicial y tutelar. Constituyen una categoría específica y comparten similares trasfondos biográficos y patrones conductuales. Proviene en su mayoría sectores pobres o pauperizados (...)" (p.23). La autora afirma que en ocasiones el accionar del adolescente llega a límites que rozan con el delito, es decir con la normativa legal. Entonces comienza a deambular, lo que lleva a las detenciones por merodeo, las detenciones a disposición de padres, las entradas eventuales a precintos. Es aquí entonces que se inaugura de manera oficial la entrada del adolescente al grupo de adolescentes transgresores o en conflicto con la ley penal. Por otra parte, otra de las definiciones es la de Condori Ingaroca (2002) quien plantea que el adolescente en conflicto con la ley penal es aquel joven que, por determinadas carencias psicológicas, biológicas y sociales, se enfrenta con diferentes dificultades al atravesar su proceso de socialización y adaptación, lo que puede generar la adopción de comportamientos socialmente inadaptados.

Sin embargo, Tonkonoff (2001) afirma que, si se parte de la premisa que un joven transgresor de la ley penal es un delincuente, se priva de saber que, en general "los jóvenes son casi siempre más jóvenes que delincuentes" (p. 278). Puesto que afirmar que un joven "es" un delincuente implica la adjudicación de una identidad que, al igual que el delito, se presentan como una realidad uniforme. De este modo, se van conformando ciertos estereotipos que operan, como todo mito, por repetición obstinada de sus relatos; entonces el sujeto trasgresor a la ley penal es objetivado según la combinación de fragmentos heterogéneos de diversos discursos (políticos, jurídicos, estéticos, morales, mediáticos, etc.) que colaboran en la conformación de un universo de significación totalizante.

En este sentido de acuerdo con Fernández (2013) consignar un adolescente como infractor, delincuente, peligroso, criminal, es sustraernos de su biografía y de la de-construcción de su trayectoria personal, familiar y social. Pensar en clave de derechos supone darle voz al adolescente en la singular modalidad de construcción de su subjetividad en la cual se enclava su conflicto con la Ley penal, no quedándonos cautivos del "episodio delictivo", en la definición de su identidad.

De las 9 entrevistas realizadas a los padres después de la intervención de Se.N.A.F, se pudo identificar que los padres perciben como factor de riesgo de las conductas transgresoras de sus hijos las siguientes categorías: factores familiares y ligados al grupo de pares.

- FACTORES FAMILIARES DESPUES DE LA INTERVENCIÓN DE Se.N.A.F

- **ESTILO PARENTAL DE CRIANZA PERMISIVO**

Una primera categoría dentro de los factores familiares, a la que la madre del caso N°2 hizo referencia en su discurso, está vinculada a la permisividad. La misma sostiene: *“Yo creo que mi hijo tiene demasiada libertad, yo nunca le dije a qué hora tiene que volver. Él no me pide permiso, el me avisa que se va.”* (Entrevista caso N° 2, 25 de octubre de 2019)

Lo establecido por la madre está relacionado con lo planteado por Maccoby y Martin (1983), citado en Simons (2009), respecto a que existen familias permisivas en las cuales las normas y los límites a la conducta están difusos. Se caracterizan por un control parental escaso, los padres son incapaces de disciplinar a sus hijos, les permiten hacer todo lo que quieran, con frecuencia se observa que mandan más que los padres. Es decir, estos últimos tienen un alto nivel de afecto hacia sus hijos, pero poco control, lo que permite dentro de las primeras etapas del desarrollo de los niños, la regulación de las emociones, garantizando así en un futuro la importancia de la felicidad.

Un aspecto a destacar de este caso es que en el documento institucional aparece la familia extensa como un apoyo para actividades de contención y cuidado. Es decir, hay una dificultad en los padres para establecer normas en el hogar. Esto podría haber posibilitado que el adolescente transgreda, al no encontrar la autoridad en casa porque se ha perdido, la buscó fuera de ella. Esta permisividad sin límites o la falta de un modelo coherente en la conducta de los padres, constituiría un elemento que podría influir de manera negativa en la conducta de los hijos. Un padre es un adulto al que se le supone una sabiduría que el hijo no tiene. Los niños, hasta la adolescencia, tienen una gran capacidad para aprender datos y conocimientos, pero no tienen sentido común para afrontar muchas situaciones de la vida diaria, por lo que son los padres quienes deben poner los límites a su libertad individual para protegerlo físicamente.

- FALTA DE LÍMITES Y SUPERVISIÓN PARENTAL

Una segunda categoría dentro de los factores familiares que está vinculada a la variable estilo de crianza permisivo, nombrada anteriormente, es la que los padres refieren en su discurso como: falta de límites o control. Los padres de los casos N° 2, 3, 4, 5 y 8 hicieron referencia a la misma. Se comenzará por lo manifestado por la madre del caso N° 2: *“La falla para mí fue porque mi marido le ponía límites a él, por ejemplo, le decía negro y yo saltaba por mi hijo y le decía blanco”*. (Entrevista caso N° 2, 25 de octubre de 2019)

En este sentido, de acuerdo con lo manifestado por la madre y a los documentos institucionales, las dificultades en relación a la supervisión y puesta de límites podrían estar asociadas a los desacuerdos entre el padre y la madre sobre la crianza y educación de sus hijos. Es decir, si bien los padres del caso N° 2 tienen una buena relación, no acordaban respecto a la educación de sus hijos, se observa una madre que constantemente está en búsqueda de ese desacuerdo. Hay un rol activo en “defender” al hijo lo que puede haber posibilitado que el padre no pueda desarrollar su función y por lo tanto que el adolescente tenga este comportamiento. Esto se relaciona con lo planteado por Gómez-Fraguela y Romero (2003) respecto a que la dificultad de los padres para desarrollar expectativas claras en el comportamiento de sus hijos, la pobre supervisión parental hacia los niños y la dificultad para ponerse de acuerdo en el estilo de crianza, representan una constelación de pautas educativas familiares que predicen la posterior conducta antisocial.

De manera similar, el padre del caso N° 4 dijo: *“Yo te digo la verdad, la mamá le decía que sí y yo le decía que no. La mamá no le dice nada”* (Entrevista caso N° 4, 29 de noviembre de 2019). Lo sostenido por el padre está vinculado con los aportes de Monserrat Femenía y Muñoz Guillén (2003), quienes plantean que es muy frecuente encontrarnos en la actualidad con padres “asustados”, padres frágiles narcisísticamente, que no son capaces de incluir a sus hijos en una normativa que organice límites (externos e internos) con los que el niño pueda sentirse protegido y seguro. La paternidad y maternidad son hoy términos sumamente problemáticos. Nos encontramos con la ausencia, el abandono, la variación, la inversión de los roles en lo que respecta al padre y a la madre en lo concreto, lo que conlleva a una alteración en el cumplimiento de sus funciones.

Es posible observar, tanto en este caso como en el resto de los casos, que la mayoría de los padres refirieron no poder poner límites o “decir que no” a éstos, ya sea por no sentirse capaces de hacerlo o por falta de autoridad. Muchas veces las madres expresaron tener miedo de lo que pudiera ocurrir si ponían límites a sus hijos, expresando que les genera malestar pelear y discutir con ellos. La madre del caso N° 8 manifestó: *“Yo creo que nunca le puse los límites, yo soy muy blandita, soy más blandita que el padre con los permisos. Yo lo dejaba hacer lo que quería, a veces incluso él nos mandaba a todos nosotros. Yo es como que tengo... es culpa mía por no haberle puesto límites. Él está ahí por mí, aunque me diga “ma vos no tenes la culpa”* (Entrevista caso N° 8, 4 de diciembre de 2019)

Lo establecido por la madre podría estar relacionado con lo planteado por Winnicott (1998) respecto a que el cuidado de los niños, por parte de los padres, no debe corresponder a una autoridad débil, o que por miedo el niño se haga cargo de la autoridad. Además, esto también podría pensarse como una falta de asimetría entre los miembros de la familia al no estar diferenciados los roles en la relación padre/madre-hijo. De acuerdo con Rojas (2011) si bien actualmente se intensifica la simetría de la relación parento-filial (que en algunos casos hasta se invierte), es necesaria una clara línea entre generaciones en la familia para que ésta pueda llevar a cabo sus funciones. Sumado a esto, Araujo Monteiro, Gomes Gonçalves, da Luz Refosco y Medeiros Kother Macedo (2012), sostienen que la asimetría necesaria para el verdadero cuidado del otro actualmente se ve ausente por una falta del lugar parental de autoridad y de responsabilidad en la crianza de los hijos, observándose la indisponibilidad de muchos padres para cuidar a sus hijos o hijos sobre-investidos narcisísticamente. Se podría decir entonces, que existe una correlación de estos factores entre sí, que podrían haber llevado a que el adolescente transgreda.

Un aspecto a destacar del discurso de la madre es que ella se refiere a sí misma como culpable. Ante estos discursos la coordinadora del Taller resaltaba que es importante diferenciar entre culpa y responsabilidad, refiriendo que la primera surgiría cuando un padre/madre decide o pide al hijo que cometa un hecho delictivo, en cambio, la responsabilidad implica responder por estos hijos adolescentes, que son menores de edad, como por ejemplo, yendo a tribunales, asistiendo al Taller, buscando colegios para que sus hijos retomen las clases, etc., lo que pudo observarse en la mayoría de estos padres: *“No hay que sentir culpa, porque no hubo la intención, no es que a partir de un día vos dijiste no le voy a dar bola.”* (Registro POF, 10 de mayo de 2019).

Por otra parte, la madre del caso N° 5 sostuvo: *“Yo creo que en lo que falle es que no estuve alerta a lo que hacía él, yo estaba con otras cosas y no me fijaba donde estaba, qué hacía. Él*

hacía lo que quería porque yo no lo estaba detrás, tenía demasiada libertad. Yo me equivoque en no ponerle más límites” (Entrevista caso N° 5, 6 de diciembre de 2019)

Esto está relacionado con lo propuesto por Vázquez González (2003) respecto a que la falta de supervisión por parte de la familia es uno de los factores de riesgo relacionados a la transgresión. De acuerdo con el autor el supervisar es entendido como el tener conocimiento de lo que hace el menor tanto dentro como fuera de la casa, para así poder ir modificando sus conductas en relación a las experiencias vividas, a las capacidades del joven, al grado de madurez, para que a la par del crecimiento logren adquirir diferentes responsabilidades, sin correr ningún tipo de riesgo o daño. Cuando la supervisión de los padres es escasa, la relación con la delincuencia es alta. En esta misma línea, Rutter, Giller y Hall (2000), refieren a que estos padres no logran hacer un seguimiento de sus hijos, sus órdenes son ambiguas y poco claras.

Un aspecto a destacar de este caso es que la madre, además de tener dificultad para establecer límites y desconocer el paradero de sus hijos durante el día participa de una organización social y trabaja independientemente lo que lleva a estar ausente de su hogar durante varias horas. Todos estos factores podrían haber posibilitado que el adolescente lleve a cabo conductas transgresoras y se exponga a situaciones de riesgo. A partir de esto es que resulta fundamental resaltar que el control de padres y madres sobre las actividades de sus hijos es necesario para que éstos aprendan a asumir responsabilidades sin correr riesgos ni sufrir daños.

El padre del caso N°3 por su parte sostuvo: *“Yo creo que todo viene desde chico, no dejarlo tanto en la calle, tener más control. Porque esto no fue de un día para el otro. Ser responsable y no dejar que haga lo que quiera. El control lo tenemos nosotros como papás. Para mí al ver mi ausencia, a él le pasó todo esto. Yo lo entiendo porque pase lo mismo, quería tomar las riendas de mi vida. A los 11 años yo ya iba al baile, fue todo permitido por mis padres. Yo creo que a veces lo hacemos porque tenemos miedo de que nuestros hijos se nos vayan, pero hay que poner reglas. El problema estaba en que de chico nos manejaba, hacia lo que quería, y cuando lo dejas hacer lo que quiera, lo hacen. Por eso creo que de chico hay que llevar las riendas de nuestros hijos (...) Si el chico se quiere escapar lo hace, si no lo encarrilaste de chico es difícil de grande. Decir “no sé por qué habrán salido así” es lavarse las manos, nosotros somos los responsables y tenemos que ser testimonios”* (Entrevista caso N° 3, 8 de noviembre de 2019).

Lo relatado por el padre podría estar relacionado con una marcada devaluación de la jerarquía de la figura del padre como agente de la ley, proliferando en su lugar por un lado padres violentos, autoritarios, ubicados en el lugar de ley, y por otro padres débiles, inconsistentes,

padres incapaces de separar al hijo de la madre. De acuerdo con Luna (2001) en los jóvenes en conflicto con la Ley Penal habría algo de la Ley que falla, es decir, se evidencia un déficit de la inscripción del Nombre del Padre, dejando al sujeto en posición de objeto.

Un aspecto a destacar de este caso es, que como manifiesta el padre en su discurso, él estuvo muy ausente. Además, de acuerdo a los documentos institucionales el adolescente posee una muy mala relación con el mismo, ya que cuando vivía con ellos le pegaba a su madre. Se podría hipotetizar, por lo tanto, de acuerdo a estas características, que el adolescente lleva a cabo conductas violentas ya que no existe una ley que lo contenga. En este sentido, Le Bretón (2002) plantea que al igual que otras conductas, la violencia es un juego con los límites, una manera de chocar con el mundo ante la falta de un muro de contención que oficie de sostén y en busca de encontrar la distancia óptima para el vínculo social. Las conductas de riesgo aparecen como un intento de simbolizar un lugar dentro del colectivo, insertarse en el mundo, ir en busca de una legitimidad. Se considera que ante la falta de significados y de límites que la sociedad ya no le proporciona al adolescente, éste busca como forma de escape al sufrimiento, enfrentar al mundo físicamente a través del pasaje a la acción para encontrar referencias, para encontrar su lugar en el mundo.

De acuerdo a lo planteado anteriormente, respecto a la ausencia de ley paterna, resulta fundamental en esta instancia resaltar un fragmento de la entrevista del caso N° 3 para comprender de mejor manera la conducta del adolescente. *“Yo me di cuenta de que él con lo que hacía, con su comportamiento, me estaba diciendo que me necesitaba, y no lo supe ver”* (Entrevista caso N° 3, 8 de noviembre de 2019). Esto está relacionado con lo que plantea Winnicott (1998) acerca de que la conducta antisocial es entendida como un llamado de atención a la autoridad paterna para poner un límite a su conducta impulsiva. Es posible pensar, por lo tanto, que esto es lo que ocurre en estas familias, que esta conducta transgresora es un pedido de auxilio por parte del adolescente para que la figura de autoridad le ponga un límite. Sin embargo, la detención del hijo adolescente podría pensarse no solo como un llamado de atención a la familia sino a la sociedad que muchas veces los rechaza, los priva de voz, de lenguaje.

Por último, se puede observar en todos los discursos de los padres que refieren a que, a partir del inicio de la adolescencia de sus hijos, empezaron a tener dificultades para “controlarlos”. En este sentido, afirmaron que “hablaban” mucho con sus hijos pero que no les ponían consecuencias a los comportamientos indeseados. Así, sostuvieron no poder aplicar penitencias a los mismos y refirieron, en algunos casos, recurrir al castigo físico cuando ya no los podían controlar. Con respecto a esto, Garrido et al. (2006) manifiestan que las familias de los

adolescentes en conflicto con la ley penal suelen emplear estrategias de disciplina inefectivas, que no logran controlar las conductas de los jóvenes, ni antes de la realización de las conductas delictivas ni después de producirse las mismas. Los padres suelen intentar controlar las conductas antisociales mediante el uso frecuente del castigo, cuando su hijo se comporta violentamente estos suelen actuar mediante violencia también, pese a que comprueban reiteradamente que suele resultar poco efectivo, ya que muchos jóvenes aceleran su propia violencia a partir de la imitación de los padres.

- VÍNCULOS AFECTIVOS DÉBILES

Los vínculos afectivos débiles aparecen, en el discurso de los padres de los adolescentes en conflicto con la ley penal, como una tercera categoría dentro de los factores de riesgo familiares. Refirieron a esta variable las madres de los casos N° 2, 4, 5, 6 y 8. Ante la pregunta de qué cree que lo llevó a su hijo a cometer un delito, la madre del caso N° 2 dijo: “(...) *Y para mí una de las fallas fue que antes no había amor, cariño, abrazo. Ahora estamos recuperando el tiempo perdido. Yo le tengo fe de que va a cambiar.*” (Entrevista caso N° 2, 25 de octubre de 2019).

Lo sostenido por la madre se relaciona con lo planteado por Catalano y Hawkins (1997) acerca de que la calidad de las relaciones entre los padres y los hijos es fundamental. La interacción padres-hijos y el fuerte apego familiar han sido considerados habitualmente como factores que protegerían potencialmente a los hijos contra el desarrollo del comportamiento delictivo. Sin embargo, las pautas educativas erróneas y la presencia de vínculos afectivos débiles han sido típicamente relacionadas con un aumento del riesgo de los mismos.

De acuerdo a lo manifestado en la entrevista y a las características que se presentan en los documentos institucionales es posible observar en la madre, dificultad para expresar afecto y apoyo a su hijo, lo que podría haber posibilitado que el adolescente lleve a cabo esta conducta. En este sentido, Canales (1993) refiere que el vínculo entre el niño y su madre determina un sentimiento de seguridad fundamental, a partir del cual el niño puede construir adecuadamente el sentimiento de su propia valía y la confianza en sí mismo. Sin ellos, el niño no podrá establecer relaciones afectivas de buena calidad con su entorno. Las carencias afectivas constituyen, de este modo, el primer factor predictivo de la futura asocialidad. De esta manera se podría hipotetizar que lo planteado por el autor, respecto a la carencia afectiva, es lo que habría ocurrido en el caso N° 2.

De manera similar la madre del caso N° 4 manifestó, tanto en la primera como en la última entrevista, que la conducta de su hijo se debía a falta de apoyo de su parte: *“La verdad que no sé, a lo mejor porque yo lo descuidé un poco, como te dije al principio, otra cosa no sé”*. (Entrevista caso N° 4, 29 de noviembre de 2019). Esto podría estar vinculado a lo planteado anteriormente respecto a que los déficits afectivos y los errores educativos son tanto más graves cuanto más grande es la falta de cariño y cuanto más pronto se manifiestan. De acuerdo con González (1998) la afectividad serena o la privación afectiva, la hostilidad o la indiferencia, la ausencia de unidad familiar, la ausencia de disciplina materna y paterna se asocian regularmente con un pronóstico sombrío. Por lo que es posible pensar en este caso que los problemas afectivos, las desavenencias y enfrentamientos pueden haber tenido repercusiones psicológicas sobre cada uno de los miembros de la familia y, por tanto, sobre el desarrollo psicológico y social del adolescente.

Por su parte la madre del caso N° 6 sostuvo: *“(…) Y cuando falleció mi hija, yo estaba de luto y me encerré en mi dolor y yo lo solté. Estaba en mi dolor, en mi mundo. En todo ese tiempo yo no le preste atención, él hacía lo que quería, iba a la calle y consumía. Yo estaba en una depresión. Yo siempre le di atención a mis hijas mujeres.”* (Entrevista caso N° 6, 6 de diciembre de 2019).

De acuerdo a lo sostenido por la madre, es posible vincular la conducta del adolescente con lo que plantea Winnicott (1998), respecto a que la tendencia antisocial es una conducta de reivindicación frente al sufrimiento y a la carencia. Esta tendencia se encuentra relacionada con la privación, es decir: la privación de algo bueno y positivo que el niño ha tenido y de lo que fue desposeído. Sólo por un tiempo el niño es capaz de mantener vivo el recuerdo de esa experiencia positiva. Es decir, el comportamiento antisocial interpela fundamentalmente al ambiente en que vive el niño, y expresa una esperanza de que éste, finalmente, sea capaz de tolerar sus conductas. De esta forma, el niño que roba no está buscando el objeto robado, sino que busca a esa madre que lo ha defraudado en la tarea de satisfacer las necesidades de su yo antes de que él fuera capaz de introyectarla y de mantener esa introyección. La busca con un sentimiento de frustración y con una marcada necesidad de encontrar autoridad paterna que ponga un límite en su conducta impulsiva, es decir es un pedido de auxilio en busca de control ejercido por personas fuertes, cariñosas y seguras.

La ausencia de apoyo emocional de la madre con respecto al adolescente del caso N° 6 podría haber posibilitado la conducta del mismo, ya que este es un elemento vital para enfrentar diversas vicisitudes por las que pasa el ser humano, como por ejemplo el fallecimiento de su

hermana. Es decir, la familia no se presenta como un elemento de apoyo ante las dificultades surgidas tanto fuera de la familia como dentro de ella. A la familia le corresponde aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo psicológico sano no resulta posible. El clima de afecto implica el establecimiento de relaciones de apego, un sentimiento de relación privilegiada y de compromiso emocional.

Por otra parte, otro aspecto a resaltar, tanto en el caso N° 6 como en los discursos de los padres en los talleres y las entrevistas, es que la falta de afecto podría haber repercutido en algunos adolescentes que transgreden la ley como una forma de “llamar la atención”, exponiéndose a situaciones de riesgo. Esto puede observarse en el caso N°5, en el cual la madre manifiesta: *“No, comprendí que está dolido con el papa por la falta de atención y porque las palabras marcan, decirle vos no servís y eso lo hizo alejarse de casa. Él a partir de eso empezó a hacerse el rebelde, para llamar la atención. Ahora me toca ayudarlo con lo que aprendí acá”* (Entrevista caso N° 5, 6 de diciembre de 2019).

Las madres de los casos N° 5 y 8 refieren a que les brindan a sus hijos todo lo material, pero que muchas veces se olvidan de brindarles atención y apoyo: *“Uno le quiere dar todo lo material, pero lo importante son los valores(...) Yo creo que no le di afecto, ahora siempre le digo te amo y le explico que es ahora cuando más tenemos que unirnos y apoyarnos”* (Entrevista caso N° 5, 6 de diciembre de 2019) .; *Me cuesta entender porque le compramos todo, tal vez la falla fue otra”* (Entrevista caso N° 8, 4 de diciembre de 2019) .

Lo sostenido por las madres se puede relacionar con el concepto de Linares (2012) sobre lo que es la nutrición relacional, cuya existencia es de suma relevancia en la relación paternofilial porque permite, por ejemplo, el desarrollo de una autoestima estable en los adolescentes. Los elementos de la nutrición relacional, que no es posible percibirlos en los relatos anteriores son el reconocimiento de la existencia y de las necesidades de su hijo (se reconocieron sólo las necesidades materiales), la valoración en cuanto apreciar las cualidades positivas de sus hijos (es muy frecuente en los relatos de los padres que no logren resaltar conductas que si eran valorables) y, por último, el cariño y la ternura, las tan necesitadas demostraciones afectivas

Esto permite reflexionar sobre lo difícil que debe ser para estos padres el hacerse responsables entre tantas carencias, pensando que para ellos es más importante quizás poder llegar a cubrir las necesidades básicas de sus hijos dejando de lado, sin darse cuenta, que también podrían estar necesitando que los contengan, los acompañen, les brinden afecto y les pongan límites, ya que están transitando por la adolescencia, la cual es una etapa de cambios conformada por diversas

crisis y duelos que deben superarse para lograr una identidad adulta. El sistema familiar es quien tiene mayor relevancia en este proceso de socialización y educación, por lo que se concluye que el apoyo de la familia es fundamental en la vida del adolescente.

- CONFLICTOS FAMILIARES PRESENTES EN EL HOGAR

Los padres entrevistados identificaron los conflictos en el hogar como una de las categorías que llevan a que sus hijos transgredan la ley. En primer lugar, se comenzará con el relato de la madre del caso N° 5, la cual refiere principalmente al maltrato tanto físico como verbal en la familia: *“Y yo comprendí que la situación que se vivía en el hogar, la violencia física y verbal le estaba afectando. Es por eso que tomé la decisión que tomé, fue por ellos. Yo le pedí perdón a mis hijos, y espero que esto nos ayude a todos”* (Entrevista caso N° 5, 6 de diciembre de 2019).

Lo establecido por la madre está relacionado con lo que plantea Vázquez González (2003) respecto a que las situaciones de violencia y maltrato pueden constituir un factor de riesgo que promueva conductas transgresoras debido a que generan una tensión en el entorno familiar donde los adolescentes pueden desarrollar una agresividad latente contra sus progenitores que luego manifiestan en el afuera al no poder hacerlo dentro del hogar. En esta misma línea, Serbin y Karp (2004) plantean que existiría una transferencia intergeneracional en la cual los niños agredidos presentarían secuelas que incluirían fracaso escolar, mayores conductas de riesgo, embarazos adolescentes y pobreza familiar; estilos que estarían más relacionados con conductas agresivas y crueles hacia los demás.

El maltrato infantil de acuerdo con Widom(1989) aparece como uno de los principales factores de riesgo para el posterior desarrollo de conductas antisociales, los casos graves y crónicos de delincuencia juvenil a menudo corresponden a jóvenes que han presenciado actos violentos en el hogar. Es importante aclarar, que el maltrato infantil comprende tanto el maltrato físico como las diversas formas de maltrato psicológico. Este último abarca la desconexión y abandono afectivo, la agresividad, el descuido físico, el abuso sexual y los mensajes contradictorios.

En relación al maltrato psicológico, la madre del caso N° 5 planteó en la entrevista lo siguiente: *“Yo comprendí que está dolido con el papa por la falta de atención y porque sus palabras marcan, decirle “vos no servís” lo hace alejarse de casa (...)”* (Entrevista caso N° 5, 6 de diciembre de 2019). Esto podría relacionarse con los aportes de Giberti (2005), quien considera que el abuso emocional son maneras expresadas o sutiles, verbales o no verbales de

los adultos para transmitir el desprecio que tienen hacia los menores, la desconfianza en sus capacidades, el menosprecio hacia sus torpezas propias de la edad. Los contenidos de los mensajes que le dan los adultos a los menores se hacen carne en la mente infantil, es decir, que se piensan y se evalúan a sí mismo de acuerdo a lo que les expresan y al trato que reciben. Los adultos no son conscientes que el lenguaje tiene una capacidad activa o ejecutante que influye y penetra en los menores como una verdad incambiable.

Por lo tanto, de acuerdo a lo planteado, se podría hipotetizar que la violencia física y simbólica, la desatención y la falta de entendimiento en el hogar del adolescente del caso N° 5 han conducido a su salida del hogar como una reacción esperable ante el medioambiente hostil, y además esto puede haber llevado a que inicie la búsqueda por integrarse a otros ámbitos sociales donde recuperar u obtener lo que en el hogar no se ha encontrado, como es el grupo de pares con el cual comparte la mayor parte del tiempo.

Lo expuesto podría relacionarse también con los aportes de los autores Barrón et. al (2010), quienes elaboraron una caracterización sobre las familias de los adolescentes en conflicto con la ley penal de la ciudad de Córdoba, planteando que es frecuente hallar en las familias de estos adolescentes violentos o violentados, antecedentes de conducta violenta en otros integrantes del grupo, con procesos o cuadros psiquiátricos, antecedentes de alcoholismo, familias en etapa de desintegración o ya desintegradas. Esto puede observarse en el taller, ya que la madre del caso N° 5 manifestó que el padre de sus hijos es alcohólico y que siempre les pegaba frente a ellos. Así también se ve reflejado en el discurso del padre del caso N°3, quien refirió a antecedentes de alcoholismo: *“Y yo antes hacía cualquier cosa, tomaba, me drogaba. Yo no sé si él a los 5 años podía captar todo lo que pasaba. Fui un mal ejemplo, después con los años dejé de tomar y empecé a ser más ejemplo”* (Entrevista caso N° 3, 8 de noviembre de 2019).

En estos procesos los adolescentes pueden jugar roles diferentes como receptores, generadores, espectadores o cómplices, lo que puede tener consecuencias en su desarrollo psicológico, físico y social. Se podría hipotetizar entonces, que el rol de los adolescentes de ambos casos en las situaciones de violencias vividas en el hogar posibilitó que aprendan que la violencia representa una medida eficaz para resolver conflictos y por lo tanto la utilizaron con dicho fin.

Teniendo en cuenta lo analizado, es posible decir que en las familias de estos adolescentes se da un clima conflictivo. De acuerdo con Tenenbaum (2016) se entiende por clima familiar conflictivo a la tensión y la violencia latente o explícita que experimentan directa o indirectamente quienes habitan en el hogar. De este modo, más allá de si los problemas involucran o no a los adolescentes, los conflictos del hogar hacen que la pertenencia y el “pasar

tiempo” en ese espacio no sea la opción más agradable. Todo lo contrario, son hogares expulsivos dado que los adolescentes no encuentran allí un espacio de tranquilidad, comodidad y bienestar

Por otra parte, uno de los problemas familiares de frecuente mención, razón por la cual se puede aseverar que es un fenómeno estructural, es la falta de comunicación o la comunicación negativa entre los integrantes de la familia, los mensajes que se intentan transmitir se caracterizan por ser confusos y contradictorios. La madre del caso N° 8 dijo: *“Y yo creo que nos faltó hablar con él. Ahora tenemos que hablar, ver qué le pasa, por qué llegó a hacer lo que hizo”* (Entrevista caso N° 8, 4 de diciembre de 2019).

Esto podría relacionarse con el análisis de Steede (2006), quien en su libro refiere a que los padres ofrecen las respuestas a sus hijos que derivan en las llamadas conversaciones cerradas, aquellas en las que no hay lugar para la expresión de sentimientos o, de haberla, éstos se niegan o infravaloran. Se trata de padres que quitan importancia a las cosas, autoritarios, que dan conferencias, que hacen sentir culpa. Frente a estas actitudes, el autor señala la importancia de la comunicación abierta, basada en la capacidad de escuchar activamente. Escuchar activamente es algo más que percibir con nuestros oídos las palabras que nos envía la persona con la que estamos hablando. Supone estar dispuesto a captar los sentimientos del niño, la profundidad con que le ha afectado el problema y la necesidad manifiesta o no, de hablar de cómo se siente. Y también supone respetar y aceptar al niño tal y como es, sin etiquetarlo ni rechazarlo por lo que siente o por lo que hace.

En relación a lo planteado y considerando las entrevistas como los registros de los diferentes talleres, se puede inferir que en la mayoría de las familias hay poca comunicación entre padres e hijos. Los padres suelen manifestar que para comunicarse adecuadamente con sus hijos basta simplemente escuchar cuando se dirigen a ellos. Sin embargo, el mundo emocional del niño es tan o más complejo que el del adulto, lo que dificulta el entendimiento entre ambos y hace imprescindible que los padres aprendan el arte de la comunicación para garantizar que decimos lo que queremos decir y, a la vez, escuchamos lo que realmente el niño siente y quiere decir. Frente a esta dificultad es posible preguntarse: ¿Qué es lo obstaculiza la comunicación entre los miembros de estas familias? ¿Qué importancia y lugar le otorgan a la expresión de sentimientos? En este sentido, es interesante destacar cuando la Coordinadora les proponía a los padres tomarse un momento para escuchar, apoyar y contener a estos jóvenes que manifiestan a través de sus comportamientos algún malestar que los aqueja, siendo así el portavoz de una disfuncionalidad del grupo familiar, teniendo presente que el adolescente se expresa con conductas más que con palabras:

“Pero es la tercera vez que cae, ¿qué te hace pensar a vos? Los adolescentes hablan a través del comportamiento, lo hacen para que el adulto lo mire. Él quiere decirnos que algo le está doliendo, que algo no está bien. ¿Cuál es la raíz del dolor de mi hijo? Hay que trabajar como padres en esa raíz. Acá no justificamos el delito, sino que trabajamos en el por qué” (Registro POF, 21 de Junio de 2019);

“La venda, la curita para el alma es la palabra. Ustedes me dicen yo me voy del taller más liviana, eso es porque acá ponemos en palabra el dolor. Tu hijo te está pidiendo a gritos ayuda” (Registro POF, 18 de junio de 2019)

“Hay que abrir los ojos y empezar a leer el comportamiento” (Registro POF, 20 de septiembre)

- GRUPO DE PARES COMO FACTOR DE RIESGO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN DE Se.N.A.F

Como se mencionó al inicio del análisis de este objetivo, otro de los factores de riesgo que los padres perciben que facilitan las conductas transgresoras en sus hijos después de la intervención de Se.N.A.F fue lo relacionado al grupo de pares. De los 8 casos de los adolescentes cuyos padres fueron entrevistados, 2 reconocieron la existencia del mismo. Se observa una disminución respecto al primer taller, en el cual 7 de los padres refieren a esta variable.

Se comenzará con el discurso del padre del caso N° 4: *“Yo digo que solo la junta, los amigos. Para no ser menos hace lo que hace. Además, hay chicos que se juntan con él y toman pastillas. Yo no sé si lo hace, a lo mejor adelante nuestro no pero después sí. (...) La primera vez que cayó fue por robo con su junta. Siempre le gustó la plata... pedía plata plata”* (Entrevista caso N° 4, 29 de noviembre de 2019). Es importante destacar de este caso, que tal como lo manifiesta el padre, el adolescente salió a robar junto a sus amigos. Lo que coincide con lo que se observó, tanto en el taller como en las entrevistas, respecto a que la gran mayoría de los casos que delinquen lo hacen en conjunto con otros niños o adolescentes, pero en composiciones cambiantes.

Carnevali y Kallman (2007) en relación a esto, plantean que es frecuente durante la etapa de la adolescencia, la pertenencia en grupos de pares desviados. En general, estos grupos no tienen una estructura fija, más bien sus integrantes cometen las infracciones sin que exista una

jerarquía estable, por lo que los intervinientes en tales infracciones pueden cambiar. Se trata de reuniones habituales de jóvenes, ocasionales o transitorios, que, sin estar organizados con fines delictivos, cometen comunitariamente algún ilícito. Es más, la comisión de delitos surge en el contexto de grupo, sin planificación concreta del hecho o sin aclaración previa de la distribución de funcionamiento.

En esta línea, la madre del caso N° 7 manifestó: *“Yo le dije qué onda con tus amiguitos... Mi ex le dijo vos con tus amigos no te juntas más... Mi mamá, que es su abuela, le entró por el punto débil diciéndole que no, que ella sabía que era mala junta. Es la junta, son los amigos los que lo llevan a hacer eso”*. (Entrevista caso N°7, 6 de diciembre de 2019).

Lo establecido por la madre se relaciona con lo que plantean Nickel y Zieger (2007) acerca de que la característica central de todos los grupos de pares es la presión del grupo que puede motivar a los miembros a un comportamiento socialmente desviado y criminal. En un proceso dinámico, la voluntad de los individuos se ve obligada a la voluntad del grupo, que es independiente a la del individuo y desarrolla una dinámica propia. Entonces, cuando el individuo no actúa de la misma manera como lo hace el grupo, debe enfrentar la resistencia de éste, lo cual requiere una alta capacidad de autodefensa interna y externa que le permita enfrentar esa presión, algo que dado el incompleto desarrollo social de los adolescentes en su caso rara vez ocurre. Las normas internas del grupo fuerzan a los jóvenes a actuar de una manera distinta de la que harían si no estuvieran en un grupo.

En ambos casos fue posible observar una susceptibilidad a la presión por parte de sus hijos, lo que podría estar relacionado a la situación familiar de los adolescentes, a la falta de supervisión por adultos o también, el estilo de educación paternal, autoritario o más permisivo. La relación distante con la familia posibilitó que la influencia del grupo sea mayor.

Así también se observó en los talleres que los conflictos intrafamiliares, la separación de los padres, la situación socioeconómica y los problemas de vivienda llevaron a muchos adolescentes a asumir cargas sociales adicionales. Y es bajo estas circunstancias que aumenta la importancia de los grupos extrafamiliares para los jóvenes. La influencia puede ser favorable para el desarrollo de su identidad, al ofrecer la posibilidad de conocer sus propias capacidades en la colectividad y para resolver conflictos, así como practicar una conducta social y experimentar y desarrollar en parte su propia identidad. Sin embargo, existen otros factores que influyen como factor de riesgo, ya que en determinados casos el adolescente puede integrarse a un grupo de pares que transgreden y desarrollar así, enlaces más débiles con la sociedad. Precisamente, es en estos grupos donde el adolescente puede encontrar un reconocimiento personal que no le otorgan los padres u otras organizaciones formales.

Esto último está vinculado con que instituciones como la familia, la escuela, el barrio o la comunidad local, se han debilitado como instancias de mediación y de protección de los niños, con lo cual, pasan a ocupar este lugar el grupo de pares y la calle (Ponce, 2014). De acuerdo con Carnevali y Kallman (2007) los grupos de pares juegan un papel esencial en el proceso de socialización de los adolescentes. Bajo la “socialización” se entiende hoy la totalidad de aquellos procesos en los que el ser humano, como ente individual se convierte en un miembro activo de una sociedad y su cultura. A través de estos procesos el individuo obtiene su identidad como persona capaz de obrar en la sociedad.

A modo de resumen, a partir de la información analizada en el presente objetivo se puede decir que los padres percibieron como factores de riesgo, después de la intervención de Se.N.A.F, aspectos familiares y ligados al grupo de pares. En lo que respecta a los factores familiares, mencionaron que aquellos que facilitan la conducta transgresora de sus hijos son: estilo parental permisivo, falta de límites, vínculos afectivos débiles y conflictos familiares presentes en el hogar.

En cuanto al estilo parental permisivo y la falta de límites, las familias de los adolescentes reconocieron en sus discursos factores que permitirían caracterizarlas como familias atravesadas por la existencia un control parental escaso, siendo incapaces de disciplinar a sus hijos y permitiéndoles hacer todo lo que quieran. Esta permisividad sin límites o la falta de un modelo coherente en la conducta de los padres, constituyen un elemento distorsionador de la conducta de los hijos. Además, se registró de manera frecuente, en los discursos, la falta de supervisión sobre las actividades de sus hijos asociada a distintos motivos, y la dificultad en la puesta de límites y reglas de manera efectiva. Esto último se puede observar en los talleres y entrevistas, ya que la mayoría de los padres refirieron no poder poner límites o “decir que no” a éstos, ya sea por no sentirse capaces de hacerlo o por falta de autoridad.

Los vínculos afectivos débiles aparecen como otra de las categorías dentro de los factores familiares de riesgo percibidos por los padres. La falta de afecto y apoyo podría haber repercutido en algunos adolescentes que transgreden la ley como una forma de “llamar la atención”, exponiéndose a situaciones de riesgo.

Por otra parte, en relación a los conflictos en el hogar los padres identificaron la presencia de situaciones de violencia y maltrato, falta de comunicación y clima familiar hostil. Estos pueden constituir factores de riesgo que promuevan conductas transgresoras debido a que generan una

tensión en el entorno familiar donde los adolescentes pueden desarrollar una agresividad latente contra sus progenitores que luego manifiestan en el afuera al no poder hacerlo dentro del hogar.

Resulta fundamental remarcar que, una vez finalizado el proceso en los talleres, muchos padres y madres relacionaron las conductas de riesgo en sus hijos con problemáticas en el interior de la familia o asuntos personales. Esto es importante porque está vinculado con que la familia, luego de la intervención de Se.N.A.F, comienza a percibir su papel en la instalación de factores de riesgo. Puede observarse un salto cualitativo en el análisis que los padres elaboran, al considerar discursivamente haber comenzado a implementar con sus otros hijos algunos de los conceptos vertidos en el taller y se muestran dispuestos a producir cambios al momento de que el adolescente retorne a su hogar. Es decir, logran evaluar las causas por las cuales han provocado la exposición a riesgo de su hijo, responsabilizándose por la misma.

A diferencia del primer taller, reconocen las necesidades afectivas de su hijo y los errores cometidos como padres. También, expresaron que reflexionaron sobre cómo reparar sus errores y que hubo cambios en la forma de relacionarse con el adolescente y la familia a partir de haber asistido al taller.

Siguiendo con el impacto que tuvo el taller, algunas madres destacaron actualmente brindarles más atención a sus hijos y ponerles límites, en relación con ello una madre expresa: *“Ahora que pongo límites es diferente, está haciendo lo que le digo, los horarios que tiene que volver. En mi casa no se fuma porro, no se habla de choreo. Ahora llevo un orden, me di cuenta de que el taller ayuda, que uno está equivocado”* (Registro taller de padres, 21 de junio de 2019)

Así también, muchos padres y madres expresaron estar agradecidos con el taller y las intervenciones de los profesionales, a pesar de que habían referido no querer asistir en un principio y estar “negados” con éste, en relación a esto un padre expresó: *“Yo no quería venir, no la iba a acompañar a mi mujer. Me ha servido mucho, he aprendido mucho. Usted hoy edifico mi vida”* (Registro taller de padres, 26 de abril de 2019).

Para concluir entonces podría decirse que, en tanto la familia juega un papel fundamental en el desarrollo del adolescente, resulta de suma importancia tener en cuenta el vínculo familiar ya que muchos factores de riesgo o de protección se presentan dentro de ella. De la funcionalidad, la solidez de la familia y de la relación que el niño y/o adolescente tenga con sus padres dependerá, en gran medida, la forma como el sujeto se relacionará con y en el contexto social más amplio. Es por esto que la comunidad científica ha sido clara y enfática en reconocer que en el contexto familiar se concentran muchos de los principales factores de riesgo de la conducta antisocial en adolescentes (Arce, 2004).

10.7.3 FACTORES DE RIESGO QUE FACILITAN LA CONDUCTA TRANSGRESORA DESDE EL DISCURSO DE LOS PROFESIONALES DE Se.N.A.F

En el presente objetivo se expondrán las perspectivas de los profesionales de la Se.N.A.F sobre los aspectos que podrían generar la transgresión a la ley penal en los jóvenes. Para dar respuesta al mismo, se exploraron los factores de riesgo que facilitan la conducta transgresora de los adolescentes en conflicto con la ley penal a partir de 7 entrevistas semi- estructuradas a quienes trabajan en los Programas de Acompañamiento Psicoeducativo y el Programa de Orientación Familiar.

El rol de los profesionales de ambos programas apunta a promover el desarrollo saludable del adolescente con el fin de prevenir que se exponga nuevamente a situaciones de riesgo, acompañando y orientando a éste y a su familia e identificando sus necesidades y los recursos con los que cuentan. Además, teniendo en cuenta la complejidad de la temática abordada, resulta de importancia analizar los factores de riesgo que llevan a la transgresión desde la mirada de los distintos actores involucrados en esta situación de conflicto con la ley penal, para así llegar a una comprensión más abarcativa. Por ello, se consideró la perspectiva de los profesionales intervinientes en ambos programas. Su aporte ofrece una mirada más teórica, elaborada e interdisciplinaria en relación a la conducta transgresora.

Surge el interés por el estudio de los factores de riesgo que podrían facilitar dichas conductas debido a que se observa como una problemática recurrente en el discurso de la población que asiste a ambos programas y, por lo tanto, constituye un objetivo de intervención frecuente por parte de los profesionales.

Cabe destacar que, si bien el eje de análisis es el discurso de la familia de los adolescentes en conflicto con la ley penal, la perspectiva de los profesionales es fundamental ya que la modificación de los factores de riesgo que los padres reconocen en el primer y tercer taller se debe al trabajo desde el POF. Se podría decir, por lo tanto, que a la hora de abordar la problemática de los adolescentes es imprescindible el trabajo en conjunto con la familia, ya que por más que se trabaje con el joven de manera individual, si al culminar el proceso penal y, al regresar al hogar no se han implementado modificaciones en sus vínculos más próximos difícilmente esos cambios se puedan sostener y perdurar.

En este sentido, Arévalo y Maldonado (2004) señalan que, es necesario poder remitirnos y trabajar conjuntamente con la familia del adolescente en conflicto con la ley penal, ya que el joven, es integrante y emergente de una configuración familiar con singularidades, en donde

aparecen aspectos saludables y otros patológicos, donde como profesionales debemos estimular a que los integrantes de la familia reconozcan esas partes para luego poder elaborarlas con el fin de lograr un posicionamiento crítico respecto a los roles e interacciones.

A continuación, se presentan los factores de riesgos que podrían facilitar la transgresión a la ley penal desde la perspectiva de los profesionales, tanto del POF como del Programa de Acompañamiento Psicoeducativo, organizadas en las siguientes categorías: individuales, familiares, ligadas al grupo de pares, socioeducativas, socioeconómicas y culturales y sociales comunitarias.

- CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES O DE PERSONALIDAD

De acuerdo con los profesionales entrevistados existen características de naturaleza individual o de la personalidad del adolescente que podrían promover la aparición de conductas transgresoras en los adolescentes.

En primer lugar, refirieron a la dificultad de comunicarse debido a la ausencia de palabra. Los profesionales coincidieron en que, a través de su conducta, el adolescente busca decir algo a modo de llamado de atención ya que actúan lo que no pueden poner en palabras. Es decir, no expresan con palabras, expresan con acciones, todas sus conductas tienen mensajes: *“Su forma de comunicarse es muchas veces la violencia, porque falta la palabra. Porque donde hay palabra no hay violencia, no hay pasaje al acto. En este caso al haber poca palabra, poca elaboración simbólica tenes mucho más acto”* (Entrevista profesional N° 3, 2 de diciembre de 2019). En este sentido parece interesante destacar cuando la Coordinadora del taller les proponía a los padres tomarse un momento para escuchar a estos jóvenes que manifiestan a través de sus comportamientos algún malestar, siendo así el portavoz de una disfuncionalidad del grupo familiar, teniendo presente que el adolescente se expresa con conductas más que con palabras. La Coordinadora dice: *“la curita del alma es la palabra, hay que hablar”*.

En esta misma línea, los profesionales refieren a que los adolescentes no han aprendido a expresar lo que les pasa, sus necesidades, sus emociones; lo cual puede deberse a que su familia tampoco lo aprendió y no las reconoce o las deslegitima, obteniendo así respuestas de rechazo a las muestras de cariño. Por ende, al no saber manejar cuestiones vinculadas con lo emocional

ni haber tenido una enseñanza sobre modos adecuados de resolver conflictos, acuden a la transgresión, a la violencia como estrategia y resulta difícil que puedan solucionarlos de un modo pro-social. En relación a esto Laursen y Marqués (s.f) mencionan que los adolescentes con características transgresoras tienen como particularidad que les suele resultar complejo expresar con palabras las emociones y en algunas ocasiones también pueden presentar dificultades para relatar su historia de vida, aunque este relato sea solo una descripción. Es en este punto donde suele observarse escasez de palabras para vehiculizar las emociones inherentes a su proceso de constitución subjetiva, no logrando entonces una adecuada tramitación psíquica de sus afectos. En lugar de la palabra como elemento privilegiado para la mencionada tramitación cobra preeminencia el accionar impulsivo.

A partir de esto, puede hablarse de una degradación de lo simbólico y de la palabra que no es sin consecuencias, y la más visible actualmente es la emergencia de la violencia, violencia irracional, sin códigos, sin límites, que nos atraviesa como sociedad, violencia que busca la destrucción del Otro y de la cual los jóvenes son cada vez más protagonistas. Esto coincide con lo que plantea Luna (2001) “La violencia es signo de la palabra no mediada en el encuentro de lo ajeno con lo más propio” (p. 145).

Se observa por lo tanto que los adolescentes en conflicto con la ley penal presentan un predominio de los mecanismos de acción por sobre aquellos que implican procesos más reflexivos, lo que está relacionado con la dificultad de problematizar. Es por esta razón que los profesionales refieren a que su rol se basa en poner en palabras lo no dicho para poder hacer una mejor elaboración del proceso de duelo o de la situación dolorosa por la que quizás están atravesando. A lo largo del proceso de trabajo con ellos, lo esperable es que el sujeto pueda comenzar a poner palabras.

Por otra parte, en las entrevistas hicieron referencia a que no hay evaluación de las consecuencias de sus acciones, como así tampoco se responsabilizan del hecho cometido. Una de las profesionales manifestó: “*No hay elemento de simbolización, hay una tendencia al pasaje al acto y no hay posibilidad de reflexionar sobre las consecuencias de lo que hace*” (Entrevista profesional N°4, 2 de diciembre de 2019). De manera similar una de sus colegas dijo: “*Ellos no tienen idea de procesos, tienen ganas de unas zapatillas, bueno salgo y pesco. Y no les importa nada, si tienen que sacar un cuchillo y lastimar a alguien*” (Entrevista profesional N°1, 2 de diciembre de 2019). Esto se relaciona con lo que plantea Mayer (2009), respecto a que se ha fomentado una “cultura de la acción” ya que falta una reflexión previa sobre las acciones que se ejecutan y también sobre las consecuencias de ese accionar.

Los profesionales refieren a que la mayoría de los adolescentes no reconocen las consecuencias de sus acciones de manera espontánea. Sin embargo, a partir de la realización de intervenciones muchos de ellos pudieron identificar algunas consecuencias de sus acciones, pero sólo aquellas que los atañen personalmente a ellos o a sus familiares. Por ejemplo, algunos adolescentes manifestaron, en las entrevistas con los profesionales, el deseo de no volver a realizar conductas transgresoras para evitar encontrarse nuevamente en el Complejo Esperanza, debido a que esta situación los perjudica a ellos y a su familia. Es habitual que los adolescentes se preocupen más por las consecuencias de sus actos que los perjudican directamente a ellos y no por el daño causado en otros. Esto coincide con lo que plantea Hoyos Botero (2013), en relación a que delinquir es considerado por estos adolescentes como un problema sólo por las consecuencias negativas que les genera la sanción, como son el tiempo que se encontrará privado de su libertad, las sensaciones que le genera la situación de encierro, la reacción que pueda tener la familia ante este hecho o los perjuicios que pueda llegar a provocarles a ellos. Esto a su vez puede relacionarse con lo que explican Monserrat Femenía y Muñoz Guillén (2003), que en algunos casos la víctima es puesta en el lugar de objeto, alguien sin importancia como sujeto.

Esta falta de reconocimiento de las consecuencias está vinculada con otras de las características de los adolescentes en conflicto con la ley penal: la impulsividad. Los profesionales manifiestan que en los jóvenes hay una tendencia al acto como un impulso incontrolable, sin medir las consecuencias, como a su vez tampoco tener registro de los otros, comprometiéndose en situaciones de riesgo individual y social. Esto podría estar vinculado con lo que plantean Cura, Gamacchio y Lanzi (2013) respecto a que los jóvenes transgresores a ley penal frecuentemente tienden a actuar de modo impulsivo con escaso autocontrol. En consecuencia, fracasan a la hora de analizar las circunstancias de una situación y las conductas más adecuadas a la misma, así como a la hora de conseguir la demora de la gratificación.

Así también hicieron mención de otras características de la personalidad del adolescente: *“Y bueno la falta de autoestima, tienen muy baja autoestima. La no espera, el vivir en lo inmediato. Tienen pensamientos muy concretos, dificultad de pensamiento abstracto, el sentirse vacío, el vacío existencial, la soledad, se sienten muy solos. Sin embargo, más allá de que haya una falta de introyección de la norma, pero no es solo lo normativo, sino también los aspectos emocionales. La falta de introyección de un sentimiento de seguridad, son muy inseguros, de muy baja autoestima”* (Entrevista profesional N°5, 2 de diciembre de 2019).).

Lo manifestado por los profesionales se relaciona con lo que plantean Desbrow et al. (2014), quienes refieren a que existen variables individuales en estos adolescentes como: Baja

autoestima, bajo rendimiento intelectual, impulsividad, egocentrismo, baja empatía, inestabilidad emocional, escasa autocrítica, inmadurez, bajo desarrollo moral, distorsiones cognitivas, búsqueda de sensaciones, necesidad de pertenencia, déficits comunicativos, bajas habilidades sociales y déficits cognitivos. De manera similar una de las profesionales manifestó: *“tienen que ver con habilidades no incorporadas, en este caso como se ha resuelto la autoestima, como se ha incorporado o no la asertividad, la empatía. Son habilidades que no han sido incorporadas o enseñadas”* (Entrevista profesional N°6, 2 de diciembre de 2019). Por último, los profesionales mencionaron en las entrevistas que consideran relevante para el abordaje tener en cuenta el proceso constitutivo de la subjetividad, cómo ese adolescente fue desarrollando su aprendizaje, las dificultades que se le fueron presentando para ello y el contenido del mismo. Además, resaltaron la importancia que ejercen en él, los otros sujetos que se presentan en ese proceso de estructuración, la participación que han tenido, la falta de contención por parte de los padres y los hechos traumáticos que se pueden haber dado. Es decir, las características mencionadas de estos adolescentes no fueron consideradas como causas de la transgresión a la ley penal, sino más bien como efectos de otras situaciones, como traumáticas, familiares, de consumo, problemas de aprendizaje, violencia, falta de afecto en etapas iniciales.

- FACTORES FAMILIARES DE RIESGO

- **LOS LÍMITES EN LAS FAMILIAS DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL**

En cuanto a los factores familiares de riesgo que podrían influir en los comportamientos transgresores de los adolescentes, los profesionales señalaron que encuentran más recurrentes, en primer lugar, la falta de límites, de supervisión por parte de los padres, la cual trae asociadas otras consecuencias. Esto se puede observar en los siguientes fragmentos de las entrevistas:

“(…) Es decir acá es muy clara, se ve muy claro la falta de ley, de ley paterna digamos, la falta de límites, de referente, de autoridad, de referentes afectivos, sólidos, permanentes en el tiempo, digamos que se produce ahí como un interjuego y una interrelación con este tipo de cuestiones, que bueno... en algunos casos resulta de extrema gravedad y chicos que están permanentemente en riesgo” (Entrevista profesional N°1, 2 de diciembre de 2019).

“Y yo creo que el factor fundamental es la falta de ley, la primera ley es la familia, la ley paterna, la función materna y paterna obviamente. El padre se supone que es el que impone la ley y la madre es la que contiene. Yo creo que la transgresión está ahí, sino está la primera ley en la familia se hace muy difícil aceptar, respetar y adherir a la ley que está de la puerta de la casa hacia afuera. Que es la ley de convivencia en comunidad” (Entrevista profesional N°2, 2 de diciembre de 2019)

Como es posible observar en los discursos expuestos una de las posibles variables familiares de riesgo en juego en estos adolescentes, aludiría principalmente a la falta de la ley, por la ausencia de quien debería haber cumplido la función paterna. En relación a esto una de las profesionales refiere a que, al no presentarse esta función en los primeros años de vida del sujeto, en donde su psiquismo está en formación, el adolescente, se siente “desorientado”, “desbrujulado”, ya que no tiene un referente que lo guíe. Está desnudo, le falta la investidura, es un niño que sale del vientre materno a un lugar donde se queda sin referentes, entonces es como que no hay brújula.

Por lo que una las consecuencias de esta categoría, mencionada por los profesionales, fue la falta de referentes familiares, la cual puede llevar a que el joven permanezca fuera de su hogar mucho tiempo y hasta altas horas de la noche, en busca de aquéllos. A su vez, dicha falta puede dificultar el proceso adolescente porque carece de una estructura que lo haya contenido.

En relación a esta falta de referentes, hicieron mención de que, por lo general, en la vida de estos adolescentes se observa preponderantemente presencia materna y ausencia paterna. En cuanto al vínculo con el padre, los profesionales refirieron que éste generalmente está ausente, privado de su libertad o que sus hijos no lo conocen. En el caso de estar presente, lo caracterizaron como padres “desconectados”, ya que no conocen demasiado sobre la vida de su hijo, dedicándose únicamente al trabajo. De esta manera, queda la crianza de los hijos depositada en la madre. Así, también manifiestan que es muy inusual ver padres que acompañen a sus hijos en este proceso, y si los acompañan, estos se posicionan en el lugar del orden, la ley y el castigo.

En este sentido, los profesionales resaltan que el vínculo del adolescente con su madre es más directo y fluido, a diferencia del padre. La mayoría lo definieron como “muy fuerte”. Sosteniendo que, a veces, se caracteriza por la sobreprotección, la falta de límites: *“Los chicos tienen una relación muy particular con las madres, a veces hay sobreprotección o toman el rol*

de sostén de la familia. Hay padres bastantes ausentes o con conflicto con la ley” (Entrevista profesional N°4, 2 de diciembre de 2019)

A partir de lo planteado por la profesional en su discurso, se podría pensar que una de las consecuencias del padre ausente y una madre sobreprotectora, es que muchas veces, el hijo pasa a ocupar ese rol, incluso en ocasiones estas madres ubican al adolescente en el rol del padre ausente, manteniendo una relación muy simbiótica: *“Si, lo que he visto mucho en estos años es el papel en que está puesto el hijo mayor, que es el que llega acá a la Se.N.A.F. Generalmente se lo ubica como responsable de los hermanos menores, también aparece un papa ausente o presente físicamente pero ausente en la crianza y muchas veces lo ocupa el adolescente que llega a nosotros”* (Entrevista profesional N°6, 2 de diciembre de 2019)

Se puede observar que esta inversión de roles conlleva una alteración en el cumplimiento de las funciones paternas, que tiene consecuencias en la subjetividad del adolescente y en la interiorización de normas. Además, se podría pensar que esto puede estar dado por que han sido padres jóvenes:

“(…) Son padres de características adolescentes, padres muy jóvenes lo que también resulta problemático. Han sido papás muy jóvenes y ahora se encuentran con un hijo adolescente donde ellos todavía están con una adolescencia tardía, entonces posicionarse en el rol de papá, no el padre rígido y autoritario, sino figura de papá que guía, que controla, que acompaña, esa es la gran dificultad de los papás y creo que tiene que ver mucho con estas expresiones de los adolescentes. A través de la transgresión están expresando sentirse solos, no acompañados, inseguro, el no tener un papá atrás mío para guiarme” (Entrevista profesional N°5, 2 de diciembre de 2019)

Lo sostenido por la profesional está vinculado con lo que plantea Giorgi (1996) respecto a que la maternidad no es un hecho esperado, marca el fin de la niñez y el abrupto pasaje a la adultez. El fin de la niñez estaría marcado por la primera unión, muchas veces precipitada por un embarazo accidental, por lo cual deberá asumir roles parentales sin haber elaborado sus conflictos infantiles. Además, el no existir una brecha generacional marcada entre madre e hijo, sumado a lo mencionado anteriormente, podría explicar el frecuente establecimiento de una relación simétrica entre ambos, sin diferenciación de roles, pudiendo llegar el joven a ocupar el rol de “pareja” de la madre y/o de “padre” de sus hermanos menores.

Por otra parte, mencionaron la falta de acuerdos: *“Si si, como factor recurrente es la falta de acuerdo de los padres, de ponerse de acuerdo para poner los límites y no hablo de padres separados, la mayoría por más que estén en pareja”*. (Entrevista profesional N°5, 2 de diciembre de 2019). En relación a esto la coordinadora del taller resalta la importancia de que

haya un acuerdo entre los padres, ya que, sino los adolescentes quedan en una grieta, sin saber para donde ir y por lo general conlleva la exposición a situaciones de riesgo.

- EL AFECTO Y LA COMUNICACIÓN EN LAS FAMILIAS CON HIJOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

Los profesionales manifestaron que generalmente, los padres que asisten a sus programas no son afectivos con sus hijos adolescentes y muchas veces hay una carencia de comunicación entre ellos, lo que podría constituir un factor de riesgo familiar. Esto se puede observar en algunos de los fragmentos de las entrevistas:

“(...) la falta de contención, de los vínculos en general” (Entrevista profesional N°2); *“(...) no tienen la contención necesaria”* (Entrevista profesional N° 1); *“No hay comunicación del afecto, es el castigo o la nada misma”* (Entrevista profesional N° 4); *“(...) No hay sostén”*; *“No hay registro de lo que le pasa al otro, no hay posibilidad de diálogo”* (Entrevista profesional N° 6)

En relación a la falta de contención afectiva, como se puede observar, existe una deslegitimación de las emociones y necesidades de los hijos, es decir, hay un desinterés por sus demandas, ya sean éstas explícitas o implícitas. Esta deslegitimación podría generarse por la carencia de habilidades por parte de los padres para reconocerlas, no pudiendo dar una atención de manera preventiva a la situación que está atravesando. A su vez, se podría pensar, que estas carencias afectivas en el adolescente dejan huellas en su psiquismo y esta forma de vincularse luego se reproduce con otras personas. Al estar solos no aprendieron cómo relacionarse con un otro, puesto que no hubo una contención verdadera de la familia que les brindara la configuración de un vínculo.

Por otra parte, en relación con la comunicación, los profesionales manifiestan que se presentan muchas dificultades en la misma: *“Lo principal es la falta de comunicación de los papás con sus hijos, es una problemática que la mayoría de los padres vienen y expresan en el taller, más allá del delito, del tema de que se portan mal. El nudo de la problemática es la no comunicación, la imposibilidad de acercarse a su hijo, de tener un diálogo.”* (Entrevista profesional N°5, 2 de diciembre de 2019)

Es posible observar en los talleres, que en estas familias es difícil comunicarse entre ellos. No se le da lugar a la palabra, se caracterizan por mensajes contradictorios, por la mentira, la conspiración del silencio, el doble mensaje, la ambivalencia, el ocultamiento. La madre dice una cosa, el padre dice otra y el adolescente se escapa por la fisura. Esto podría relacionarse con lo planteado por Fernández Ríos y Rodríguez (2002) respecto a que se ha identificado que los núcleos familiares de estos jóvenes tienen una deficiente o nula comunicación entre sus miembros, existe un mínimo apoyo entre todos los integrantes de la familia.

Por otra parte, en aquellas familias en las que, si hay posibilidad de diálogo, este se da de manera violenta. Es por esta razón que en los talleres la Coordinadora trabaja con los padres la capacidad de escuchar a los hijos con atención, de demostrarles que sus sentimientos son tan importantes para nosotros como lo son para él. Es decir, empezar a propiciar otro tipo de diálogo, sin gritos, con saludos y muestras de afecto

- **CRECIMIENTO EN AMBIENTES FAMILIARES DELICTIVOS**

Otro de los factores familiares recurrentes en los discursos de los profesionales fueron los antecedentes de conductas delictivas en la familia:

“El delito aparece como algo que se intenta que no pase de generación en generación, pero pasa, porque hay una suerte de identificación o de normalización en relación al delito (...) el problema suele ser que se les desbanda uno y por identificación se les empiezan a desbandar el resto de los hermanos, la tendencia a hacer lo mismo que la familia es muy fuerte” (Entrevista profesional N°3, 2 de diciembre de 2019)

“(...)Y muchas veces padres donde, como te digo como crecen en ambientes de delincuencia, padres o madres que no le ven como algo que este tan mal” (Entrevista profesional N° 6, 2 de diciembre de 2019)

“(...) Cuando vos empezas a indagar si no es el abuelo, es el tío, son muy pocos los casos donde ellos han transgredido la norma y ni los padres ni los tíos ni nadie no lo han hecho. Siempre sino es el tío, el abuelo, mi papa, mi mama. Siempre hay algo dando vuelta.” (Entrevista profesional N° 2, 2 de diciembre de 2019)

Es posible observar en las entrevistas, que refieren frecuentemente, a que las familias tienen un estilo delictivo incorporado, en las que hay una comunicación de este estilo de generación en generación. Es decir, el adolescente viene de una familia y de acuerdo a como es la familia es como el chico se va a ir modelando, a partir del interjuego entre lo que es estrictamente biológico y las experiencias tempranas que están dadas por los referentes adultos, ya sea por las figuras paternas biológicas o afectivas sustitutivas.

El crecimiento en un ambiente familiar donde el delito está naturalizado, donde los padres, primos o hermanos han transgredido la ley, conllevaría a que sea mayor la probabilidad de que el adolescente se implique en dichas conductas transgresoras. Esto está relacionado con lo que plantea Tenenbaum (2016) respecto a que el hogar familiar es, como primer nivel de socialización y de proyección del estigma, un espacio fundamental para entender la reproducción generacional del delito

- LA FAMILIA Y SU PERCEPCIÓN COMO FACTOR DE RIESGO

Los profesionales manifestaron que en la mayoría de los padres que asisten a los programas se presentan dificultades a la hora de reconocer su responsabilidad en torno a la situación por la que están atravesando sus hijos, aludiendo, de lo contrario, por lo general, en un primer momento a factores externos, tales como a “la junta”, “la sociedad” “los jueces”. Esto se ve reflejado en sus discursos: *“Y depositan bastante en factores externos. En que no tienen tiempo, en que están todo el día trabajando y no pueden ocuparse del hijo, en que no pueden obligarlos a hacer lo que no quieren”* (Entrevista profesional N° 3); *“A la mayoría les cuesta caer, algunas vienen asustadas, otras con una actitud bastante justificadora, otros los quieren matar.”*(Entrevista profesional N°4); *“La mayoría de las veces lo depositan en factores externos, o es la junta, la droga, el chico que nació así o de las instituciones que intervienen, es culpa del juzgado, de la Se.N.A.F.”*(Entrevista profesional N° 5); *“Y al principio les cuesta mucho y ponen toda la responsabilidad en los amigos, en la escuela, bueno esto de delegar (...)”* (Entrevista profesional N° 7)

Lo sostenido por los profesionales está vinculado con lo que plantea Laje (2001), en relación a que la situación de institucionalización de adolescentes en conflicto con la ley penal se vive

como problemática por todo el grupo familiar, ya que la comisión de actos ilegales genera respuestas sancionadoras poniendo en vigencia todos los mecanismos de control social. No obstante, cada uno ha procesado diferente la situación vivida, generando representaciones y manifestaciones diferenciales. En las familias que asisten al taller se observó más bien una representación de ocultamiento y negación, que conduce a un discurso por el que se desconoce la situación y que suele derivar en argumentos de justificación de la conducta infractora. Es decir, en estos padres aparece como mecanismo de defensa la justificación permanente.

Sin embargo, a medida que va transcurriendo los talleres, los padres reflexionan, analizan y se cuestionan las posibles fallas que se pueden haber cometido desde el hogar, lo que les permite asumir parte de la responsabilidad, buscando generar un cambio:

“(…) Hay familias que al trabajar observan que hay gran parte de la responsabilidad de ellos en los motivos de por qué sus hijos ingresan al sistema. Una vez que la familia lo visualiza hay posibilidad de cambio. A medida que la familia se dé cuenta y asuma que tienen que modificar, tanto la forma de comunicación, la forma de implementar los límites, la construcción de las reglas diarias de la vida cotidiana de esa familia. Son papas muy colaboradores y eso nos permite, esos papás como factores protectores una solución a mediano y corto plazo” (Entrevista profesional N°5, 2 de diciembre de 2019)

“Y generalmente al principio los motivos los ponen afuera, hasta que en el mismo trabajo con los padres empiezan a ver que la gran mayoría de los motivos están adentro de la casa y que corresponden al rol de cada papa que desempeña en la dinámica familias. En los talleres se habla, el objetivo es que cada papa piense, lo identifique y proponga a través de su reflexión la posibilidad de cambio” (Entrevista profesional N°4, 2 de diciembre de 2019)

De acuerdo con lo manifestado por los profesionales, es posible observar que se da en los padres un proceso reflexivo. Existe una gran diferencia entre lo que los padres perciben como factor entre el primer y segundo o tercer taller. Una característica de los talleres es que se no se conforman grupos únicos, entonces siempre hay uno que empieza, uno que termina, los procesos son diferentes. Y por lo tanto escuchar las diferentes historias les permite identificarse con el otro.

A modo de conclusión, los profesionales de ambos programas manifestaron que consideran el abordaje de la familia como un objetivo de trabajo fundamental, ya que la familia es esencial en la vida de todo adolescente y su historia está atravesada por ésta. Entienden que el joven es un emergente de su grupo familiar y a su vez su familia es un emergente de la situación social. Además, en el POF sostuvieron que es de gran importancia trabajar con la familia del adolescente porque, cuando éste egresa del Centro socioeducativo, regresa a su grupo familiar.

Es por ello, que si no se tiene en cuenta este aspecto, las intervenciones realizadas con el joven, y que en su momento resultaron positivas, no resultarán efectivas si no hay modificaciones en su familia.

- CONSUMO DE SUSTANCIAS EN LOS ADOLESCENTES

El consumo de sustancias es algo recurrente en los adolescentes de hoy. Según los profesionales, las mayores razones por las cuales delinquen tienen que ver con el consumo. Además, hicieron hincapié en el fácil acceso a las mismas y en un inicio temprano, sin tener información sobre los efectos o consecuencias que provocan.

Esta problemática emerge continuamente en el espacio de taller. A modo de ejemplo, en uno de los encuentros se generó un intercambio de opiniones referidas a los motivos por los cuales los adolescentes consumen droga. En respuesta a esto, surgió por parte de los miembros de las familias que era: “por la sociedad” “porque son cobardes” “por curiosidad” “por culpa de la mala junta”. En este sentido, Cárdenas Paredes (2012), realizó un estudio descriptivo en el que los resultados arrojados permitieron ver que el consumo de drogas comenzaba a edades tempranas, y que el mismo se relacionaba con comportamientos ligados a la imitación, curiosidad y a la presión ejercida por los grupos de pares, y que tenían acceso a ella mediante amigos, familiares o en establecimientos comerciales.

Por otra parte, de acuerdo con los profesionales, es posible observar que en reiteradas ocasiones los adolescentes naturalizan el consumo de drogas como la marihuana, debido a que expresan, que en su grupo de amigos y en su barrio esto es habitual. Además, muchos de ellos la emplean como modo de afrontar situaciones ansiógenas o estresantes. Lo cual se podría relacionar con lo expuesto por Martínez Peralta (2015), quien sostiene que el consumo de sustancias está fuertemente vinculado a patrones culturales actuales, donde el consumo tiene la función de integrar cultural y socialmente a los sujetos que la componen, ser instrumento de identificación y diferenciación, ser un mecanismo de adaptación en situaciones de cambio, un mecanismo de solución al tiempo vacío social y/o individual y un mecanismo de sociabilidad y vida recreativa.

A partir de lo planteado por los profesionales, se podría hipotetizar que el ambiente problemático no es el único factor que aumenta la vulnerabilidad de los jóvenes, sino también el inicio precoz del consumo de sustancias, el fácil acceso a las mismas, la ausencia de adultos responsables que brinden apoyo, la orientación adecuada y distintas alternativas que produzcan

un alejamiento de las drogas. En esta línea Barron (2010) refiere a que no sólo se acerca a las drogas el “chico problema”, sino aquellos en los que falla la transmisión de valores y el fomento de la autoestima que podrían neutralizar las influencias negativas en el medio en el que los jóvenes se desenvuelven. Con referencia a ello, la Coordinadora del taller sostenía de manera recurrente la importancia de que los padres resalten lo positivo de las acciones de sus hijos y no lo negativo, transmitiéndoles a los mismos palabras afectuosas, ya que estos cambios actitudinales en los padres alimentarán la autoestima de los jóvenes, dándoles así herramientas para desenvolverse adecuadamente en diversas situaciones.

- LA ESCUELA COMO FACTOR DE RIESGO

El abandono y la deserción escolar aparecen en las entrevistas a los profesionales como una de las características prevalentes en los adolescentes en conflicto con la ley penal: *“Con respecto a la escolarización, los chicos no están escolarizados. La mayoría dejan el colegio. Muchos de ellos terminan el primario y después empieza a haber deserción escolar y no terminan la escuela”* (Entrevista profesional N°6, 2 de diciembre de 2019). Esto se ve reflejado en la caracterización sociodemográfica, ya que el 87,5% (7 casos) abandonaron los estudios previamente a ingresar al Centro Socioeducativo Complejo Esperanza y el 62,5% (5 casos) han alcanzado como nivel máximo de escolarización el primario, es decir hay un alto índice de abandono escolar.

Lo sostenido por los profesionales podría estar vinculado con lo que plantea Farrington (1995) respecto a que los problemas en el rendimiento escolar o los problemas educativos han demostrado sistemáticamente ser una de las características prevalentes en los delinquentes adolescentes violentos, así también la inasistencia escolar contribuye a facilitar el paso a la delincuencia debido a que proporciona tiempo y oportunidades adicionales para conductas inadecuadas, como por ejemplo la conducta antisocial. En este sentido, Maguin y Loeber (1996), citado en Vázquez González (2003), agregan que un pobre rendimiento académico se relaciona no solo con el comienzo y la prevalencia de la delincuencia, sino también con la escalada en la frecuencia y en la gravedad de las ofensas.

De acuerdo con lo que plantean los profesionales es frecuente encontrar en los discursos de los jóvenes que algunos de los motivos de la deserción fueron la falta de dinero para suplir las necesidades familiares o personales, desinterés o no encontrarle a la educación una

funcionalidad en sus vidas, estigmatizaciones por parte de algunos agentes del sistema educativo y conflictos con compañeros.

En primer lugar, manifiestan que los adolescentes no se preocupan tanto por la educación, debido a que lo emergente es la falta de dinero y trabajo, y es debido a las dificultades económicas que viven estos jóvenes que se priorizaría satisfacer las necesidades que éstas generan, en detrimento de permanecer en otras instituciones. De esta manera, se podría pensar que no existiría una real inclusión desde la escuela, ya que habría una dificultad por parte del sistema educativo para generar estrategias que les permitan permanecer en el mismo. Esto último coincide con los aportes de Martín (2006) quien refiere a que en los últimos años se ha dado una caída de las instituciones especialmente en las zonas carenciadas donde el sistema educativo no está pensado para los niños que allí concurren, ya que pasan de repitentes a expulsados, se los cataloga en los legajos escolares como “problemáticos” y son los mismos que luego serán “adolescente” judicializables.

Por otra parte, en relación a la funcionalidad de la educación en la vida de los adolescentes, los profesionales refieren a que es recurrente escuchar que la escuela no les cambiaría sus condiciones de existencia ni mejoraría su calidad de vida en un futuro, aunque sostengan que el estudio de una carrera universitaria les posibilitaría un estilo de vida diferente, no lo creen alcanzable. La mayoría no perciben la escolarización como un objetivo importante, y no tienen metas a futuro. De esta manera, se observa un gran desinterés por la educación, que se manifiesta en la deserción escolar. Esto coincide a su vez con lo que plantea Bleichmar (1999), respecto a que la deserción escolar en los jóvenes transgresores es resultante de la caída de la expectativa de que podrían tener una vida mejor en el futuro. Se piensa que los niños “se hacen delincuentes” porque no van a la escuela y andan en la calle, pero se pierde de vista que esos niños han perdido toda esperanza de que la escolaridad cambie su situación de existencia.

En cuanto a la estigmatización por parte de la escuela, los profesionales manifestaron que muchos de los adolescentes abandonan debido a que reciben maltrato y rechazo por parte del personal docente. Se presentan situaciones en donde, sin negar o relativizar la gravedad de conducta del joven en conflicto con la ley penal, la postura que escoge la escuela es la de estigmatizar lo sucedido, excluyendo a la persona, negándole entonces sus derechos a recibir educación. Es así como el adolescente comienza un largo camino de transición de un colegio a otro, lo que termina generando muchas veces el abandono de los estudios. Esto podría vincularse con lo que plantea Vázquez González (2003) respecto a que la segregación escolar produce un etiquetamiento por parte de los maestros y los demás compañeros que lleva a su vez a que la escuela comience a seleccionar un pequeño grupo de niños a los que considera

desadaptados, creando desde tan temprana edad un etiquetamiento social, del que les será difícil salir.

Por otra parte, en las entrevistas sostuvieron que el abandono y la deserción escolar podrían estar relacionados con la importancia y la supervisión por parte de los padres con respecto a la escuela. De acuerdo con los profesionales fue posible observar que muchos padres y madres no le daban la importancia necesaria a la escolarización de sus hijos, manifestando que éstos abandonaron el colegio porque se sentían incómodos, no les gustaba o, en otros casos, desconocían el motivo por el cual habían abandonado, muchos de ellos afirmaron no exigirles a sus hijos que asistan a la escuela y cumplan con dicha responsabilidad. Sumado a esto, la falta de escolarización de los hijos muchas veces aparecía asociado a su propia historia escolar, en los talleres se pudo observar que la gran mayoría de las familias no habían finalizado la escuela primaria o secundaria. Esto coincide con lo planteado por Nieto Morales (2011) en relación con que los adolescentes en conflicto con la ley muchas veces no cuentan con referencias de éxito escolar en su familia, lo que puede generar como consecuencia tolerancia o indiferencia al fracaso escolar por parte de ésta. A partir de esto se podría pensar que puede existir alguna relación entre el abandono escolar de los padres y la deserción escolar de sus hijos en edades más tempranas.

Otro aspecto que los profesionales resaltaron es que la inasistencia podría ser uno de los factores asociado con el desarrollo de la conducta transgresora, ya que proporciona tiempo y mayores oportunidades para la misma. Por lo general estos adolescentes al no estar escolarizados, no realizar ninguna actividad extraescolar y tampoco trabajar cuentan con demasiado tiempo libre, lo que podría dar cuenta de una falta de organización en su cotidianeidad y demasiado tiempo de ocio. En este sentido, Uceda Maza et al. (2014) sostienen que estos aspectos constituyen un factor de riesgo ya que cuando el ocio no es de carácter constructivo y no une prácticas educativas con lúdicas, podría generar riesgos asociados a las propias dinámicas adolescentes. Y cuanto mayor es el tiempo de exposición al riesgo, mayor será el grado de vulnerabilidad al que se somete el adolescente

Los profesionales en sus espacios promueven la reincorporación del adolescente al ámbito escolar intentando generar una actitud reflexiva sobre la importancia de dicha instancia para su desarrollo personal y el acceso a nuevas oportunidades, poniendo en tensión ciertas representaciones que se tienen de la escolaridad tales como el tiempo que hay que dedicarle y el valor que ellos le atribuyen. Se intenta encontrar alternativas para que este pueda acceder nuevamente a la escuela, ya sea pensando posibles instituciones o programas a los que asistir. Estos espacios a través de tareas sistematizadas, dentro de un marco organizado donde existen

normas y límites, permiten que se genere la responsabilidad de cumplir con estas obligaciones, responsabilidad que se extiende luego a todos los aspectos del sujeto. Además, favorecen la creación de hábitos saludables y necesarios para la vida ciudadana y permiten el desarrollo de distintas destrezas y forman parte de los derechos de los adolescentes. Así, se intenta que el adolescente pueda iniciar un proyecto de vida, incentivando al mismo a acceder nuevamente a la escuela o que aprendan un oficio y acceda al mundo laboral, como también, que pueda adentrarse a un entorno de pares distinto del cual se mantenía en contacto, logrando establecer vínculos saludables.

Por último, la escuela aparece en los discursos como un factor tanto de riesgo como protector, lo cual coincide con lo planteado por Canales (2005), respecto a que la institución puede intervenir de forma negativa, es decir, como un factor de riesgo en donde la negación, la falta de programas específicos y de promoción de habilidades para la vida, contribuyen a fomentar la expansión de esta problemática. Aunque, por otro lado, puede influir de forma positiva por medio de la contención y de la educación. Por lo que antes de la práctica infractora, está la capacidad o incapacidad del sistema social de retener y conducir las biografías juveniles a través de las redes institucionales para ello dispuestas, entre las que destacan de modo básico, la educación.

- LA INFLUENCIA DE LO SOCIO- ECONÓMICO EN LA CONDUCTA TRANSGRESORA

Existen diferentes variables socioeconómicas que facilitan el comportamiento delictivo de los adolescentes. De acuerdo con los profesionales entrevistados, entre ellas se encuentran: las desventajas socioeconómicas, la falta de trabajo tanto en los padres como en los jóvenes y la desigualdad de oportunidades.

En primer lugar, en cuanto a las desventajas socio- económicas, los profesionales manifestaron que en el trabajo con los padres muchos de ellos refieren a que viven en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica extrema, donde los recursos e ingresos son mínimos, lo que dificulta la satisfacción de las necesidades básicas del grupo familiar y la crianza de los hijos, que se complica aún más cuando estos son adolescentes. Además, durante los talleres se observaron situaciones aisladas donde las madres manifestaron que el comportamiento delictivo de sus hijos había sido consecuencia de problemáticas en el interior del hogar, por ejemplo, problemas económicos que sus hijos percibían.

Lo que plantean los profesionales a partir de lo manifestado, es que estos aspectos económicos podrían influenciar en la familia, la cual, al sufrir situaciones de marginalidad o pobreza, se ve expuesta a desarrollar otros problemas en el interior de la casa, como es la falta de apoyo y supervisión de sus hijos. De esta manera, el desarrollo de los adolescentes se ve impactado por la naturaleza de los eventos estresantes a los que se encuentra sometida la familia, sus recursos, y estrategias de enfrentamiento.

Esto a su vez podría estar vinculado con los aportes de Tenenbeum (2015), el cual manifiesta que la precariedad laboral de los responsables del cuidado incide negativamente en la predisposición psíquica (las preocupaciones económicas y laborales consumen prácticamente toda la atención de los padres) y la disposición temporal (largas jornadas de trabajo para obtener ingresos mínimos -suficientes o no- para mantener el hogar) para el cuidado familiar inmaterial. Tal como plantea el autor, los bajos ingresos económicos se correlacionan con un cúmulo de carencias de otro orden, entre las cuales estarían: menos supervisión de tareas escolares, más horas de calle, menos acceso a libros y ordenadores, más familias rotas o desestructuradas, más violencia en el hogar, menos responsabilidad paterna y más autoritarismo, menos seguridad policial en los barrios, peores escuelas, menos recursos de ocio controlado, entornos más ruidosos y contaminados y peor salud. Se podría decir, por lo tanto, que la presión económica influiría en la conducta transgresora.

Por otra parte, en las entrevistas sostienen que en la mayoría de los casos el robo es considerado como una opción para sobrellevar los problemas económicos. Una de las profesionales dijo: *“(...) Y también tiene que ver con los factores socioeconómicos por supuesto, es un factor que puede llegar a influir porque eso es lo que se ve, donde quizás lo que está incorporado es no tengo plata y salgo a robar, es algo aprendido también”* (Entrevista profesional N°6, 2 de diciembre de 2019). Es decir, estas familias al tener un bajo poder adquisitivo buscan maneras de incrementar su ingreso. El contexto colaboraría eventualmente para sostener la preferencia por el presente inmediato y la priorización de estrategias alternativas de supervivencia, muchas veces para aportar a la economía familiar o en otras ocasiones para satisfacer sus necesidades. Como plantea Vázquez (2012) la infracción a la ley penal aparecería como una acción posible pero no supondría, una opción por el delito como única vía de ingreso económico.

En cuanto al desempleo, los profesionales sostuvieron que la gran mayoría de los padres y adolescentes que asisten a los programas poseen trabajos, pero son informales, por lo general vinculados al área de construcción. Esto se puede ver reflejado en la caracterización

sociodemográfica, donde el 75% (6 casos) de los padres se encuentra desempeñando alguna actividad laboral y el 87,5% (7 casos) de los adolescentes trabajan, pero en ambos casos se trata de empleos de mala calidad, con ingresos bajos, inestables, sin perspectivas, sin derechos ni protección social lo que puede llevar a conductas transgresoras. A su vez esto podría estar vinculado con los aportes de Vázquez González (2003), quien refiere a que es habitual que los jóvenes recurran a trabajos no cualificados y escasamente remunerados, pudiendo encontrar en las actividades ilegales las compensaciones que no encuentran en el trabajo.

Los profesionales por lo tanto sostienen que gran parte de estos jóvenes se verían empujados a mantener a su familia, y al mismo tiempo, solventar sus propios gastos y bienes de consumo deseados, en un contexto de vulneración de derechos y desempleo, lo cual podría llevar a que vean a la transgresión como un medio eficaz para conseguirlo.

Por otra parte, en relación a la desigualdad de oportunidades, en las entrevistas mencionaron que las diferentes vulneraciones de derechos básicos implican una desigualdad, que afecta tanto a los jóvenes como a su familia. Además, esto fue asociado con la exclusión social, haciendo referencia a la falta de políticas públicas y de inclusión por parte de instituciones como la justicia, la escuela, el trabajo.

Una de las profesionales entrevistadas manifestó: *“En algún punto como estado si alguien que viene de una familia muy pobre que le han faltado tantos recursos, quiere decir que el estado no estuvo en el momento en que esa familia lo necesito y bueno quizás lo tenga que devolver después”* (Entrevista profesional N°3, 2 de diciembre de 2019). Esto podría relacionarse con los aportes de Flores (2018), el cual refiere a que, desde un punto de vista económico, es posible observar que las diferencias sociales y el desinterés de la sociedad y del estado de cierta manera institucionalizan y normalizan la inclinación de niños y adolescentes hacia el mundo de la infracción, por falta de oportunidades. La carencia de condiciones igualitarias, el incumplimiento de la constitución, la cual es netamente retórica y no es contrastable con la realidad práctica, hace que, en los barrios urbanos marginales, se genere un fermento de rebeldía, por las diferencias socioeconómicas. Es decir, la brecha económica, y la falta de acceso a los indicadores de calidad de vida conllevarían a conductas infractoras en niños y adolescentes.

Por último, los profesionales mencionaron la desigualdad económica que padece la mayoría de la población que asiste a los diferentes programas, considerando que esto genera como consecuencias el hacinamiento y la imposibilidad de acceder a ciertos bienes de consumo. Frente a estas condiciones, el adolescente se encuentra en la encrucijada entre un mensaje de consumo que recibe y la imposibilidad de lograrlo, por lo que la transgresión aparece como una

modalidad de respuesta ante las demandas que crea la sociedad de consumo. Hoy en día, la sociedad de consumo promueve sentimientos de malestar e inferioridad en quienes no poseen acceso a los bienes que se proponen como ideales. Cabe plantearse por lo tanto si las exigencias que la sociedad impone a alcanzar coinciden con los medios tanto económicos como personales que se poseen para adquirirlas, y de no ser así ¿Qué efectos produce en la subjetividad el conflicto entre querer adquirir lo que el mercado impone y la imposibilidad de acceder a los mismos? En los diferentes programas se trabaja con la importancia de brindar recursos para que los jóvenes reconozcan sus posibilidades reales de acceso a ciertos bienes de consumo y construir herramientas para enfrentarlo. También, se hace hincapié en que la adquisición de estos bienes no asegura el éxito, analizando la premisa capitalista de manera crítica.

- EL CONTEXTO SOCIAL COMO UN FACTOR DE RIESGO

El contexto social donde los adolescentes se desarrollan incide en la posibilidad de que transgredan la ley. En relación a esto una de las profesionales manifestó: *“Y yo creo que influye el contexto en general, el barrio en el que vive, la escuela a la que asiste. Todo lo que hace al entorno social del pibe, no solo el hogar familiar”* (Entrevista profesional N°3, 2 de diciembre de 2019)

De manera similar, en las entrevistas muchos plantearon que las características de los lugares de residencia condicionan la vida de estas familias, el contexto en el que se encuentran inmersos es un factor importante que afecta claramente el desarrollo de la vida cotidiana y de la calidad de vida. Resaltaron que la población que asiste a sus programas generalmente vive en barrios periféricos de la ciudad, en sectores urbanos marginales, atravesados por condiciones de vulnerabilidad social, cultural y económica, lo que podría ser influyente en el desarrollo del comportamiento delictivo juvenil. En este sentido Sampson y Lauritsen (1994) plantean que algunas características del entorno o del barrio en el cual los jóvenes viven y pasan su tiempo pueden influir en el riesgo de violencia. Los autores han investigado de forma extensa la relación entre las características del entorno y el aumento de los índices de delitos violentos, concluyendo que la marginalidad social y los cambios en el entorno son dos de los factores principales.

Así también otros autores como Gracia et al. (2010) se han dedicado a estudiar la relación entre ambas variables y han encontrado una sólida asociación entre ellas, lo cual demuestra que

los adolescentes que provienen de contextos comunitarios y barriales con mayor presencia de vandalismo y actividad delictiva cometen más crímenes o tienen más problemas de conducta, es decir vivir en un vecindario con niveles altos de criminalidad aumentaría el riesgo de violencia. Esto a su vez se puede observar en el discurso de padres asistentes a los talleres, quienes expresaron su percepción de que las condiciones socioculturales y habitacionales de los barrios, representan un foco de riesgo para los adolescentes, favoreciendo sus conductas transgresoras, incluso pudiendo ser causales de ellas.

Por otra parte, otro de los factores sociales que los profesionales mencionan que se encuentra ligado a la transgresión a la ley penal es el fácil acceso a las armas. Refieren a que esto podría acarrear una serie de consecuencias tales como: el contacto y posible familiarización con su tenencia, siendo alarmante el hecho de que sean jóvenes y desconozcan las responsabilidades y riesgos que ello implica, la proclividad a tener enfrentamientos más violentos y la posibilidad de ser detenidos por su portación. La facilidad para obtener un arma, a su vez puede verse reflejado, por una parte, en los talleres donde las madres manifestaban que sus hijos tenían acceso a distintas armas y, por otra parte, en la caracterización sociodemográfica donde la mayoría de los adolescentes que se encuentra alojado en el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza es por robo, en el cual estaba involucrado el uso o tenencia de arma

Lo sostenido por los profesionales podría relacionarse con lo planteado por Benvenuti (2003) respecto a que la desventaja económica es un factor que puede llevar a que los barrios sean más vulnerables a las expresiones de violencia, siendo el uso de armas de fuego una manifestación de la misma que se propaga en el resto de los barrios, como modo de resolver conflictos. La disponibilidad y proliferación de armas de fuego se han convertido en serias causas de la delincuencia juvenil. Hoy en día, las armas son una parte central del cambiante panorama de la violencia juvenil, los adolescentes poseen y llevan armas, a menudo por un deseo de ser respetados y temidos. Además, por lo general son brindadas por sus propios familiares o es fácil conseguirlas en sus barrios. Por lo tanto, es posible preguntarse ¿Estos padres toman conciencia de que el uso de armas es una conducta de riesgo? ¿Por qué estos jóvenes toman la decisión de acceder a un arma? ¿Qué ocurre con el control del Estado en relación a la tenencia de armas?

Por último, otro de los factores contextuales que se presentó de manera recurrente en el discurso de los profesionales fue la estigmatización y la exclusión social, lo cual puede observarse en el siguiente fragmento: *“Otro de los factores es la propia sociedad, la mayoría de la sociedad los rechaza y se hace muy difícil sin el acompañamiento de este otro componente. De sociedad me refiero al vecino, a la escuela...Son jóvenes que al ingresar al sistema se encuentran estigmatizados y quedan con una estigmatización que la van a arrastrar por varios*

años y eso se hace dificultoso, que la sociedad los vuelva a aceptar. Sucede lo contrario, la sociedad pide que estén encerrados que las sanciones sean más duras” (Entrevista profesional N°5, 2 de diciembre de 2019).

En el Programa de Acompañamiento Psicoeducativo los profesionales recalcan que muchos de los jóvenes mencionan ser excluidos por la sociedad, que ésta los segrega, generando así una diferenciación. Algunos de los adolescentes comentan que la gente los mira mal, se cruza de calle. Estas situaciones que viven con cotidianeidad serían parte de la sociedad actual, en la que se configurarían grupos de pertenencia que se definen en oposición a otro y crean fragmentación. Las relaciones que se generan son prejuiciosas y estereotipadas, provocando la vulneración de derechos de ciertos grupos sociales y los convierten en el centro de la selectividad penal, presentándose una criminalización de los sectores populares en beneficio de las clases dominantes. Además, lo anterior llevaría, junto a otros factores, a la transgresión y mantenimiento de la misma, en la medida en que se apropiarían de la imagen que la sociedad tiene de ellos. Así, el adolescente termina por convertirse en una especie de amenaza para la sociedad.

Lo sostenido por los profesionales está relacionado con lo que plantea Briuoli (2007) respecto a que la exclusión refiere a un proceso histórico a través del cual una cultura mediante su discurso rechaza a un sujeto, se lo priva de voz, de lenguaje. Estos sujetos son, los chicos de la calle, los cartoneros, los vendedores ambulantes; cuya inscripción colectiva, la da el barrio o el grupo de la calle; mientras la sociedad los mira con temor, desprecio, compasión. En esta misma línea, Duschatzky y Corea (2009) en su libro “Chicos en banda” hacen referencia a la expulsión social, afirmando que la misma produce un desexistente, un “desaparecido” de los escenarios públicos y de intercambio. Es así que el expulsado pierde visibilidad en la vida pública, nombre, palabra, constituyéndose en una “nuda vida”, porque ha entrado en el universo de la indiferencia, porque transita por una sociedad que parece no esperar nada de él.

Estos adolescentes además han vivenciado procesos marginadores previos al delito, existe una exclusión social que se expresa en la carencia de reconocimiento de derechos: *“La mayoría de los jóvenes que vienen acá, sus derechos han sido vulnerados. No han tenido un acceso a la educación o no han podido sostener sus proyectos. Tienen múltiples carencias, afectivas, vinculares, digamos la mayoría son de barrios complicados de Córdoba. Están bastante estigmatizados, y bueno con las familias desarmadas, por lo que asumen tempranamente roles que no les corresponde”* (Entrevista profesional N°4, 2 de diciembre de 2019).

En relación a lo planteado, Soria Arena (2016) sostiene que el mayor grado de vulnerabilidad de un individuo está determinado por la pérdida del reconocimiento y ejercicio de sus derechos, ya que de esta manera pierde la posibilidad de tener un proyecto de vida, quedando atrapado en la lógica identificatoria asignada por el entorno como delincuente, adicto, sin otras posibilidades de identificación social, más allá del estigma. En este proceso devastador en el que muchas veces fue posible percibir, a partir de los relatos de los padres, que sus derechos y los de sus hijos fueron vulnerados, es imprescindible resaltar el enfoque de derechos y particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño. Tal como plantea el nuevo paradigma, el adolescente debe ser respetado como sujeto de derecho, pudiendo atravesar este proceso desde la complejidad que lo caracteriza, teniendo en cuenta las múltiples variables analizadas a lo largo de este trabajo, y no la mera conducta transgresora.

A modo de resumen, a partir de la información analizada en el presente objetivo se puede decir que los profesionales de los Programas de Se.N.A.F identificaron diferentes factores que podrían facilitar la conducta transgresora de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Entre ellos se encuentran: individuales, familiares, ligados al grupo de pares, socio-educativo, socio-económico y socio- comunitario.

En cuanto a los individuales, refirieron a la dificultad de comunicarse de los jóvenes debido a la ausencia de palabra. Expresan con acciones, todas sus conductas tienen un mensaje, actúan lo que no pueden poner en palabras. Además, los profesionales manifiestan que no hay un reconocimiento espontáneo de las consecuencias de sus acciones, por lo que habría un predominio de los mecanismos de acción por sobre aquellos que implican procesos más reflexivos.

En lo que respecta a los factores familiares, los profesionales señalaron como recurrentes la falta de límites, la carencia en la comunicación y en la contención afectiva y el crecimiento en ambientes familiares delictivos. Además, refirieron a que en la mayoría de los padres que asisten a los programas se presentan dificultades a la hora de reconocer su responsabilidad en torno a la situación por la que están atravesando sus hijos, aludiendo, de lo contrario, en un primer momento a factores externos. Sin embargo, a medida que van transcurriendo los talleres, estos reflexionan, analizan y se cuestionan las posibles fallas que se pueden haber cometido desde el hogar, lo que les permite asumir parte de la responsabilidad, buscando generar un cambio.

Aparece también, recurrentemente en el discurso de los profesionales, la cuestión del consumo de sustancias. Según los mismos, las mayores razones por las cuales delinquen tienen

que ver con el consumo, el cual generalmente está naturalizado por los jóvenes. Por otra parte en cuanto a lo socio- educativo, el abandono y la deserción escolar aparecen en las entrevistas como una de las características prevalentes en los adolescentes en conflicto con la ley penal y algunos de los motivos por los que ocurre esto es por la falta de dinero para suplir las necesidades familiares o personales, desinterés o no encontrarle a la educación una funcionalidad en sus vidas, estigmatizaciones por parte de algunos agentes del sistema educativo y conflictos con compañeros.

Por último, sostuvieron que existen diferentes variables socioeconómicas que facilitan el comportamiento delictivo, entre las que se encuentran: las desventajas socioeconómicas, la falta de trabajo tanto en los padres como en los jóvenes y la desigualdad de oportunidades. Así también aparecen variables socio-comunitarias, como por ejemplo las características de los lugares de residencia, las cuales condicionan la vida de estas familias y pueden facilitar la exposición a situaciones de riesgo.

11. CONCLUSIONES

En el presente apartado se desarrollarán las conclusiones a las que se ha arribado a partir de la experiencia en las Prácticas Pre-Profesionales del Contexto Jurídico y de la elaboración del Trabajo Integrador Final. En primer lugar, se expondrán aquellas vinculadas al Objetivo General y específicos del trabajo, y posteriormente las reflexiones finales en base a los aprendizajes adquiridos en los diferentes espacios de la práctica. La finalidad es, no solo presentar la información más relevante, sino reflexionar sobre el proceso llevado a cabo e intentar conducir a una enseñanza.

El objetivo general que guía el presente trabajo consiste en analizar los factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal desde el discurso de los padres que asisten al Programa de Orientación Familiar del área penal juvenil de Se.N.A.F. Con el fin de alcanzar al mismo se desarrollaron cuatro objetivos específicos y se utilizaron diferentes herramientas para responder a estos, como son: entrevistas semidirigidas a los padres que asisten al POF, a los profesionales de distintos programas de Se.N.A.F., registros observacionales de los talleres de padres y la revisión de documentos institucionales.

Cabe destacar que el análisis se centró principalmente en el discurso de los padres, ya que considero fundamental escuchar las voces de los mismos y desde allí, poder comprender qué factores asocian a la transgresión a la ley penal, cómo viven esta situación y por qué creen que se produce la misma. Tomando su opinión, se pudieron reconocer ciertos factores asociados a la transgresión, tanto antes como después de la intervención de Se.N.A.F. Además, se tuvo en cuenta la perspectiva de los profesionales de los distintos programas, lo que posibilitó un análisis integral y una comprensión más abarcativa.

De esta manera, en un primer momento, para responder al objetivo general del presente trabajo fue necesario **caracterizar socio demográficamente** a los adolescentes en conflicto con la ley penal y las familias que participan en el Programa de Orientación Familiar. Esta necesidad surge, ya que esto nos permite conocer las condiciones socioculturales que atraviesan a la población objeto, entendiendo a todo sujeto como inmerso en un contexto con el cual interactúa.

Por lo tanto, a partir de la información recolectada, se podría decir que se caracterizan por ser en su totalidad del género masculino, tener entre 14 y 17 años, con un mayor porcentaje a los 16 años. El total de estos adolescentes en conflicto con la ley penal consumen algún tipo de droga, y más de la mitad (62,5%) asiste a programa de asistencia en adicciones. Con respecto a la conducta de transgresión por la cual los adolescentes se encuentran en el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza, la categoría que notoriamente se destaca con un porcentaje alto es la de robo, en sus diferentes variantes. Además, más de la mitad de los que

se encuentran allí poseen antecedentes de transgresión a la ley penal. En este sentido cabe destacar en relación al número de ingresos, que más de la mitad (62,5%) de los jóvenes reincidieron, siendo mayoritarios (dentro de éstos) los segundos y terceros ingresos, encontrándose hasta cinco. Así también otro factor de riesgo que podría incidir en la conducta está vinculado a los antecedentes de delito familiar, en relación esto fue posible observar que el 75% poseen antecedentes en su familia y la mitad de ellos se da por parte de los hermanos.

Por otra parte, en cuanto a la escolarización y la actividad laboral. Se observó, por un lado, que es muy bajo el porcentaje que han completado el primario. El número de adolescentes que abandono los estudios antes de ingresar al Complejo Esperanza (87,5%) supera ampliamente a quienes continuaban sus estudios (12,5%). Sin embargo, una vez que ingresaron al Centro Socioeducativo, un alto porcentaje (75%) comenzó el PIT. Se podría pensar por lo tanto que, previo a la detención, no existe una inclusión al sistema educativo ni logró éste consolidarse como un espacio de contención. Por otra parte, es posible observar que más de la mitad han realizado alguna actividad laboral, siendo estas en su mayoría vinculadas a changas, a la construcción o la venta ambulante.

Con respecto a las familias, se observó que el tipo monoparental materna posee prevalencia en relación a las constituciones familiares restantes. Es decir, en dichas familias se destaca la presencia de la figura materna, sin contar con soporte de pareja. Así también hay un porcentaje alto de familias numerosas, el 75% posee desde 3 a 10 hermanos. Por otra parte, tanto las madres como los padres de estos adolescentes desarrollan algún tipo de actividad laboral, cabe destacar que estas son informales y poco remuneradas. Y por último en relación a la asistencia al Taller de padres, el 62,5 % (5 casos) concurrió 2 o más veces, y el 37,5% es la primera vez. En esta misma línea, en base a lo observado y registrado, es posible decir que es mayor el porcentaje de las madres que asisten al Taller, y que solo un pequeño porcentaje corresponde a los padres.

En cuanto al **segundo objetivo**, antes de la intervención de Se.N.A.F, se halló que las familias de los adolescentes en conflicto con la ley reconocieron los siguientes factores de riesgo en torno a la trasgresión penal juvenil, los cuales fueron subdivididos en las siguientes categorías: individuales, familiares, ligados al grupo de pares y socio-comunitarios.

En relación a los factores de riesgo individuales, se presentó con frecuencia en el discurso de padres y madres, conductas violentas y agresivas, peleas e insultos con otros pares que no pertenecían al grupo de amigos de su hijo. Aparece una dificultad en la resolución de conflictos, llegando a utilizar incluso en ocasiones armas. Se podría pensar, por lo tanto, que esta expresión

de violencia en los adolescentes es un síntoma que denotaría tal vez la falta de límites e incapacidad para controlar los impulsos, como así también una regresión desde la posibilidad de utilizar las palabras como medio de comunicación, a situaciones donde ésta no tiene lugar y es reemplazada por acciones enajenadas de sentido.

Por otra parte, también hicieron referencia a que la inmediatez y la necesidad de pertenencia los lleva a sus hijos a infringir. Se podría hipotetizar, en relación a esto, que el adolescente necesariamente debe encontrar sentido de pertenencia en cada uno de los espacios extrafamiliares por los que transita, ya que esto resulta saludable para su individuación. Sin embargo, cuando esto no logra ser equilibrado con el sentido de pertenencia al sistema familiar, el adolescente busca encontrar su lugar a cualquier precio, sin medir los riesgos que corre en esa búsqueda y una de sus consecuencias puede ser que se encuentre inmerso en el mundo de las drogas, las cuales lo lleven a transgredir. Además, en estos adolescentes es posible observar una vivencia del tiempo como inmediato, como absoluto y no hay tolerancia a la frustración.

En cuanto a los factores familiares se puede observar que los padres identificaron como aquellos que facilitan la conducta transgresora: la falta de atención, antecedentes de conductas familiares delictivas y la separación o ausencia del padre. Con respecto a la atención, las madres manifiestan que lo que podría haber posibilitado que el adolescente lleve a cabo conductas transgresoras, es que por lo general son familias numerosas, en las que hay niños pequeños que requieren de un mayor cuidado. Se podría pensar, por lo tanto, que, frente a un exceso y diversidad de demandas por parte de los hijos, se ve dificultado el adecuado control de sus comportamientos, por ello comienzan a requerir ayuda de personas ajenas como abuelos, tíos, referentes comunitarios, generándose un aumento de las dificultades porque impactan diferentes valores, creencias y modalidades de crianzas, que pueden afectar el desarrollo saludable del adolescente y facilitar la aparición de conductas transgresoras.

En cuanto a los antecedentes de conducta familiares delictivas, refirieron a que el hecho de observar conductas antisociales por parte de los padres posibilitaría el desarrollo de comportamientos agresivos y el sostenimiento de éstos en el tiempo. Se podría inferir que para estos padres hay una fuerte identificación de los adolescentes con las figuras delictivas familiares. Por otra parte, la ausencia paterna es otro de los factores reconocidos como de riesgo en las entrevistas realizadas a los padres. En su gran mayoría, estos jóvenes no experimentarían una relación significativa con su padre o ésta podría tornarse negativa debido a dicha carencia de la figura paterna o a que la función de este se reduce a un proveedor económico del hogar, sin posicionarse desde lo afectivo. De este modo, el padre resulta una figura conflictiva no sólo porque hay un lugar ausente sino también por las consecuencias que ocasiona, como la excesiva

responsabilidad que debe sobrellevar la madre. Es decir, la ausencia, ya sea física o simbólica, de la figura paterna podría estar relacionada con la conducta transgresora en la adolescencia.

Como consecuencia de las características familiares descritas anteriormente, podrían presentarse problemáticas en relación con el grupo de pares y al consumo de sustancias. Si bien el grupo de pares es un sostén durante la adolescencia, muchas veces los amigos pueden representar también un factor de riesgo. En este sentido, las madres identifican a los mismos como un factor que facilita la conducta transgresora de su hijo, nombrándolos frecuentemente como la “mala junta”. Esta expresión aparece en reiteradas ocasiones en el discurso, a menudo, relacionada con el consumo de sustancias, atribuyendo a éstos el motivo del consumo. Sin embargo, es posible pensar que, si bien hay investigaciones que expresan que existe una correlación entre el consumo de drogas y la delincuencia, dicha relación tal vez no puede pensarse como causa-efecto, dado que esta problemática se encuentra afectada por múltiples factores. Se vuelve difícil, al mismo tiempo, identificar razones o motivos por los cuales estos adolescentes consumen, no obstante, considero que estos jóvenes podrían acudir a las mismas como una manifestación de rebeldía o como un modo de evadirse de las situaciones dolorosas que están viviendo.

En relación con los factores socio-comunitarios, los padres asistentes a los talleres expresaron su percepción de que las condiciones socioculturales y habitacionales de los barrios, representan un foco de riesgo para los adolescentes, favoreciendo sus conductas transgresoras, incluso pudiendo ser causales de ellas.

Resulta fundamental destacar que, en este segundo objetivo, los factores de riesgo que facilitan las conductas transgresoras de los adolescentes desde el discurso de los padres antes de la intervención de Se.N.A.F, en su mayoría se tratan de factores externos. Es posible observar en las entrevistas que los padres depositan la responsabilidad de lo ocurrido en terceras personas, de este modo se muestran ajenos a la problemática en la que se encuentran inmersos. Esto es importante porque podría estar relacionado con que la familia en un primer momento, antes de la intervención de Se.N.A.F, no percibe su papel en la instalación de factores de riesgo, es decir no logran evaluar las causas por las cuales han provocado la exposición a riesgo de su hijo, colocando en el afuera tal responsabilidad. Debido a la situación de detención de sus hijos, la familia se siente evaluada, controlada y expectante a cualquier recurso que le permita la recuperación de la libertad de su hijo, esto podría posibilitar que, en un primer momento, no se responsabilicen de la conducta de su hijo.

En cuanto al **tercer objetivo**, se puede decir que los padres percibieron como factores de riesgo, después de la intervención de Se.N.A.F, aspectos familiares y ligados al grupo de pares. En lo que respecta a los factores familiares, mencionaron que aquellos que facilitan la conducta transgresora de sus hijos serían: estilo parental permisivo, falta de límites, vínculos afectivos débiles y conflictos familiares presentes en el hogar.

En cuanto al estilo parental permisivo y la falta de límites, las familias de los adolescentes se caracterizarían, según el discurso de los padres, por la existencia un control parental escaso, siendo incapaces de disciplinar a sus hijos, y permitiéndoles hacer todo lo que quieran. Además, se registró de manera frecuente en los discursos, la falta de supervisión sobre las actividades de sus hijos asociada a distintos motivos, y la dificultad en la puesta de límites y reglas de manera efectiva. Esto último se puede observar en los talleres y entrevistas, ya que la mayoría de los padres refirieron no poder poner límites o “decir que no” a éstos, ya sea por no sentirse capaces de hacerlo o por falta de autoridad. Se podría hipotetizar, por lo tanto, que, al no encontrar el límite en el hogar, lo buscarían afuera de él y así se exponen a situaciones de riesgo, permaneciendo mucho tiempo en la calle y en la “esquina”, necesitando o buscando una figura externa de autoridad

Los vínculos afectivos débiles aparecen como otra de las categorías dentro de los factores familiares de riesgo percibidos por los padres. La falta de afecto y apoyo podría haber repercutido en algunos adolescentes que transgreden la ley como una forma de “llamar la atención”, exponiéndose a situaciones de riesgo. En base a esto es posible reflexionar que, al estar transitando por la adolescencia, la cual es una etapa de cambios conformada por diversas crisis y duelos que deben superarse para lograr una identidad adulta, estos jóvenes podrían estar necesitando que los padres los contengan, los acompañen, les brinden afecto y les pongan límites.

Por otra parte, en relación con los conflictos en el hogar se observó que los padres referían en su discurso a la presencia de situaciones de violencia y maltrato, falta de comunicación y clima familiar hostil. Estos pueden constituir factores de riesgo que promueven conductas transgresoras debido a que generan una tensión en el entorno familiar donde los adolescentes pueden desarrollar una agresividad latente contra sus progenitores que luego manifiestan en el afuera al no poder hacerlo dentro del hogar.

Resulta fundamental remarcar que a diferencia de los factores identificados en el primer taller puede observarse que, después de la intervención de Se.N.A.F, esta situación comienza a variar. La postura que adoptan frente al problema de su hijo es diferente, se incluyen en ella, comienzan a observar otras variables como la responsabilidad que poseen como padres en la contención

del joven, se reconocen como permisivos, expresan los conflictos que poseen con su cónyuge o pareja, enuncian no haber sabido poner límite. Esto es importante porque está vinculado con que la familia, luego de la intervención de Se.N.A.F, comienza a percibir su papel en la instalación de factores de riesgo. Es decir, logran evaluar las causas por las cuales han provocado la exposición a riesgo de su hijo, responsabilizándose por la misma.

Por último, con respecto a **la perspectiva de los profesionales** entorno a los factores de riesgo que podrían facilitar la conducta transgresora de los adolescentes en conflicto con la ley penal, los mismo refirieron a una amplia variedad, que podrían subdividirse en las siguientes categorías: individuales, familiares, ligados al grupo de pares, socio-educativo, socio-económico y socio- comunitario.

Como factores de riesgo individuales, se presenta la dificultad de comunicarse de los jóvenes debido a la ausencia de palabra, estos manifiestan a través de comportamientos algún malestar que los aqueja. Los profesionales refieren a que no hay un reconocimiento espontaneo de las consecuencias de sus acciones, por lo que habría un predominio de los mecanismos de acción por sobre aquellos que implican procesos más reflexivos. Así también señalaron que existen ciertas características de la personalidad que podrían influir en la conducta, como son: la baja autoestima, la falta de introyección de la norma, niveles elevados de impulsividad, pensamientos concretos y la adolescencia misma como etapa evolutiva.

En lo que respecta a los factores familiares, los profesionales sostuvieron como recurrentes la falta de límites, la carencia en la comunicación y en la contención afectiva y el crecimiento en ambientes familiares delictivos. La cuestión del consumo de sustancias aparece también, frecuentemente en las entrevistas. Según los profesionales, las mayores razones por las cuales delinquen tienen que ver con el consumo, el cual generalmente esta naturalizado por los jóvenes. Se podría hipotetizar que muchos de estos adolescentes emplean el consumo de sustancias como un modo de enfrentar y sobrellevar problemas al interior familiar de distinto tipo.

Por otra parte, el abandono y la deserción escolar se presentan como una de las características prevalentes en los adolescentes en conflicto con la ley penal y algunos de los motivos por los que ocurre esto es por la falta de dinero para suplir las necesidades familiares o personales, desinterés o no encontrarle a la educación una funcionalidad en sus vidas, estigmatizaciones por parte de algunos agentes del sistema educativo y conflictos con compañeros. Sumado a esto existen diferentes variables socioeconómicas que facilitan el comportamiento delictivo, entre las que se encuentran: las desventajas socioeconómicas, la falta de trabajo tanto en los padres como en los jóvenes y la desigualdad de oportunidades. En base a esto se podría inferir que el

no estar escolarizados y tampoco realizar una actividad laboral podría dar cuenta de que estos jóvenes disponen de demasiado tiempo de ocio, lo cual representaría otro de los factores que facilita el desarrollo de conductas de riesgo.

Por último, en cuanto a las variables socio-comunitarias, señalaron que, sin lugar a duda, las características de los lugares de residencia pueden influir en las familias y facilitar la exposición a situaciones de riesgo. Sin embargo, es posible pensar que esto no depende únicamente de las condiciones reales ni de la percepción que la familia tenga del contexto, sino principalmente de la fortaleza de la familia en la enseñanza del discernimiento entre aquellos comportamientos perjudiciales de los que no lo son, tanto para sí mismo como para el resto.

Como conclusión general, teniendo en cuenta lo analizado anteriormente en cada uno de los objetivos específicos, se podría decir que existe una multicausalidad o multidimensionalidad de factores que influyen en la conducta transgresora de los jóvenes. La presencia de un solo factor nunca es la única razón de estos comportamientos, sino que es necesaria la combinación de las características individuales y situacionales, así como la confluencia de ciertos factores. Es decir, para estudiar la situación del joven en conflicto con la Ley Penal y su conducta transgresora es necesario tener en cuenta las diferentes variables que intervinieron en la misma y que fueron posibles identificar, tanto en el Taller como en las entrevistas realizadas.

Por otra parte, en relación con el Taller fue posible observar un gran impacto de este en los padres de los adolescentes. Ya que en los primeros encuentros estos tienden a depositar la responsabilidad en factores externos, haciéndose una escasa autocrítica de su implicancia en esta situación, utilizando como mecanismo de defensa la justificación, la cual podría estar vinculada a la vulneración que muchas veces vienen atravesando a lo largo de todo el proceso penal, sin embargo, paulatinamente se van generando interrogantes que apuntan a la responsabilidad subjetiva. La labor con la familia es muy minuciosa, se deben romper las barreras defensivas con las que los padres llegan al taller para luego dar lugar a la reflexión. A partir de ello, se intenta que padres y madres comiencen a responsabilizarse de que algo está sucediendo en el seno familiar y que puede haber sido un factor que lo lleve a su hijo a transgredir. Por último, el final de este proceso lleva al trabajo más particularizado con las madres, padres, abuelos, ya que éstos deben estar preparados para posibles recaídas de sus hijos, siendo esta una situación muy compleja y dolorosa, donde el adolescente necesita que los adultos responsables se posicionen de una forma diferente y lo contengan.

Es decir, en este aspecto, es fundamental destacar las intervenciones de los profesionales, las cuales poseen un carácter direccional y activo y apuntan a que las familias puedan reflexionar. Además, refuerzan lo positivo y potencian las herramientas con las que cuentan estos padres en

pos de fomentar el desarrollo saludable y modificar aspectos negativos de la realidad que los rodea. Esto a su vez se relaciona con lo que plantea Barg (2006) respecto a la importancia del taller. Opina que la función de este está en relación con el aprendizaje que va de la mano del espacio a la pregunta, no desde la soledad de la autocrítica, que muchas los estigmatiza como los malos padres que tienen hijos con problemas, sino desde el alivio de la palabra dirigida hacia otro que la hace circular, es sostenida por el grupo, es acompañada.

Puede observarse un salto cualitativo en el análisis que los padres elaboran. A diferencia del primer taller, reconocen las necesidades afectivas de su hijo y los errores cometidos, comentan haber comenzado a implementar con sus otros hijos algunos de los conceptos aprendidos y se muestran dispuestos a producir cambios al momento de que el adolescente retorne a su hogar. También, expresaron que reflexionaron sobre cómo reparar sus errores y que hubo cambios en la forma de relacionarse con el adolescente y la familia a partir de haber asistido al taller.

Para concluir entonces podría decirse que, la familia juega un papel fundamental en el desarrollo del adolescente, resulta de suma importancia tener en cuenta el vínculo familiar ya que muchos factores de riesgo o de protección se presentan dentro de ella. El tipo de familia en la que nace y se cría un niño afecta significativamente a las creencias, valores, expectativas, roles, comportamientos, e interrelaciones que tendrá a lo largo de su vida. Es decir, la forma como el sujeto se relacionará con y en el contexto social más amplio dependerá, en gran medida, de la funcionalidad, la solidez de la familia y de la relación que el adolescente tenga con sus padres.

APRENDIZAJES ADQUIRIDOS A LO LARGO DE LA PRÁCTICA

A lo largo del proceso de Prácticas Pre Profesionales en el Contexto Jurídico, se adquirieron distintos aprendizajes no solo en relación con lo profesional sino también respecto a lo personal. Ha significado una transición entre el rol como estudiante y el futuro rol como profesional de la salud mental, constituyendo una posibilidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación y enriqueciendo los mismos.

En primer lugar, la participación en el área penal juvenil de Se.N.A.F me permitió conocer la institución, su forma de organización, su funcionamiento, sus objetivos, como también el rol del psicólogo en el trabajo con adolescentes en conflicto con la ley penal y sus familias,

pudiendo adentrarme así en el quehacer profesional y las intervenciones frente a la complejidad de las problemáticas abordadas. Gracias a los psicólogos y trabajadoras sociales se pudo hacer tangible el rol de la profesión, ya sea entrevistando a los adolescentes de manera individual como también el manejo de un dispositivo grupal con adultos. A su vez, la práctica contribuyó a lograr una mejor comprensión de distintas legislaciones, convenciones y políticas públicas, principalmente las referidas a niñez y adolescencia.

Otro aprendizaje alcanzado fue la experiencia del trabajo institucional, de cómo es el desempeñarse en una institución pública, tanto a nivel profesional, con el encuadre que esto le pone al ejercicio, como a nivel personal y de las relaciones, ya que el contexto inestable y de constantes transformaciones en el que la institución está inmersa repercute en las estrategias empleadas en el abordaje que se realiza. En este sentido, fue posible observar que existen ciertas lógicas que son implementadas por diferentes profesionales, en diversos programas, que no presentan un criterio ni objetivos en común, sino más bien disímiles y hasta contradictorios, lo cual impacta en el trabajo con los jóvenes. Además, esta dificultad en el trabajo interdisciplinario y en la concreción de algunas actividades debido a las condiciones que se presentan, conllevó un aprendizaje a nivel personal del manejo de la ansiedad y la tolerancia a la frustración.

El rol de observadora no participante me permitió incorporar y aprender el valor de la observación, de la escucha, como así también del registro de lo acontecido, respetando y sosteniendo siempre mi lugar de practicante. Es decir, a nivel personal, este primer acercamiento a la práctica concreta del psicólogo me posibilitó pensarme a mí misma en esa situación reconociendo mis límites y posibilidades. Principalmente, me brindó la posibilidad de conocer la situación cotidiana y las realidades de los jóvenes y las familias que asisten a los Programas de Se.N.A.F., los cuales siempre se mostraron muy abiertos al diálogo y a que fueran observados en diferentes espacios, por lo que valoro profundamente la solidaridad, la predisposición, como así también el hecho de compartir sus complejas historias de vida. Todo esto me permitió llevarme una perspectiva distinta de la realidad que viven estos adolescentes y sus familias.

Por otro lado, la observación del rol de las psicólogas y trabajadoras sociales del programa de Orientación Familiar me permitió comprender que conjuntamente al conocimiento teórico para el abordaje de dicha población, se necesita una gran capacidad empática y de respeto al otro.

Cabe destacar que las profesionales siempre se mostraron muy dispuestas a la escucha del malestar de las familias y sus historias. Además, se integraron al grupo, creando un ambiente de confianza y libre de prejuicios, donde el saber y la reflexión fueron contruidos de manera compartida, donde aprendimos con y de los padres. Como resalta la Coordinadora, se trata de un taller de padres no para padres, por lo que nadie le enseña a nadie, sino que todos aprendimos juntos.

Cada entrevista y taller observado y cada situación vivenciada a lo largo de la práctica me movilizó aspectos emocionales. Por esta razón, me parece fundamental resaltar por un lado las reuniones post-talleres que realizábamos con la Licenciada en Trabajo Social y las Licenciadas en psicología, ya que encontré allí un espacio de contención y a su vez, de intercambio de ideas acerca de lo trabajado ese día en el Taller, generando así un trabajo interdisciplinario. Y por otra parte quiero destacar, las instancias de supervisión por parte del responsable del contexto, en la cual se brindaron espacios para transmitir nuestra experiencia, manifestando situaciones particulares, aprendizajes y dificultades propias del ejercicio del rol del psicólogo. Además, en dichas instancias trabajamos en conjunto sobre aspectos relacionados al desarrollo del Trabajo de Integración Final, recibiendo del mismo recomendaciones, sugerencias y orientación para una producción más enriquecedora del trabajo.

Para concluir, me gustaría remarcar la importancia de escuchar las voces de los protagonistas, es decir de los adolescentes en conflicto con la ley penal y sus familias, y de abordar las problemáticas que se presentan siempre desde un enfoque de derechos para evitar la victimización secundaria. Considero que, tanto desde el rol de profesionales como de practicantes, es posible dedicar nuestro tiempo y esfuerzo para aportar algo en la transformación de la realidad a la que están siendo sometidos quienes habitan en los sectores más vulnerables de la sociedad.

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abaunza Forero, C. I., Mendoza Molina, M., Paredes Álvarez, G., y Bustos Benítez, P. (2016). *Familia y privación de la libertad en Colombia*. Bogotá, Colombia: Universidad del Rosario.
- Aberastury, A. y Knobel, M. (1972). *La adolescencia normal: Un enfoque psicoanalítico*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Abdel Masih, N. (1995). Violencia, una aproximación psicoanalítica. *Victimología*, 1 (13), 113-118.
- Acosta, C. y Perez, J. (2019) Marginación y exclusión social: el caso de los jóvenes en el Consejo Popular Colón de la ciudad de La Habana En *Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social: Los retos de las políticas sociales de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI* (pp.371-390). Bogotá, Ecuador: Siglo del hombre
- Aguilar Cárceles, M. M. (2012). La influencia del contexto familiar en el desarrollo de conductas violentas durante la adolescencia: factores de riesgo y de protección. *Revista criminalidad*, 54(2), 27-46.
- Anzola, M. G., Iglesias, C., Petrucci, A. R., y Prado Alvarez, G. (2005). Delincuencia juvenil en Paraná y su relación con las condiciones de exclusión social. *Ciencia, docencia y tecnología*, 16(31), 49-94.
- Araujo Monteiro, R., Gomes Gonçalves, T., da Luz Refosco, L., Medeiros Kother Macedo, M., (2012) Reflexiones sobre la adolescencia y las funciones parentales en la realidad contemporánea. *Revista Aperturas Psicoanalíticas*, 2 (41), 144-198
- Arce, R. (2004) Comportamiento antisocial y delictivos: teorías y modelos. *Delito e intervención social: Una propuesta para la intervención profesional* (pp.15-54). Madrid, España: Alianza
- Arévalo G. y Maldonado J. (2004) Tratamiento de Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Recuperado de: <http://www.psicopedagogia.com/ley-penal-ninos-adolescentes-delitos>.
- Azaola, E., y Bergman, M. (2009). Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional: Resultados de la tercera encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México. Ciudad de México, México.
- Bandura, A. (1977). *La auto-eficacia: El ejercicio del control*. Nueva York: WH Freeman.
- Bandura, A., y Walters, R. H. (1988). Adolescent aggression: A study of the influence of child-training practices and family interrelationships. Nueva York, EE.UU: Ronald Press

- Barrón, M., Crabay, M. I., Peña, E. B., y Schiavoni, M. C. (2010). Adolescentes, violencia y familia en la ciudad de Córdoba. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 3 (17), 83-95.
- Barrón M. (2010) *Adicciones, Nuevos Paraísos Artificiales. Indicaciones en torno de los jóvenes y sus consumos*. Córdoba, Argentina: Brujas.
- Benvenuti, P. (2003) *Youth Violence and Delinquency in the Latin American Region* (Tesis Maestría) Escuela de Economía , Londres, Inglaterra
- Berenstein, I. (1998). *Familia y enfermedad mental*. Buenos Aires, Argentina: Paidós
- Beroña, L (2008). Structure of problem behavior in adolescence and young adulthood. *Journal of consulting and clinical psychology*, 53(6), 890.
- Bernachea, L. (2013). *Algunas reflexiones sobre el rol del psicólogo en el campo Psicológico – Jurídico*. Trabajo presentado en el Ciclo de Conferencias preparatorias: El campo Jurídico, un ámbito de inserción del psicólogo, Buenos Aires, Argentina. Resumen recuperado de <https://colpsi14.org.ar/inicio-2/inicio-2/ciclo-de-conferencias-preparatorias-el-campo-juridico-un-ambito-de-insercion-del-psicologo/>
- Bertranou, F. M. y Casanova, L. (2013). *Informalidad, calidad del empleo y segmentación laboral en Argentina*. Buenos Aires, Argentina: OIT
- Biaggio, M. (2011) *El Origen de la Violencia*. Buenos Aires, Argentina: Dunken.
- Bleichmar, S. (2008). *Violencia social-violencia escolar: de la puesta de límites y la construcción de legalidades como principio educativo*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Noveduc
- Bleichmar, S. (1999). Entre la producción de subjetividad y la constitución del psiquismo. *Revista Ateneo Psicoanalítico*, 2.
- Bleichmar, S (18 de abril de 1999) En *Diario Clarín*/ Entrevistada por Pavon, H. Recuperado de <http://www.profesionaleshnrg.com.ar/wp-content/uploads/2017/07/Entrevista-a-Silvia-Bleichmar.-Violencia-en-adolescentes.pdf>
- Blos, P. (1980). *La adolescencia normal*. Ciudad de México, México: Joaquín Mortiz.
- Bourdieu, P. (2005). *Estructuras sociales de la economía*. Paris, Francia: Polity
- Briuoli, N. M. (2007). La construcción de la subjetividad. El impacto de las políticas sociales. *Historia actual online*, 2 (13), 81-88.

- Brocca, M., Morales, S., Plaza, V., y Crisafulli, L. (2014). Informe Provincial 2013. *Mirar Tras los Muros. Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba*. Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de Río Cuarto.
- Busso, G. (2005). Pobreza, exclusión y vulnerabilidad social. *Usos, limitaciones y potencialidades para el diseño de políticas de desarrollo y de población*, 1(1), 1-27.
- Canales, G. F. (2005). Consumo de drogas psicoactivas y factores de riesgo familiar en adolescentes. *Revista cuidarte*, 3(1), 260-269.
- Canales, C. (13 de mayo de 1993) Delincuencia juvenil: las ganas de ser más. *Diario la Nación*, pp. 1-21
- Cárdenas Paredes, D. C. (2012). *Evaluación de los estilos y formas de relación de los sistemas familiares de niños y adolescentes con experiencia de vida en calle, que acuden a la Casa de la Niñez* 2(Tesis de grado). Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador.
- Carnevali, R., & Källman, E. (2007). La importancia de los grupos en el comportamiento juvenil. *Revista Política Criminal*, 4 (8) 16-37
- Carpintero, E. (2012) La transgresión cuestiona lo natural del orden de la cultura. *Revista Topia*, 17(4). Recuperado de: <https://www.topia.com.ar/articulos/transgresi%C3%B3n-cuestiona-lo-natural-del-orden-cultura>.
- Cartolano, E. (2006). Parte II: La turbulencia: tránsito hacia la complejidad. En *Adolescencias: trayectorias turbulentas* (pp. 175-190). Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Catalano, R. F. y Hawkins, J. D. (1997). *The social development model: A theory of antisocial behavior*. Nueva York: J. D. Hawkins
- Catena, A. M., y Illescas, S. R. (2013). Carreras delictivas juveniles y tratamiento. *Revista de servicios sociales*, 1 (54), 171-183.
- Cid Moliné, J. (2001). *Teorías criminológicas*. Barcelona, España: Bosch.
- Código de Ética del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba (2016). Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba
- Cohen, A. (1994). The content of delinquent subculture. En *Classics of criminology* (pp.275-280) Chicago, EEUU: Waveland Press
- Cohen, S. (2008). *Delinquent Boys: The Culture of the Gang*. Nueva York, EEUU: Free Press of Glencoe,
- Condori Ingaroca, L.J. (2002). *Funcionamiento familiar y situaciones de crisis de adolescentes infractores y no infractores en Lima Metropolitana*. (Tesis de maestría) Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. Recuperado de http://200.62.146.130/bitstream/cybertesis/2733/1/Condori_il%281%29.pdf

- Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989). Organización de las Naciones Unidas.
- Corominas, J. (1973). *Breve diccionario etimológico de la lengua castellana*. Madrid, España: Gredos.
- Cosacov, E., y Croccia, L. (2007). Menores en conflicto con la ley penal. *Colección Investigaciones y Ensayos*, 3(2), 53-75.
- Cura, Y.A, Gamacchio, A. L y Lanzi, A. (2014) *Factores Protectores y Factores de Riesgo en los Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal: Una aproximación desde los profesionales de SeNAF* (Trabajo Final de Grado) Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
- Dávila León, O. (2004). *Adolescencia y juventud: de las nociones a los abordajes*. Valparaíso, Chile: Última década
- De Castro, L. R. (2001). Juventude e socialização política: atualizando o debate. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 25(4), 479-487.
- De Giorgi, G. (2015). La dimensión ética y deontológica en el ejercicio profesional del psicólogo. Ficha de cátedra de Deontología y Legislación Profesional, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba.
- De Giorgi, G. (2015). Praxis psicológica con niñas, niños y adolescentes: Aspectos legales y éticos implicados en el ejercicio profesional. Ficha de cátedra de Deontología y Legislación Profesional, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba.
- De La Cruz, C. (2004) Algunos Conceptos sobre la Familia. Ficha de Cátedra de Clínica Psicológica y Psicoterapias. Facultad Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
- Del Popolo, J.H (1996). *Psicología Judicial*. Mendoza, Argentina: Ediciones Jurídicas Cuyo
- Delucca, N. E., González Oddera, M., y Martínez, A. (2010). Modalidades de la diversidad en los vínculos familiares. *Revista de Psicología-Segunda Época*, 11.
- Desbrow, J. M., Fernández, F. P., Gran, B. C., Lozano, M. P. G., y Cárdaña, B. B. (2014). Factores de riesgo y de protección en menores infractores. Análisis y prospectiva. *Psicología latina*, 1(5), 11-20.
- De Simone, C. y Sarmiento, A. (s.f.) El rol del psicólogo en el abordaje de jóvenes infractores a la ley penal. Ficha de cátedra, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Dolto, F. (2008). *Crianca do espelho*. Rio de Janeiro, Brasil: Jorge Zahar.

- Duschatzky, S., y Corea, C. (2009). *Chicos en banda: los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones*. Buenos Aires, Argentina: Paidós
- Egeland, B., Yates, T., Appleyard, K., y Van Dulmen, M. (2002). The long-term consequences of maltreatment in the early years: A developmental pathway model to antisocial behavior. *Children's services: Social policy, research, and practice*, 5(4), 249-260.
- Erickson, E. (1968). *Identidad, juventud y crisis*. Buenos Aires, Argentina: Paidós
- Espada, J. P., Méndez, X., Griffin, K., y Botvin, G. J. (2003). Adolescencia: consumo de alcohol y otras drogas. *Papeles del psicólogo*, 84(9), 17.
- Farrington, D. P. (1995). The development of offending and antisocial behaviour from childhood: Key findings from the Cambridge Study in Delinquent Development. *Journal of Child psychology and psychiatry*, 6(36), 929-964.
- Ferreira, C. D., Lucero, E. J., y Valdez, J. J. (2011). *Nivel de conocimiento de los adolescentes marplatenses sobre las consecuencias del uso de drogas (Tesis de pregrado)*. Universidad FASTA, Mar del Plata, Argentina
- Fernández, A. M. (2013) Jóvenes de vidas grises. En *Psicoanálisis y Biopolíticas*. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.
- Fernández, A. y Pedro, E. (2011) *El consumo de sustancia en los jóvenes detenidos* (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina
- Fernández Campoy, J. M. (2008). *La integración de sujetos inadaptados socialmente. Un estudio de caso: el centro de menores Tierras de Oria* (Tesis doctoral). Universidad de Granada, Granada, España
- Fernández Moujan, O (1986) *Abordaje Teórico y clínico del adolescente*. Buenos Aires, Argentina: Nueva visión.
- Fernández Ríos, L., & Rodríguez Díaz, F. J. (2002). Prevención de la violencia: hechos y mitos. *Psicothema*, 14 (8), 22-51.
- Flores, L. (2018) Factores que inciden en el infractor penal niño y adolescente en el distrito judicial Lima-Este (Tesis doctoral). Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú
- Franco Castro, G. (2014) *Reinserción social para jóvenes infractores de Ley: Una mirada restaurativa e inclusiva* (tesis de grado). Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, Chile.
- Freud, S. (1905). Tres ensayos de teoría sexual y otras obras. En *Obras completas* (pp.109-211) Buenos Aires, Argentina: Amorrortu
- Garrido, C. y Hein, A. (2004). Desafíos para una nueva institucionalidad de Justicia Penal Juvenil. *Revista Trabajo Social*, 12(77), 57-67.

- Garrido, V., Stangeland, P., y Redondo, S. (2006). Delitos y Delincuentes Sexuales. *Principios de criminología*, 1(4) 603-638.
- Gelles, R. J., y Cavanaugh, M. M. (2004). Factores sociales. En *El laberinto de la violencia: Causas, tipos y efectos* (pp. 47-55). Barcelona, España: Bosch
- Gervilla, A. Galante, R. y Martín, J.A. (2000). *Familia y sociedad: Menores en situación de riesgo*. Madrid, España: Dykinson
- Giberti, E. (2005). *La familia, a pesar de todo*. Buenos Aires, Argentina: Noveduc.
- Giberti, E. (1996). La familia y los modelos empíricos. En *Vivir en familia* (pp. 31-43). Buenos Aires, Argentina: Lozada
- Giorgi, V. (2004) *Construcción de la subjetividad en la exclusión. Seminario: Drogas y exclusión social*. Recuperado de: [file:///C:/Users/usuario/Downloads/Giorgi%20subjtividad%20y%20ppss%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/usuario/Downloads/Giorgi%20subjtividad%20y%20ppss%20(1).pdf)
- Glaser, D., Prior, V., y Lynch, M. A. (2001). *Emotional abuse and emotional neglect: antecedents, operational definitions and consequences*. York, UK: British Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect.
- Gómez-Fraguela, J. A., y Romero, E., Sobrela, J. (2003). Evaluación de la psicopatía infantojuvenil: estudio en una muestra de niños institucionalizados. *Anuario de psicología jurídica*, 15, 23-40.
- González, J. P. (1998). Familia y escuela: padres y profesores. En *Familia y desarrollo humano* (pp. 333-352). Madrid, España: Alianza.
- Gracia, E., Fuentes, M. C., y García, F. (2010). Barrios de riesgo, estilos de socialización parental y problemas de conducta en adolescentes. *Psychosocial Intervention*, 19(3), 265-278.
- García, E. (2003). Adolescentes y responsabilidad penal. En *La dimensión política de la responsabilidad penal de los adolescentes en América Latina: notas para la construcción de una modesta utopía* (pp.121-201) Buenos Aires, Argentina: Adhoc.
- Graña Gómez, J. L., y Rodríguez Biezma, M. J. (2010). Programa central de tratamiento educativo y terapéutico para menores infractores. Agencia de la comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractor, Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de <http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f07022012130358.pdf>
- Gutiérrez de Piñeres, C. (2010). Revisión sobre la definición de Psicología Jurídica. *Diversitas: Perspectivas en Psicología*, 6(2) ,221-235.

- Hein, A., Blanco, J., y Mertz, C. (2004). *Factores de riesgo y delincuencia juvenil: revisión de la literatura nacional e internacional*. Santiago de Chile, Chile: Fundación paz ciudadana
- Hirschi, T. (1960). Hellfire and delinquency. *Social Problems*, 17(2), 202-213.
- Iglesias, A. (2016) *Factores de riesgo de la conducta antisocial en menores en situación de exclusión social* (Tesis doctoral). Universidad complutense de Madrid, Madrid, España
- Janin, B. (2018). La transmisión a través de las generaciones y sus avatares. *Revista de Psicoanálisis*, 25(3), 557-568
- Jara Holliday, O. (2015). La sistematización de experiencias: aspectos teóricos y metodológicos.
- Jelin, E. (1998). Familia y unidad doméstica: mundo público y vida privada. En *Vivir en Familia* (pp. 48-70). Buenos Aires, Argentina: Estudios CEDES.
- Jiménez Ornelas, R. A. (2005). La delincuencia juvenil: fenómeno de la sociedad actual. *Papeles de población*, 11(43), 215-261.
- Klee, B., Carlson, N. J., Radley, W., y Edward, H. Thinner y Checkly A. Westbrook. 2011. "Bands and Drugs. Uses and Relationships". *Sociological Research Journal*, 16(1), 202-211.
- Labra Olivares, T. (2011). *Experiencias y significados de un grupo de adolescentes sancionados, respecto a los programas de reinserción social y el sistema de justicia juvenil*. Santiago de Chile, Chile: Repositorio Universidad de Chile
- Laje, M. I. (2001). La violencia de género: ¿núcleo de las políticas de familia? En *La Serna*, (pp. 2-13). Buenos Aires, Argentina: Ciccus
- Lascano, C. J. (2005). *Derecho penal: parte general*. Buenos Aires, Argentina: Advocatus.
- Laursen, G. M., y Marqués, R. L (Sin fecha). Actualizaciones en el abordaje psicológico de los adolescentes infractores a la ley penal. Cátedra II de psicología Jurídica, 134 Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Recuperado de: <http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/obligatorias/CFP/juridica/varela/Practicos/011%20y%20012/Laursen%20abordaje%20psi%20de%20los%20adolescentes%20infractores%20a%20la%20ley%20penal.pdf>
- Le Breton, D. (2002). *Adolescencia bajo riesgo*. Montevideo, Uruguay: Ediciones Trilce.
- Leibovich de Figueroa, N., y Schmidt, V. (2010). La comunicación entre padres e hijos: su influencia sobre el disfrute y el flow adolescente. *Revista de psicología*, 26(2), 1-55.

- Ley N° 7106. Ley de Disposiciones para el ejercicio de la psicología. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, Córdoba, Argentina, 13 de Septiembre de 1984
- Ley N° 23.277. Ejercicio Profesional de la Psicología. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 27 de Septiembre de 1985
- Ley N° 26.061. Ley de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 28 de Septiembre de 2005
- Ley N° 9.944. Ley de Promoción y Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Provincia de Córdoba. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, Córdoba, Argentina, 4 de Mayo de 2011
- Ley Nacional N° 10.903. Patronato de Menores de Jurisdicción Nacional y Provincial. Boletín Oficial, 27 de Octubre de 1919
- Linares, J. L. (2012). Adolescentes que no gustan a sus padres. *Ajayu Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología UCBSP*, 10(1), 1-18.
- Loeber, R., y Farrington, D. P. (2000). Young children who commit crime: Epidemiology, developmental origins, risk factors, early interventions, and policy implications. *Development and psychopathology*, 12(4), 737-762.
- López, A., Gómez, J. A., y Noreña, A. (2013). *El sistema de responsabilidad penal y la reincidencia de adolescentes en conductas delictivas durante el año 2012 en la ciudad de Manizales* (Tesis de maestría). Universidad Autónoma de Manizales, Manizales, Colombia
- López, A., y Palummo, J. M. (2013). *Internados: las prácticas judiciales de institucionalización por protección de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Montevideo*. Montevideo, Uruguay: FDJ
- López, R., y Arrojo, M. (1987). Las dimensiones de la Criminalidad. *Estudios penales y criminológicos*, (10), 231-250. Recuperado de [http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Revista% 20Naranja](http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Revista%20Naranja), 20.
- López Fuentetaja, A. M., y Castro Masó, Á. (2007). *Adolescencia: límites imprecisos*. Madrid, España: Alianza.
- Lostaló, D., y Carlos, J. (2008). El porqué de una psicología forense. En *Psicología Forense y Derechos Humanos* (pp 15-22). Buenos Aires, Argentina: Koyatún
- Luengo, M. Á., Romero, E., Fragueta, J. A. G., y Sobral, J. (2002). La estructura de los rasgos de personalidad en adolescentes: el modelo de cinco factores y los cinco alternativos. *Psicothema*, 14(1), 134-143.

- Luna, O. (2001). Adolescentes en conflicto con la ley: los escenarios del vacío En *Lo público, lo privado, lo íntimo. Consecuencias de la ley en el sujeto*(pp.68-99) Buenos Aires: Letra Viva.
- Marchiori (1999) *Criminología: Introducción*. Córdoba, Argentina: Lerner.
- Marin, M. y Esparcia, A. (2009). Introducción a la Psicología Forense. Ficha de Catedra Psicopatología Forense, Facultad de Psicología, Universidad de Barcelona. Recuperado de www.yumpu.com/es/document/view/11566467/introduccion-a-la-psicologia-forensemila-arch-marin-y-adolfo-jarne-esparcia
- Martín, P. (2006). Del motivo de consulta a la demanda en psicología. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 22 (1).
- Martínez Criado, G. (2003). Entre adolescentes: la importancia del grupo en esta etapa de la vida. En *Los adolescentes en el siglo XXI: un enfoque psicosocial* (pp. 159-184). Barcelona, España: UOC.
- Martínez Peralta, J. (2015). *Funcionamiento familiar y apoyo social en el consumo de drogas y las conductas delictivas de los adolescentes* (Tesis doctoral) Universidad de Málaga, Málaga, España
- Maslow, A. H. (1943). Conflict, frustration, and the theory of threat. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 38(1), 81-97
- Matza, D., y Sykes, G. M. (1961). Juvenile delinquency and subterranean values. *American sociological* ,22(8) ,712-719.
- Mayor, M., y Urrea, J. (1991). Juzgado de menores. La figura del psicólogo. *Papeles del psicólogo*, 48(22), 29-32.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, self and society*. Chicago, Estados Unidos: University of Chicago Press
- Merton, R. (1980), Teoría y estructura sociales. México: Fondo de Cultura Económica.
- Miceli, C., Salguero, M., Sarmiento, A., y Varela, O. (2005). Adolescentes en conflicto con la ley penal. Un estudio en jóvenes detenidos. En *XII Jornadas de Investigación y Primer Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur*. Facultad de Psicología- Universidad de Buenos Aires.
- Montserrat Femenia, A., y Muñoz Guillén, M. (2003). Violencia y familia. *Aspectos psicosociales de la violencia juvenil*. 62(4), 122- 131
- Monteiro, R. A., Gonçalves, T. G., da Luz Refosco, L., y Macedo, M. M. K. (2012). Reflexiones sobre la adolescencia y las funciones parentales en la realidad contemporánea. *Aperturas Psicoanalíticas*,1.

- Munizaga Acuña, A. M. (2009) Potencialidades del enfoque de factores de riesgo. Breve revisión de las teorías del delito. *Conceptos*, 8(12) ,1-15. Recuperado de http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20100218165814.pdf
- Muñoz, J. M., Manzanero, A. L., Alcázar, M. Á., González, J. L., Pérez, M., y Yela, M. (2011). Psicología Jurídica en España: Delimitación conceptual, campos de investigación e intervención y propuesta formativa dentro de la Enseñanza Oficial. *Anuario de psicología jurídica*, 21(1) ,3-14.
- Nickel, H y Zieger, K (2007) *Psicología del desarrollo*. Berlin, Alemania: Harper y Row
- Nieto Morales, C. (2011). Fracaso escolar y conflicto con la ley. *Revista de Sociología de la Educación-RASE*, 4(2), 186-203. Recuperado de <file:///C:/Users/angel/Downloads/Dialnet-FracasoEscolarYConflictoConLaLey-3655841.pdf>
- Organización Panamericana de la Salud, (2003). Informe Mundial sobre la violencia y la salud. Recuperado de: http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf
- Organización de las Naciones Unidas (2014) Relevamiento Nacional sobre Adolescentes en conflicto con la ley penal. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/PROTECCION_AdolescConflictoLeyPenal_Final.pdf
- Ortiz, N., y Díaz, C. (2018). Una mirada a la vulnerabilidad social desde las familias. *Revista mexicana de sociología*, 80(3), 611-638.
- Palazzini, L (2006) Movilidad, encierros, errancias: avatares del devenir adolescente. En R.Horstein (Comp.) *Adolescencias: Trayectorias turbulentas* (pp.137-160). Buenos Aires, Argentina: Paidós
- Pastore, M., y Santinello, M. (2010). Social capital, safety concerns, parenting, and early adolescents' antisocial behavior. *Journal of community psychology*, 38(3), 314-328.
- Peña Fernández, A. (2010). *Conducta antisocial en adolescentes: factores de riesgo y de protección* (Tesis Doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España
- Pevalin, D. J., Wade, T. J., y Brannigan, A. (2003). Precursors, consequences and implications for stability and change in pre-adolescent antisocial behaviors. *Prevention Science*, 4(2), 123-136.
- Pichon-Rivière, E. y Pampliega de Quiroga A. (1985) *Psicología de la Vida Cotidiana*. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión

- Ponce, M. (2014) *El grupo de pares y su influencia en la conducta transgresora* (Tesis Pregrado). Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina
- Polola, D. A. (2013). Adolescencia infractora a la ley penal en la ciudad de Rosario: Prensa gráfica vs. Estadísticas oficiales. *Intersecciones en antropología*, 14(1), 183-197.
- Previtali, M. E. (2011). *Andar en la calle y rescatarse. Una etnografía sobre jóvenes, familias y violencias en Villa El Nailon-Córdoba* (Tesis de Maestría en Antropología) Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. Recuperado de: <http://larevueltabisagra.com.ar/wp-content/uploads/2013/09/interferencias-2012.pdf>
- Puente de Camaño, O. (2015). Psicología Jurídica. En Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (Ed), *Manual Ciclo de Nivelación* (pp.214-218). Recuperado de <http://www.psych.unc.edu.ar/wp-content/uploads/CAP%C3%8DTULO-4.pdf>
- Pueyo, A. (2006). Violencia juvenil: realidad actual y factores psicológicos implicados. *Revista ROL de enfermería*, 29(1), 38-44.
- Quiroga, S. (1998). *Adolescencia. Del goce orgánico al hallazgo del objeto*. Buenos Aires, Argentina: Eudeba.
- Quiroga, S. y Cryan, G. (2004). Abordaje terapéutico para adolescentes tempranos con conductas perturbadoras: Trastorno Negativista Desafiante y Trastorno Disocial. En *XI Jornadas de Investigación*. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
- Rebellon, C. J. (2002). Reconsidering the broken homes/delinquency relationship and exploring its mediating mechanism (s). *Criminology*, 40(1), 103-136.
- Redondo Ilescas, S., Martínez Catena, A., y Pueyo, A. (2012). *Intervenciones con delincuentes juveniles en el marco de la justicia: investigación y aplicaciones* (Tesis doctoral). Universidad de Barcelona, Barcelona, España
- Retuerto, I. (2009) Propuesta metodológica para un trabajo teatral con niños, niñas y adolescentes vulnerados. *Revista El Observador*, 1(5), pp 83-116.
- Rodríguez Galende, L. (2012) *Subjetividades, adolescencias y violencias* (Tesis maestría) Recuperada de: <http://190.242.99.229/index.php/TesisPsicologica/article/view/264/260>
- Rojas, M. C. (2005). Familia/s: del modelo único a la diversidad. *Revista Topía*, 15(43), 22-41.
- Rojas, M. C. (2011). Familias: intervenciones en la diversidad. En *Familias y parejas, psicoanálisis, vínculos, subjetividad*. Buenos Aires, Argentina: Psicolibro Ediciones
- Rojas, M. C. (2007). Pensar la/s familia/s hoy: estar solo, con otro. *Revista Psicoanálisis e Intersubjetividad*, 2. Recuperado de <http://www.enigmapsi.com/fliamcrojas.html>
- Roudinesco, E. (2003). *La familia en desorden*. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica

- Rubio, J. (2005). Las redes sociales virtuales como contextos de investigación social. *Virtualis*, 10(19), 181-194.
- Ruiz de Melgen Z (2009) *Modelos de Crianza* (Tesis doctoral) Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador. Recuperado de <http://www.faromundi.org.do/2013/04/modelos-de-crianza>. Acceso: 3 enero 2015.
- Rutter, M., Giller, A. y Hall, C.,(2000). Genetic influences on risk and protection: Implications for understanding resilience. *Resilience and vulnerability: Adaptation in the context of childhood adversities*, 3(5) 489-509.
- Rutter, M., y Giller, H. (1983). Juvenile delinquency: Trends and perspectives. *Guilford Publications*, 74(2), 427-445
- Sabattini, A. (2001). *Del Menor Delincuente al Adolescente Transgresor: un estudio del sistema tutelar correccional cordobés*. Córdoba, Argentina: Alción Editores.
- Salazar, J., Torres Reynaldos, M., Figueroa, C. R., y Valencia Abundiz, S. (2009). Perspectiva psicosocial en adolescentes acusados por delitos contra la salud y robo. *Revista Latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud*, 7(2), 491-512.
- Sampson, R. J., y Lauritsen, J. L. (1994). Violent victimization and offending: Individual-, situational-, and community-level risk factors. *Understanding and preventing violence*, 3.
- Sandoval, L. E.y Martínez Barón, D. (2009). Pobreza y delincuencia departamental en Colombia 2003-2007. *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, 17(1), 95-108.
- San Juan, C., Ocáriz, E., y Germán, I. (2009). Young Offenders and Drug Consumption: A Psychosocial and Crime Profile. *Revista Criminalidad*, 51(1), 147-162.
- Sarmiento, A. J., Puhl, S. M., Oteyza, G., Bermúdez, F., y Siderakis, M. (2009). Las conductas transgresoras de los adolescentes en conflicto con la ley penal; su relación con las perturbaciones en el vínculo primario. *Anuario de investigaciones*, 16, 51-57.
- Sarmiento, A. J., Puhl, S. M., Izcurdia, M., Siderakis, M., y Oteyza, G. (2011). Un estudio sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal. *Anuario de Investigaciones*, 18(1), 435-440
- Sarmiento, A. J., Ghiso, C., Siderakis, M., y De Simone, C. (2016). Aproximación teórica: efectos de la privación de libertad en jóvenes infractores a la ley penal. *Anuario de investigaciones*, 23(1), 237-241.
- Scandroglio, B., Martínez, J. M., Martín, M. J., y López, J. S. (2002). Violencia grupal juvenil: una revisión crítica. *Psicothema*, 14(Suplemento), 6-15.

- Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. (2018). Protocolo del Programa de Orientación Familiar. Córdoba, Argentina.
- Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. (2018). Protocolo de Medidas Alternativas del Sistema Penal Juvenil. Córdoba, Argentina.
- SEDONAR (2017). Informe sobre Tabaco-Alcohol. Estudio Nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: http://www.observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/InformeZconsumoZdeZTabaco_1.pdf
- Serbin, L. A., y Karp, J. (2004). The intergenerational transfer of psychosocial risk: Mediators of vulnerability and resilience. *Annu. Rev. Psychol.*, 55, 333-363.
- Simons, H. (2009). *Case study research in practice*. Nueva York, Estados Unidos: SAGE publications.
- Soifer, R. (1980). *Psicodinamismos de la familia con niños: terapia familiar con técnica de juego*. Buenos Aires, Argentina: Kapelusz.
- Soria arena, M. J. (2016). *La construcción de subjetividad en las personas privadas de libertad* (Tesis Maestría) Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay. Recuperado de: https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/.../tfg_soria_maria_jose_31_oct.pdf
- Steede, K. (2006). *Los 10 errores más comunes de los padres: Cómo evitarlos*. Madrid, España: Edaf.
- Sternbach, S. (2006). *Adolescencias: tiempo y cuerpo en la cultura actual*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Sutherland, Z. (1947). Gender, friendship networks, and delinquency: A dynamic network approach. *Criminology*, 52(4), 688-722.
- Tapias Saldana, A (s.f) Aportes de la Psicología Jurídica a la Criminología y al Derecho. Recuperado de <http://psicologiajuridica.org/psj10.html>
- Tenenbaum, E. G. (2015). La detención policial de adolescentes en Uruguay: percepciones y experiencias. *Revista de la Facultad de Derecho*, 3 (39), 227-258.
- Tenenbaum, G. (2016). *Infracción y castigo: los procesos de normalización para adolescentes con medidas en libertad en la Ciudad de México y Montevideo* (Tesis de doctorado en Ciencia Social con especialidad en Sociología) Centro de Estudios Sociológicos, Ciudad de México, México. Recuperado de http://ces.colmex.mx/pdfs/tesis/tesis_gabriel_tenenbaum.pdf

- Tio, J., Mauri Mas, L., y Raventós Sáenz, P. (2014). *Adolescencia y transgresión: La experiencia del Equipo de Atención en Salud Mental al Menor*. San Pablo, Brasil: Octaedro.
- Tonkonoff, S. (2001). Entrar y salir de la legalidad: Identidades popular-juveniles entre la exclusión y el delito. *Cuadernos de antropología social*, 1(14), 61-77
- Uceda Maza, F., Navarro Pérez, J., Y Pérez Cosín, J. (2014). El ocio constructivo como estrategia para la integración de adolescentes en conflicto con la ley. *Revista Portularia*, 14(1), 49-57.
- UNICEF (2017) Estado de la situación de la niñez y adolescencia en Argentina. Buenos Aires, Argentina.
- UNICEF (2015) Relevamiento Nacional Argentino sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Buenos Aires, Argentina.
- UNICEF (2007) Relevamiento Nacional de dispositivos penales juveniles. Buenos Aires, Argentina.
- Uriarte, C. E. (1999). *Control institucional de la niñez adolescencia en infracción: Un programa mínimo de contención y límites jurídicos al Sistema Penal Juvenil (las penas de los jóvenes)*. Buenos Aires, Argentina: Alvarez Editor.
- Urresti, M. (2000). Cambio de escenarios sociales, experiencia juvenil urbana y escuela. *Una escuela para los adolescentes*, 2(6)11-78. Recuperado de: http://www.me.gov.ar/curriform/publica/urresti_juveniles.pdf
- Urresti, M. (2002), Adolescentes, consumos culturales y usos de la ciudad. *Revista Encrucijadas*, 2(6), 36-43.
- Urresti, M. (2005) La sociabilidad entre las brechas: un balance sobre los adolescentes argentinos de la actualidad. *Proponer y Dialogar*, 2(1), 71-91.
- Varela, O., Álvarez, H., y Sarmiento, A. J. (2000). *Psicología forense: Consideraciones sobre temáticas centrales*. Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot.
- Varela, O; Sarmiento, A; Puhl, S; Izcurdia, M. (2005). Relación entre Psicología y Ley: acuerdos y desacuerdos. En Ediciones Culturales Universitarias (Ed), *La Psicología en el Campo Jurídico* (pp. 155-171). Buenos Aires, Argentina.
- Vanella, L., y Maldonado, M. (2013). Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria para Jóvenes de 14 a 17 años (PIT). Córdoba, Argentina).
- Vázquez González, C. (2003). *Delincuencia juvenil: Consideraciones penales y criminológicas*. Madrid, España: Colex.

- Vázquez, C., y Fernández Mouján, J. (2016). Adolescencia y sociedad. La construcción de identidad en tiempos de inmediatez. *Psocial*, 2(1), 38-35. Recuperado de: <http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/psicologiasocial/article/view/1477>
- Vázquez, S. (2012) *Jóvenes, delito, educación y trabajo: Aportes al análisis de la cotidianeidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad social penal en la ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro* (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires.
- Vega, M. P. (2007). *Escritos psicoanalíticos sobre Adolescencia*. Buenos Aires, Argentina: Eudeba.
- Verde, L. (2006) *Entorno sociofamiliar y delito* (Tesis pregrado). Universidad Rafael Landívar, Nueva Guatemala de la Asunción, Guatemala
- Widom, C. S. (1989). Child abuse, neglect, and adult behavior: Research design and findings on criminality, violence, and child abuse. *American journal of Orthopsychiatry*, 59(3), 355-367.
- Wilson, D. S. (1997). Introduction: Multilevel selection theory comes of age. *The American Naturalist*, 150(1), 1-21.
- Winnicott, D. W. (1939). *Deprivación y delincuencia*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.
- Winnicott, D. W. (1998). *La familia y el desarrollo del individuo* Buenos Aires, Argentina: Editorial Horme
- Zaffaroni, E. R. y Rep, M. (2011) *La cuestión criminal*. Buenos Aires, Argentina: Planeta

13. ANEXOS

ENTREVISTA A LOS PADRES ANTES DE LA INTERVENCIÓN DE Se.N.A.F

1. Le gustaría contarme que paso que su hijo llevo al Complejo Esperanza
2. ¿Usted tenía conocimiento de la situación?
3. ¿Es la primera vez que su hijo ingresa al Complejo? ¿De qué manera les afecto como familia esta situación?
4. En el caso que me diga que no. ¿Alguna vez asistió al taller?
5. ¿Qué realizaba su hijo antes de ingresar al Complejo? (actividades, colegio, futbol)
6. Si no va al colegio. ¿Por qué dejo y cuándo?
7. ¿Quiénes son las personas que viven en su hogar incluyéndose usted?
8. ¿Cómo son las relaciones en tu casa? ¿Cómo se dan las relaciones en tu casa? ¿Pasan mucho tiempo juntos?
9. ¿Qué comparten juntos?
10. ¿Qué considera que fallo para que su hijo se encuentre en el complejo esperanza? (En general no como familia)
11. ¿Qué crees que lo llevo a tu hijo a cometer un delito?
12. ¿Crees que hay algo más que lo haya llevado a tu hijo a tener esa conducta?
13. ¿Y crees que su grupo de amigos tuvo un papel importante o tuvo algo que ver entorno a eso?
14. ¿Y cómo familia que rol creen que cumplen? ¿Y la familia cree que tuvo algo que ver entorno a eso?
15. ¿Cómo reaccionas ante una conducta de tu hijo que crees que no está bien? Por ejemplo, vos le dijiste que volviera a una hora y no volvió, ¿cómo reaccionas?
16. ¿Cómo reaccionas ante una conducta de tu hijo que crees que está bien? Por ejemplo, vos le pediste que te ayude con las tareas del hogar
17. ¿Qué papel creen que cumple como familia en relación con la situación por la que está atravesando su hijo? O ¿Y en esto que le paso a tus hijos crees que ustedes como familia tiene algo que ver?
18. Crees que tuviste alguna responsabilidad con lo que le paso a tu hijo/a?
19. ¿Que pensas que te puede aportar el taller?

ENTREVISTA A LOS PADRES DESPUES DE LA INTERVENCIÓN DE Se.N.A.F

1. Después de realizar el taller ¿Cuál cree que es su función en relación con su hijo?
2. Después de realizar el taller ¿Qué cree que lo llevo a su hijo a cometer un delito?
3. Después de realizar el taller ¿Crees que hay algo más que lo haya llevado a tu hijo a tener esa conducta?
4. Después de realizar el taller ¿Crees que tuviste alguna responsabilidad con lo que le paso a tu hijo/a?
5. Después de realizar el taller ¿Cómo reaccionas ante una conducta de tu hijo que crees que no está bien? Por ejemplo, vos le dijiste que volviera a una hora y no volvió, ¿cómo reaccionas?
6. Después de realizar el taller ¿Cómo reaccionas ante una conducta de tu hijo que crees que está bien? Por ejemplo, vos le pediste que te ayude con las tareas del hogar
7. ¿El taller de padres le ha servido? ¿Para qué?
8. De lo que se ha charlado en el Taller ¿Ha podido hacer algunas de esas cosas con su hijo o en su casa? ¿Cuáles ha podido hacer?
9. Ahora que viniste al taller ¿Qué hubieses hecho de diferente en ese momento para que esto que sucedió con tu hijo/a no pase?

ENTREVISTA PROFESIONALES PROGRAMA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

1. ¿Qué problemáticas observa con mayor frecuencia en su Programa?
2. ¿Cómo definirías las familias que asisten al taller?
3. Desde su perspectiva, ¿Cuáles cree que son los factores que podrían facilitar la conducta transgresora por parte de los adolescentes?
4. ¿Considera que existen factores de riesgo psicológicos que podrían generar la transgresión a la Ley Penal por parte de los jóvenes? ¿Cuáles?
5. ¿Hablan los padres sobre los factores que podrían facilitar la conducta transgresora de los adolescentes? ¿Qué dicen al respecto?
6. ¿Existe alguna diferencia en los factores percibidos como facilitadores de las conductas de riesgo de los adolescentes en el discurso de la familia en el primer taller y en el tercer taller?
7. Los padres ¿suelen reconocer su responsabilidad sobre la situación por la que están atravesando sus hijos o depositan el problema en factores externos?
8. ¿Cuál considera que es el rol que se ejerce como psicólogo/ trabajador social en el taller?

**ENTREVISTA PROFESIONALES PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
PSICOEDUCATIVO**

1. ¿Qué problemáticas observa con mayor frecuencia en su Programa?
2. ¿Cómo definiría a los adolescentes que asisten al Programa?
3. Desde su perspectiva, ¿Cuáles cree que son los factores que podrían facilitar la conducta transgresora por parte de los adolescentes?
4. ¿Considera que existen factores de riesgo psicológicos que podrían generar la transgresión a la Ley Penal por parte de los jóvenes? ¿Cuáles?
5. ¿Hablan los adolescentes sobre los factores que podrían facilitar la conducta transgresora de los adolescentes? ¿Qué dicen al respecto?
6. ¿Cómo definirías las familias de los adolescentes que asisten al Programa?
7. ¿Hablan los padres sobre los factores que podrían facilitar la conducta transgresora de los adolescentes? ¿Qué dicen al respecto?
8. Los padres ¿suelen reconocer su responsabilidad sobre la situación por la que están atravesando sus hijos o depositan el problema en factores externos?
9. ¿Cuáles son los factores que los adolescentes del programa asocian con la conducta transgresora?
10. ¿Cuál considera que es el rol que se ejerce como psicólogo dentro del Taller?